LA PAZ DE LOS GUERREROS

Una experiencia de transformación de
conflicto socioambiental en territorios del
pueblo awajún de Cajamarca - Perú

INGRID NERINA SANCA VEGA

La paz de los guerreros

*Una experiencia de transformación de conflicto
socioambiental en territorios del pueblo awajún de
Cajamarca - Perú*

TESIS DOCTORAL

Dirigida por:

DR. MIGUEL ÁNGEL MATEO PÉREZ

Castellón, mayo de 2017

A mi familia

Índice

AGRADECIMIENTOS	I
GLOSARIO DE SIGLAS	III
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	V
INTRODUCCIÓN	1
<i>MOTIVACIONES</i>	4
<i>DELIMITACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO</i>	6
<i>OBJETIVOS</i>	8
<i>METODOLOGÍA</i>	8
<i>RELEVANCIA</i>	10
<i>ESTRUCTURA</i>	12
CAPÍTULO I	17
CONFLICTO Y TEORÍA	17
1.1. INTRODUCCIÓN	17
1.2. BUSCANDO HALLAR LA PAZ Y TEORIZANDO SOBRE EL CONFLICTO	19
1.2.1. <i>Orígenes y etapas de los Estudios para la Paz</i>	20
1.2.2. <i>Nuevos horizontes en la teorización de la paz</i>	28
1.2.3. <i>Vivir en paz supone aprender del conflicto</i>	30
1.3. APROXIMACIONES AL ESTUDIO SOBRE LOS CONFLICTOS	33
1.3.1. <i>Apelar a la creatividad. Vicenç Fisas</i>	34
1.3.2. <i>Trascender al conflicto. Johan Galtung</i>	36
1.3.3. <i>En paz imperfecta. Francisco Muñoz</i>	39
1.3.4. <i>El derecho de pedirnos cuentas. Vicent Martínez y Sonia París</i>	41
1.3.5. <i>Conflicto y cooperación. Eduard Vinyamata</i>	44
1.3.6. <i>Conductas ante el conflicto. Marc Howard</i>	46
1.3.7. <i>La oportunidad de transformar. John Lederach</i>	49
1.4. UNA MIRADA TRANSFORMADORA	52
1.4.1. <i>Conflicto y cambio</i>	54
1.4.2. <i>Capacidades en juego</i>	56
1.5. RECAPITULACIÓN	58
CAPÍTULO II	61
LATINOAMÉRICA: UN TERRITORIO DE CONFLICTOS	61
2.1. INTRODUCCIÓN	61
2.2. UN MODELO DE DESARROLLO PARA AMÉRICA LATINA	63
2.3. LAS MENTIRAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO	76
2.4. LAS RESISTENCIAS LATINOAMERICANAS POR EL TERRITORIO	82
2.5. EL EXTRACTIVISMO EN LATINOAMÉRICA	87
2.6. EXTRACTIVISMO Y CRIMINALIZACIÓN	95
2.7. RECAPITULACIÓN	103
CAPÍTULO III	109
LOS CONFLICTOS SOCIALES EN EL CONTEXTO PERUANO	109

3.1.	INTRODUCCIÓN	109
3.2.	EL CONFLICTO ARMADO INTERNO PERUANO. TIEMPO DE TRASCENDER	110
3.3.	PUNTO DE PARTIDA: LA DESIGUALDAD	115
3.4.	PERÚ: DESARROLLO A TODA COSTA	120
3.5.	¿DÓNDE QUEDAN LOS DERECHOS?.....	127
3.6.	CONFLICTIVIDAD SOCIAL PERUANA	130
3.7.	ALERTA SOCIOAMBIENTAL	139
3.8.	LOS CONFLICTIVOS SON ELLOS. CRIMINALIZAR A QUIENES PROTESTAN	143
3.9.	RECAPITULACIÓN	149
CAPÍTULO IV		153
LA VIVENCIA DEL CONFLICTO EN SUPAYAKU		153
4.1.	INTRODUCCIÓN	153
4.2.	LA AMAZONÍA PERUANA.....	154
4.3.	EL PUEBLO INDÍGENA AWAJÚN	157
4.4.	COMUNIDADES AWAJÚN DE CAJAMARCA	161
4.4.1.	<i>La región Cajamarca: contexto y conflictividad socioambiental.....</i>	<i>161</i>
4.4.2.	<i>Comunidades awajún en Cajamarca</i>	<i>163</i>
4.5.	DIVIDE Y VENCERÁS. DINÁMICAS DEL CONFLICTO	167
4.5.1.	ANÁLISIS DEL CONFLICTO Y SU EVOLUCIÓN	168
4.5.1.1.	<i>Factores críticos a considerar</i>	<i>168</i>
4.5.1.2.	<i>Actores implicados</i>	<i>169</i>
4.5.1.3.	<i>Cronología del conflicto.....</i>	<i>176</i>
4.5.2.	ACCIONES Y CONDICIONES PARA UN DIÁLOGO TRANSFORMATIVO	185
4.6.	RECAPITULACIÓN	188
CAPÍTULO V.....		191
LA PAZ DE LOS GUERREROS.....		191
5.1.	INTRODUCCIÓN	191
5.2.	LA CRISIS COMO PUNTO DE PARTIDA.....	193
5.3.	ALIARSE EN TIEMPOS DE CRISIS	195
5.4.	ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO	197
5.4.1.	<i>Defensa legal.....</i>	<i>198</i>
5.4.2.	<i>Acompañamiento y asesoría.....</i>	<i>204</i>
5.4.3.	<i>Fortalecimiento de liderazgos y capacidades</i>	<i>207</i>
5.5.	SUPAYAKU APUESTA POR LA TRANSFORMACIÓN DEL CONFLICTO.....	212
5.5.1.	<i>Impactos del conflicto</i>	<i>213</i>
5.5.2.	<i>Acciones y recursos para la transformación.....</i>	<i>218</i>
5.6.	SEGUIMOS HACIENDO CAMINO.....	229
5.7.	RECAPITULACIÓN	230
CONCLUSIONES.....		233
FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN		241
BIBLIOGRAFÍA		243
ANEXOS.....		263

Agradecimientos

Empezar a redactar este apartado me confirma que he llegado, que sí pude. Solo quien se ha embarcado en el propósito de escribir una tesis puede imaginar lo solitario que puede llegar a ser este proceso. Y si, además, la mayor parte del mismo ocurre a diez mil kilómetros de los tuyos, es posible hacerse una idea de los interesantes avatares que tuve que afrontar mientras el doctorado y, por supuesto, la vida, seguían su curso.

De manera que, alcanzar este objetivo no hubiese sido posible sin todas aquellas presencias y colaboraciones que me aportaron, me acompañaron, me cuidaron y animaron en este largo camino. A todas esas personas, expreso mi reconocimiento e infinito agradecimiento.

A continuación, haré solo algunas menciones y me gustaría iniciar dando gracias a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), por la experiencia universitaria que me formó para la antropología y para la vida. En esta casa de estudios aprendí que Lima no es el Perú, que la universidad enseña cuando hace parte del cambio social y que en la diversidad que me rodea se refleja la mía, la de mi familia y mi país.

Gracias especiales a la Universidad Jaume I de Castellón, por el apoyo económico recibido durante los dos primeros años del doctorado a través del Programa de Becas de Doctorado para Estudiantes Latinoamericanos y la Beca de Codesarrollo de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y la Solidaridad (OCDS). A la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz y su equipo docente y administrativo, gracias por la disposición con que se me orientó siempre que lo requerí. Al equipo de la OCDS, gracias por las oportunidades de colaboración y aprendizaje, en especial a su Programa Pisos Solidarios por la generosa experiencia de alojamiento y convivencia intercultural en el Barrio San Lorenzo; gracias especiales a Embarka, Lidón y Carlos ‘Paps’.

Quiero dar las gracias a mi tutor, el Doctor Miguel A. Mateo Pérez, por su confianza, generosidad y sus consejos que fueron de gran soporte académico y personal cuando decidí embarcarme en este doctorado para profundizar sobre los aspectos cruciales de la conflictividad social en Perú y Latinoamérica, relacionados con el «desarrollo».

Agradecer también a la Doctora Ruth León Pinilla y al Doctor Guillermo Otano Jiménez por vuestra exigente y constructiva evaluación, a pesar de las premuras; y por vuestro acompañamiento desde el aprecio que es recíproco.

Agradezco al interesante espacio de discusión generado en el marco del Diplomado en Transformación de Conflictos Socioambientales para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), por proporcionarme insumos académicos necesarios para continuar la investigación doctoral que inicié en España.

Mi especial agradecimiento a Rosa Quedena y David Velazco por la oportunidad de formar parte del equipo de Fedepaz, de aportar y seguir aprendiendo en el campo de los derechos humanos. Sin esperarlo ni planificarlo, el proceso de fortalecimiento que iniciamos con la población awajún de Cajamarca se reveló como la pieza que faltaba en el engranaje de mi tesis doctoral. Gracias por los aportes y las facilidades brindadas.

Confío que este documento contribuya al trabajo de asesoría y acompañamiento que Fedepaz realiza en contextos de conflicto socioambiental en el Perú.

Me siento especialmente agradecida con la comunidad de Supayaku que en cada visita me devuelve más de lo que entrego, en saberes, conocimientos, reflexiones y compartir. Porque la visión particular de este pueblo enriquece mi visión de país. *See kuashat* (Gracias, en lengua awajún).

Quien me conoce sabe lo que me gusta viajar, conocer nuevos mundos y reconocirme en ellos. Mis años de estudio en España fueron valiosos en este sentido, la calidad y calidez humana que en ese tiempo me rodeó no tienen precio y me acompañan hasta el día de hoy.

Gracias Laura, Xime y Mertxe por la época post máster y la mejor hermandad del mundo mundial. Mil gracias a Ruth por su generosidad, por nuestra complicidad y cariño desde que se cruzaron nuestros caminos. A Irene, gracias por acoger mis tránsitos en ese rincón del Canyamalar y por los viajes hacia otros mundos. A mi círculo mágico y sanador: Caro, Neusi, Elenina e Irene, gracias porque a vuestro lado me sentí en casa. Gracias a la familia de Jarit por cobijarme, especialmente a Emili y Jose por vuestra confianza, respaldo y generosidad. Gracias al equipo de CeiMigra, en especial a Luisa por los espacios de aprendizaje y cuidados compartidos. A Lili y a Coly, con quienes compartí sueños y calor de hogar en tiempos inciertos, mil gracias. Katita, la vida se encargó de mostrarnos que teníamos algo más que aprender juntas, gracias por tu estar durante este ciclo y siempre hermana. Mi reina Mónica, tu generosidad y ternura las llevo en mi corazón, gracias. A mi nena Aura, gracias por soportar tanta ‘cojudez’, qué ilusión haber compartido contigo y seguir haciéndolo. A Marisol, Gloria y todas las «amigas del mundo», gracias por su presencia sin distancias.

Por supuesto quiero agradecer a las de toda la vida, mis ‘ñañas’ Flor, Janet y Dianik, por ser de mis mejores vivencias de amistad. A Raquel, gracias por ser mi hermana y compañera de aventuras desde que el otro charco nos juntó, por animarme y ser la ‘voz de mi conciencia’ con la tesis. Gracias a Violeta, por ser un referente personal de determinación y compromiso, y digna representante de la realeza moche. A Estelí, por este hermoso tiempo de reencuentro y compartir que ha sido el marco ideal para poner fin a este proyecto académico; por la complicidad y tu saber estar, gracias.

Finalmente, mi agradecimiento más especial. A Catalina, mi madre, y Víctor, mi padre; a mis hermanos Alonso y Diego y a mi hermana Cristina; gracias por su presencia de amor, unidad y apoyo en todo momento. Gracias a mi sobrina Valentina y mi sobrino Sebastián por ser mis pequeños grandes maestros. A mis abuelas Martina y Delfina, y a mis abuelos Ismael y Celestino, gracias siempre por rodear de amor, saberes y confianza a vuestra nieta mayor. Gracias a mis tíos y tías, por hacerme sentir en confianza y complicidad desde que era una niña. A mis primas, primos y sobrinos, gracias por contagiarme la energía de los sueños y las realizaciones futuras. Gracias familia por ser ese tejido amoroso que me abraza y sostiene allá donde voy, por ser inspiración para mis luchas y proyectos.

Lima, mayo de 2017

Glosario de siglas

APRODEH	Asociación Pro Derechos Humanos
AI	Amnistía Internacional
APCI	Agencia Peruana de Cooperación Internacional
ANA	Autoridad Nacional del Agua
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CLACSO	Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
CLADEM	Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de las Mujeres
CNDDHH	Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
COOPERACIÓN	Acción Solidaria para el Desarrollo
CONVOCA	Periodismo de investigación y análisis de datos
CSJL	Corte Superior de Justicia de Lima
CVR	Comisión de la Verdad y la Reconciliación
DP	Defensoría del Pueblo
DIA	Declaración de Impacto Ambiental
EIA	Estudio de Impacto Ambiental
ELAW	Environmental Law Alliance Worldwide
FEDEPAZ	Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz
FIDH	Federación Internacional de Derechos Humanos
GRUFIDES	Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible
IDG	Índice de Desigualdad de Género
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática
INGEMMET	Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

INRENA	Instituto Nacional de Recursos Naturales
MCLCP	Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza
MEPSI	Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio
MINAGRI	Ministerio de Agricultura
MINCUL	Ministerio de Cultura
MINEM	Ministerio de Energía y Minas
OCM	Observatorio de Conflictos Mineros en Perú
OCMAL	Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
OEА	Organización de los Estados Americanos
OEFA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONDS	Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad
OSAL	Observatorio Social de América Latina
PCM	Presidencia del Consejo de Ministros
PCP-SL	Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso
PIACI	Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
SUNARP	Superintendencia Nacional de Registros Públicos

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1: Triángulo del conflicto	38
Ilustración 2: Inversiones metálicas en Latinoamérica.....	90
Ilustración 3: Inversión minera en el mundo	91
Ilustración 4: Países de origen y destino de capitales mineros.....	93
Ilustración 5: Perú: Mapa de concesiones mineras.....	126
Ilustración 6: Perú: Tipología de conflictos en PCM y DP	135
Ilustración 7: Perú: Conflictos sociales 2015-2016.....	136
Ilustración 8: Perú: Mapa de conflictos sociales 2016	137
Ilustración 9: Perú: Conflictos sociales por tipo.....	138
Ilustración 10: Perú: Conflictos socioambientales por tipo de actividad	139
Ilustración 11: Población awajún en Perú (MINCUL, 2015).....	157
Ilustración 12: Comunidades awajún de la provincia de San Ignacio	164
Ilustración 14: Tabla de actores identificados	170
Ilustración 13: Tipos de actores del conflicto.....	170
Ilustración 15: Mapa de actores.....	171
Ilustración 16: Aparición de peces muertos en el río Chirinos.....	179
Ilustración 17: Asamblea en Yamakey promovida por ORFAC y ORASI.....	183
Ilustración 18: Mapa de concesiones mineras en San Ignacio	184
Ilustración 19: Sesión de asesoría a juntas directivas.....	204
Ilustración 20: Escuela de líderes «Waismag Aidaun Ayamtaiji»	208
Ilustración 21: Espacios de grupo. Exteriores de la casa comunal de Supayaku	220
Ilustración 22: Jóvenes preparando presentación en lengua awajún	226
Ilustración 23: Dibujo comunitario. Casa comunal de Supayaku.	228

INTRODUCCIÓN

Perú es un país cuyo nombre suena a Machu Picchu, Inca, Pachamama o Ayahuasca. Durante los últimos diez años también ha sonado a país emergente, economía en crecimiento o destino de inversiones y de migración.

Sin embargo, ni su carácter de sociedad originaria en el mundo ni el de economía en «progreso», han supuesto suficiente soporte de cambios hacia la igualdad al interior de la sociedad peruana. Ciertamente, según cifras oficiales, entre 2014 y 2015, la pobreza se redujo en 1.0 punto porcentual (221 mil personas) en la categoría general de pobreza, y en 0.2 puntos (53 mil personas) en la de pobreza extrema (INEI, 2016b: 43). Pero los niveles de desigualdad social se mantienen y no hacen más que enrostrarnos las graves injusticias, alrededor de aquella milenaria historia y de aquel boyante pero endeble crecimiento.

Ha de ser por estas grandes contradicciones que Perú es un territorio donde los conflictos sociales tienen aristas de violencia estructural, simbólica y cultural, además de la violencia directa, que se hacen constantes y se intensifican por la manera en que se manejan y procesan a través del tiempo, en todos los niveles de interacción y convivencia social.

Existen situaciones de discriminación profundas que involucran a los propios Estados, quienes no tienen ningún reparo en implementar políticas poco inclusivas, con

los altos niveles de rechazo y confrontación que ello genera. Esta suele ser la base de muchos conflictos a nivel global, si los abordamos desde la interdependencia de los contextos de lucha por el reconocimiento de diversas identidades, derechos y espacios de participación, en cuyas agendas existen demandas de fondo hacia los poderes político y/o económico, cuyas decisiones determinan las condiciones de vida en dichas realidades.

Un eje importante de conflictos, en esta tendencia de luchas interconectadas, es el eje territorial o socioambiental, es decir, conflictos que surgen alrededor del acceso y distribución de las riquezas naturales al interior de los territorios en donde los actores principales eran básicamente las comunidades locales que se proveen de ellos. Sin embargo, hoy estas comunidades coexisten con un conjunto de megaproyectos con quienes existe una disputa por dichos recursos, cuya explotación por parte de las empresas viene poniendo en serio riesgo la calidad del suelo, aire y agua, y con ello la salud y la vida de los pobladores.

Estos megaproyectos provienen de actividades económicas extractivas, principalmente del sector de minería (formal e informal), petróleo, gas y agroexportación. Para ello se ha configurado un contexto en el que tenemos, por un lado, gobiernos que facilitan y promueven alianzas para la inversión con grandes empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales. Al otro lado, nos encontramos a la población que habita en los territorios que son materia de este interés extractivo y sobre los cuales se vienen dando un sinnúmero de afectaciones, lo cual obliga a sus habitantes a exigir una serie de derechos que como ciudadanos les corresponden.

Estos contextos urgen de acciones de remediación ambiental, de reconocimiento a los derechos colectivos, principalmente al de consulta previa o propiedad ancestral que tienen los pueblos interesados y residentes de las zonas de reserva cultural y

ecológica a las que apuntan los referidos proyectos extractivos. Resulta imprescindible, entonces, abordar esta realidad de polarización y conflicto en todas sus dimensiones, más allá de atender (si es que se hace) las fases de crisis o emergencia, propias de un ciclo dinámico de conflicto determinado por el manejo que se haga del mismo.

En este escenario, es importante emprender e identificar experiencias que aporten a un tratamiento de este tipo de conflictos desde las propias capacidades, encaminadas hacia la transformación y el cambio social, a partir de un viaje al interior de sus propias causas y múltiples dimensiones.

Para ello, los Estudios para la Paz nos ofrecen un conjunto de propuestas para abordar estas situaciones. Una de ellas es el enfoque de transformación pacífica de los conflictos, una manera más integral y esperanzadora de intervenir en contextos de confrontación, sin recetas ni pasos predefinidos sino desde una concepción abierta, constructiva y dinámica de los conflictos, la cultura y los seres humanos.

Las estrategias y metodologías de intervención en este sentido, pueden aportar favorablemente al reforzamiento de capacidades para la reflexión, el análisis y la propuesta de acciones más pacíficas y transformadoras, en el camino de gestionar un conflicto.

El objetivo de mi investigación doctoral es el análisis de los conflictos socioambientales y de las capacidades transformativas de las poblaciones afectadas, para restablecer pacíficamente el diálogo y sus vínculos comunitarios. Esta investigación se visualizará en un caso concreto de conflicto socioambiental, sucedido en la comunidad nativa awajún de Supayaku, en la región de Cajamarca, Perú; y los insumos surgen de una experiencia desarrollada por la Fundación Ecuánica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ.

Esta tesis fue realizada a la luz de mis estudios de Doctorado Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo, respaldados por la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universidad Jaume I de Castellón, y el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP) conformado por la UJI y la Universidad de Alicante, en la Comunidad Valenciana, España.

El punto de partida es la investigación para la paz que aborda el concepto de conflicto desde diversas miradas teóricas, incluyendo la del enfoque de transformación pacífica de los conflictos. Sobre esta base, analizo la situación de conflictividad en Latinoamérica y luego en Perú, tras la imposición de un modelo extractivista en la economía y el aprovechamiento de los recursos naturales, lo cual implica afectaciones en distintas dimensiones (Lederach, 2003). Como fin del recorrido ilustramos con un caso concreto de conflicto socioambiental y un balance de la intervención institucional con el referido enfoque.

Dado que mi formación profesional se inicia con la antropología, la cultura es y será un componente esencial en el análisis de conceptos, contextos y experiencias relativas a los conflictos y la manera en que son abordados.

Motivaciones

Mi interés primero por analizar y comprender los conflictos en Perú, surge a raíz de mi trabajo en la Comisión de la Verdad y Reconciliación -en adelante CVR- porque, aunque no es el conflicto armado lo que en este estudio analizo, sí se trata de un precedente crítico y violento cuyos factores causales a día de hoy se mantienen y siguen generando otros conflictos, también relacionados con el racismo, la desigualdad y el etnocentrismo.

Fue aquella experiencia la que me sorprendió y me llevó a ser consciente de lo que había ocurrido en mi país durante más de 20 años, a entender aquellas historias que de niña escuché sobre familiares de mi línea paterna, cuyo origen era Ayacucho, el departamento más golpeado por la violencia política durante el conflicto armado interno.

Pero en el 2009 ocurre el «Baguazo», un conflicto violento entre el Estado y la población indígena awajún de Amazonas, que abordé en la tesis de máster para esta misma cátedra y mención. Es un caso del que no me desvinculé y que tras 7 años de proceso judicial seguido a 50 integrantes del pueblo indígena awajún por las muertes ocurridas en dicho acontecimiento, aun sin existir pruebas en su contra, han sido recientemente absueltos en septiembre de 2016.

En 2014 retorno a Perú luego de vivir 5 años en España. Retomo mi experiencia laboral, ahora desde la sociedad civil en una institución que contiene la palabra *paz* en su nombre, para trabajar con poblaciones afectadas en sus derechos humanos con énfasis en los derechos culturales y ambientales, desde FEDEPAZ. Ya en el camino, la experiencia de haber impartido talleres o cursos sobre interculturalidad y haber reforzado aprendizajes, prácticas y metodologías para la acción y la participación, se unió a mi deseo de contribuir a abordar los conflictos en mi país de manera diferente.

La experiencia del máster fue central para afianzar mis conocimientos y el interés por estos temas, no solo a nivel académico sino también desde la propia experiencia de vida durante mi estancia en España. De ahí que las motivaciones se mezclan con las emociones que han acompañado este andar que trasciende lo académico y hoy se materializa en esta tesis doctoral.

Personal y profesionalmente considero que los alcances y aportes de la formación recibida en la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de Castellón, han

sido determinantes en la reafirmación de mi compromiso con el diálogo y la transformación social, a través del reconocimiento del otro y de la otra y sus diversas formas de actuar y hacer las paces frente a situaciones de conflicto. Asimismo, debo señalar que han aportado a este trabajo mis estudios de Diplomado de Transformación Pacífica de Conflictos Socioambientales para el Desarrollo Sostenible, cursados durante el curso 2015-2016 en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú.

Es por ello que, a través de esta tesis doctoral, comparto mi experiencia de acompañamiento al pueblo indígena awajún de Cajamarca en el camino de lograr los cambios profundos que requieren para la transformación no violenta de sus conflictos.

Delimitación del tema de estudio

Los contextos que analizo se caracterizan por la existencia de conflictos violentos emblemáticos que nos enrostran grandes limitaciones para dialogar, por ello cabe hacerse la pregunta sobre ¿cómo abordarlos para que no desencadenen, una y tantas veces, violencia en todas sus formas?

El Estado, a través de sus múltiples instancias, debería garantizar espacios y herramientas adecuadas para canalizar el descontento y las necesidades que originan los conflictos sociales, puesto que es su responsabilidad gestionar dichas demandas para evitar que se acentúe la previa vulneración de derechos fundamentales (DP, 2012: 60-61). Asimismo, es deber constitucional del Estado garantizar la vigencia plena de los derechos humanos, algo que no se cumple a cabalidad en contextos de conflictividad cuando las fuerzas estatales como la policía y el ejército hacen uso abusivo y violento de la fuerza y de las armas, convirtiéndose en un actor violento antes que en un referente de protección y seguridad para la ciudadanía.

Aunque existe una estrategia de tratamiento y prevención de los conflictos sociales desde el Estado peruano, la institucionalización del diálogo a nivel de

gobiernos regionales es aún incipiente. Solo 7 de 25 gobiernos regionales han constituido oficinas especializadas en diálogo y/o gestión de conflictos, un pequeño avance considerando la falta de asignación de competencias claras, de recursos y del lento camino de la descentralización en el país (Puma, 2015: 80-81).

Es por ello que diversas organizaciones civiles que trabajan en contextos conflictivos o violentos, por la defensa y protección de derechos humanos y colectivos, vienen generando procesos para la recomposición de vínculos, transformación de la agresividad y la violencia, con aciertos y desaciertos, pero generando experiencias que nos enseñan sobre el manejo de roles, liderazgos y pugnas en medio de estos contextos (Bedoya y Puma, 2015).

Para delimitar mejor el tema que nos interpela en esta investigación, planteamos las siguientes preguntas: ¿Cómo resuelve sus conflictos la población awajún? ¿Existen suficientes capacidades para el restablecimiento de los vínculos afectados a raíz del conflicto? ¿Es posible aportar a dicho proceso desde una mirada transformadora de los conflictos? ¿Cómo identificar aquellos rasgos culturales proclives al enfrentamiento desde el enfoque de transformación de conflictos?

La presente investigación doctoral se basa en el análisis de bibliografía, el debate de ideas y la experiencia práctica de apostar por la transformación pacífica en un contexto de conflicto socioambiental, concretamente en una comunidad de la selva de Cajamarca en la que habitan aproximadamente 700 personas (FEDEPAZ, 2015:4), donde se van visualizando oportunidades de cambio y construcción.

Aunque me formé en antropología, esta tesis bebe también de la sociología, el derecho y la interdisciplinariedad necesaria para analizar contextos tan complejos y específicos como el de la sociedad peruana. En el Perú los conflictos socioambientales resultan un entramado de aristas culturales, políticas y económicas, en el que el debate

sobre las reivindicaciones por el territorio se convierte en aporte a la descolonización del saber y el análisis para forjar una historia propia.

Objetivos

Objetivo general

Analizar las condiciones para el diálogo y las capacidades de transformación pacífica del conflicto socioambiental del pueblo indígena awajún de Cajamarca, a partir de su experiencia de fortalecimiento comunitario con la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, que inició en el año 2013.

Objetivos específicos

1. Identificar miradas teóricas orientadoras para abordar los conflictos desde el cambio social y la transformación pacífica.
2. Analizar el contexto de resistencias latinoamericanas en torno al extractivismo.
3. Analizar el contexto de conflictividad social en Perú respecto al modelo económico extractivista y el respeto de derechos fundamentales.
4. Presentar el caso de conflicto socioambiental de la comunidad nativa de Supayaku y la vivencia del mismo por parte de su población.
5. Compartir las herramientas de transformación pacífica que el pueblo indígena awajún de Supayaku viene incorporando en su realidad y contexto de conflicto.

Metodología

La tesis doctoral se basa en el análisis, teniendo como punto de partida el proyecto de la Filosofía para hacer las Paces (sí, en plural) que surgió del giro epistemológico propuesto por Vicent Martínez, el cual, básicamente, consiste en proyectar los estudios y la investigación para la paz hacia la diversidad de formas que

tenemos de hacer las paces, de cuidarnos y cultivarnos entre las personas y con la naturaleza (2005: 39).

Dicho análisis se realiza sobre los aportes teóricos para concebir y abordar los conflictos, los contextos de conflictividad global, regional y nacional, y una experiencia concreta e inicial de transformación pacífica de un conflicto socioambiental, a partir de una intervención institucional en una comunidad indígena amazónica en 2015.

La investigación fue realizada en dos etapas. La primera consistió en la lectura, revisión y análisis bibliográfico de los aportes teóricos relativos a los Estudios para la Paz, estudios sobre conflicto y su relación con el componente cultural en su interpretación y tratamiento.

En ese sentido, los ejes temáticos generales por los que hemos transitado son la Filosofía para hacer las Paces, las resistencias y conflictos socioambientales por el territorio en Latinoamérica y Perú, y las herramientas y metodologías derivadas del enfoque de transformación pacífica de los conflictos, basándome en la obra de Lederach (2003).

La segunda etapa supuso la contrastación de dicha revisión y análisis con la realidad. Encontrándome en un proyecto laboral nuevo e idóneo en relación a la defensa de los derechos humanos, como marco propicio para realizar aportes a la institución, desde mi formación académica y profesional que bebe tanto de la antropología como de la interdisciplinariedad que me aportaron y convocan los Estudios para la Paz.

En esa línea, mis visitas a la comunidad de Supayaku me proporcionaron información *situ* acerca del conflicto socioambiental que abordaremos, a través de la observación y la interacción con la población en el marco de la labor institucional.

El enfoque de transformación pacífica de los conflictos empezó a ser conocido e incorporado en algunas actividades, al interior de la institución, aunque muchas de ellas

estuvieran ya programadas en la línea de la defensa y promoción de derechos ambientales y culturales. Esto supuso socializar alcances teóricos, incluir el tema en la capacitación, los materiales y, por supuesto, en las metodologías empleadas para trabajar directamente con las comunidades nativas awajún.

Por lo tanto, escribo este trabajo desde el vínculo generado con la población, desde la observación e interacción, con el afán de compartir un proceso transformativo, aún incipiente, en todas sus dimensiones. Un proceso que requiere paciencia y voluntad sostenida para el cambio, tanto por parte de los protagonistas como de la institución que les acompaña.

Relevancia

Existe un panorama convulsionado por los conflictos sociales a raíz de la imposición del extractivismo, término que se refiere al conjunto de actividades económicas, sociales y políticas que buscan apropiarse de los recursos naturales para comercializarlos como materia prima (Gudynas, 2015). Dicha imposición ha sido adoptada en Perú y Latinoamérica de manera que investigar sobre sus causas, actores, e impactos es crucial y relevante en tanto el extractivismo ha pasado a ser factor central de las economías en dichos contextos.

Crecimiento económico y desarrollo, a costa de vulnerar derechos humanos, colectivos, culturales y ambientales, han supuesto procesos que siguen empobreciendo a los mismos sectores, entre ellos a poblaciones indígenas y originarias cuyos territorios son –irónicamente– los más ricos en biodiversidad y recursos naturales. Koldo Unceta postulaba esto como una disfunción y por tanto fracaso del desarrollo como estrategia, al derivar «en un fenómeno capaz de empobrecer a personas y sociedades, de generarles

pérdidas (de capacidades, de identidad, de recursos naturales...), de restringir derechos y libertades, y de provocar nuevos desequilibrios y desigualdades» (Unceta, 2009: 13).

Esta situación termina configurando un panorama de injusticia social permanente, que nos remonta en ocasiones al que se vivió en la época del conflicto armado interno. Precisamente, las variables étnicas que fueron identificadas por la CVR (2003) siguen siendo vigentes para los conflictos que hoy abordamos en esta investigación.

Por lo tanto, esta tesis es relevante porque presenta un contexto y caso de conflicto socioambiental analizado, una experiencia de transformación pacífica del mismo en camino y una red de ideas, metodologías y esperanzas que acompañan la resistencia de los pueblos originarios del Perú y del mundo.

Es cierto que, durante la última década, los diferentes gobiernos peruanos han aprobado y generado normas, instancias y espacios formales para prevenir y/o solucionar los conflictos. Pero resulta que estas estructuras son, literalmente, lejanas a la realidad de las poblaciones en conflicto. En primer lugar, porque suelen instalarse o implementarse desde Lima, la capital. Y, en segundo lugar, porque designan a funcionarios que aún están en proceso de especialización o sin suficiente poder de decisión para asumir acuerdos o compromisos auténticos. De modo que, cualquier intento de negociación o diálogo carece de las garantías necesarias para generar confianza en quienes demandan y exigen atención (Puma, 2015).

Las instancias del Estado con competencias reguladoras en sostenibilidad ambiental y social se encuentran cada vez más debilitadas en sus capacidades fiscalizadoras y sancionadoras. Las inversiones extractivas se deciden, principalmente,

desde el sector económico y financiero sin el rigor necesario en cuanto a responsabilidad social y ambiental, poniendo en riesgo el bienestar de las poblaciones en las zonas de influencias de dichos proyectos y las garantías de respeto a los derechos humanos y colectivos, como el derecho a la protesta y el derecho a la consulta previa.

De esta manera, la presente investigación puede aportar e impactar en el ámbito de la sociedad civil y de las organizaciones de base que siguen trabajando por fortalecer sus propias capacidades y aprender a acompañar procesos de transformación social, algunos de ellos incipientes y pequeños pero inmensos en su importancia para forjar la paz social, o las paces, que sus contextos locales requieren.

Estructura

La tesis consta de cinco capítulos, de los cuales los tres primeros están dedicados al análisis teórico y contextual global, y los dos últimos al caso concreto del conflicto socioambiental en las comunidades awajún de Cajamarca, así como a los intentos prácticos y pacíficos para su transformación.

El primer capítulo lleva por título «Conflicto y teoría» y presenta cómo, a raíz de la búsqueda de paz, surgen las primeras disertaciones y estudios acerca de los conflictos, allá por los años 30-40 en que azotaban guerras y conflictos bélicos, inicialmente con una connotación negativa para abordarlos. Asimismo, revisa la evolución del término y concepto del conflicto hacia connotaciones más integradoras de las dimensiones humanas, comprometidas con un manejo más integral de las situaciones de conflicto y con la búsqueda de paz.

De todas las visiones teóricas que acompañan este proceso, es la de Transformación de conflictos de Lederach la que nos conducirá al abordar el conflicto socioambiental específico de esta investigación, ya que proporciona elementos para

reconocer todas las dimensiones en que el mismo ha impactado y proponer un acompañamiento en el mismo sentido multidimensional.

El segundo capítulo, «Latinoamérica: Un territorio de conflictos», tiene el objetivo de analizar el contexto latinoamericano de conflictos, luchas y resistencias producidas a raíz del extractivismo. Así también, analiza el posicionamiento de Perú como destino prioritario del extractivismo que lo ha convertido en uno de los principales productores mundiales de oro y cobre, aun con pésimos antecedentes en el cumplimiento de estándares ambientales.

Los gobiernos latinoamericanos han firmado acuerdos comerciales y adaptado sus marcos normativos nacionales para atraer la inversión extranjera, con escasa prioridad del bienestar de la población y con actitud criminalizadora hacia quienes se oponen a este modelo de inversión y desarrollo. Las fuentes teóricas que sustentan estos argumentos serán contrastadas con fuentes de información secundaria como datos producidos por organizaciones internacionales, no gubernamentales o especializadas en minería.

El tercer capítulo, «El conflicto en el contexto peruano», analiza el más importante antecedente de conflicto violento en la sociedad peruana contemporánea, me refiero al conflicto armado interno sucedido en los años ochenta y noventa, el mismo que deseamos trascender para la recuperación del tejido social y comunitario, aunque con escasa voluntad política respaldando este deseo.

A partir de ello se analizan los nuevos conflictos sociales que con distintos actores y circunstancias mantienen causas estructurales de ruptura y desigualdad similares, y estrategias de represión, violencia y criminalización contra sectores vulnerables de la población. Según los reportes de la Defensoría del Pueblo (2012) el número de conflictos mensuales en el país ha pasado de 47 en el año 2004, a 288 en

2009 y 229 en 2012. Además, el 60% de dicho registro son conflictos relacionados al acceso, distribución y manejo de los recursos naturales, lo cual nos alerta sobre la alta conflictividad socioambiental que vive el país.

El cuarto capítulo, «La vivencia del conflicto en Supayaku», tiene por objetivo mostrar los aspectos claves de conflicto socioambiental que, desde hace cinco años, viene protagonizando el pueblo indígena awajún de Cajamarca. Para ello nos acercaremos a la Amazonía Peruana a manera de un viaje hacia este vasto territorio de selva que conforma una de las mayores fuentes de biodiversidad del planeta.

Asimismo, se presenta la identificación y descripción de los actores, los asuntos en disputa y la cronología del conflicto, elaborada por mí en base a la revisión y procesamiento de fuentes de información primarias y secundarias.

El quinto y último capítulo, «La paz de los guerreros», trata el carácter guerrero ancestral del pueblo awajún que, en este caso, no ha seguido la ruta de enfrentamiento directo con sus oponentes como en luchas históricas específicas, sino que ha contado con la firme decisión de volver a unir a su pueblo y lidiar con las fracturas sociales y comunitarias que les dejó el conflicto.

Además de describir la experiencia de acompañamiento a la transformación del conflicto socioambiental producto de la actividad minera en la zona, analizo las condiciones y posibilidades para el restablecimiento de vínculos y transformación del conflicto en varias dimensiones de la vida del pueblo awajún de Cajamarca.

Al finalizar los cinco capítulos, presento las «Conclusiones generales», donde propongo un conjunto de ideas y recomendaciones como resultado de la investigación desarrollada, propiciando con ello la oportunidad de que este debate continúe transformándose en alternativa al tratamiento de los conflictos socioambientales en el Perú.

Finalmente, adjunto como «Anexos» los documentos que ilustran los capítulos IV y V relacionados con el contexto específico del conflicto abordado y la experiencia de transformación del conflicto iniciada, respectivamente.

CAPÍTULO I

Conflicto y teoría

1.1. Introducción

Mi interés por analizar los conflictos me ha llevado a un necesario acercamiento a sus principales teorías. Su definición es resultado de un camino interesante e importante de ideas sobre la paz, pero sobre todo de su ausencia, a lo que por mucho tiempo se llamó guerra, violencia o conflicto.

Este primer capítulo titulado «*Conflicto y teoría*», tiene por objetivo revisar las principales miradas teóricas del conflicto, y con miradas me refiero a los enfoques o lentes que, integrando diversos elementos, nos permiten ver (o no) la realidad de determinadas maneras.

El conflicto contiene elementos trascendentes como la búsqueda de la paz, una motivación central en este proceso, mas su limitada connotación asociada a la guerra y otras violencias llega a ampliarse hacia sentidos más positivos.

Ir a los orígenes de los estudios sobre conflictos supone acercarnos al contexto que marcó la pauta en dicho campo de investigación. Después de la Segunda Guerra Mundial la paz se volvió un clamor en Europa, una necesidad imperiosa de acabar con las guerras y de evitarlas a toda costa. Sin embargo, esto generó que tanto paz como conflicto se concibieran solo a partir de la guerra y la violencia.

El primer apartado trata de ese comienzo que identifica aportes primarios desde los Estudios para la Paz, en paralelo al proceso de consolidación de este campo de investigación sobre la paz y los conflictos. Nos adentramos a conocer cómo la búsqueda de paz llevó a definir el conflicto, pasando por la revisión de un proceso de formación interesante en el caso de los Estudios para la Paz, luego por una fase de replanteamiento definida por los aportes de la educación para la paz, la ayuda humanitaria y el rechazo a las guerras. A raíz de la profundización en los tipos de violencia, más allá de la guerra, se genera la apertura adecuada para concebir de manera más amplia la paz y el conflicto.

En el segundo, haremos un recorrido por las diversas miradas del conflicto, desde diferentes autores y disciplinas, todos ellos pioneros en el campo de la investigación para la paz, quienes influenciados por sus experiencias académicas y empíricas han aportado a una definición más completa del conflicto. Será sustancial identificar las visiones que trasciendan las manifestaciones del conflicto para concebirlo como un proceso en el que cada fase, actor y circunstancia importa tanto como el tratamiento que le demos.

En el tercer apartado, sustentamos la mirada transformativa que deriva del enfoque de transformación de conflictos, del que Lederach es un convencido, y cuyos aspectos teóricos y metodológicos guiarán esta investigación. Este enfoque está en sintonía con una visión integral para analizar y gestionar mejor los conflictos, algo que por lo general no se enseña y sigue pasando factura en distintos aspectos de la vida humana.

El desarrollo de este primer capítulo supone el tramo inicial de un camino que nos llevará hacia la caracterización y contextualización de la conflictividad social en el Perú. Todo ello a partir del encuentro de aportes bibliográficos citados de manera clara

y resumida, con el fin de dar forma al marco teórico esencial para guiar esta tesis doctoral.

1.2. Buscando hallar la paz y teorizando sobre el conflicto

Las aportaciones teóricas sobre los conflictos armados en el mundo surgen de la experiencia histórica de las dos Guerras Mundiales. Es entonces cuando la búsqueda de la paz se convierte en una prioridad internacional para las grandes potencias, aunque para la mentalidad de la época dicha búsqueda pasaba por el rearme. El miedo de las élites políticas a una nueva contienda bélica las condujo, paradójicamente, a combatir la violencia mediante el poder disuasorio de las armas nucleares. Sólo así podría llegarse a la ansiada paz, entendida como la ausencia de guerra o violencia armada. De modo que, la paz se volvió equivalente a defensa militar y el conflicto, sinónimo de violencia (Fisas, 1987; Galtung, 2003).

Actualmente, aquellas asociaciones siguen influyendo en las maneras de resolver los conflictos bélicos por parte de los Estados. Esto se evidencia, por ejemplo, en las denominadas «operaciones de mantenimiento de la paz» de las Naciones Unidas que, aunque respondan al mandato de esta organización internacional, se trata de fuerzas compuestas por tropas de soldados que los propios gobiernos ponen a disposición y por cuya actuación en el terreno son, en última instancia, responsables (Naciones Unidas, n.d.).

Otro ámbito en el que se puede visualizar la connotación negativa y violenta de la noción del conflicto es el de los procesos de atención, gestión y/o negociación por parte de los Estados que en su idea de «restablecer el orden democrático», asignan a las fuerzas armadas facultades de control y represión violenta de las protestas ciudadanas. A continuación, conoceremos más iniciativas y proyectos académicos que exploraron

caminos distintos de interpretación y tratamiento de la violencia en contextos de conflicto.

1.2.1. Orígenes y etapas de los Estudios para la Paz

En dicho contexto de búsqueda los estudios de paz albergaron un interesante proceso de formación y consolidación, de la misma forma que el concepto teórico de paz fue influenciado y reconfigurado a partir del análisis sobre los hechos y contextos tan violentos como los que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial.

En sus comienzos, dichos estudios abordaron las agresiones directas entre Estados, propias de la concepción convencional de la guerra. No obstante, con el tiempo se fueron incluyendo otras formas de violencia que ponen en riesgo aspectos fundamentales de la vida de las personas, como la insatisfacción de necesidades humanas básicas, la exclusión social en sus diversas formas. Esta ampliación de horizontes morales es producto del afán por profundizar en los orígenes de la violencia, sus formas y manifestaciones. Respecto a este punto de partida Vicenç Fisas nos aclara:

Los orígenes de estos estudios podríamos encontrarlos en la década de 1930, cuando el ruso Sorokin funda el Departamento de Sociología en la Universidad de Harvard y estudia las guerras de los últimos siglos. En la década de 1940, el meteorólogo británico Lewis Richardson, cuáquero, estudió también las causas de la guerra y creó un modelo matemático sobre el rearme, y Quincy Wright, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Chicago, publicó el monumental *A Study of War* (Estudio de la guerra), con una visión ya multidisciplinar sobre el tema. Mary Parker fue también una pionera en los estudios sobre negociación con ganancia mutua, en lo que ella llamaba «intercambio integrativo». (Fisas, 2004: 47-48)

Sin embargo, Fisas realiza en 1987 un análisis previo y detallado en su obra *Introducción al Estudio de la Paz y de los Conflictos* acerca de la evolución de esta área de investigación. En las páginas que siguen, me apoyaré en sus hallazgos para analizar la formación del concepto teórico de paz y su estrecho vínculo con el estudio de la violencia y el conflicto.

Al inicio el término paz estuvo vinculado exclusivamente a la ausencia de guerra, por lo que ésta se convirtió en el principal objeto de análisis durante las primeras etapas de esta corriente de estudios, vale decir, la violencia física y directa producto de los conflictos bélicos. Con el tiempo, fueron más ambiciosos y, además de la guerra y sus impactos, incorporaron males sociales como el hambre, la pobreza y otras privaciones y condicionantes de la vida humana, desde estructuras sociales probablemente tan o más violentas que la guerra, que también merecían ser reconocidas, reflexionadas y analizadas.

En su primera etapa, entre los años cuarenta y cincuenta, los Estudios para la Paz surgen junto a las reflexiones sobre la Guerra Fría y el conflicto mundial Este Oeste, eventos por los cuales muchos países del mundo decidieron priorizar la paz como interés nacional. Paz entendida como una mezcla de buena voluntad con poder militar estatal.

En esta época destacan algunos estudios centrados en la comprensión de las causas de la guerra desde las matemáticas, como los de Richardson y Wright en los años treinta, con el objetivo de controlar dicho fenómeno y los conflictos violentos. Aparece también la revista estadounidense *Journal of Conflict Resolution* en los Estados Unidos de 1955, una muestra más de la investigación basada en las matemáticas, aficionada a la teoría de juegos y aplicada a la resolución de los conflictos (Fisas, 1987: 42-44; Martínez, 2001: 62).

La multidisciplinariedad como característica de estos estudios se consolidó en esta primera etapa, aunque la tarea no fue fácil o del todo positiva con todas las disciplinas, tal es el caso de la economía. Sin embargo, la Psicología, las Relaciones Internacionales y la Politología consiguieron articular positivamente sus enfoques al campo de los Estudios para la Paz (Fisas, 1987: 43).

Vicent Martínez analiza la primera etapa de la Investigación para la Paz desde un conjunto de características que, bajo mi punto de vista, ilustran el proceso de consolidación de los Estudios para la Paz. Por un lado, el estudio científico de la guerra y su prevención para poder vivir en paz, basado en una «[...] manera moderna, occidental, blanca y masculina de concebir la ciencia» (Martínez: 2001: 62) absolutamente capaz de ser medida. Una segunda vía a través de la teoría de Relaciones Internacionales como alternativa realista en oposición al idealismo del que se acusó a los estudios de paz. Y, por último, la Acción humanitaria como resultado de una ciencia que procura, ante todo, objetividad y respeto a la soberanía de los Estados–Nación, o más bien, de su seguridad y sus fronteras (Martínez: 2001: 62-63).

Reitero que esta primera fase estuvo marcada por una idea de paz basada en la ausencia o control de la guerra, lo que en 1964 Johan Galtung denominó *paz negativa* en la editorial que escribió para el primer número de la revista *Journal of Peace Research*, publicación que responde a un momento de inflexión importante hacia un cambio en la orientación de la investigación para la paz, como podremos observar en adelante.

A partir de esto y con la misma connotación (negativa) surgen estudios de carácter científico y matemático acerca de los conflictos, marcados por la necesidad de dar con las causas y acabar con ellos, dando lugar en ese proceso a lo que se conoce como resolución de conflictos. Se trata de una corriente centrada en la creación de alternativas para resolverlos, principalmente, a través de la no violencia, marcándose cierta tendencia hacia temas de estrategia y defensa (Fisas, 1987).

Durante la segunda etapa, entre los años sesenta y setenta, surge el cuestionamiento al énfasis que los Estados otorgaron al poder militar, promocionando políticas armamentistas y elevando los riesgos de nuevas guerras que, paradójicamente,

querían evitar. Con la distensión del conflicto entre las grandes potencias aumentó la inquietud por la relación Norte-Sur, con lo cual se amplió el campo de análisis hacia las revoluciones y otros eventos que tenían como característica la violencia, aunque no necesariamente la física o directa.

En este marco la producción teórica en Estados Unidos y Europa se elevó y comenzó a cuestionar la tendencia conservadora y superficial con que se abordaron los conflictos en los estudios previos. Con la fundación del International Peace Research Institute de Oslo en 1963, Johan Galtung introdujo la distinción entre *paz negativa* y *paz positiva*, basada en la necesidad de una paz sostenida que no sólo busque evitar las guerras (Fisas, 1987: 45; Galtung, 1993).

Fue a partir de estos aportes que un proceso de revisión crítica de los conceptos de paz y violencia se hizo necesario, a partir del cual se introdujeron nociones como la de *violencia estructural* como un tipo de violencia profunda y generadora de otras violencias en las relaciones sociales como la exclusión, la discriminación, el daño contra la naturaleza, entre otras. Este escenario también implicó la afirmación de una actitud crítica y constructiva para generar propuestas deseadas y realizables para la sociedad.

Johan Galtung (1993: 47-49) nos refiere y recuerda que el concepto de paz proviene del latín *pax*, relacionado con *pacto*, una idea de paz como relación contractual en sintonía con la tradición legal de Occidente. Otro aspecto de este pensamiento es la relación directa con la disuasión del oponente, herencia romana que se refleja en el clásico: *si quieres la paz prepárate para la guerra*. Estas ideas están presentes aún en las definiciones más amplias sobre paz e, inevitablemente, influyen al clasificar los diversos tipos de violencia, a los ejecutores de ésta y con quienes se hace la paz.

Profundizar en los tipos de violencia ha propiciado definiciones de paz más abiertas y realistas. Esto puede ejemplificarse con una amenaza de guerra que, aunque

no llega materializarse en forma de intervención armada, propicia las mismas capacidades de ataque aun cuando el objetivo es la defensa, proceso que indiscutiblemente violenta el espíritu de las personas y de las comunidades amenazadas.

Una segunda cuestión son los ejecutores de la violencia, pero ¿qué pasa cuando estos no existen? Tal es el caso de los miles de víctimas producto del hambre y la desnutrición en el mundo cuyas muertes no siempre están directamente vinculadas a la guerra. Es aquí donde cabe hablar de la violencia estructural y nos lo aclara Galtung (1993: 48-49) en esta cita:

La violencia estructural difiere de la violencia directa institucionalizada, perpetrada en nombre del honor o de la venganza, y de la violencia ligada a instituciones sociales particulares. Concretamente la violencia estructural toma la forma de explotación económica y/o represión política constituyente de las relaciones intra o inter países.

[...]. Otra de las formas como se manifiesta es la violencia contra la naturaleza.

La violencia estructural puede también institucionalizarse, es decir, arraigarse profundamente y quedar protegida contra su reducción y eliminación por fuerzas sociales opositoras. El complejo militar-burocrático-corporativo-intelectual, instrumento de las modernas situaciones bélicas y de violencia directa, actúa contra cualquier revolución, violenta o no violenta, beneficiándose de dicha protección.

A raíz de la combinación violencia estructural y violencia directa, surge la *violencia cultural*, otra tipología que Galtung usa para explicar la legitimación del uso y el ejercicio de la violencia en muchas culturas, y que justifica la dominación de determinados grupos o géneros sobre otros, arguyendo superioridad.

Un tercer asunto a considerar, según Galtung, es a dónde o con quién se hace la paz, cuestión que el intelectual noruego analiza echando mano de términos hindúes como *shanti* y *ahimsa* que suelen traducirse como paz. El primero significa *paz interior* o *paz con una misma*, mientras que el segundo significa *sin daño hacia una misma ni hacia la naturaleza*. Existen varios términos en las culturas orientales que Galtung cita para explicar la paz desde un equilibrio más armonizador, amplio e integrador de las dimensiones interna, social e internacional.

Como se puede estimar, el aporte de Johan Galtung en esta etapa de los Estudios para la Paz, fue vital para un mejor entendimiento de la paz y de la violencia en distintos aspectos de la vida, ofreciéndonos con apertura la posibilidad de hacerlos nuestros.

Respecto a la transcendencia de los aportes de Galtung, Martínez señala:

El giro más importante en la nueva manera de entender la Investigación para la Paz radica en la propuesta de Galtung (2003) de distinguir entre la paz negativa como alternativa a la violencia directa, y la paz positiva como alternativa a la violencia estructural. Aunque sigue proponiendo que la paz todavía sigue siendo algo «que no es violencia», en este caso, estructural, da una tarea positiva a los trabajadores y trabajadoras por la paz. No vivimos en paz aunque no nos matemos directamente, o no estemos en guerra. No vivimos en paz mientras quede un solo hermano que no tenga satisfechas sus necesidades básicas que, aunque es un debate abierto cuáles sean esas necesidades, para este autor son seguridad o supervivencia, bienestar, identidad y libertad. (Martínez, 2005: 50-51).

Siguiendo la cronología de Vicent Fisas (1987), es a partir de los años ochenta cuando surge la tercera etapa de los Estudios para la Paz que se caracteriza por incorporar la noción de *desarrollo* en la conceptualización de la paz. Para Vicent Martínez (2001), sin embargo, dicha incorporación forma parte más bien de una segunda fase. Pero independientemente de estas distinciones, ambos coinciden en señalar la importancia del giro de atención hacia las necesidades humanas, el cual marcará un antes y un después en la construcción de teorías sobre la paz. Priorizando tanto el fin a los problemas sociales como también el bienestar y el ejercicio crítico y constructivo de libertades. En este énfasis radica la vinculación entre paz y desarrollo.

El término «desarrollo» suele referir, básicamente, al crecimiento económico y al Producto Bruto Interno – PBI como principal variable cuantitativa. Sin embargo, desde los Estudios para la Paz se planteó el reto de dialogar con los Estudios para el Desarrollo, para poder abordar aquellas violencias que no se perciben a primera vista y se han hecho parte de la cultura. Por ejemplo, el enriquecimiento de unas pocas personas a costa del empobrecimiento de otras, conforma una estructura violenta que

penetra, margina, fragmenta y «[...] no sólo deja huellas en el cuerpo humano, sino también en la mente y el espíritu» (Galtung, 2003: 264).

Sobre el desarrollo, Johan Galtung (2003) elaboró un conjunto de tesis críticas que reiteran sobre la necesidad de reconocimiento de los desarrollos alternativos, la satisfacción de las necesidades humanas con énfasis en quienes más lo necesitan, y la eliminación de la estructura centro-periferia.

A partir de entonces, se reconoce que no sólo la guerra causa la muerte, sino que existen causas como la miseria y otro tipo de carencias producidas por estructuras de violencia, que pueden ser tan nefastas como la guerra. La paz sintoniza con el desarrollo en pilares fundamentales como las necesidades y capacidades humanas y el mantenimiento del equilibrio ecológico, dimensiones que hoy más que nunca contrastan con el paradigma convencional de los procesos de crecimiento y modernización (Fisas, 1987: 77-78).

La perspectiva formal y minuciosa de Fisas respecto del proceso de consolidación de los Estudios para la Paz aporta comprensión sobre la íntima relación entre paz y violencia en todas sus formas, incluso con aquellas que en apariencia no existen. Posteriormente y desde otro enfoque, elabora esta síntesis de las diferentes concepciones de la paz que me parece digna de mención pues enlaza con el propósito de este epígrafe. Según Fisas podemos distinguir entre:

- 1) Paz como ausencia de guerra. Es un concepto centrado en los conflictos violentos entre Estados.
- 2) Paz como equilibrio de fuerzas en el sistema internacional. En 1941, Quincy Wright surgió que la paz era un equilibrio dinámico de factores políticos, sociales, culturales y tecnológicos, y que la guerra ocurría cuando se rompía dicho equilibrio. [...].
- 3) Paz como paz negativa (no guerra) y paz positiva (no violencia estructural). Estos conceptos fueron introducidos en 1969 por Johan Galtung, quien también desarrolló el concepto de violencia estructural, definiéndolo en términos del número de muertes evitables causadas por estructuras sociales y económicas.
- 4) Paz feminista: Niveles macro y micro de la paz. En los años setenta y en los ochenta se extendió a nivel individual tanto la paz positiva como negativa. La nueva definición de paz incluía no sólo la abolición de la violencia organizada a nivel

macro, como la guerra, sino también a nivel micro, como las violaciones en las guerras o en casa. [...] (Fisas: 2004: 21).

De manera que, en el camino de construir las bases de una paz más profunda y duradera, objetivo al que claramente apuntan los Estudios para la Paz, se han ido incorporando aspectos de la vida humana que escapan a las coyunturas bélicas y que comprometen, más bien, la cotidianeidad de dicha vida.

La identificación de diversas violencias es producto de ahondar en dichos aspectos y de empezar a entender que no habrá paz mientras las violencias más invisibles se reproduzcan en el día a día de la gente, en aquellos continentes, regiones o colectivos humanos para los cuales la agresión, la exclusión y la pobreza forman parte de una pesada y permanente circunstancia.

En esa línea, Johan Galtung (2003) aportó un conjunto de teorías críticas en relación al desarrollo, desde los Estudios para la Paz, reivindicando en primer lugar el reconocimiento de los desarrollos alternativos; en segundo lugar, la satisfacción de necesidades humanas con énfasis en quienes más necesitan; por último, la eliminación de la estructura centro-periferia.

Forjar una paz sostenible para generar oportunidades equitativas y condiciones de libertad para elegir y construir nuestro propio destino, sin que esté condicionado por una ruta reproductora de miseria como sucede en los países con población en situación de desigualdad y pobreza extrema. Precisamente, ese debilitamiento de estándares económicos, políticos y ecológicos responde a un círculo de privaciones en cuestión de derechos y libertades que, a decir de Amartya Sen (1999), tendrían que ser medios y no solo los fines primordiales del desarrollo.

La pobreza extrema representa violencia estructural, por lo que no podremos con ella si solo la abordamos desde la carencia monetaria y con programas de «desarrollo» o de «lucha contra la pobreza» que asisten con víveres o dinero a familias en esta

situación, y olvidamos dotarlas de condiciones sociales, políticas y ambientales que les permitan vivir y desarrollarse con calidad en todos los aspectos de su vida.

Vivir en paz supone vivir en libertad y el ejercicio de la libertad requiere de la confianza de la ciudadanía en las instituciones que la salvaguardan. Son valores que se perciben claramente deteriorados en vista de una institucionalidad democrática que debería protegerlos y falla, ya sea por la corrupción, por falta de medios para hacer cumplir la ley o por ambas cosas. La impunidad es, en este sentido, uno de los principales obstáculos a la hora de poner fin a la violencia estructural que se ensaña con las personas y los grupos sociales más vulnerables.

1.2.2. Nuevos horizontes en la teorización de la paz

Con muchos puntos en común, pero con distinto criterio para marcar los períodos de la investigación para la paz, Vicent Martínez presenta las características que a su parecer definen, más bien, una segunda fase en dicha trayectoria de investigación. Es un momento en el que, además, pareciera generarse un claro tránsito en los fines de este campo de investigación; entre los estudios de paz que se preocuparon por definir la paz en función de la guerra, y los Estudios para la Paz que incorporaron un sentido más constructivo y propositivo hacia una paz con justicia social y desarrollo humano.

A partir de este punto nace la Educación para la Paz, cuya finalidad, según José Tuvilla (2004: 396-419), se define en el fomento de los valores universales para la paz; de las capacidades de apreciar el valor de la libertad, las aptitudes personales y la diversidad; de la apuesta por resolver los conflictos desde formas no violentas; del respeto por el medioambiente y la promoción del desarrollo sostenible del entorno del que se es parte; así como de los principios de solidaridad y equidad en todos los planos.

Reconocer la violencia en las estructuras sociales permitió evidenciar las desigualdades existentes al interior de los Estados y en su relación con otros países. Por ejemplo, entre los del Norte y los del Sur o el (mal llamado) Tercer Mundo, con quienes se generaron dependencias y nuevos colonialismos so pretexto de acabar con un supuesto subdesarrollo.

Por otro lado, la ayuda humanitaria se vincula a la cooperación al desarrollo, herramienta de ayuda para sectores de la población que han sido víctima de catástrofes o que resultan desfavorecidos en cualquier parte del mundo, pero que también sirvió para enmascarar intereses económicos y políticos no tan humanitarios. A raíz de esto surgen organizaciones dedicadas a la ayuda humanitaria y a la ayuda para el desarrollo, que incluyen la denuncia como parte de su accionar.

Una última característica de esta segunda fase de investigación en los Estudios para la Paz, es el cuestionamiento a la objetividad en este campo, debido a su intromisión en cuestiones sociales y políticas que dependen en última instancia, de determinados valores. Un reconocimiento que resultaba inaceptable para quienes aspiraban a estudiar la realidad sin comprometerse con ella, como una suerte de fábrica de exclusión social.

La tercera etapa fue, para Martínez (2001), la menos académica pues estuvo vinculada a la movilización contra las armas, las guerras nucleares, la represión militar y la injusticia. Se crearon diversos programas de resolución de conflictos y desde el feminismo de Betty Reardon, entre otras, se introdujo la perspectiva de género a la Investigación para la Paz, a través del análisis de la dominación masculina en el marco de un concepto de seguridad equivalente a agresión, y del análisis de la violencia a pequeña escala, como la que sufren las mujeres, niñas, niños y adolescentes en el ámbito doméstico.

Marcaron un hito en esta temporada publicaciones como *Educación para la Paz, objetivo escolar* de John Paul Lederach, e *Introducción al estudio de la paz y de los conflictos* de Vicenç Fisas, de 1984 y 1987 respectivamente. Asimismo, cobraron mayor protagonismo los campos de opinión pública, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales que incorporaron enfoques de desarrollo entre sus acciones.

1.2.3. Vivir en paz supone aprender del conflicto

A partir de los años noventa los Estudios para la Paz profundizan en el concepto de *violencia cultural*, es decir, «aquellos aspectos de la cultura, el ámbito simbólico de nuestra existencia (materializado en religión e ideología, lengua y arte, ciencias empíricas y ciencias formales –lógica, matemáticas-) que puede utilizarse para justificar o legitimar violencia directa o estructural.» (Galtung, 2003: 261).

A partir de ese momento, Martínez (2001: 68-70) vuelve a plantear aspectos de importancia para los nuevos tiempos de la Investigación para la Paz tal como repensar las relaciones sociales desde nuevas culturas para hacer las paces e identificando violencias normalizadas; asumir responsabilidades por las relaciones que establecemos y poder pedirnos cuentas; estudiar los conflictos sin perseguir soluciones sino buscando transformarlos; trascender a los prejuicios de seguridad y soberanía de los Estados para conformar una sociedad civil global; cuestionar la neutralidad de la acción humanitaria reconociendo el rol activo de las víctimas; desvincular el desarrollo del mero crecimiento económico para priorizar capacidades, oportunidades y derechos; reforzar las iniciativas de asociación por la paz desde la educación; y considerar el concepto de *paz imperfecta* de Francisco Muñoz que apuesta por la recuperación de los episodios pacíficos en la historia de las relaciones humanas.

A partir de esta síntesis de Martínez acerca de los estudios sobre paz y conflicto, observo una interesante evolución en los enfoques y en la apertura hacia situaciones y contextos en los cuales la paz pueda ser entendida y expresada de diversas maneras.

Desde el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, Francisco Muñoz sustentaba que la base epistemológica de las teorías sobre paz reside en las teorías sobre conflictos, siendo por ello necesario elaborar teorías de paz más autónomas y menos dependientes de la asociación con la violencia, incorporando el poder como capacidad individual, social y pública para transformar la realidad (Muñoz, 2001: 22).

Junto a Beatriz Molina (Muñoz y Molina, 2003), Muñoz sostiene que la paz ha estado presente en toda la historia de la humanidad, por las huellas encontradas en el lenguaje, en las imágenes y en los símbolos que son muestras de la universalidad del concepto de paz, en las prácticas de negociación presentes en todas las escalas para favorecer la interlocución y el entendimiento; y en el reconocimiento de la no-violencia a través de acciones y capacidades pacifistas.

De acuerdo al principal consenso en la trayectoria de los Estudios para la Paz, Muñoz y Molina plantean descartar la paz como negación o ausencia de violencia, proponiéndola como resultado de la búsqueda de mecanismos que todos los seres vivos ejercen para lograr y mantener el equilibrio y la armonía necesarios para la coexistencia. Asimismo, señalan que el ser humano sería el más complejo de todo el proceso natural evolutivo por su peculiar adaptación y por haber mantenido un *equilibrio dinámico* desde sus capacidades auto regulativas y de intercambio con su entorno.

Esta constante búsqueda de equilibrio con el entorno podría servir para proyectar un camino de construcción de paz y transformación de conflictos, y confirmar así que la

violencia no nos es natural y que los seres humanos somos inacabados/os e imperfectos/os, en constante adecuación y aprendizaje en nuestras capacidades.

Desde esta perspectiva, entiendo la paz como alternativa a la violencia personal directa y a la violencia estructural que se refleja en la injusticia social y que interactúa entre el conflicto y la paz, requiriéndose un estudio y propuesta que integre dichos supuestos, desde la cooperación y el consenso, ante la complejidad humana que nos interpela constantemente en nuestras formas de ser y hacer.

Muñoz y Molina (2001; 2003) sugieren ejes de comprensión de la paz como una teoría general del conflicto, la idea de una paz imperfecta como concepto que integre experiencias en las que los conflictos se regularon pacíficamente. En sintonía con la iniciativa de reconocer diversas paces y con el objetivo de ser una herramienta teórica y una categoría de análisis que permita identificarlas e interrelacionarlas, la paz imperfecta es más que un punto medio entre la paz positiva y negativa. Así lo sustenta Muñoz (2001: 42) en la siguiente cita:

En primer lugar para hacer una ruptura con las concepciones anteriores en las que la paz aparece como algo perfecto, infalible, utópico, terminado, lejano, no alcanzable en lo inmediato. Alcanzable en el otro mundo, en la gloria, los cielos, con la mediación de los dioses, lejos de los asuntos mundanos, fuera de alcance de los humanos por sí mismos. En segundo lugar, tal como venimos afirmando, una paz imperfecta que ayuda a reconocer las prácticas pacíficas allá donde ocurran, que nos descubre estos hitos como apoyos de una paz mayor, más amplia. Y en tercer lugar una paz imperfecta que nos ayuda a planificar unos futuros conflictivos y siempre incompletos.

El concepto de paz surgió como herramienta para medir el bienestar de las sociedades, identificando situaciones más justas y violentas. Desde este punto de vista, la paz debía ser estudiada como el reflejo del estado y de la situación de la especie humana. No obstante, la preocupación se acentúa a raíz de los modelos de desarrollo y de organización social que enfatizan diferencias y desigualdades, consolidando la satisfacción de unos a costa del sufrimiento de otros.

Rescatamos entonces el importante tránsito de la noción de paz hacia la violencia y el conflicto, para reforzar su connotación positiva a nivel de desarrollo de capacidades para regularlos pacíficamente, en un marco de exigencia de derechos y de reconocimiento.

Una paz realizable requeriría considerar los conflictos en su naturaleza, en una suerte de «[...] nueva perspectiva en la que se deberían de incluir las distintas «experiencias» de paz desde una perspectiva del conflicto» (Muñoz, 2001: 38). La paz sigue en proceso de construcción, tanto en su definición como en su concreción, por lo tanto, corresponde apropiarnos de ella desde nuestras propias experiencias y contextos sociales, incluyendo la violencia que engendran dichas estructuras.

Si hasta hace algunos años, la paz se entendía sólo como un ideal de ausencia de violencia o de guerra (paz negativa), o uno de justicia total (paz positiva), hoy nuestro reto es hablar de la paz desde el conflicto, no sólo como resultado de gestiones adecuadas y favorables, sino también como situación propicia para gestar algo nuevo.

1.3. Aproximaciones al estudio sobre los conflictos

Después de todo el recorrido hacia la consolidación de los Estudios para la Paz y la investigación en conflictos, seguimos refiriéndonos a los conflictos como situaciones no deseadas y de confrontación que se prefieren evitar. Sin embargo, también es verdad que cada vez hay más consenso respecto a que el conflicto es inherente a las relaciones humanas, por ello el contexto y las formas de regularlos, entre otros factores, pueden determinar su desenlace pacífico o violento.

El conflicto encierra una dimensión de oportunidad para el cambio, para la transformación personal y social. En este apartado identificaré diversas miradas y

aproximaciones teóricas que abordan los conflictos desde definiciones o enfoques profesionales diversos.

A continuación, citaré la definición de *conflicto* que propone el investigador en Historia Contemporánea, José Ruiz Jiménez, en la *Enciclopedia de Paz y Conflictos* editada por el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada:

[...] situaciones de disputa o divergencia en las que existe una contraposición de intereses, necesidades, sentimientos, objetivos, conductas, percepciones, valores y/o afectos entre individuos o grupos que definen sus metas como mutuamente incompatibles. El conflicto es algo consustancial e ineludible en la naturaleza humana, y puede existir o no una expresión violenta de las incompatibilidades sociales que genera. (Ruiz, 2004: 149)

La asociación entre conflicto y violencia está en el imaginario desde el cual se abordan las situaciones conflictivas, por lo tanto, el camino hacia su resolución carga con una connotación negativa de la discrepancia entre posiciones, intereses y necesidades. Por ello, en este apartado, haremos un viaje a través de las principales nociones del conflicto, incluyendo desde ya un enfoque creador y transformador en su análisis.

1.3.1. Apelar a la creatividad. Vicenç Fisas

Vicenç Fisas es un importante analista y referente en el análisis de los conflictos armados a nivel global. En el marco de su obra *Introducción al Estudio de la Paz y de los Conflictos* publicada en 1987, Fisas señala de forma esquemática que el conflicto sería una situación en la que una persona, comunidad o Estado se encuentra en oposición consciente con otra, de igual o distinto rango, persiguiendo objetivos incompatibles, o percibiéndolo así, tendiendo a la oposición y al enfrentamiento (Fisas, 1987: 166).

En esta definición se rescata la idea de oposición e incompatibilidad de objetivos e intereses. No obstante, algún tiempo después, el mismo Fisas replantea su definición incorporando algunos elementos para el análisis:

El conflicto [...] es un proceso interactivo que se da en un contexto determinado. Es una construcción social, una creación humana, diferenciada de la violencia (puede haber conflictos sin violencia, aunque no violencia sin conflicto), que puede ser positivo o negativo según como se aborde y termine, con posibilidades de ser conducido, transformado y superado (puede convertirse en paz) por las mismas partes, con o sin ayuda de terceros, que afecta las actitudes y comportamientos de las partes, en el que como resultado se dan disputas, suele ser producto de un antagonismo o una incompatibilidad (inicial, pero superable) entre dos o más partes, y que expresa una insatisfacción o desacuerdo sobre cosas diversas (Fisas, 1998: 29-30).

Se observa un carácter más dinámico y abierto en esta definición, desvinculándola de su sentido más negativo para pasar a ser un proceso abierto a la paz o a la incorporación de formas pacíficas en su evolución.

A nivel individual y colectivo existen múltiples formas de reaccionar ante los conflictos, pero según se decida afrontarlos, se tiende a querer superarlos, reconocer sus ventajas, negar su existencia, aceptarlos sin capacidad de hacerles frente, acomodarse a la idea de que existen sin voluntad de cambio o a responder de forma arrogante o hasta violenta y/o militar (Fisas, 1998: 186).

Para abordar los conflictos armados, Fisas (2004: 13-64) propone cuestiones puntuales para el análisis como, profundizar en sus estadios y en los actores vinculados a los mismos, relativizar las cifras a nivel de pérdidas humanas para aportar un mayor reconocimiento a cada contexto en los que se dan los conflictos. Esta es una de las principales diferencias respecto de otras definiciones que ofrece el campo de los Estudios para la Paz. Esto genera un enfoque más amplio para abordarlos, integrando los esfuerzos destinados a la prevención y no solo al ataque preventivo, ya que doblegar al enemigo no supone alcanzar la paz.

Desde esta mirada teórica se propone profundizar en técnicas de negociación para tratar los conflictos armados pues ofrecen altas probabilidades de desembocar en procesos de paz. Ampliar el concepto del conflicto y las formas de abordarlo puede proporcionar mayores oportunidades en el curso de su proceso y transformación.

La violencia está tan arraigada a nuestra evolución y cultura que, pensar en un mundo más pacífico a veces parece imposible por su automática asociación con los conflictos. Sin embargo, la mirada de Fisas motiva este campo de estudios, en relación a la diferenciación y graduación al momento de analizar la violencia presente en los conflictos, de manera especial en contextos de conflicto armado, aunque también en los niveles más comunitarios e individuales. En ese sentido, el punto fuerte de esta visión es la trascendencia al propio conflicto para incorporar de manera abierta y creativa, aspectos de prevención y gestión, desde los saberes previos y las necesidades concretas del contexto, apostando por el diálogo, la no violencia y aspirando a generar dinámicas propias que permitan aquellos cambios relacionados con las verdaderas causas del conflicto.

1.3.2. Trascender al conflicto. Johan Galtung

Johan Galtung es sociólogo y matemático, de nacionalidad noruega, cuyo aporte ha sido esencial para la interacción entre los Estudios para la Paz, la Teoría del Conflicto y los Estudios sobre el Desarrollo. El conflicto tiene en sus raíces una contradicción, un obstáculo o una traba que se interpone en el camino que deseamos, en definitiva, un problema. Para Galtung este problema tendría que suponer un impulso para estar a la altura y poder resolverlo.

No obstante, es necesario ir a lo más elemental del conflicto y esto supone adentrarnos en sus principales manifestaciones. Galtung propone empezar por la *disputa* y el *dilema* como componentes de la cotidianidad que todas y todos experimentamos. La primera como una situación en la que se tiende a dañar a quien percibimos como oponente o que se interpone en nuestros objetivos, y la segunda como una situación propensa a la autodestrucción (2003: 107).

El concepto de crisis es otro que, de manera similar al de conflicto, encierra un sentido vinculado al caos y al desastre, un sentido negativo. A raíz del aporte de diversas culturas milenarias, recogido por los estudios y la investigación para la paz y de conflictos, la palabra crisis empieza a ser compatible con la de oportunidad. Desde la cultura oriental, por ejemplo, el conflicto no es algo que se deba bloquear sino más bien aprovechar, para fortalecer los niveles de consciencia y conocimiento personal y social.

En este sentido, el enfoque de Galtung nos invita a abordar y trabajar sobre el conflicto desde una dimensión más micro, aportando a visibilizar más que la simple oposición de intereses, para pasar a analizar reacciones y conductas que entran en el juego de la contradicción que contiene cada conflicto. Así lo señala el propio autor (2003:108):

[...] el conflicto, al ser problemático, podría asimismo llevar a conductas constructivas, en forma de actitudes profundas, reflexivas, también conocidas como diálogo interno y diálogo externo, con otros, sobre los problemas. La conducta destructiva desgarrar, daña y hiere; la conducta constructiva construye algo. Ambas pueden estar presentes en el mismo tiempo y lugar, en la misma persona; no son incompatibles.

Esta visión reconoce una relación compleja entre el conflicto y el comportamiento, a tal nivel que propone una construcción triádica del conflicto entre (A) actitudes; (B) comportamiento; y (C) contradicción (véase la Ilustración N° 1). Es decir, si alguna situación llevara a concentrarse sólo en uno de sus elementos, ello conllevaría a invisibilizar la importancia de cada una de sus partes. Así expresa Galtung (2003: 109-110) su hipótesis al respecto:

[...] se convierte en la proyección de una espiral que puede recorrer su camino igual que un incendio: se acaba cuando la casa se ha quemado. Las partes pueden quemarse por agotamiento emocional en el ángulo A del triángulo o por inutilización física en el B. sin embargo, A y B pueden también ser contenidos, y/o la contradicción, C, puede ser reemplazada. No hay una ley absoluta sobre una escalada sin límites hasta el amargo final. Todavía quedan seres humanos en este mundo nuestro, azotado por los conflictos.

Con actitudes (A) nos referimos la percepción que tienen las partes del conflicto respecto de cómo se perciben a sí mismos, a los otros y al propio conflicto. El comportamiento (B) o la conducta está directamente asociado a lo que sienten las partes y quieren hacer sentir (herir, cuestionar, reprender, doler) al otro. Como contradicción (C) podríamos referirnos al enredo o entramado que encierra aquello que da origen al conflicto, aquel esas subjetividades que proyectan el desencuentro en lo más profundo de las partes, y que no se ve fácilmente porque la atención se centra, generalmente, en conductas (B) y presunciones (A).

Ilustración 1: Triángulo del conflicto
Fuente: Galtung (2003) y Calderón (2009)

Un conflicto es realmente un conflicto en la dimensión más amplia del término, en la medida en que representa una contradicción y que esta se pueda identificar, posibilitando un acercamiento a su estructura y dinámica que nos proporcione pistas suficientes para idear alternativas para su transformación, precisamente, el objetivo central de este campo de estudios.

Desde su especialidad, Galtung ha ensayado fórmulas matemáticas para algunos espacios de conflictos, estructuras y transformaciones, al igual que ha incorporado cosmologías de culturas y tiempos distintos al occidental como la budista o la cristiana, comparándolas e identificando valores que facilitan el diálogo interior y exterior.

Es indiscutible que, con estas referencias, la mirada de Galtung introduce la dimensión más profunda y personal como parte del diálogo que hay que propiciar en situaciones de conflicto. Como tal ejerce un llamado a tomar aquellas costumbres o creencias ancestrales que convocan a la armonía, a la reconciliación con nuestro propio ser, de manera que seamos capaces de proyectarlo al entorno y a las situaciones que nos toca vivir. En definitiva, la mirada de Galtung, aporta a sentar las bases para una transformación creativa de los conflictos, como camino alternativo a la prevención y a la resolución, y como reto de ser una tarea permanente.

1.3.3. En paz imperfecta. Francisco Muñoz

Francisco Muñoz fue historiador, investigador y director del Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada, en España. Muñoz señalaba que la concepción negativa del conflicto se debe a que las regulaciones violentas han sido las más difundidas, sin reparar en que constantemente regulamos de forma pacífica los conflictos en nuestra vida (Muñoz y otros, 2005: 88).

La convivencia en equilibrio con nuestro entorno supone un aporte a la transformación de conflictos y a la construcción de paz ya que, en el marco de nuestra complejidad humana, es necesario reconocernos como seres en constante cambio, inacabados e imperfectos. La imperfección propuesta por Muñoz (2001) podría ser una iniciativa para crear, actuar y practicar, aun en circunstancias de violencia, sin perder y desarrollando capacidades de autocrítica desde donde nos toque estar, en un proceso de aproximación permanente hacia lo que buscamos.

En esa búsqueda encontramos circunstancias de tensión y confrontación, tanto a nivel individual como colectivo, en las que cuesta visualizar mecanismos de mediación como parte de la negociación que sirvan para incorporar ideas nuevas, para favorecer y acercar posiciones enfrentadas.

Esta asociación para la transformación de los conflictos no puede excluir al Estado, previo reconocimiento de su carácter benefactor y opresor o, como lo refiere Muñoz (2004), entre lo angelical y el leviatán, porque su actuación a través de la historia es en efecto cuestionable, pero por definición sus funciones debieran ser regular y armonizar el enfrentamiento de intereses, reflejando los de quienes representa. Así lo expresa el referido investigador en la siguiente cita:

Dicho de otra manera el conflicto forma parte del universo, de todas las realidades que lo componen y de las relaciones que se establecen entre ellas. [...] Casi nos atreveríamos a decir que el conflicto es una característica de los seres vivos que en su intento de perpetuarse como individuos –frente a la muerte- y como especie –frente a extinción- pretenden utilizar en su beneficio los recursos y la energía disponible en su entorno. (Muñoz, 2001: 34).

El enfoque del Instituto de la Paz y los Conflictos de Granada, representado en su momento por Francisco Muñoz, resalta el papel generador y creador del conflicto en tanto supone para la especie humana, una fuente permanente de creación y renovación en la exigencia y búsqueda de soluciones.

Los conflictos son parte del proceso de interacción social y ahí mismo se regulan, transforman u, ocasionalmente, se resuelven. Pero además de choques y disputas este proceso debería implicar un reconocimiento mutuo y la comprensión de diversas percepciones (Muñoz, 2001: 36-37).

De la perspectiva de Muñoz, tomamos la importancia de identificar y socializar aquellas situaciones en las que el conflicto se ha visto regulado, o dando un giro positivo en su curso. Esto puede materializarse en momentos de disminución de la agresividad y la tensión o de pausa. Después de todo recordemos que ni la vida, ni las

relaciones humanas son lineales, todo supone un curso en parte incierto del que también es posible aprender, sin tener que estancarnos en los peores tramos del recorrido.

1.3.4. El derecho de pedirnos cuentas. Vicent Martínez y Sonia París

Vicent Martínez es filósofo y fundador de la cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz en la Universidad Jaume I en Castellón. Su obra en el campo de los Estudios para la Paz es un referente indiscutible y, también, para conducirnos en el estudio sobre los conflictos cuya definición aclara en esta cita:

Desde la Cátedra Unesco de Filosofía para la Paz se entiende el conflicto como poseedor de una serie de características positivas, y que puede ser regulado positivamente para tratar de transformar el significado que muchas veces genera. Incluso podemos decir, tal y como afirma Francisco Muñoz, que el conflicto no es positivo ni negativo, sino que puede ser caracterizado con estos calificativos según la forma en cómo sea regulado. Con esa finalidad aparece el modelo de la transformación de conflictos, que ayuda a que surjan los aspectos más creativos del mismo, en lugar de provocar la eliminación de las otras personas. (Martínez y París, 2004:154).

Martínez toma la noción de transformación de conflictos para incluirla en su visión de oportunidad para los conflictos, para cambiar sus dinámicas, reconstruir relaciones de personas o colectivos involucrados, y potenciar sus capacidades para apostar por formas y medios más pacíficos. En este sentido, las nociones de conflicto fueron orientadas hacia formas de regulación, trascendiendo a la incompatibilidad manifiesta.

Sonia París es investigadora de la mencionada Cátedra UNESCO. En su libro *Filosofía de los conflictos* (2009) propone que la concepción negativa del conflicto está asociada directamente al uso de medios violentos y a sus fatales consecuencias. Ésta es, por lo tanto, la dimensión de los conflictos a la que generalmente se rehúye y se busca eliminar. La concepción positiva, por el contrario, tiene que ver con los medios que se usan para gestionarlos y producir efectos regeneradores de las relaciones humanas, es decir, se trata de una dimensión más integradora y constructiva.

París sistematizó teorías de los conflictos a partir del análisis de una serie de categorías (referidas a sus orígenes, características, dinamismo y elementos que facilitan su transformación). De esta manera, llegó a distinguir entre en dos corrientes de pensamiento diferentes. La primera de ellas, ve el conflicto como un proceso a partir del incremento y descenso de violencia, o de las percepciones y acciones para su transformación, teniendo como principales referencias a Rupesinghe, Fisher, Keashly y Thomas. La segunda, por el contrario, asume el conflicto como una progresión cuyas etapas evolucionan y generan acciones encaminadas a la consolidación de la paz. En esta parte sus referencias bibliográficas son Lederach y Curle (París, 2009: 32-35).

París propone metodologías para la transformación pacífica de los conflictos desde el giro epistemológico que Vicent Martínez defiende, en relación con la noción de performatividad en la *Teoría de los Actos de Habla* del filósofo británico John Langshaw Austin, junto a una inversión epistemológica para reconstruir aquello que nos hacemos (Martínez, 2005: 63-64).

Desde la Ética Comunicativa y la Teoría de los Actos de Habla de Austin se plantea considerar la fuerza con que decimos algo (ilocucionaria), la comprensión de esa fuerza por parte del receptor y las consecuencias de lo que nos decimos los unos/as a los otros/as (París, 2009: 86-89; Martínez, 2005: 117). En definitiva, ser responsables de aquello que nos decimos y hacemos, asumiendo nuestro derecho a pedirnos cuentas por dichas acciones.

Nuestras mejores interacciones como especie humana dependerán del encuentro de nuestras capacidades de *cooperación*, para agudizar o transformar el conflicto; de nuestras *percepciones* acerca de las necesidades e intereses aparentemente incompatibles; y de los tipos de *poder* que influyen en la conducción del conflicto hacia

la violencia o la pacificación, relaciones también estudiadas y presentadas por Martínez (2005: 110-119) y París (2009: 61-77) en el sentido de las múltiples caras del conflicto.

En este camino destaca la importancia de reeducar sentimientos para transformar pacíficamente los conflictos, tarea difícil pero no imposible. Sonia París (2009: 93-114) recuerda la eterna dicotomía entre objetividad / subjetividad, producto de la ciencia moderna occidental que durante muchos años ha condenado la interacción permanente entre pensamiento y sentimiento, un reconocimiento que se hace necesario desde la Filosofía para hacer las Paces.

Resulta necesario identificar los sentimientos negativos y tratar de transformarlos hacia su sentido más positivo, teniendo en cuenta alternativas como la de Acosta Mesas (2003: 300-302), quien plantea aprender a identificar los cambios corporales que nos generan las emociones y los sentimientos, pues regulando el cuerpo podremos aportar a ser capaces de prevenir conflictos, algo que debería formar parte de procesos educativos tempranos.

En tanto reconozcamos que a pesar de nuestras diferencias somos todos vulnerables ante determinadas situaciones, seremos capaces de escuchar, comprender, compadecernos y comunicarnos con corresponsabilidad, e impulsar la creación y el fortalecimiento de instituciones potenciadoras de acuerdos y consensos, afirma Martínez (2005: 151).

Los conflictos que superan los ámbitos nacionales e involucran a un gran número de personas no dejan de ser expresiones de la violencia que como hecho social se nos impone como realidad insoslayable pero que, al mismo tiempo, es una construcción humana que acaba modelando nuestros intereses, necesidades, sentimientos y formas de ejercer el poder. El Informe del 2006 de Oxford Research Group señala como amenazas el cambio climático, la competencia por el acceso a los

recursos, la marginación de mayorías en el acceso a servicios y derechos básicos, la militarización mundial, entre otros (Abbott, 2006: 2–31).

Entonces, recojo de la mirada y propuesta transformadora del conflicto desde el pacifismo que aportan Martínez y París, que se trata de un proceso progresivo que requiere paciencia, esfuerzo, compromiso y perseverancia de las partes involucradas. La búsqueda de reconciliación tendría que darse a partir del empoderamiento y la recuperación de capacidades, de la identificación de momentos de diálogo que ante las violencias manifiestas se pierden de vista, de objetivos válidos por su esencia y no tanto por cómo se manifiestan.

1.3.5. Conflicto y cooperación. Eduard Vinyamata

Eduard Vinyamata es un referente de la conflictología, ese conjunto de conocimientos y habilidades que hemos generado y acumulado alrededor de los conflictos, incluyendo los intentos por solucionarlos. A decir del propio Vinyamata (2003:9) esta disciplina se considera plural, integral e integradora y concentra su análisis tanto en el conflicto como en la crisis y en las dificultades para la convivencia.

Una vez más se afirma que las situaciones conflictivas están presentes en todas las manifestaciones de la vida, no sólo cuando se trata de guerras y disputas sino también en contextos de crisis y problemas. En esta línea, Vinyamata define así el conflicto:

Lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes. El conflicto es connatural con la vida misma, está en relación directa con el esfuerzo por vivir. Los conflictos se relacionan con la satisfacción de las necesidades, se encuentra en relación con procesos de estrés y sensaciones de temor y con el desarrollo de la acción que puede llevar o no hacia comportamientos agresivos y violentos. Desde la conflictología, el conflicto adquiere un valor universal que es abordado de manera integral, reconocido en todas las actividades humanas y sociales de todo tipo de sociedades y épocas que posee un factor común determinante en su análisis y comprensión (Vinyamata, 2001: 129).

Nos encontramos con otra teoría sobre el conflicto que rescata su valor estimulante para la búsqueda de felicidad, seguridad y bienestar (Vinyamata, 2003: 9). El conflicto se manifiesta en estrecha relación con la cooperación, porque asumimos que los demás existen para satisfacer nuestras necesidades y en realidad dependemos las unas y unos de las otras y otros. Precisamente el miedo a no satisfacerlas motiva intentos de apropiación de aquello que es objeto de nuestra dependencia, desencadenándose los primeros conflictos según Vinyamata (2001: 65-66).

Un aspecto importante son las causas que, según dicho autor (2001: 16), no se sustentan en las diferencias sino en la agresividad que genera la incapacidad para controlar el miedo y en el no poder desarrollar recursos cooperativos que faciliten el equilibrio de las reacciones competitivas.

De este enfoque me parece interesante destacar que los conflictos sociales no tienen por qué fundamentarse en las diferencias culturales o identitarias, también pueden tener sus raíces en la desigualdad social de carácter estructural. La posibilidad de transformar éstas últimas implica una aproximación a los conflictos en clave constructiva, como un mal menos que puede ser reparado. Lo cual es positivo, teniendo en cuenta la diversidad de culturas que existen en el mundo y la necesidad de buscar fórmulas de convivencia entre diferentes.

Además, Vinyamata señala:

Entre los teóricos modernos del conflicto se describen algunos procesos conflictuales como saludables para el desarrollo social. [...] George Simel, filósofo alemán de principios del siglo XX, autor del muy interesante ensayo Conflicto, subrayó la importancia de los procesos de cooperación y de conflicto en las relaciones sociales y llegó a afirmar que «Un cierto grado de desacuerdo, de divergencia y de controversia es lo que facilita la cohesión y la profunda cooperación del grupo». Otro teórico destacado, Lewis Coser, autor de la obra Las funciones del conflicto social, abundó en las descripciones del conflicto como un elemento consustancial de las relaciones humanas que posee una función específica de cohesión y estímulo que no puede ser negligida. (Vinyamata, 2001: 28).

Estos puntos hablan de un enfoque útil y complementario a los mencionados anteriormente, que desvincula al conflicto de la violencia a partir de la forma en que se regula, aun encontrando características de violencia, pero reconociendo su función en determinadas dinámicas sociales y políticas basadas en injusticia y desigualdad.

Existen culturas proclives a valorar el conflicto y otras que los denuncian o buscan formas de conciliar o negociar. Vinyamata (2001) sostiene que solo aquellas que valoran el conflicto facilitan la práctica de su valor, como iniciativa de lucha y esfuerzo por sobrevivir en la dureza de determinados contextos.

Me parece importante la mirada de Vinyamata (2001) cuando considera el conflicto como un instrumento para el mantenimiento de la identidad. Y es que la identidad de las personas y de los pueblos se configura a medida que se marcan diferencias en relación a los otros y otras. Este enfoque lo sostuvo Barth (1976) en el campo de la antropología, al postular que cualquier grupo se organiza a partir de las diferencias que, a su vez, representan fronteras étnicas que se construyen en la interacción de los mismos.

Pero sucede que aquella connotación negativa del conflicto arrastró también a las diferencias, la excusa perfecta para enfrentar o violentar a quien piensa, cree o hace diferente; algo que afortunadamente viene siendo replanteado para quienes trabajan por una mejor convivencia.

1.3.6. Conductas ante el conflicto. Marc Howard

Marc Howard (1995), antropólogo estudioso de la relación entre conflicto y cultura, propone el reto de aprender a transformar conflictos comprendiendo que en determinados contextos, su ausencia puede llegar a ser negativa, sobre todo en aquellos marcados por autoritarismos, en donde cualquier acción de oposición es reprimida.

Howard realizó un estudio comparativo sobre la conducta conflictiva de los *yanomanos* de Venezuela y los *mbuti* del Zaire, a partir del cual reflexiona sobre la interpretación y el valor de los conflictos, de acuerdo a las disposiciones culturales y aspectos estructurales de cada sociedad (Howard, 1995: 21).

Los conflictos suelen ser vistos como acciones colectivas, no individuales, intrapersonales ni interpersonales, donde las partes encuentran divergencia en sus intereses y objetivos. Howard (1995: 39-40) plantea que, ante su connotación de acontecimiento, resulta útil concebir el conflicto como un proceso, para facilitar la identificación de respuestas y reacciones que experimentan los actores o las posiciones durante su desarrollo.

En muchos casos, el análisis ha sido marcado por la dimensión superficial y manifiesta de los conflictos, sin tomar en cuenta lo que se contiene latente en su trayectoria. El comportamiento y la conducta son importantes según el enfoque de Galtung, pero también lo son el conjunto de valores que motiva dichas pautas y los prejuicios que a menudo alimentan miradas contrapuestas sobre una misma realidad. En ese sentido, Howard señala:

El conflicto ocurre cuando las partes se hallan en desacuerdo con respecto a la distribución de recursos materiales o simbólicos y actúan movidas por la incompatibilidad de metas o por una profunda divergencia de intereses. En el conflicto son importantes tanto los elementos conductuales como los perceptuales. (Howard, 1995: 38).

A pesar de la oposición y la confrontación percibidas los conflictos no son siempre violentos, aunque sea esta una característica recurrente en el tiempo. No hay sociedad que se escape de alguna forma de violencia o de su uso inminente. Nuestra capacidad humana para el conflicto, según Howard Ross (1995: 39-41), está íntimamente ligada a nuestra tendencia evolutiva para agruparnos social y colectivamente.

Esta mirada refiere a una cultura del conflicto como un conjunto de normas, prácticas e instituciones de cada sociedad, relacionadas con la conflictividad. Sabemos que la cultura define lo que las personas consideran valioso y deseable en cuestiones materiales; su posición social; sus cargos o las capacidades que estas circunstancias les confieren. Es así que nuestra forma de tratar los conflictos, dentro y fuera de las instituciones existentes, reflejan nuestros valores culturales básicos (Ross, 1995: 44-46).

Sobre esta cultura del conflicto, Howard, apoyándose en Avruch y Black, señala lo siguiente:

[...] la cultura del conflicto –esto es, la particular constelación de normas, prácticas e instituciones de una sociedad- influye en aquello por lo que luchan los individuos y los grupos, en las formas culturalmente aprobadas para conseguir las metas en disputa y en los recursos institucionales que configuran el curso y los resultados de los enfrentamientos. [...]. Si bien el conflicto gira en torno a intereses concretos, las interpretaciones de los participantes son igualmente importantes para determinar si el conflicto va a más y si puede ser manejado convenientemente. Para comprender el origen, derrotero y manejo de un conflicto es necesario considerar conjuntamente factores estructurales y psicoculturales. (Howard, 1995: 20).

El conflicto es complejo porque está compuesto de conductas interpretativas y de disposiciones psicoculturales, una suerte de filtro a través del cual comprendemos las acciones ajenas. Estas disposiciones son los hábitos para tratar a los demás, que se aprenden y aceptan a través de la cultura. De modo que, no son las situaciones objetivas, es decir, aquellas que se nos presentan como una realidad dada las causantes del conflicto, sino que son las interpretaciones divergentes de las mismas, las que suelen precipitarlo (Howard, 1995: 31).

El enfoque de Howard defiende dos fuentes importantes de intereses para comprender el comportamiento conflictivo. Primero, en el nivel de fortalecimiento de los vínculos sociales de reciprocidad y confianza, de manera que una sociedad que teje redes fuertes entre sus miembros tendría menos probabilidades de fragmentarse por un conflicto de intereses. En segundo lugar, en las estructuras de una sociedad ya que mientras más simples sean estas a nivel socioeconómico y/o político, menos recursos

tendrá dicha colectividad para defenderse y entrar en disputa, y menos capacidades para actuar en un contexto de conflicto (Howard, 1995: 32).

La acción colectiva y de grupo juega un papel transcendental, en tanto supone identificación y respaldo a las formas aprendidas para actuar e interpretar la vida. En el mismo sentido influye la capacidad y los recursos para asumir los conflictos, como también señala Howard en esta cita:

La identificación con el propio grupo es un proceso cognitivo de adaptación social que hace posible relaciones prosociales tales como la cohesión social, la cooperación y la influencia (Turner, 1968; pág. 67). Los grupos constituyen el mecanismo central que da identidad a las personas; en vez de sostener que éstas «sacrifican» una porción de su identidad cuando forman parte de un grupo, la perspectiva que aquí se adopta sólo ve posible la identidad positiva del individuo dentro del contexto de una segura afiliación al grupo. [...]. La noción del individuo apartado del grupo es un producto del pensamiento occidental y no de la experiencia humana en general. (Howard, 1995: 42).

Nos volvemos a encontrar con la relación conflicto-cooperación que depende de las prácticas y valores comunes a una sociedad en particular, de la cultura como producto compartido y colectivo que suministra repertorios de acción y patrones para aprobar o desaprobar las acciones de otros y otras.

La aproximación teórica de Howard hacia el estudio de los conflictos, nos invita a verlos como conductas culturales que integran diversos patrones y elementos, desde donde es posible explicar por qué las disputas sobre asuntos aparentemente trascendentales derivan en manejos tan distintos según el contexto y la cultura.

1.3.7. La oportunidad de transformar. John Lederach

John Paul Lederach, sociólogo y mediador estadounidense, es otro pionero de la Investigación para la Paz. Sus aportes han sido muy valiosos en el campo de la mediación a raíz de su profundización en el estudio de los conflictos. En sintonía con un sentido positivo y creativo del conflicto, este autor lo asume como una situación inherente a la vida con un gran potencial para el cambio. Citamos su definición:

Así, el conflicto es esencialmente un proceso natural a toda sociedad y un fenómeno necesario para la vida humana, que puede ser un factor positivo en el cambio y en las relaciones, o destructivo, según la manera de regularlo.

Pero como señalé antes, esto supone una paradoja. Una perspectiva creativa del conflicto implica que permitamos que coexistan en nuestra mente percepciones por lo menos distintas, si no contradictorias, y que de esta tensión –la de tener presente y considerar ideas contrarias- surge el crecimiento humano. (Lederach, 2000: 59).

El sociólogo elige el verbo «regular», en su objetivo de transmitir una idea de conflicto dinámica e inacabada, compleja como la vida misma y como especie humana que somos. Esto desemboca en el sistema de valores que nos une y nos diferencia, y en el cual se vuelve prioritario ahondar puesto que influyen de manera importante en nuestras metas y en el cómo las conseguimos.

La realización humana es, entonces, un valor principal en la propuesta del autor estadounidense ya que esta depende de condiciones y valores de libertad y justicia. También es posible impulsarla desde la autodeterminación o capacidad de ser agentes principales; la interdependencia reflejada en la interacción y conexión con otras personas; y en consecuencia la igualdad.

Los valores de libertad y justicia, esenciales para la realización humana, se relacionan también desde la tensión. Lederach (2000: 63-64) señala dos paradojas en la búsqueda de dichos valores. Por un lado, la de apoderamiento-vulnerabilidad en la que el poder es el eje central, pero su desequilibrio genera pérdida de libertad y justicia y exige cuotas de vulnerabilidad en el sentido de la humildad y la apertura a las demás partes del conflicto. La segunda, es concienciación-comprensión, que implica ser conscientes de nuestro rol en nuestros contextos y a la vez comprender a quienes no están en nuestra posición y tienen también un rol importante.

En 1998 Lederach ya señalaba que el conflicto era una sucesión de eventos y que la construcción de la paz era un proceso constituido por varias funciones y papeles, por lo que proponía contextualizar cada conflicto y entender la progresión del mismo. Así, el autor señala:

El conflicto no es nunca un fenómeno estático. Es expresivo, dinámico y dialéctico por naturaleza; está basado en las relaciones. Nace en el mundo de las intenciones y las percepciones humanas. Cambia por la constante interacción humana actual y él mismo modifica continuamente a las personas que le dieron vida, ejerciendo un efecto en el entorno social en el que nace, se desarrolla y quizás muere. (Lederach, 1998: 91-92).

Inspirando por las ideas del mediador y activista cuáquero Adam Curle (1977), Lederach desarrolla la idea de conflicto como progresión, retomando las principales etapas del proceso, válidas para identificar las acciones que ayuden a su resolución. El primer punto se ubica en el conflicto latente, o cuando la gente no es consciente de las desigualdades e injusticias, por lo que se impone un proceso educativo o de *concienciación*. Ya con el conocimiento de nuestro lado se propicia el cambio, aunque éste implique llegar a la *confrontación*, segunda etapa y momento en que se externaliza el conflicto.

En la búsqueda del cambio se requerirán nuevos equilibrios de poder en la relación de los distintos implicados, para legitimar sus voces e intereses. Es en este instante que inicia la tercera etapa que es la *negociación*, que tiene a la mediación y la conciliación como aliadas previas. Finalmente, este proceso transformará a las personas y sus relaciones, aportándoles mayor justicia.

De esta forma Lederach nos invita a visualizar el conflicto desde una perspectiva más integral de los elementos que en él intervienen, no sólo en cuanto a los actores y sus intereses sino también en cuando a los momentos, formas, valores y expectativas.

En su obra *La imaginación moral*, Lederach (2007) ofrece a quienes trabajan en el campo de la construcción de la paz y la transformación de los conflictos, una visión menos teórica y compleja, más intuitiva. De la misma forma, invita a otorgar el mismo peso reflexivo a las iniciativas, como a los gestos o acciones que incluso producto del azar, acaban produciendo grandes cambios. Tanto la serendipia como la creatividad influyen en la transformación de la realidad social, el autor lo ilustra a través de cuatro

relatos que transmiten optimismo hacia la capacidad humana para concertar y conseguir cambios certeros en determinadas sociedades.

La obra y experiencia de Lederach refleja su gran interés por encontrar vías de transformación para los conflictos, tal es así que se convirtió en una importante referencia en este campo al que ha dedicado gran parte de su trayectoria académica, aunque por supuesto nos invita trascender a lo académico para trabajar más allá de este plano y pasar a dimensiones más terrenales y cotidianas con similar relevancia para un proceso realmente transformativo.

De todas las aproximaciones teóricas que han sido citadas y revisadas en este primer capítulo, las mismas que se encuentran y retroalimentan entre sí, es la de Lederach con la que más sintonizo.

La razón es que me proporciona insumos suficientes para integrar y ampliar la mirada de los conflictos como quien mira un horizonte inexplorado y desconocido, por lo mismo, potencialmente provisor de posibilidades y alternativas para gestionarlos mejor o sentirnos mejor en el proceso. Por ello continuaré profundizando sobre este enfoque con la aspiración de impulsar cambios profundos en las realidades donde acontecen los conflictos que interesan a esta investigación.

1.4. Una mirada transformadora

Cuando nos encontramos en medio de un conflicto es inevitable empezar a interpretar miradas, gestos, silencios, palabras, temperamentos, tonos y una larga lista de acontecimientos e intercambios no siempre cómodos o agradables. Pero ¿desde dónde interpretamos? Precisamente, desde aquellos valores y principios que hacen parte del carácter y de la personalidad humana. Pero, considerando que somos parte de un

sistema que generalmente nos fragmenta, dispersa e individualiza, pocas expectativas nos quedan de contar con una mirada del conflicto colectiva, amplia y global.

El enfoque de transformación de conflictos del que Lederach es especialista, propone una integración de elementos cuya diversidad es capaz de proyectarse en un abanico de posibilidades de abordar los problemas. Así lo define el autor:

La transformació de conflictes significa preveure els fluxos i refluxos dels conflictes socials i respondre-hi com oportunitats vivificants per crear processos cap a un canvi constructiu que redueixi la violència, faci créixer la justícia en les interaccions directes i les estructures socials i respongui als problemes reals de les relacions humanes. (Lederach, 2010: 27).

En esta definición, Lederach comparte una suerte de llamado a responder a los conflictos de manera vital, atendiendo tanto la necesidad de reducir la violencia como la de generar oportunidades para construir cambios, tan profundos que resten cada vez más posibilidades a la reproducción de las violencias que queremos reducir.

Tan vital es su llamado que propone imaginar la transformación de los conflictos como una persona que realiza un viaje con la cabeza, el corazón, las manos y los pies, es decir, integrando sus sentidos, no solo sus ideas. (Lederach, 2010).

En la cabeza ubica nuestra concepción del conflicto, la capacidad de *prevenir* y de *responder* de manera positiva y constructiva, teniendo en cuenta el potencial de cambio que contiene en sus *flujos y reflujos*, en los vaivenes tan propios de las relaciones humanas.

El corazón, según Lederach (2010), sería el eje que conecta nuestro ser físico y biológico con la parte emocional y espiritual. El autor utiliza, metafóricamente, la figura del corazón para ubicar las *relaciones humanas* y las *oportunidades vivificantes* de las que habla en su definición ya citada del conflicto. Porque las relaciones tienen aspectos visibles e invisibles a los que hay que acercarse y aprender a ver, para poder trabajar en ellos. Porque las oportunidades surgen cuando las relaciones son puestas a prueba y se

presenta la posibilidad del cambio, conectando necesidades, aspiraciones y crecimiento humano.

Las manos. Aquí nuestro autor ubica el potencial para la transformación, nuestra disposición para *construir* y generar *procesos de cambio*, con dinamismo y creatividad suficientes para cambiar patrones y estructuras sociales que nos oprimen y condicionan, en definitiva, que nos violentan.

Las piernas y los pies. Con ellos tocamos tierra y nos convertimos en una fuente poderosa de acción frente a los problemas y las necesidades reales. Como bien señala Lederach (2010: 33), entre las más importantes está *reducir la violencia* y *aumentar la justicia*, lo que supone mejorar significativamente en la calidad de las relaciones a todo nivel, en la *interacción directa* o cara a cara, y en el *cambio de estructuras* para que respondan a nuestras demandas y nos proporcionen mayor bienestar.

Soy consciente de que la transformación de conflictos es una de tantas aproximaciones teóricas, pero considero que la riqueza de matices que integra esta perspectiva, así como su aplicabilidad a la resolución efectiva de los conflictos en la vida real, la hacen única. Ambas razones me animaron a tomarla como referencia para esta investigación.

1.4.1. Conflicto y cambio

En este apartado profundizaremos más sobre la expectativa de cambio que contiene la promoción del enfoque de transformación de conflictos. Para ello es necesario empezar por las dimensiones en las que nos afectan, es decir, allí donde nos impacta el conflicto.

Lederach (2010) propone trabajar desde cuatro dimensiones humanas en las que impactan los conflictos, como son la personal, relacional, estructural y cultural. A partir

del conflicto, cabe preguntarse qué tipo de cambios se habrán de buscar, proponer o realizar en cada una de dichas dimensiones. Para ello revisaremos cada una.

La dimensión personal concierne a nuestras emociones, percepciones, a nuestra fe y espíritu, a todo lo que sabemos y conocemos. Los conflictos pueden afectar de manera negativa nuestra tranquilidad, autoestima e incluso nuestra salud física y mental. Asimismo, para transformar un conflicto es necesario asegurarnos que específicamente en este nivel, se den los cambios pertinentes para minimizar los efectos nocivos que deja un proceso conflictivo en la dimensión más personal.

La dimensión relacional se refiere al ámbito de la interacción y de los sistemas de comunicación, en donde es necesario identificar los cambios producidos a raíz de una situación conflictiva, al punto de inducir a percepciones negativas o defensivas respecto de los otros. De cara a la transformación, será importante restablecer los lazos comunicativos para permitir expresar sentimientos y sentidos positivos más allá de cualquier interpretación.

Las estructuras son también una dimensión en donde se expresan los impactos del conflicto. Muchas de ellas tienen que ver con las causas y se sostienen en el enfrentamiento, los picos de crisis o la violencia. Tienen que ver con la satisfacción de necesidades y aspiraciones sociales, desde donde la población se organiza y se relaciona. A este nivel, urge aspirar a cambios que transformen dichas estructuras y minimicen las violencias que se expresan en condiciones de vida desfavorables y selectivas, con unos más que con otros.

La dimensión cultural refiere a aquellos patrones que determinan respuestas o manejos más o menos violentos de los conflictos. Para ello se propone reconocer cuáles nos conducen hacia respuestas violentas y cuáles hacia el diálogo, consenso y armonía

para abordar una situación de crisis o de conflicto. Es el segundo grupo el que mejor nos acompañará hacia una transformación del conflicto.

Considero importante poder ahondar en todas las dimensiones en las que afectan los conflictos, algo que no suele hacerse al momento de gestionarlos pero que resulta crucial para empezar a sanar la vida, las relaciones y las colectividades. Más aun cuando estas han sido marcadas por la injusticia que consta en los registros históricos y las cronologías violentas, pero también en las huellas que marcan el cuerpo, los sentimientos, la autoestima y la sensación de bienestar de quienes pasan por una situación crítica. Es un recorrido difícil, complejo, delicado, pero su incorporación en las metodologías para tratar los conflictos es, a mi modo de ver, necesaria.

Puede que reconociéndonos desde nuestra fragilidad y vulnerabilidad, seamos capaces de crear caminos de solución a nuestros problemas, de manera más sincera, auténtica, acorde a lo que muy profundamente esperamos y necesitamos, sin quedarnos sólo en las manifestaciones o el episodio del conflicto, como nos convoca Lederach con esta cita: «La transformació s'ocupa tant de l'episodi com de l'epicentre del conflicte» (Lederach, 2010: 46).

1.4.2. Capacidades en juego

En este capítulo he sintetizado aquellos aportes teóricos que me han enseñado a interpretar la parte visible de los conflictos, pero también a contemplar los elementos latentes y aquellos que son sistemáticamente invisibilizados. Es hora de incorporar ambas dimensiones a nuestra reflexión teórica, así como a nuestras estrategias y formas de actuar en este campo. La mirada transformativa ofrece, en mi opinión, herramientas para analizar, gestionar y construir en pro de la transformación.

Para cerrar este recorrido por las diferentes contribuciones teóricas, me parece importante destacar aquellas capacidades que están en juego en el enfoque de transformación de conflictos, destinadas a identificar aquellos puntos de investigación en los que hay que detenerse en el proceso de generar estrategias para gestionar los conflictos (Lederach, 2010: 49).

En primer lugar, es necesario transcender al episodio del conflicto, es decir, ir más allá de la situación inmediata y *ser capaces de conectar con los patrones, las estructuras y la historia misma que encierra el conflicto*. Solo así tendremos la posibilidad de comprender a hasta qué niveles es necesario profundizar para transformarlo.

En segundo lugar, y conectando inmediatamente lo anterior, es necesario ser capaces de *visualizar un horizonte de futuro*, porque sólo imaginar un futuro nos llamará a preguntarnos ¿qué queremos y esperamos construir? Sobre el futuro el autor estadounidense señala que representa una energía social que forma y crea una orientación hacia los cambios que queremos conseguir (Lederach, 2010: 52).

Como tercer y último punto de investigación tenemos la *capacidad para generar procesos de cambio*, es decir, el campo para la acción que conecta con todas las dimensiones susceptibles de verse afectadas por los conflictos y que requieren atención en tanto se generan los procesos de construcción de relaciones y estructuras.

Para finalizar, considero que a partir del enfoque transformativo de los conflictos es posible afrontar situaciones de crisis y de violencia con mayores elementos para la acción. Cada contexto tiene su particularidad y el peruano no es una excepción, como

veremos en esta investigación. Especialmente en lo que se refiere al uso de la violencia en las dinámicas de conflicto.

El enfoque transformativo no me resulta una receta a seguir ni forzar para el caso peruano que iremos describiendo en los siguientes capítulos, sino una fuente de recursos para trabajar aspectos tan lesionados por la violencia estructural en Perú, como la confianza y la visión constructiva de resolver nuestras diferencias.

1.5. Recapitulación

En este capítulo hemos hecho un breve repaso por los principales aportes teóricos sobre el conflicto, con vistas a mejorar nuestro acercamiento al estudio de caso que abordaré en los capítulos 3, 4 y 5 de esta investigación. Como hemos podido observar, existe desde hace varias décadas la prioridad académica por incorporar una visión positiva y creativa de los conflictos desde su origen, para encaminar en la misma dirección su gestión o transformación.

He intentado reconstruir la conceptualización de los conflictos desde los Estudios para la Paz, poniendo especial énfasis en la necesidad de conocer de dónde viene y cuáles son sus principales direcciones. Por ello, en el primer apartado revisé la trayectoria de esta área de investigación en paralelo a la propia evolución de los conflictos, puesto que sólo buscando la paz se fue posible iniciar la investigación profunda de la violencia y del conflicto, logrando con el tiempo rescatar los matices de oportunidad para la transformación social. Este camino tuvo incertidumbres y correcciones en su haber, permitiéndonos hoy contar con una base teórica más completa acerca de los conflictos.

En este recorrido hemos descrito los grandes dilemas para definir la paz, el conflicto y la violencia, elementos ambos importantes en la intención de teorizar y

conceptualizar en este campo. Asimismo, las fases del proceso de institucionalización de los Estudios para la Paz a partir del giro del concepto de paz asociado a la ausencia de guerra, del reconocimiento de formas de violencia distintas a la guerra y del cuestionamiento a una idea de paz que excluya el desarrollo de capacidades y satisfacción de necesidades humanas. Hablar de paz supone reconocer e incorporar nuestros conflictos.

En el segundo apartado he presentado aquellos aportes teóricos a los que he preferido referirme como miradas del conflicto, desde distintas disciplinas o líneas de investigación, que me han permitido observar un eje común en todas ellas como es la aspiración a una mayor comprensión del conflicto, para su mejor gestión, resolución o transformación.

Fisas habla desde su experiencia en temas de negociación y conflictos armados internacionales, a partir de la cual ha sabido asentar sus conocimientos sobre las distintas fases de un conflicto, sus actores e instancias de gestión involucradas. Galtung es el gran investigador sobre la paz y las violencias, su propuesta de tipología de la violencia y su relación con el desarrollo ha sido de los grandes aportes en la rama de los Estudios para la Paz, sentando las bases para otros enfoques de estudio. De Muñoz destacamos su *paz imperfecta* basada en la necesidad de aprender a convivir con nuestros propios conflictos personales, que se extienden a lo político y social, como parte de un proceso de reconocimiento de la paz en el mundo. De Martínez y París hemos señalado la importancia de una propuesta inclusiva de la paz basada en el reconocimiento de diversas paces.

Vinyamata por su parte ayuda a caracterizar los conflictos en relación con la democracia y la política como los grandes marcos de acción que debieran conducir la valoración del conflicto y mejores los manejos de nuestras sociedades. Howard aporta

una mirada antropológica del conflicto a partir de su experiencia en sociedades de tradición autoritaria y antidemocrática, como medio para la consecución de derechos. Lederach nos permite profundizar a partir de su propuesta de transformación de los conflictos, apelando a una mirada integral para motivar el trabajo por la paz desde el restablecimiento de los vínculos más profundos y poco visibles, de manera que podamos conseguir cambios que dejen de enfrentarnos.

A partir del aporte de Lederach consideré desarrollar un tercer apartado dedicado al proceso de cambio que esperamos generar a partir de la transformación del conflicto. Asimismo, se siguió un recorrido metafórico a partir de nuestro propio cuerpo, en el cual es posible ubicar el potencial de acción y construcción de cambio que requieren los conflictos.

Finalmente, en un cuarto apartado se identificaron las capacidades que resultan claves en la materialización del cambio, siempre desde una perspectiva integradora y cíclica, como el reconocer el presente a partir de la historia, el horizonte de futuro y el proceso de cambio a emprender.

A partir de lo sostenido en este capítulo enfocaré lo el siguiente capítulo de mi investigación, para abordar el contexto latinoamericano cuyos conflictos territoriales están vinculados a la necesidad y exigencia de cambios a favor de derechos fundamentales, del reconocimiento y la justicia al interior de los países de dicha región.

CAPÍTULO II

Latinoamérica: un territorio de conflictos

«Ya no es posible soñar los propios sueños: han sido soñados, pues se ven como propios los sueños de los ‘desarrollados’, aunque para uno (y para ellos) se vuelvan pesadilla».

Gustavo Esteva

2.1. Introducción

El segundo capítulo persigue presentar las claves de la conflictividad social en Latinoamérica, identificando las interdependencias entre lo global y lo local que han condicionado el desarrollo de la región. Para tal fin, pondremos especial énfasis en los aspectos socioeconómicos de dichas interdependencias pues entendemos que han desempeñado y todavía desempeñan un importante papel en la generación de los conflictos intra-estatales y en su resolución.

En el primer apartado compartimos referencias teóricas para analizar el modelo de desarrollo capitalista, economicista, neoliberal que se ha implementado en América Latina, considerada como zona «menos adelantada» o parte de la antojadiza creación del «Tercer mundo», precisamente desde una visión occidental, masculina y patriarcal de centro y periferia, de desarrollo y subdesarrollo.

Partiendo de dichas lecturas, continuaremos con el repaso de los efectos de dicha implementación, prestando especial atención a sus consecuencias no intencionadas, como por ejemplo las generadas por los programas de lucha contra la pobreza. Muchas de las iniciativas emprendidas en este sentido, no sólo no han conseguido sus objetivos

(p. ej., erradicar la pobreza), sino que han servido para legitimar la reproducción de estructuras sociales sumamente injustas, como las que han hecho de América Latina el continente con las desigualdades internas más grandes del planeta.

Ese mismo trasfondo de desigualdades será el germen de los movimientos de resistencia y lucha global a los que destinaremos la parte central del capítulo. En Latinoamérica, como argumentaré más adelante, los costos negativos del desarrollo se hacen notar a través de índices muy altos de conflictividad social y de la reproducción de distintas violencias que afectan a los sectores más desfavorecidos.

La apertura de mercados hacia capitales extranjeros, la promoción de inversiones y el impulso avasallador del extractivismo como factor de crecimiento económico dejará sentir sus estragos, algo a lo que nos referimos como las mentiras del crecimiento económico. Revisaremos el discurso y las cuestiones vinculadas a los conflictos sociales por los recursos naturales, el territorio y el ambiente.

De igual manera dedicaremos el penúltimo apartado a analizar la conversión de Latinoamérica en un destino prioritario de las industrias extractivas. Identificaremos quiénes son los que nos compran materias primas y cómo funciona nuestra dinámica primario exportadora basada en el extractivismo minero y petrolero, especialmente. Asimismo, revisaremos el concepto de extractivismo, su origen y las intenciones tras los discursos que lo venden como la principal forma de dinamizar las economías.

Finalmente, analizaremos la relación entre el extractivismo y la criminalización de la protesta, identificando los principales nexos y modalidades de hostigamiento y violencia contra quienes ejercen su derecho a defender derechos, en este caso, derechos colectivos y ambientales. Nos referiremos a casos concretos que permitan visualizar

dichos factores de hostigamiento, así como el impacto diferenciado de esta situación en las mujeres defensoras latinoamericanas.

2.2. Un modelo de desarrollo para América Latina

Latinoamérica ha sido un territorio donde el concepto de desarrollo se expandió con la excusa de intervenir en sociedades con características socioculturales distintas, sociedades a las que con antojadiza ligereza se les denominó «subdesarrolladas».

Escobar (2007: 42) señala que «la profesionalización e institucionalización del desarrollo fue una respuesta a la problematización de la pobreza [...]», es decir, se legitimó la invasión en todos los sentidos por parte de quienes tenían potestad de descubrir y traducir el *Tercer Mundo*.

Tanto la academia como la ciencia sirvieron a la extensión de esta visión. En Latinoamérica las ciencias sociales bebieron de los Estudios Culturales para la formación de sus profesionales, proceso en el cual se institucionalizaron nuevas subjetividades e identidades colectivas, así como la producción de géneros culturales que se materializó en la acumulación de diferencias y designaciones históricas como Tercer Mundo.

Dichos estudios tuvieron una larga tradición a partir de la importación de conceptos y técnicas de los centros universitarios estadounidenses, que asignaban lugares sociales y producían luchas culturales, diferencias de género y debates teóricos y prácticos. Por aquel entonces, Occidente necesitaba construir su modernidad y acumular material exótico para la industria cultural globalizada (Delfino, 1999: 67-68).

Dentro de los Estudios Postcoloniales, el filósofo y semiólogo argentino Walter Dignolo ha escrito sobre las trayectorias de los pueblos colonizados por Europa como

alternativa a esa única voz silenciadora del opresor, que es posible si realizamos una lectura desde la posición de esas *otras* u *otros* marginados –las voces silenciadas, diríamos desde los Estudios para la Paz- mujeres, indígenas, colonizados, afroamericanos; es decir, una lectura desde los mismos sujetos subalternos.

Mignolo (2003: 157-168) plantea la existencia de un sistema-mundo moderno/colonial, es decir, la modernidad no existe sin colonialidad. Modernidad y colonialidad serían dos caras de la misma moneda. Así, por un lado, encontramos la modernidad y sus valores como civilización, progreso, modernización, desarrollo y cristianización; por el otro, colonialidad como violencia, barbarie, atraso y subdesarrollo.

Esta propuesta permite iniciar el camino de la descolonización del conocimiento, a través de lo que Mignolo entiende como pensamiento fronterizo, o una nueva propuesta epistemológica para pensar desde la subalternidad –pensamiento opuesto al del amo-.

Sin embargo, es necesario distinguir entre postmoderno y postcolonial. Lo postcolonial agruparía las distintas críticas al discurso o imaginarios del sistema-mundo moderno/colonial y a la colonialidad del poder. En el caso de las Américas, la vertiente postcolonial sería la que se denomina postoccidental, entendida como la propuesta de un discurso crítico que emite enunciados desde la subalternidad que representa América, en contraposición a los de Europa y Estados Unidos.

Con esto se generan epistemologías capaces de transformar la historia sobre el proceso de colonización establecido por el Primer Mundo, y de producir una crítica al occidentalismo y eurocentrismo. Esta propuesta permite, principalmente, reubicar la

relación entre localización geohistórica y producción del conocimiento, cuestionando la hegemonía y colaborando a la orientación hacia la autonomía y la liberación, en los diferentes aspectos de la vida de las ex colonias.

Desde otra mirada, la filósofa y científica india Vandana Shiva cree en la diversidad como riqueza y no como obstáculo, como fuente de aprendizaje y convivencia pacífica y no como dificultad o factor negativo para el desarrollo. La autora ha analizado los fallidos y desastrosos modelos de *desarrollo*, especialmente los que fueron impuestos en los países más empobrecidos del mundo. Esto incluye a los de la región latinoamericana.

Es interesante identificar en los procesos de homogenización y uniformidad, nichos de violencia en distintos niveles empezando por el control, la fuerza y la centralización. Desde este punto de vista, la globalización no resulta un proceso de intercambio cultural, sino la imposición de una cultura sobre otras, tal y como lo sostiene Vandana Shiva (2001: 127).

Según la filósofa india fueron tres oleadas globalizadoras. En la primera, las potencias europeas ejecutaron la colonización de América, África, Asia y Oceanía, hace más de quinientos años. En esta primera oleada la naturaleza habría dejado de ser percibida como un ser vivo para ser transformada en materia prima y centro de explotación, convirtiendo así los recursos naturales a recursos de insumo para la producción de bienes y comercio. Esto produjo la negación de derechos culturales de otras sociedades, lo que resultó conveniente para la sociedad europea en su afán de beneficiarse de dichos recursos sin consideraciones y mucho menos consentimiento.

La segunda oleada globalizadora llegó hace aproximadamente setenta años con la imposición del discurso del desarrollo a manera de receta innovadora, promotor de homogeneidad y uniformidad. El desarrollo surgió como un proceso de evolución que lejos de autogenerarse, es decir, de venir desde el interior de los grupos sociales, venía dado por supuesto y por ello conducido desde el exterior. Shiva (2001) ejemplifica esto con la Revolución Verde, que no solo produjo violencia contra la naturaleza, desterrando formas de agricultura local en armonía con la naturaleza, sino que paradójicamente terminó sembrando la violencia en la propia sociedad civil en la que experimentaron. Esta separación se convirtió en ideología y la diversidad en su justificante.

Y la tercera y más reciente oleada globalizadora fue la del *libre comercio*. La autora señala que terminada la Guerra Fría se inician la era de las guerras comerciales, conducidas principalmente por las grandes potencias y organizaciones que, de forma antidemocrática, decidían el desarrollo de los países del *Tercer Mundo*. Las empresas transnacionales son un ejemplo de esto, su poder puede llegar a condicionar a los gobiernos nacionales que debieran regularlas.

Es decir, de libre comercio poco pues se protegen intereses que van en contra de los derechos y las libertades de la propia ciudadanía. De modo que Shiva (2001: 145-151) enfatiza en la necesidad de hacer las paces con nuestra propia y cotidiana diversidad, para conseguir una sostenibilidad respetuosa de los derechos humanos.

Una vez afianzada la visión economicista y hegemónica del desarrollo, transcurrieron acontecimientos sociales, políticos y económicos que pusieron en evidencia sus efectos negativos respecto de la satisfacción de necesidades y el bienestar de los pueblos. El plan de ayuda para las sociedades con supuesto caos, ignorancia y

pobreza no sólo fracasó, sino que, a la larga, ha sido un potente generador de conflictos e inestabilidad social, económica y política.

A la luz del evidente perjuicio en la región latinoamericana, a consecuencia de las recetas neoliberales, el sociólogo y politólogo brasileiro Emir Sader sostiene que América Latina vive una «profunda y extensa resaca de los remedios neoliberales, con efectos colaterales generalizados.» (Sader, 2006: 60).

En efecto, según Sader algunos de esos efectos son: el debilitamiento de los Estados en el plano externo y en su capacidad de acción en el plano interno; el que las sociedades están muy divididas, cada vez más desiguales y con sectores amplios de exclusión y de acceso limitado a derechos básicos; y la pérdida de potencial en las economías que por pasaron a depender de la exportación de materias primas cuyos efectos financieros siguen siendo imposibles de contrarrestar.

En este sentido, el contexto latinoamericano de las últimas décadas se ha visto interpelado en su capacidad para generar ciclos de creatividad y originalidad como ya hizo en épocas anteriores (Sader, 2006). Los países de esta región adolecen de una crisis estructural que no tiene que ver sólo con los efectos de tinte económico por las políticas neoliberales aplicadas, sino también con los de tinte político, social y cultural que evidencian un empobrecimiento vergonzoso y extremo en sectores históricamente marginados de dichos procesos de desarrollo.

Como ya se ha mencionado, esta crisis afectó incluso la institucionalidad como base del fomento de la ciudadanía, la democracia y el ejercicio de la política consecuente con el bien común como su fin primordial. Emir Sader (2006: 78) lo explica así:

Los países andinos, en particular Ecuador, Bolivia y Perú, representaron, a lo largo de los últimos años, los mejores ejemplos de crisis estructural en países para los cuales el mercado internacional, reorganizado según los moldes de las políticas neoliberales, no deja lugar, relegándolos a la situación de sus pares centroamericanos, con economías primario - exportadoras totalmente dependientes del mercado de EEUU. La particularidad de estos países es la presencia de un movimiento de masas de origen rural cuyo eje es el movimiento indígena.

La ineficacia de las políticas neoliberales puestas en práctica a lo largo de las dos últimas décadas profundizó la crisis social existente, sin haber conseguido retomar el desarrollo ni conquistar la estabilidad política, y generando además una serie de crisis institucionales que marcan la historia política reciente de estos países como reflejo de una profunda crisis hegemónica.

A partir de este análisis la tendencia es clara, tanto el Estado como la sociedad en general son prisioneros del mercado y de las políticas neoliberales, siendo cómplices de la desintegración y violencia social que éstas generaron. La democracia también se supeditó a la dinámica de los mercados hasta vaciarse. La ausencia de deliberación pública en la aplicación de las políticas neoliberales desalentó la participación ciudadana, fragmentó las redes de reciprocidad y solidaridad y generó la «videopolítica», o lo que Borón y Lechini (2006) referían como la política de discursos vacíos y estilos publicitarios deliberados.

Este contexto también es objeto de análisis del politólogo argentino Atilio Borón y la socióloga argentina Gladys Lechini, quienes afirman que las contrarreformas neoliberales pretenden que las fuerzas del mercado motiven conductas supuestamente más racionales e innovadoras en los agentes económicos y políticos (Borón y Lechini, 2006: 23).

Con estos antecedentes, los países latinoamericanos se encuentran lejos de la integración de sus diversidades y del ejercicio democrático en todos sus estamentos políticos. El lastre del neoliberalismo ha profundizado grandes y estructurales brechas de desigualdad, vinculadas con nuestra historia de dominio y desencuentro a raíz de la colonización. Esto se expresa no sólo en la capacidad de los gobiernos para resolver los grandes problemas de sus países sino también en una ciudadanía desmotivada por la

vigilancia y la participación en la transformación de sus sociedades. Atilio Borón (2006: 169) señala que:

En suma: difícilmente podría sostenerse que un “paraíso neoliberal” de las características que conocemos en nuestra región sea demasiado propenso al desarrollo de una sociedad integrada y sin exclusiones, o al sostenimiento de la democracia política y la participación ciudadana en la vida pública.

De modo que, considerando las referencias previas, el desarrollo para los países de este lado del mundo se convirtió en una suerte de carrera desesperada por ser como aquellos que desde fuera influían, intervenían y supervisaban la escalada hacia el supuesto progreso. Dicho modelo de desarrollo se valió de las diferencias culturales y degradó el potencial humano social y político, universalizando la historia, la religión y la lógica de Estado, entre otros rasgos de la cultura occidental.

En el otro extremo claman reconocimiento los desarrollos alternativos, la satisfacción real de las necesidades humanas, el beneficio de quienes menos tienen y más lo requieren y la eliminación de la estructura centro-periferia, tal y como lo señalara Johan Galtung (2003: 177-187) en sus tesis críticas al desarrollo.

Cuando hablamos y, peor aún, cuando presumimos de un crecimiento económico estable o en ascenso, pareciera que automáticamente nos referimos a sociedades estables, igualitarias y satisfechas socialmente. Se promociona como solución, pero en el fondo maquilla severas fisuras de vulnerabilidad y exclusión social, incluso más profundas si se trata de mujeres, niñas y niños, población indígena, personas con diversidad funcional, afrodescendientes, entre otros colectivos con largo historial de marginación.

Este sistema de crecimiento no reconoce la diversidad y, además, actúa de la mano de la violencia estructural y cultural para invisibilizarla. Para atraer inversión extranjera se incorpora un discurso de *interculturalidad* que no repara en los rostros ni

en las voces, ni siquiera en el aporte de las culturas más originarias, sino que, por el contrario, se les sigue denigrando a través de políticas públicas homogeneizadoras y expoliadoras.

El médico y comunicador colombiano Manuel Rozental (2010) señala que el sistema se apropia de nuestras reivindicaciones para adaptarlas a su discurso y hacernos creer que para ellos son un fin, cuando en realidad siguen siendo un medio.

Lamentablemente la desigualdad y la injusticia social afectan primero a las personas más vulnerables y empobrecidas de este sistema, que lo seguirán siendo mientras los beneficios sean sólo para sectores de élite nacional y mundial, a costa del atropello de derechos y recursos humanos, naturales y sociales.

¿Por qué los países más ricos en biodiversidad tienen índices tan altos de pobreza, malnutrición, contaminación? ¿A dónde van a parar los beneficios que generan esos recursos? ¿Por qué su población no puede disfrutar plenamente de ellos si incluso son parte de su entorno y sus ciclos vitales desde tiempos ancestrales?

Las demandas por redistribuir la tierra, a raíz de las desigualdades raciales históricas o las crecientes necesidades de la población, han sido subestimadas a causa del racismo que persiste en una inconclusa agenda de reformas. Los movimientos sociales agrarios, pequeños y con poca estructura, han quedado relegados por el mayor activismo de grupos de clase media que defienden métodos basados en el mercado.

Borón y Lechini (2006: 30) sostienen que, al no enfrentar apropiadamente el problema de una distribución desigual de la tierra, se ha alimentado la agitación en pos de reformas radicales. Resolver la cuestión agraria constituye, por tanto, un ingrediente crucial para la reconciliación nacional y el desarrollo, y un elemento esencial para la

resolución de la cuestión nacional y de los procesos de democratización en América Latina.

Desde la Investigación para la Paz se presenta el reto de profundizar en este tipo de violencias, las que no se perciben y se han hecho parte de la cultura con sus manifestaciones más directas e indirectas. El enriquecimiento de pocas personas a costa del empobrecimiento de muchas conforma una estructura violenta que penetra, margina, fragmenta y «[...] no sólo deja huellas en el cuerpo humano, sino también en la mente y el espíritu» como bien sostiene Johan Galtung (2003: 264), un pionero de Investigación para la Paz.

No son pocos los grupos sociales y colectividades que viven al margen de las decisiones políticas y económicas de sus gobiernos, en un modelo que ha convenido relacionarse con dichos sectores de población desde el asistencialismo y el paternalismo que les niega la voz en las decisiones que les afectan y les convierte en incapaces de adaptar su vida a la modernización y progreso masificados.

El sociólogo y filósofo polaco Zigmunt Bauman (2005: 155-201), en esta línea, sostiene que el despliegue de modernidad ha producido *sobrantes humanos*, a través de la búsqueda incesante de un orden social que a menudo segrega a quienes no encajan en sus categorías. Son los sectores de población cuyos modelos de vida se ven amenazados por las innovaciones técnicas que empujan el progreso económico, aquellos que no tienen cabida en sociedad salvo que se ajusten a los estándares de productividades demandados por los mercados.

Los sistemas políticos llamados democráticos han legitimado la reproducción del modelo euro céntrico de crecimiento, cuyos efectos son visibles en nuestras sociedades

latinoamericanas. Tal es así que aún hoy, en países con población en situación de exclusión económica y vulnerabilidad social, incorporarse al mundo moderno supone la posesión de artefactos de última tecnología y el acceso a servicios de electricidad, agua, vías de comunicación y educación formal.

Esto explica que, quienes se consideran abanderados del acceso a la tecnología, la atracción de capitales externos y las políticas de asistencia para resolver (mantener) la pobreza suele obtener más votos o mayores niveles de popularidad. (Ansi3n, 2003: 7-8).

Siguiendo con el análisis del contexto latinoamericano en este apartado, consideramos el aporte del soci3logo portugu3s Sousa Santos (2010), quien se1ala que son cuatro las dimensiones que caracterizan el actual contexto social, pol3tico y cultural del continente latinoamericano.

La primera la conforman las *luchas ofensivas y defensivas*. A decir del autor las luchas ofensivas son avanzadas porque han sido ejecutadas por los movimientos ind3genas, por ejemplo, quienes lideraron la transformaci3n constitucional en Bolivia y Ecuador, entre otras revoluciones relacionadas con el control de los recursos naturales y la construcci3n de Estados plurinacionales. Las luchas defensivas son m1s bien las retrasadas pues, a diferencia de las anteriores, consideran el Estado como un problema y se manifiestan en contra de la criminalizaci3n de la protesta social o el control de los medios de comunicaci3n (Sousa Santos, 2010: 55).

Las luchas ofensivas buscan tomar el poder del Estado para realizar cambios en las pol3ticas p3blicas que permitan una mejor redistribuci3n de la riqueza. Las luchas defensivas, por el contrario, buscan resistir a la represi3n del Estado y de los poderes f1cticos. La combinaci3n de ambas transforma el marco democr1tico de nuestra regi3n,

más aún en contextos en los que dominan las luchas ofensivas y se vuelve inevitable recurrir a las defensivas, sobre todo cuando el poder del Estado no ha sido conquistado totalmente o cuando existen fuerzas o violencias que dicho Estado no puede controlar.

La segunda dimensión para Boaventura de Sousa Santos (2010) es la *acumulación ampliada y la acumulación primitiva*. La primera es la que resulta de la reproducción ampliada del capital y opera por mecanismos económicos; la segunda consiste en la apropiación de recursos y fuerza de trabajo para sostener a la primera.

Ambas definen la relación entre nación e imperialismo, es decir, es evidente con qué fuerza este ha intentado controlar tierras, agua, entre otros vitales recursos, a través de la guerra o la vía diplomática. Se cita como ejemplo al Banco Mundial que, al tiempo que felicita nuevas políticas sociales sigue presionando la privatización de dichos recursos y la eliminación de formas locales de sostén para sus propias economías.

Por tercera dimensión se refiere a lo *hegemónico y lo contrahegemónico*. Sousa Santos (2010) sostiene que el uso contrahegemónico es una suerte de apropiación creativa de dichos instrumentos, por parte de las clases populares, para atravesar el marco político económico del Estado liberal y de la economía capitalista. Todo esto se manifiesta y se potencia con la movilización social y las diversas luchas reivindicativas existentes.

En esa línea, durante las últimas décadas se ha podido observar en el contexto latinoamericano, el uso contrahegemónico de instrumentos políticos hegemónicos, como la democracia representativa o los derechos humanos, diseñados para garantizar la reproducción ampliada antes comentada de las sociedades capitalistas.

La cuarta y última dimensión se encuentra en el *debate civilizatorio*, siempre abierto como componente básico desde la conquista, aunque suprimido a través de los genocidios, evangelización, asimilacionismos, entre otras formas poco pacíficas. Así, recalca el autor:

No se trata de diferencias culturales siempre presentes en el seno de cualquier universo civilizatorio, sino de diferencias culturales entre universos civilizatorios distintos. A título de ejemplo, algunas de las dualidades: ¿recursos naturales o Pachamama?, ¿desarrollo o Sumak Kawsay?, ¿tierra para reforma agraria o territorio como requisito de dignidad, respeto e identidad?, ¿Estado-nación o Estado plurinacional?, ¿sociedad civil o comunidad?, ¿ciudadanía o derechos colectivos?, ¿descentralización/desconcentración o autogobierno indígena originario campesino? (Sousa Santos, 2010: 60).

La vigencia de este debate debería permitir una mayor conciencia y un necesario entendimiento de la relación entre el colonialismo y el capitalismo, como sistemas de dominación distintos e inseparables a la vez. Es la descolonización lo que resume y condensa el debate civilizatorio, y son las luchas de los movimientos por la identidad cultural, especialmente de indígenas y afrodescendientes, las que han evidenciado sus reales condiciones geopolíticas y económicas.

Las dimensiones que aporta Boaventura de Sousa Santos permiten una revisión del contexto latinoamericano que se enfoque en la transición democrática y la refundación del Estado como soluciones políticas. El autor las analiza y fundamenta en su obra, e ilustra los límites de la propuesta eurocéntrica tradicional y las posibilidades que encierra la epistemología del Sur (Sousa Santos, 2010).

El antropólogo peruano Aníbal Quijano (2004) analiza el contexto latinoamericano desde procesos específicos como la continuada y creciente polarización social de la población; la reprivatización social del Estado; la recolonización del control de los recursos de producción y del capital; la expansión de resistencias populares y la deslegitimación del neoliberalismo; la acentuación de la inestabilidad política; un

proceso de constitución de nuevos sujetos sociales; la creciente ocupación militar del territorio latinoamericano por las fuerzas armadas de Estados Unidos; y un horizonte de conflictos de poder (Quijano, 2004: 17-23).

Estos procesos han reconfigurado las relaciones sociales básicas, los intereses sociales, sus agentes y sus instituciones, material y subjetivamente. A esto Quijano (2004: 24) lo llama una *contrarrevolución*. El Estado ha sido el agente central de dicha reconfiguración y de la neo-liberalización de la economía latinoamericana. Pero ésta, como denuncia Quijano, no hubiera sido posible sin el empeño de las élites políticas y económicas que consiguieron el impulso y fuerza necesarios para llevarla a cabo.

El gran dilema es en qué desembocará esta fuerza si el factor central del control de las transacciones internacionales es la distribución equitativa de los recursos, el acceso a ingresos y la provisión de servicios públicos. En la mayoría de países los gobiernos han tomado decisiones que muchas veces van en contra de los intereses de las mayorías, como producto de lo que Quijano (2004: 27) llama un proceso de *reprivatización del Estado*. Asimismo, se han constituido nuevas formas de autoridad sobre todo a nivel comunal, se han diversificado sus formas de conflictos y de intercambio con el Estado. Sin embargo, la manifestación democrática de esta *heterogeneidad histórico-estructural* presente en América Latina está limitada aún en sociedades democráticas, lo que impulsa una polarización social difícil de controlar.

Entonces, la cuestión no son sólo las pugnas entre Estados y poderes, sino los conflictos entre los patrones de poder que se expresan en dichos Estados.

Nadie, en ningún espacio dentro de este patrón de poder, podría estar fuera o libre de los conflictos, de la exacerbación de la crisis y de sus violencias. Nadie, por lo tanto, debiera siquiera imaginar que puede ser neutral entre las crecientes perversiones de los dominadores/explotadores/represores y las luchas de resistencia de sus víctimas. Y en la medida en que la crisis de la colonialidad del poder ha estimulado estudios y

debates sobre estos cambios, también otros horizontes históricos hacia los cuales encaminar nuestras luchas están levantándose. (Quijano, 2006: 15).

Son múltiples las violencias que subyacen en la raíz de los grandes problemas de Latinoamérica. Por lo tanto, el cambio debe seguir impulsándose a través de nuevas formas de organización, de democracia participativa e inclusiva, de relacionamiento con nuestra propia especie por procesos más igualitarios y equitativos de diálogo, consenso y participación.

2.3. Las mentiras del crecimiento económico

Cuando la crisis asomaba en Occidente, Latinoamérica se convertía en la región del mundo con más economías en crecimiento. Esto sucedió a base de ser la principal proveedora de materias primas en el mercado global. La liberalización de los mercados nacionales dio paso a grandes capitales en la región, principalmente provenientes del sector extractivo, interesados en la explotación de recursos naturales en nuestros territorios.

El auge de los precios de los metales y minerales marcó una etapa de alta producción y rentabilidad en la actividad minera, por ejemplo. El impulso de las industrias extractivas a la buena marcha de las finanzas nacionales puso al alcance de los sucesivos gobiernos la oportunidad de consolidar el crecimiento económico en el Perú. El reparto equitativo de la riqueza generada durante las últimas dos décadas era una tarea pendiente en la historia peruana. Buena parte de la población pensó que dicho crecimiento venía para quedarse y tenía esperanza en presenciar esa extensión de beneficios y servicios básicos al conjunto de la población. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

El agotamiento del modelo neoliberal trajo consigo descontento y cuestionamiento por parte de la sociedad civil, como parte de las organizaciones sociales de base y los movimientos sociales. Más aún en el tema del territorio y el ambiente, como desarrollaremos más adelante.

Esto generó las condiciones para que, hacia el año 2008, la región se situase políticamente un poco más hacia la izquierda. Surgieron con mucha fuerza experiencias políticas progresistas en más de la mitad de países de la región, concretamente en Venezuela, Uruguay, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia y Argentina (Stokes, 2009).

Perú no fue un país ajeno a esta tendencia. En 2011 fue elegido Ollanta Humala, un militar que, durante su campaña electoral, con discurso de izquierdas, congregó a las principales voces disidentes en este contexto. Sin embargo, hoy es considerado un traidor por buena parte de los colectivos y movimientos sociales que le llevaron al poder, quienes consideran que faltó a su palabra. Especialmente en lo referido a la defensa del mundo rural y comunitario, especialmente en los aspectos vinculados al territorio, al ambiente, a la consigna de «agua sí, oro no» con la que avivó la esperanza de sus seguidores en los mítines previos a ocupar el sillón presidencial.

Pero, a pesar de los giros políticos y sobre todo del crecimiento, Latinoamérica seguía doliendo por sus altos niveles de pobreza y desigualdad social. El descontento popular crecía y se hacía sentir a través de acciones organizadas de lucha y resistencia social, en abierta oposición a las formas en que se conducía el Estado, principal ente regulador y garante de derechos individuales y colectivos.

El rol integrador del Estado peruano en un proyecto nacional inclusivo y articulador de un modelo de desarrollo consecuente con las necesidades de la población, simplemente fracasó, por lo tanto, fue cuestionado y confrontado.

En países como Ecuador y Bolivia, donde los derechos colectivos y de la naturaleza fueron constitucionalmente reconocidos, resultaron absolutamente contradictorias las modificaciones legislativas para regular la actividad minera y los recursos hídricos en el caso de Ecuador, o hasta la propia representatividad plurinacional en el caso de Bolivia.

En Argentina se dio abierta aprobación por parte del gobierno a un cuestionado proyecto minero en plena zona de glaciares. En Brasil la ministra del ambiente del gobierno de Lula tuvo que dimitir por los fuertes cuestionamientos al manejo de las inversiones en la Amazonía y la flexibilización normativa en materia de medioambiente (Echave, 2012: 64).

La misma tendencia caracteriza a Colombia y Perú, en cuyos territorios el ascenso de los conflictos socioambientales, producto de forzar una combinación entre inversión extranjera directa. Al igual que en otros países de la región, la resistencia de poblaciones indígenas y campesinas frente al acaparamiento de tierras por parte de las grandes empresas, es una constante que marca la agenda política de los movimientos sociales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL sostiene en su *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2009-2010* que la región consolidó su recuperación en el 2010 y destaca que, aunque el ascenso fue generalizado,

las mayores tasas de crecimiento se encuentran en América del Sur, principalmente en Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Perú. (CEPAL, 2010: 15).

Sin embargo, cinco años después, en el *Estudio Económico de América Latina y El Caribe 2015: desafíos para impulsar el ciclo de inversión con miras a reactivar el crecimiento*, la CEPAL sostiene que el crecimiento ha ido en disminución. Aunque su evolución ha sido heterogénea a nivel de países, el fenómeno de desaceleración económica, según el citado informe, se generalizó en la región.

Factores externos como la crisis financiera que golpeó en primer término a los países «desarrollados», el consiguiente estancamiento de las tasas de comercio mundial y la decreciente demanda externa, se suman a la caída de precios de los metales, así como de productos básicos como los agrícolas (CEPAL, 2015: 15).

El modelo primario exportador se instaló en las economías latinoamericanas y se profundizó el discurso que identifica la minería con el motor del desarrollo y del progreso para los pueblos. Las raíces históricas de este discurso se remontan a los tiempos de la colonización europea. Desde pues de todo, los exploradores llegaron a nuestros territorios obsesionados con el oro y la plata que aquí se producía, centrando la actividad económica en torno a la explotación de estos minerales, dejando de lado la agricultura y la ganadería. Todo ello facilitó y afianzó la configuración de circuitos económicos y financieros europeos y globales en torno a la producción mineral (Gudynas, 2015).

Sobre la coyuntura latinoamericana, sus intereses y proyectos han escrito Oliver y Savoia, sociólogo y politóloga respectivamente. En relación a las tendencias de la recuperación económica de la región, señalan lo siguiente en la publicación n° 29 del

Observatorio Social de América Latina (OSAL) dedicada a los conflictos sociopolíticos en América Latina:

Aun cuando la CEPAL se muestra optimista con relación a los datos sobre el crecimiento en la región, expresa sus dudas de que sea algo sostenido en tanto reactivación del crecimiento. La misma CEPAL expone las contradicciones del crecimiento, la dependencia de las inversiones externas y la debilidad del ahorro interno para enfrentarlas (Oliver y Savoia, 2011: 17).

El gran cuestionamiento a estas tendencias de ascenso económico es, precisamente, la incapacidad de los gobiernos para canalizar y atender las demandas de las poblaciones menos favorecidas por el tan mentado crecimiento. Los conflictos sociales en la región latinoamericana se generan a partir de la resistencia a un modelo económico, respaldado por sistemas políticos de institucionalidad democrática débil y tolerante con la inequidad y la injusticia social.

El rechazo y los cuestionamientos se han ido intensificando, los movimientos sociales exigen el respeto de sus particularidades, mayor participación en los proyectos políticos, económicos y sociales que les afectan y con ello, mejoras visibles en su calidad de vida. De otro lado, urgen profundas reformas en la institucionalidad y la clase política como piezas fundamentales en el desarrollo de políticas públicas más justas e inclusivas.

¿Por qué ante los óptimos niveles de recuperación económica aún existen descontento y rechazo en diversos sectores de la población? Es evidente que los beneficios económicos no se han distribuido equitativamente y, en la mayoría de casos, no sólo no llegaron, sino que acentuaron el empobrecimiento y la marginalidad.

Estas grandes contradicciones han dado lugar a la confluencia de movimientos y acciones colectivas, al surgimiento de nuevos liderazgos que apuntan a la

transformación democrática y reivindican la participación no sólo como un derecho, sino también como un deber ciudadano. Así lo resumen Oliver y Savoia (2011: 23):

La disputa por la democracia tuvo innovaciones respecto de las décadas anteriores: nuevos proyectos de democracia participativa popular permitieron superar la democracia de fachada y canalizar demandas de las masas populares. Está ausente, sin embargo, una reforma intelectual y moral tanto en las nuevas clases políticas como en los grandes sectores populares, que cree un sedimento de nuevas concepciones, visiones, valores, políticas y objetivos sociales, con los cuales se sostengan los ambiciosos proyectos de la nueva sociedad: democracia real, estados plurinacionales, nuevas formas del buen vivir, inclusión de nuevas fuerzas sociales y culturales, etcétera.

A partir de dichos procesos la política resulta casi un perjuicio por sus efectos similares a los de la guerra, y no una forma de construir para el bien común, la gestión de los conflictos desde la paz, la justicia y el consenso ante la diversidad de intereses.

Los regímenes dictatoriales o autoritarios utilizaron sistemas de encubrimiento y corrupción para vejar principios de bien común, manipular medios de comunicación, normas y el propio poder que se les confirió, de manera que tenían el control e impedían la transparencia en el ejercicio de sus funciones; todo a espaldas de las grandes mayorías a las que son indiferentes y pretenden reducir.

En nombre de la apertura de nuevos mercados, de los gobiernos democráticos, de la independencia y la propia seguridad se destruyen vidas, dignidades y se perjudican economías (Vinyamata, 2001). Por lo tanto, se requieren formas más inteligentes y eficaces que la guerra, para conseguir los propósitos con menor coste humano, moral y económico.

No por llamarse democrático se es democrático. Muchos regímenes así calificados han distorsionado la idea del *gobierno del pueblo y para el pueblo*, desde la cual se concibe la democracia. El control directo o indirecto de los medios de comunicación tiene el objetivo de ocultar errores y hasta delitos cometidos desde el

propio Estado, algo que la oposición política investiga y denuncia, a riesgo de estar comprometida en faltas o errores similares.

No obstante, los gobiernos han encontrado la manera de justificar la represión y la criminalización de quienes se les resisten y oponen, como acciones para el restablecimiento del orden por las que se llegan a vulnerar derechos fundamentales y corromper instituciones. Aunque analizaremos mejor las estrategias de criminalización en el siguiente capítulo. Mientras tanto, se incluye una cita de Eduard Vinyamata (2001: 12) que resume los matices de la política en coyunturas de resistencia y conflicto:

No resulta difícil constatar cómo en muchos casos la política no es un lugar de concordia sino de discordia, que el ejército no evita las guerras sino que las hace; que la Justicia acaba justificando e imponiendo la injusticia social, limitando la libertad o sirviendo como herramienta de venganza; que la religión también ha servido y sirve para ofuscar y angustiar los espíritus, que la policía se torna represora e incluso encubridora del delito o de la corrupción. En realidad conviven ambos sentidos, los dos extremos, y los innumerables matices entre los mismos.

Desde esta mirada, la política cobra verdadero sentido solo si sirve para resolver, gestionar o prevenir conflictos en beneficio de toda la sociedad, cuando media o concilia divergencias y administra conjuntamente el bien común.

Pero en el escenario latinoamericano las experiencias son más bien de debilitamiento democrático, lo cual ha sido caldo de cultivo y fuente de conflictos. A esto hay que sumarle el deterioro ético y moral de autoridades e instituciones políticas y democráticas, lo que disminuye los niveles de credibilidad y aumenta los de desconfianza, llegando a legitimar incluso diversos tipos de violencias. Esto es algo que abordaremos en el siguiente apartado.

2.4. Las resistencias latinoamericanas por el territorio

Los conflictos sociales en Latinoamérica surgen de las resistencias a un sistema de distribución injusta del poder, de los recursos y de sus beneficios. Los altos niveles

de desigualdad social en la región generan desintegración y perjudican las formas originarias de reciprocidad y cooperación colectiva de nuestros pueblos, lo cual repercute en los procesos de consenso y acuerdo político en distintos niveles.

La intensidad de estas resistencias aumenta cuando se trata, además, del reconocimiento de determinadas identidades. Es el caso de los pueblos indígenas u originarios que demandan reconocimiento y protección de sus derechos; principalmente de los derechos colectivos relacionados con el territorio y la calidad de su hábitat. La conformación de los Estados-nación en América Latina devino en desintegración nacional al dejar al margen a los grupos étnicos, extendiendo la discriminación racial hacia los ámbitos sociales, económicos y políticos (Del Álamo, 2004).

Es precisamente el movimiento indígena uno de los principales protagonistas de las luchas reivindicativas por la tierra, la libertad de sus líderes y la vigencia de la protección de los derechos humanos. Estos, desde la óptica de los derechos indígenas, entran en disputa con las modificaciones normativas arbitrarias que priorizan la actividad económica de las grandes corporaciones, que operan precisamente en territorios ancestrales de estos pueblos originarios, poniendo en riesgo sus modos de vida tradicionales. El respeto de esta diversidad cultural es algo que no acaba de ser incorporado como prioridad en la agenda política nacional.

Identificar estos ejes de conflictos nos permite confirmar cuán interconectados se encuentran. Las reivindicaciones indígenas giran en torno a la identidad cultural que debe ser respetada y valorada en los procesos que fomentan el desarrollo nacional; a la transición democrática hacia una agenda nacional que les convoque como protagonistas; y al rechazo al modelo de desarrollo como defensa de su dignidad, su historia y sus ancestrales modos de vida y de ser parte del Perú.

Estos conflictos se dan dentro de los territorios e impactan en ellos junto a todos los elementos que los componen. Hablar de territorio puede suponer hablar geográficamente de extensiones, pero en él conviven también especies vivas de flora y fauna, pueblos originarios o rurales cuyas costumbres y concepciones para relacionarse con la naturaleza, también forman parte de lo que se concibe como territorio.

El territorio en su dimensión más amplia, es no sólo un espacio de producción y provisión de alimentos y recursos, sino por sobre todo es un sistema de vida, como lo refieren algunos líderes del pueblo awajún en Perú.

En el contexto latinoamericano que como sabemos es una de las regiones del planeta más rica en biodiversidad, el territorio viene siendo reconfigurado por el capital, por este proceso de modernización galopante y avasallador que lo ha ido demarcando según sus intereses, que no son otros que los de las grandes empresas transnacionales, mineras, petroleras, madereras, inmobiliarias, centros comerciales, etc.

La avalancha de intereses e inversiones privadas avaladas tanto por gobiernos de derechas como de izquierda, han acabado reordenando el territorio, redefiniendo sus usos y funciones, así como las dinámicas de consumo de la propia población. Esto deviene en una crisis económica, de democracia e institucionalidad, de desempeño social por parte del Estado quien ha perdido su rol integrador y garante de derechos, volviéndose incluso infractor en esta materia.

Las élites políticas y económicas no han tenido reparos en vulnerar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, al imponer un ordenamiento del territorio que privilegia sus intereses empresariales sobre los derechos colectivos de dichos pueblos originarios. El logro de crecimiento económico por esta vía, lejos de aplacar los

conflictos latentes en la sociedad peruana los ha exacerbado al poner en cuestión la igualdad de derechos y el bienestar de la sociedad en su conjunto.

La demarcación de las zonas de comercio o explotación de recursos se basa en la lógica occidental de expansión y usufructo puro y duro del territorio, mas no desde un enfoque amplio en el que en primer lugar se considera al territorio como un espacio con vida y para la vida.

Los impactos que se generan en una comunidad pueden repercutir perfectamente en otra comunidad lejana. En primer lugar, porque el territorio para los pueblos indígenas es un espacio integral y no una mera parcelación del suelo mediante límites administrativos. Para ellos el territorio es una expresión de los lazos afectivos que mantienen con sus familias y comunidades vecinas, mediante redes de relaciones materiales y simbólicas que surgen del contacto directo con la naturaleza. El despojo territorial o la imposición de demarcaciones por parte de la administración estatal, vinculadas a la explotación de sus territorios, es una fuente potencial de conflicto.

En segundo lugar, de acuerdo a la cosmovisión indígena, los ríos, la tierra y el aire forman parte de un todo que, si en alguna parte es transgredido, afecta a todo aquello que lo compone. De modo que, las intervenciones puntuales en el territorio pueden tener efectos en las zonas colindantes, en el curso de sus caminos o de los ríos que atraviesan pueblos, regiones y hasta países.

No obstante, la maquinaria extractiva en territorios indígenas u originarios de este lado del mundo, ha reconfigurado sus propias relaciones y las que tienen con la naturaleza. Muchos han sido los elementos de mercado, tecnología y modernidad que las comunidades han ido incorporando, cambiando patrones en su forma de habitar el

bosque; de concebir la propiedad del territorio que antes era solo colectiva y hoy está cada vez más fragmentada; de mantener intercambios económicos que hoy en día respetan cada vez menos la ancestral relación de armonía con la naturaleza.

Alberto Chirif, antropólogo peruano, señala sobre esto que para una construcción territorial son fundamentales los acuerdos sociales, de manera que primen criterios comunes que dependan de los propios pueblos y no del Estado cuya legislación otorga esta responsabilidad a actores externos a los pueblos, «(...) un Estado que cada día es más agresivo y transgresor de los derechos de los pueblos indígenas.» (Chirif, 2015: 13).

A consecuencia de la intromisión y transgresión constante en los territorios se ha generado una ola de conflictos que de cuando en vez estalla sin previo aviso. El aparato económico y legislativo en países como Ecuador, Bolivia, Argentina, México, Brasil y Perú se ha encargado de facilitar la explotación de recursos sin miramiento de los costes humanos, sociales y ambientales, sólo pensando en el beneficio monetario que trae la exportación de ingentes cantidades de minerales de cuyos beneficios poco queda para la población que vive en dichos territorios.

Aun cuando existen derechos amparados en este sentido, por las constituciones políticas nacionales y por convenios internacionales que los gobiernos latinoamericanos han firmado y ratificado, principalmente el *Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes* (OIT, 1989), actualmente no existen garantías suficientes de los propios Estados para su protección.

La consulta previa libre e informada, tratada en el artículo 15 del referido convenio, ha dado lugar a la creación de normas específicas en esta materia en los casos

de Perú, México, Ecuador y Bolivia. Sin embargo, no tiene regulaciones específicas ni mecanismos idóneos para ser implementada con la real intención de promover la participación de los pueblos indígenas en espacios de decisión y consulta sobre la inversión e implementación de programas que les afectan.

Otro derecho es el de la propiedad ancestral de la tierra, señalada en el artículo 14 del mismo Convenio 169 de la OIT (1989), en el que se establece que la sola posesión ancestral es determinante para un reconocimiento de propiedad colectiva para las comunidades.

En contraste con esta legislación, son diversos los casos de graves infracciones ambientales con daños directos al bienestar, la salud y la vida de los pueblos originarios latinoamericanos, producto de todo lo comentado acerca de la escasa regulación por parte del Estado y del atropello de derechos por parte de las empresas extractivas, en el rubro de minería e hidrocarburos especialmente. Pero esto responde al fomento del extractivismo a toda costa, como veremos a continuación.

2.5. El extractivismo en Latinoamérica

Como ya se ha mencionado al abordar el contexto de crecimiento económico latinoamericano, esta región ha sido una gran receptora de inversiones extractivas durante los últimos diez años, específicamente en proyectos de exploración no ferrosa, es decir, de metales como oro, plata, cobre, zinc, plomo, platino y níquel, que son de los más buscados en esta zona del mundo.

Sin embargo, antes de pasar a las estadísticas cabe preguntarnos a qué nos referimos cuando utilizamos el término «extractivismo». Para ello nos apoyaremos en el

análisis del ecologista social uruguayo Eduardo Gudynas (2015), sobre el concepto de extractivismo desde la realidad latinoamericana.

Para este autor, abordar dicho concepto supone remitirnos a la historia de América Latina. A los tiempos de la colonización europea en que embarcados exploradores llegaban a este lado del mundo en una intensa cacería de tesoros (minerales o metales preciosos) y recursos naturales. Aparentemente con el objetivo de generar nuevos circuitos de provisión de materias primas y de obtener prestigio y capacidad de ostento, lo que simbólicamente otorga la sola posesión de algún tipo de *riqueza*.

Según el autor, esta dinámica de explotación de recursos que también se da en las personas para la satisfacción de la demanda externa, a costa de vidas y de destrucción ambiental, se reproduce hoy en día. Es verdad, el contexto es distinto pero la lógica de aprovechamiento desmedido, sin cuidado e inconsulto con las poblaciones originarias, es similar. Las negociaciones para llevarlo a cabo parten de una visión de los territorios abundantes en recursos naturales como meras concentraciones de materia prima, que debe ser comercializada para obtener beneficios, no como fuentes de vida que tienen un valor intrínseco para la población debió a la elevada biodiversidad que albergan.

El término extractivismo se asocia principalmente a la actividad minera e hidrocarburífera pero, en definitiva, refiere a la apropiación de recursos naturales para comercializarlos como materia prima (Gudynas, 2015: 15).

Desde una perspectiva histórica y reconociendo que la exportación de dichos recursos, como ya se ha mencionado, está vinculada con la historia de Latinoamérica, la

práctica del extractivismo no es tan nueva como el término mismo. En todo caso, la definición de este concepto ha sido conveniente para gobiernos, empresas y hasta para organizaciones internacionales que han influenciado en las políticas económicas implementadas en esta región.

En ocasiones se encuentra la referencia al extractivismo como «industrias extractivas», incluso en documentos institucionales u oficiales. Pero esto es un error porque, como bien explica Gudynas (2015: 26), la simple extracción de un recurso no conforma una industria, más aún cuando el objetivo es que su procesamiento sea el mínimo aquí y suceda en otro continente para no encarecer el producto. Pero hay que decir que este error pareciera inducido puesto que, referirse a una industria suele generar una imagen de multitudes trabajando, lo cual evidencia una intención subliminal de lograr un convencimiento social sobre el *beneficio* de los extractivismos.

Por otro lado, a decir de Gudynas (2015), también son extractivismos los monocultivos de exportación como los de soya o soja o palma, por los altos volúmenes y por el uso agresivo de suelos y de agroquímicos nocivos para la biodiversidad, la salud, poniendo en riesgo la paz social de dichas poblaciones. En ese sentido, recurriendo a las recomendaciones del autor ecologista, consideraremos tres elementos a partir de los cuales se pueden identificar extractivismos.

Primero, el *volumen*, que no es solo la cantidad de producto extraído sino también la remoción de suelo, el uso de agua o energía en ese proceso. Segundo, la *intensidad ambiental*, que se refiere al uso de productos tóxicos, contaminantes y hasta explosivos en el proceso de extraer un recurso. Tercero, el *destino*, que debe ser precisado en para identificar los niveles de producción y si se trata de consumo interno o externo (Gudynas 2015: 18).

En ese sentido, el uso y socialización del concepto de extractivismo podría afinarse desde los elementos mencionados, de manera que tanto el análisis como la medición de sus impactos contemplen no sólo el aspecto económico, sino también el ambiental, social y cultural puesto que su fuente origen es la naturaleza y es en ésta donde mejor se evidencian.

A continuación, en la Ilustración 2 extraída de Echave (2012: 63), observamos que hacia el 2009 Latinoamérica era la región con mayor cantidad de exploraciones comerciales no ferrosas en el mundo, con nada menos que el 26 % de inversiones globales.

Ilustración 2: Inversiones metálicas en Latinoamérica

Fuente: Echave (2012) basado en reporte de Metals Economics Group

Para el 2015, SNL Metals & Mining señala en su informe especial *World Exploration Trends* que durante el 2014 se redujo la asignación de proyectos de exploración minera en todas las regiones del mundo, principalmente en África y América Latina. Sin embargo, esta última sigue siendo el destino de exploración minera

más popular, tanto así que en 2014 mantuvo una inversión del 27% del gasto mundial en este rubro (SNL, 2015).

La Ilustración 3 muestra la distribución y destino de dichas inversiones en el mundo. Como se puede apreciar, en Latinoamérica destacan en primer lugar México (7%) y Chile (7%), seguidos de Perú (5%) y Brasil (3%). Se incluyen otros países de la región en una sola cifra general del 5%. El mismo informe menciona, aunque no los destaca en el mapa, que Colombia y Argentina forman parte del grupo de países que representa la mayor parte de la inversión que mantiene la región.

Map 1: Top Destinations for Nonferrous Exploration, 2014

Ilustración 3: Inversión minera en el mundo

Fuente: SNL Metals & Mining (2015)

Si comparamos las últimas estadísticas con las del 2009 (Echave, 2012: 63), México y Chile incrementaron su capacidad receptora de proyectos de exploración minera no ferrosa del 5% al 7%. Perú descendió del 7% al 5% y Brasil se mantiene en un 3%.

Si bien la minería es solo una de las actividades extractivas que tienen un lugar importante en la evolución de las economías de la región, es la que abordaremos más porque el estudio de caso que propondremos más adelante es sobre una comunidad y su vínculo con la actividad minera.

Es verdad que en hidrocarburos (gas natural y petróleo) también se intensificó la exploración sobre todo en la región amazónica y costa peruana, los resultados no están siendo los esperados a nivel de justificación técnica y económica para la perforación, y en relación a los incentivos para priorizarla. Esto no significa que los impactos ambientales y sociales en esta actividad sean menos importantes, pero creemos que sí son integrados en el análisis sobre los efectos del extractivismo que aborda la presente investigación.

Pero para hablar de extractivismos hay que ver necesariamente de dónde provienen las inversiones, en este caso, en el rubro de la minería. Si consultamos el documento titulado *La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2016* de la CEPAL (2016), encontramos que entre los años 2000 y 2015, el país que mayor inversión ha destinado a esta región en minería metálica es Canadá con un 21% del total acumulado, le sigue China con un 17%, Reino Unido y Estados Unidos, ambos con un 10%. Así se observa en la Ilustración 4.

Asimismo, destacan Brasil, Chile, Perú y México como destino de la mayor cantidad de capitales en Latinoamérica, como se puede visualizar en el siguiente mapa extraído del informe referido de la CEPAL para el 2016.

Ilustración 4: Países de origen y destino de capitales mineros

Fuente: CEPAL (2016)

Hay que señalar que, durante los últimos cinco años, como ya se ha mencionado en la contextualización del comportamiento económico latinoamericano en este rubro, la dinámica de los precios internacionales de las principales materias primas se caracterizó por un fuerte descenso.

En ese proceso, China ha destacado por sus niveles de crecimiento y sus estrategias de industrialización, que han elevado notablemente sus índices de demanda de hierro y metales básicos pues superaron su propia producción nacional (CEPAL, 2016: 93). Esto ha influido de manera importante en la nueva configuración de la capacidad de demanda y compra en el mercado mundial de los metales, ubicando a China como principal comprador, además de productor, de recursos naturales.

En definitiva, el auge de América Latina como exportadora mundial de minerales metálicos radica en sus importantes reservas de litio (66%), cobre (47%), plata (45%), estaño (25%), bauxita (23%), níquel (23%) y hierro (14%), como señala la CEPAL (2016: 113).

Pero los riesgos de la expansión extractivista van más allá de las estadísticas, responden a una lógica neoliberal, capitalista, individualista y de consumo bajo determinados patrones de intensidad y volumen, que no ha tenido reparos en asociarse con diversas formas de violencia como las guerras, la explotación humana, desplazamiento de poblaciones, empobrecimiento, daños a la salud, entre otros, por el control de los recursos naturales (petróleo, energía, gas, coltán, entre otros) a nivel mundial.

En esa línea reflexiona el abogado colombiano Ricardo Sánchez quien, citando al geógrafo británico David Harvey y sus teorías sobre el imperialismo, señala que «Las guerras contra el terrorismo y contra las drogas son necesarias para el modelo de acumulación vigente», y es a través de ellas que controlan recursos como el petróleo, por ejemplo, reordenando y recolonizando el mundo (Ulloa, 2016: 14).

Sus efectos más terribles golpean la dignidad y los derechos de mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, pero además este sistema violento, avasallador y controlador genera dramas tan vergonzosos para bloquear la capacidad de agencia y movilidad de estas poblaciones. Por ello quienes deciden migrar o refugiarse fuera de sus países, precisamente quienes peor lo pasan con un perverso modelo de desarrollo impuesto o con las guerras que agudizan su pobreza, acaban sometidos a un sinnúmero de discriminaciones, maltratos y hasta la muerte.

Sus efectos más terribles golpean la dignidad y los derechos de mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes. Pero es que, además, la violencia ejercida por este sistema en forma de pobreza y discriminación tiene entre sus efectos perniciosos el bloqueo de la capacidad de agencia de estas poblaciones.

La negación de la voz deja a los más afectados por los conflictos mineros desamparados ante los poderes públicos. Es más, como se ha venido denunciando desde la sociedad civil, quienes desafían el sistema desenmascarando su funcionamiento injusto pagan el alto precio de la criminalización, estigmatización, el desplazamiento forzoso y hasta el riesgo de ser agredidos/as y/o asesinados.

En el siguiente epígrafe pondremos rostro a algunos testimonios de afectación directa del extractivismo en Latinoamérica y abordaremos la relación de estas actividades con la criminalización de defensores y defensoras indígenas y campesinas de la región.

2.6. Extractivismo y criminalización

Como señalamos en el anterior apartado, el extractivismo, valiéndose de nuevas tecnologías para expandirse a través de la actividad en hidrocarburos, *fracking* o megaminería, viene desplazando actividades primarias y artesanales como la agricultura, la ganadería, entre otras, que por siglos han caracterizado a las sociedades originarias del mundo, y con ello ciertas formas de organización y administración de los recursos.

Pero el extractivismo va más allá de este nivel de desplazamiento social y cultural. En territorios ricos en biodiversidad, que es precisamente donde se ubican los grandes proyectos extractivos, su expansión ha tenido efectos realmente trágicos como la desaparición de lagunas, deforestación de bosques, contaminación de ríos y suelos, al punto de que la población ha tenido que presenciar la muerte de especies de flora y fauna en sus comunidades, con todo lo que ello impacta en el imaginario colectivo y en la provisión de recursos.

Con este panorama, la ciudadanía de estos territorios no ha encontrado mayor opción que hacer más enérgica y radical la defensa de sus territorios, llegando incluso a oponerse a cualquier tipo de extractivismo en ellos. Esta oposición los ha puesto en la mira de empresas y gobiernos cuyos intereses convergen en la promoción del extractivismo por encima de todo, sin tener en cuenta los convenios y tratados que amparan a las comunidades afectadas.

Una dimensión a incorporar en este análisis es la que aborda las resistencias ciudadanas, de las que hablábamos en los primeros apartados de este capítulo y que se acentuaron con la intensificación del modelo de desarrollo economicista y extractivista.

La defensa del territorio, del acceso a la tierra y al agua y el cuidado de los bienes de la naturaleza, son luchas vigentes a través del activismo y los movimientos de protesta que surgen en respuesta a la degradación medioambiental y a la represión por parte de los gobiernos y sus aliados transnacionales.

Quienes ejercen la defensa del medioambiente o la tierra, resultan personas incómodas y hasta subversivas para la estructura política y económica que favorece el extractivismo desde los sectores de gobierno.

El choque de represión y reacción ha provocado un alarmante aumento de la conflictividad social en Latinoamérica, pero no sólo eso, sino que los líderes y lideresas activistas de causas relacionadas con el acceso, distribución y/o afectación de los recursos naturales, vienen siendo criminalizados de diversas formas.

Estos liderazgos se ven amenazados por modalidades como la persecución sistemática, amenazas y/o atentados contra sus vidas. Esto viene sucediendo en todo el mundo, pero con índices realmente alarmantes en Latinoamérica.

Global Witness es una organización no gubernamental internacional que se dedica a hacer campañas contra la corrupción y las violencias relacionadas con la explotación de recursos naturales. Su informe del 2014 se tituló: *¿Cuántos más? El medio ambiente mortal de 2014: intimidación y asesinato de activistas ambientales y de la tierra, con Honduras en primer plano*; debido a los altos índices de asesinatos de activistas en este país. Siguiendo esa misma línea de trabajo, un año más tarde, nos ofrecieron un documento titulado: *En terreno peligroso. El medio ambiente mortal de 2015: asesinato y criminalización de defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo*.

Solo el ser consciente de que esos títulos son tan alarmantes como las cifras de casos que lo sustentan, es tan indignante como abrumador. Si bien la criminalización de activismos ambientales es una tendencia global, hay que señalar que en Latinoamérica los índices son escandalosos.

El referido informe de Global Witness registra 185 asesinatos de defensores/as de la tierra y el medioambiente para el 2015, a nivel global. De dicha cifra, el 66% o 122 asesinatos, ocurrieron en esta región (Global Witness, 2015).

La lista de derechos específicos que estos activistas defienden empieza por el derecho al territorio amparado por una serie de tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A este derecho se vinculan otros primordiales establecidos en los mismos tratados y las propias constituciones nacionales latinoamericanas, como el derecho a la salud, a la alimentación, al trabajo, a la vivienda y al acceso a la tierra. Así también, a un ambiente limpio, sano y equilibrado como reivindicación central para las y los miembros de las comunidades rurales, campesinas, indígenas, andinas, amazónicas, costeñas, afrodescendientes, ribereñas, como tendría que serlo para cualquier ciudadano y ciudadana de este globo terráqueo.

Otro derecho importante es el derecho a la libertad de expresión, reunión, asociación y protesta pacífica. El Informe de la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la CIDH del año 2010, indica al respecto:

Asimismo, la Relatoría Especial observa que resulta necesario que los Estados diseñen marcos regulatorios que respeten el ejercicio de la protesta social. Los Estados no deben dejar de tomar en cuenta que cuando se está frente a marcos institucionales que no favorecen la participación, o frente a serias barreras de acceso a formas más tradicionales de comunicación de masas, la protesta pública puede convertirse en el único medio que realmente permite que sectores tradicionalmente discriminados o marginados del debate público puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado. (CIDH, 2011: 363).

Como podemos observar, estas libertades son esenciales y absolutamente legítimas en un contexto tan convulsionado como el que hemos descrito, en donde las barreras sociales, culturales, económicas y políticas existen y, nos atrevemos a decir, son hasta creadas con la finalidad de apartar a determinados sectores de la población de procesos cruciales y decisivos para el supuesto desarrollo de sus pueblos.

En ese sentido, existen varios factores de hostigamiento y criminalización contra los defensores de la tierra, del territorio y del ambiente, producto de la opresión neoliberal a nivel global y de manera particular en Latinoamérica.

Uno es el uso de la fuerza y de la violencia para reprimir colectivos de oposición a proyectos de inversión extranjera en el rubro de minería, hidrocarburos, inmobiliarias,

hidroeléctricas, madereras, entre otros. Los gobiernos echan mano de las fuerzas estatales del orden para «restablecer el orden» ante protestas legítimas de los pueblos afectados por dichos proyectos, acomodando incluso la legislación para amparar la impunidad en el uso de la violencia y de armas con dicho fin.

Los países latinoamericanos han firmado sendos tratados contra la tortura y la desaparición forzada de personas. Sin embargo, estos se dejan de lado cuando se trata de resguardar determinados proyectos de inversión y empresas privadas ya que, bajo un supuesto marco legal de restitución de la paz social, se maquilla el uso abusivo de la fuerza y de la violencia por parte de las fuerzas armadas y policiales. Asimismo, el sicariato se suma al potencial de eliminación de quienes ejercen oposición en estos contextos.

Otro factor es la corrupción. La burocracia generada en los estamentos gubernamentales para la tramitación de permisos y otorgamiento de licencias en proyectos extractivos, se ha encargado de incorporar perfiles de servicio en las instancias competentes en esta materia que, en un marco legal, favorecen y agilizan la aprobación de licitaciones, concesiones, títulos de posesión o de propiedad de territorios para la explotación de recursos naturales, en detrimento de los derechos colectivos y comunales de los pueblos.

También están los favorecimientos con negociación bajo la mesa hacia empresas a través de lobbies entre empresarios y sectores de gobierno a cambio de beneficios económicos principalmente, aunque también de respaldo político. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza esta situación e informa lo siguiente:

Respecto de la intervención de empresarios, según pudo documentar la CIDH en su Informe de 2011, “en muchas ocasiones, los empresarios o personal que labora en mega-proyectos denuncian penalmente a defensores con el objeto de disminuir sus actividades de defensa de sus derechos” 91. Las empresas privadas no solamente presentarían denuncias dentro de procesos penales sin fundamento, sino que en ocasiones realizarían campañas de desprestigio contra las y los defensores con el objeto de afectar su credibilidad y concretan alianzas con militares y policías para lograr las detenciones de las y los defensores. (CIDH, 2016: 43).

Vinculado a lo anterior, vamos por un tercer elemento que es el empleo del sistema judicial penal para acusar falsamente a líderes y lideresas que protagonizan luchas sociales por causas como la afectación del territorio y del ambiente. Esto revela la profunda crisis institucional de nuestros Estados, cuyos sistemas jurídicos son usados para criminalizar o victimizar a quien convenga.

Las acusaciones por delitos inexistentes derivan en procesos de defensa legal largos, tediosos, costosos e injustos, se mire por donde se mire. Para las personas encausadas suponen una gran mella en el honor personal o lo que la CIDH se refiere como, el derecho a la honra y a la buena reputación. Todo ello se ve vulnerado cada vez que se estigmatiza e incrimina a los activistas ante la opinión pública, tildándolos de delincuentes, azuzadores, terroristas, anti-mineros, obstáculos para el desarrollo, por solo mencionar algunos calificativos.

Esto no sería así sin la complicidad de los medios de comunicación que responden a intereses corporativos muy cercanos a los intereses de los lobbies empresariales y, en muchos casos, a los intereses del propio gobierno. Solo así se explica que la cobertura de los conflictos ambientales a menudo se construya con informaciones sesgadas a favor de las inversiones extractivas, presentándolas como un bien a la patria, al desarrollo, el orden y la paz social.

De ese modo, se termina por condenar ante la opinión pública a los movimientos sociales y las diversas manifestaciones protesta antes incluso de que hayan podido

expresar libremente sus reivindicaciones. Éstas, por otra parte, no suelen buscar otra cosa que el cumplimiento de aquellas normas que amparan derechos como el de consulta previa, propiedad ancestral, entre otros. Sobre esto se pronuncia la CIDH:

[...] la actuación cómplice o irresponsable de algunos medios de comunicación contribuye a poner en tela de juicio la presunción de inocencia de los defensores y defensoras, generando que estos y sus familias se vean sometidos al odio, desprecio público, persecución y a la discriminación (CIDH, 2016: 29)

De modo que, como podemos advertir, son varios los poderes que confluyen para generar un contexto de conflictividad amenazante y violenta contra el territorio y sus defensores y defensoras. Un caso lamentable, reciente y emblemático es el asesinato de Berta Cáceres en Honduras, el 2 de marzo de 2016.

Berta era integrante del pueblo indígena lenca, activista y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización en la que junto a otros activistas lideraba la defensa del territorio frente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. – DESA tiene en territorios del pueblo lenca. Por su trayectoria y firme defensa, Berta fue reconocida y retribuida con el Premio Ambiental Goldman en el año 2015.

Organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, Global Witness, el Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), entre otras, llevan un registro y frecuente reporte de esta situación a nivel mundial. Pero precisamente el caso de Berta Cáceres venía siendo reportado los últimos años por el alarmante número de casos en Centroamérica y concretamente en Honduras, pero además por los agravantes de criminalización que como ya hemos descrito, suponían amenaza constante y persecución judicial emprendida por la empresa DESA y sus

aliados, como el propio alcalde municipal de Intibucá, el pueblo donde residía Berta (Amnistía Internacional, 2016; Global Witness, 2015, 2016; FIDH, 2016).

La muerte de Berta Cáceres obliga a seguir en el análisis y observar con suspicacia esta alianza de poderes políticos y económicos a quienes la presencia de defensores y defensoras de la tierra, del agua y del ambiente, no conviene a sus propósitos. Asimismo, esta situación da pie para preguntar con firmeza por los autores de las violencias perpetradas. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Quién los financia?

Lamentablemente, muchas de las investigaciones no se completan y se archivan. Los responsables materiales e intelectuales vinculados mayormente a la seguridad privada de los intereses económicos, a los cuerpos de seguridad del Estado o al crimen organizado (Global Witness, 2014: 19) no son identificados. Además, son pocos los procesos judiciales que se abren, lo que evidencia total impunidad en la condena de estos casos. Esto gracias a una combinación de tolerancia y complicidad con la corrupción por parte del poder judicial y de otros aparatos del Estado que, ya sea por incapacidad o desidia, fallan en su obligación de proteger los derechos de la población frente a la posición ventajosa de las grandes empresas.

Llegamos al final de este capítulo analizando también los efectos del extractivismo y la criminalización en las mujeres. Aunque sabemos bien que la violencia ejercida en contextos de conflictividad ambiental atenta contra la vida de hombres y mujeres defensoras, hay que señalar que los impactos son diferenciados.

Las luchas de las mujeres que más hostigamiento sufren son las que reivindican nuestros derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y derechos ambientales (CLADEM, 2015). En el caso de las luchas por la defensa de derechos ambientales, la

incidencia es mayor en zonas rurales donde las mujeres denuncian los atropellos en sus territorios, la contaminación del ambiente y los daños que esto trae para su salud, economías familiares, la alimentación y tranquilidad de sus familias.

Las violencias que genera el extractivismo son solo una proyección de las que genera el sistema patriarcal. Esto aumenta los riesgos y profundiza los impactos violentos y las desigualdades de las que ya somos víctimas las mujeres solo por ser eso, mujeres. Y si al ser mujer le sumamos ser indígena, afrodescendiente, rural, campesina, con habilidades diferentes, etc., ya podemos imaginar la espiral de violencia permanente en el que aún continuamos inmersas.

Como hemos podido señalar y como dice el título de este capítulo, Latinoamérica es un territorio de conflictos por sus altos niveles de conflictividad social y porque un gran porcentaje de ellos gira alrededor de los territorios. Estos son concebidos como espacios de vida por las poblaciones rurales y originarias de los países de la región. Espacios que aseguran la supervivencia de las poblaciones urbanas allí donde la identificación con el campo y lo rural está quebrada, donde se gesta el crecimiento y a la vez la fragmentación social de nuestros vínculos entre ciudadanos y la tierra que nos soporta. En adelante nos acercaremos al caso peruano para analizar los rostros y características del extractivismo, siguiendo la línea de investigación planteada.

2.7. Recapitulación

En este capítulo hemos podido hacer un recorrido teórico sobre la construcción de una Latinoamérica como zona que «necesitaba» ser desarrollada. Escobar (2007), Delfino (1999), Mignolo (2003), Vandana Shiva (2001) son referentes claves para entender que dicha construcción es producto de una visión opresora, homogeneizadora y

hegemónica, que supone un nicho de violencia por el control, la fuerza y la centralización que ejerce.

Gracias a dichas referencias bibliográficas hemos podido identificar las oleadas globalizadoras de las que nos hablaba Shiva (2001), que se remontan a la colonización de América, África, Asia y Oceanía y refieren, primero, a la transformación de la naturaleza como materia prima y centro de explotación; segundo, a la imposición de procesos de desarrollo promotores de homogeneidad y uniformidad; y tercero, al libre comercio conducido por grandes potencias que decidían el desarrollo del Tercer Mundo.

A partir de académicos de la Investigación para la Paz como Galtung, surge el reto de profundizar en las diversas violencias, tanto en las que no se perciben y se han hecho parte de la cultura, como en las que son evidentemente agresivas para la integridad de las personas y los grupos sociales. Su clasificación de paz positiva y negativa ayudó a comprender que la violencia no solo se ejerce en contextos de guerra, sino que también nos violentan las estructuras desiguales, injustas y excluyentes.

Podemos inferir que el Estado ha procedido en contra de los intereses de las mayorías en la mayoría de países latinoamericanos, como producto de lo que Quijano (2004) llama un proceso de *reprivatización del Estado*, constituyéndose nuevas formas de autoridad a nivel comunal.

Pero el agotamiento del modelo neoliberal trajo descontento y cuestionamiento en cuanto al territorio y el ambiente. Aun cuando los gobiernos de la región giraron hacia la izquierda, Latinoamérica seguía doliendo por sus altos niveles de pobreza y desigualdad social.

El modelo primario exportador se instaló en las economías latinoamericanas y se profundizó el discurso de que la minería trae desarrollo y progreso a los pueblos, que viene de la historia de los procesos colonizadores en la región, donde la actividad económica se centró en la explotación de minerales.

Esto ha puesto sobre la mesa y las agendas políticas de los movimientos sociales el debate acerca del territorio, para lo cual Alberto Chirif (2015) señala que son fundamentales los acuerdos sociales sobre criterios comunes que dependan de los propios pueblos y no del Estado.

El derecho al territorio, a la consulta previa, libre informada, a la propiedad ancestral de la tierra, amparados por las constituciones políticas nacionales y por sendos tratados internacionales, vienen siendo violados empezando por la escasa regulación por parte del Estado y del atropello de derechos por parte de las empresas extractivas, en el rubro de minería e hidrocarburos especialmente.

Brasil, Chile, Perú y México destacan como destino de la mayor cantidad de capitales a nivel mundial. China como principal comprador, además de productor, de recursos naturales. El auge de América Latina radica en sus reservas importantes de litio (66%), cobre (47%), plata (45%), estaño (25%), bauxita (23%), níquel (23%) y hierro (14%), según la CEPAL (2016).

Gudynas (2015) nos ha ilustrado con su revisión del concepto de extractivismo, que hace referencia a la apropiación de recursos naturales para comercializarlos como materia prima. Asimismo, tomamos del autor que referirnos a las actividades extractivas como «industrias extractivas» es un «error», puesto que la simple extracción de un recurso no conforma una industria y que más bien pareciera inducido para generar una

imagen de multitudes trabajando y afianzar un discurso sobre los beneficios del extractivismo.

Importante identificar los tres elementos para determinar a los extractivismos: volumen, intensidad ambiental y destino. Esta lógica de producción y control de recursos responde a un proceso de recolonización del mundo según Ulloa (2016).

Pero la ciudadanía no ha encontrado mayor opción que hacer más enérgica y radical la defensa de sus territorios, llegando incluso a oponerse a cualquier tipo de extractivismo en ellos. Por ello se incorpora en este análisis a las resistencias ciudadanas que se han acentuado con la intensificación del modelo de desarrollo economicista y extractivista.

La defensa del territorio, del acceso a la tierra y al agua y el cuidado del ambiente, son luchas vigentes que resultan incómodas y hasta subversivas. Estos liderazgos se ven amenazados por modalidades como la persecución sistemática, amenazas y/o atentados contra sus vidas.

Nuestros países han firmado sendos tratados contra la tortura y la desaparición forzada de personas, sin embargo, estos se dejan de lado si se trata de maquillar el uso abusivo de la fuerza y de la violencia directa, y el uso irregular de las fuerzas armadas y policiales para custodiar proyectos y empresas privadas.

La corrupción, el empleo del sistema judicial penal para acusar falsamente a líderes y lideresas del territorio y del ambiente, la concentración de medios de comunicación que responden a intereses y lobbies a favor del empresariado y los gobiernos de turno confluyen para generar un contexto de conflictividad amenazante y violenta contra el territorio y sus defensores.

El asesinato de Berta Cáceres en Honduras, el 2 de marzo de 2016, es un claro ejemplo de persecución, seguimiento y agresión contra quienes protagonizan las luchas sociales por el territorio. Las luchas de las mujeres por sus derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y derechos ambientales son las más hostigadas. En el caso de las luchas por la defensa de derechos ambientales, la incidencia es mayor en zonas rurales donde las mujeres reclaman los atropellos en sus territorios, la contaminación del ambiente y los daños que esto trae para su salud, economías familiares, la alimentación y tranquilidad de sus familias.

Finalmente, en Latinoamérica y en el mundo queremos espacios en los que la vida se dé en armonía con las aspiraciones de desarrollo de los pueblos, no de las empresas ni de los gobiernos. Es por ello que continuaremos con el siguiente capítulo de contextualización para el caso peruano.

CAPÍTULO III

Los conflictos sociales en el contexto peruano

«Eran tantos los muertos y no nos habíamos dado cuenta».

Ramón Pajuelo

3.1. Introducción

Perú no es ajeno a la tendencia regional de conflictividad social y criminalización de la protesta. Durante los últimos años la tendencia crecimiento de estos conflictos se ha mantenido en desmedro del bienestar de la población. Esta investigación pretende aportar a un mejor entendimiento de este contexto.

El Estado peruano demuestra limitadas capacidades para afrontar los conflictos de manera pacífica y conciliadora, por el contrario, ha llegado a representar un oponente violento y armado que además discrimina a grandes mayorías en situación de exclusión y pobreza. El diálogo intercultural aún es un tema pendiente en el tratamiento de nuestros conflictos sociales.

El objetivo de este capítulo es analizar la conflictividad social en el contexto peruano, repasando en primer lugar el antecedente del conflicto armado interno que el Perú vivió durante los años ochenta y noventa. Realizar la conexión de sus factores causales con el panorama actual nos permite evidencia lecciones no aprendidas y situaciones de violencia que se repiten.

Profundizaremos en la situación de desigualdad social que supone una base dura para la generación, mantenimiento y crecimiento de los conflictos sociales en el Perú.

Asimismo, abordaremos los efectos del modelo económico extractivista que en este país se impulsa a toda costa, incluso a riesgo de vulnerar derechos e integridad de personas, organizaciones, comunidades, con herramientas legales y administrativas que favorecen el incumplimiento del rol protector y garante de derechos que debería cumplir el Estado.

Revisaremos algunas cifras de entidades estatales que tienen el mandato de realizar un registro y seguimiento de los conflictos y de aportar a una gestión pacífica y al diálogo entre las partes involucradas.

De manera especial abordaremos la alerta socioambiental que se vive en el territorio nacional, por la distribución de los conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo, y el crecimiento desmesurado de la actividad extractiva que se refleja en la extensión de las concesiones mineras en el Perú.

Finalmente aterrizaremos en las estrategias que tienen las empresas y el propio gobierno para desmovilizar a los movimientos sociales defensores de la tierra, de los derechos comunitarios y de los pueblos originarios.

3.2. El conflicto armado interno peruano. Tiempo de trascender

En 1980 se inició en Perú uno de los períodos más violentos y vergonzosos, un conflicto armado interno que duró hasta el año 2000, cuyos costos humanos y económicos no tienen precedentes en la historia republicana. Fue una guerra interna que enfrentó a las Fuerzas Armadas y Policiales con los grupos subversivos armados, una lucha violenta en el afán de restablecer el orden político, social y económico, al usar métodos de violencia sistemática contra la integridad y los derechos de casi 70 mil personas.

El intervalo de 20 años de conflicto y violencia fueron estudiados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyo Informe Final es una referencia

fundamental en el análisis de esta etapa violenta de la historia peruana. Dicho lapso fue determinado por sucesos violentos acontecidos, estrategias y posiciones de los actores.

El inicio está determinado por la primera acción violenta cometida por el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso (PCP-SL), en mayo de 1980, durante las elecciones en el pueblo ayacuchano de Chuschi, al declarar la guerra al Estado peruano.

Revisando elementos de historia previa a ello, en los años 50 y 60 destacaron las manifestaciones por parte del sector agrario y campesino. En los 70 volvieron a aparecer en el escenario las ocupaciones de tierras por parte de campesinos, respaldadas en la Reforma Agraria propuesta en 1969 por el gobierno del Gral. Velasco (1968-1975).

El sistema educativo se expandió mitificando el progreso económico hasta conseguir que una gran porción de población con determinadas características étnicas, capacidad económica y ubicación geográfica, se sienta lejana y hasta incapaz de transformar sus condiciones de vida y participar del proceso de desarrollo nacional.

El PCP-SL aprovechó estas condiciones para ganar adeptos, en aquellas zonas del país cuyas condiciones socioeconómicas eran desfavorables, especialmente entre los sectores de la población más ignorados y excluidos socialmente.

Los factores causales del conflicto según la CVR (2003a) son de tres tipos. Por un lado, se podría hablar de *factores históricos* relacionados con la desigual distribución de riqueza y poder que sumaron a otros como el centralismo con que se desarrollaban las políticas de Estado; el impulso económico de la costa en deterioro de los Andes y la Amazonía peruana; y las discriminaciones étnico-culturales derivadas de asimetrías entre indios, cholos y mestizos. Esto alude al agresivo proceso de modernización que trajo cambios demográficos, migraciones y urbanización; y económicos, como la expansión del mercado a costa de la crisis agrícola y del empobrecimiento del mundo andino.

Por otra parte, tenemos los *factores institucionales* que apuntan a un Estado poco legitimado y cuestionado, un Estado de Derecho post gobiernos militares, conservadores, verticales y excluyentes. También con la disputa de las grandes potencias que agudizó los conflictos en América Latina, en el marco de la imposición de un ordenamiento regional y de patrones de seguridad dirigidos por Estados Unidos.

Finalmente, habría que sumar *factores coyunturales* como el decrecimiento económico en el Perú en la década de los 70, se combinó con la masificación de la educación, los vacíos de poder en zonas rurales andinas a raíz del fracaso de la Reforma Agraria, y la ausencia de organizaciones partidarias.

Todos estos factores facilitaron un periodo extremo en violencias que arrastran la violencia estructural de la que habla Galtung (1993), expresada en la crisis social, política, económica y cultural que por esa época influyó en la duración del conflicto, desentrañando nuestras más terribles brechas y fracturas sociales.

El conflicto armado produjo pérdidas humanas, lesiones físicas y una serie de traumas en las personas que sobrevivieron y/o fueron testigos de dicha tragedia, prolongándose sus sufrimientos hasta día de hoy, inclusive. Por tanto, si hablamos de consecuencias hablaremos de las secuelas.

Por un lado, las *secuelas psicosociales*, el miedo y desconfianza producidos por la violencia sistemática contra personas y sus comunidades, la pérdida del amparo familiar por las muertes y desapariciones, y la pérdida del referente comunal. La desconfianza se filtró en los espacios de organización comunitaria, los daños al nombre y al cuerpo afectaron la identidad de las personas, desde la estigmatización hasta la violación sexual, la tortura y el despojo de la condición humana.

Por otro lado, las *secuelas sociopolíticas* como los daños a nivel organizativo y comunitario, la dispersión y fragmentación reflejadas en el desplazamiento forzado y el

despoblamiento de comunidades. El desorden, la generalización de la violencia, la estigmatización y la exacerbación de los conflictos. La fractura del sistema de representación, participación y del orden jerárquico con la eliminación de líderes.

Y las *secuelas económicas* como afectación directa al capital humano y social, la disminución de la capacidad productiva familiar, el desplazamiento de la fuerza de trabajo. La destrucción de infraestructura social y comunal, el abandono de la tierra y la descapitalización, el impacto de la sustracción y destrucción de bienes y el empobrecimiento. El detrimento de las instituciones económicas, a raíz de la perturbación de las formas colectivas de organización del trabajo, la suspensión de redes y espacios de comercialización, y la paralización del desarrollo comunitario.

Todas estas secuelas han sido identificadas por la CVR (2004) y forman parte de las nefastas consecuencias de un conflicto que afectó sobre todo a quienes nada tenían que ver con los fines y estrategias de los grupos subversivos ni de las fuerzas estatales que los combatían.

Pero ¿cuál fue el perfil de las personas más afectadas por dicha violencia? En las zonas más golpeadas pocos se libraron de la violencia; niños, ancianos, hombres y mujeres. Pero a pesar de su carácter masivo y de su concentración en las zonas más pobres y rurales, la guerra buscaba a los hombres de entre 20 y 49 años, «cabezas» de familia, comerciantes, autoridades, estudiantes, campesinos (CVR, 2004: 42).

La CVR (2003a) identificó que más de la mitad de las 10 mil víctimas de Sendero Luminoso fueron hombres agricultores y ganaderos. En las zonas rurales y departamentos más empobrecidos se produjo la mayor cantidad de víctimas. Aproximadamente cuatro de cada diez muertos o desaparecidos vivían en Ayacucho y tres de cada cuatro eran quechua hablantes. La mayoría sin estudios superiores y casi sin estudios secundarios. El ejército y la policía nacional también seleccionaron a sus

víctimas por ser jóvenes, dirigentes, campesinos o pobladores pobres, tal es así que 12 de cada 100 víctimas fueron autoridades.

De violencia sexual, las víctimas fueron mayormente mujeres quechua hablantes (75% de los casos), de origen rural (83%), campesinas (36%) o amas de casa (30%), es decir, fueron las peruanas más desprotegidas y excluidas quienes sufrieron esta grave lesión a sus cuerpos y a sus vidas por parte de las Fuerzas Armadas y de los grupos subversivos. Éstos fueron también responsables de actos como el aborto forzado o la servidumbre sexual (CVR, 2003b: 49-50).

Un caso emblemático que permite dimensionar los niveles de abuso a los que se llegaron es el de la localidad de Manta, en el departamento de Huancavelica, en donde los casos de niños y niñas que desconocen la identidad de sus padres son numerosos, y cuyos apellidos no son los reales, sino que corresponden a los apodos o grados militares de los responsables.

A partir de estos datos, se infiere que la violencia que generó dicho conflicto tuvo manifestaciones distintas a nivel nacional, en el campo y en la ciudad, en la costa, sierra o selva.

La Sierra fue el espacio que la presencia subversiva eligió para ejercer sus objetivos de control y nueva construcción del poder. Al llegar los militares combatieron contra esto a través de métodos muy violentos, arremetiendo incluso con la población que vivía a dos fuegos. La población de zonas rurales también se organizó en Comités de Autodefensa con el apoyo del ejército, logrando aportar a la derrota de la subversión.

En las ciudades SL aplicó métodos para infundir terror e inseguridad, filtrándose en las organizaciones barriales con afán de seguir controlando a la población, de la misma forma que en las universidades.

En la Selva el control costó más por la extensión de los territorios y la vegetación. PCP-SL cobró cupos al narcotráfico, abusó de las comunidades indígenas, violando a sus mujeres y reclutando a sus jóvenes, manteniéndolos en condiciones de servidumbre y enfermedad.

No nos cabe duda, entonces, de que este proceso de violencia fue selectivo con sus víctimas. Los apellidos Quispe y Huamán fueron los más frecuentes en el registro de desapariciones y muertes en la base de datos de la CVR, una muestra de la distancia y desconocimiento que existe dentro de la propia población peruana. Así lo expresa la CVR (2004: 19-20:

[...] el Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y con escasa instrucción formal se desangró durante años sin que el resto de la Nación se percatara de la verdadera dimensión de la tragedia de ese «pueblo ajeno dentro del Perú».

El factor étnico histórico es, en definitiva, una cuestión irresuelta en la sociedad peruana y eso se evidenció en el conflicto de esta magnitud de violencia y costos humanos. La violencia fue y sigue siendo selectiva. Así se manifiesta en los conflictos de hoy, como veremos en el siguiente apartado.

3.3. Punto de partida: la desigualdad

Latinoamérica sigue siendo la región más desigual del planeta, aunque según el índice de Gini en los últimos 8 años se ha dado un proceso de reducción de dichos niveles en la región. Perú está en el grupo de países que ha mejorado en un 0,01 este indicador. Hay que señalar que coeficiente de Gini puede ser igual o acercarse al valor de 1 para indicar que existe una desigualdad máxima, o ser igual o acercarse a 0 para señalar igualdad máxima.

La desigualdad en el ingreso a nivel nacional en 2015 es de 0,44, es decir, igual a los dos años anteriores. Si desagregamos estas cifras, tenemos que en el 2015 existe

un 0,40 de desigualdad a nivel de ingresos en la Costa, similar al del 2014; tenemos un 0,45 en la Sierra donde mejora un 0,01; y un 0,46 en la selva donde más bien empeora por 0,01 (INEI, 2016b: 22).

Sin embargo, estos índices siguen teniendo como indicador predominante el ingreso monetario o el precio de la canasta familiar o la capacidad de gasto. Incluso cuando tenemos buenas razones para pensar que son otros aspectos o dimensiones de la vida de las personas los que influyen de manera importante en su desarrollo y desempeño en el día a día. A fin de cuentas, el bienestar humano no depende únicamente del dinero.

Según la CEPAL en el Perú, un 50% de la población de entre 16 y 29 años declara haber sido víctima de un acto delictivo, más del 30% declara haberlo sido con violencia y alrededor del 18% sin violencia (CEPAL, 2014: 150). La inseguridad representa una amenaza, no solo frente a la violencia de la que se puede ser víctima sino frente a los altos niveles de desconfianza, miedo y agresividad con que tiene que vivir y relacionarse la población.

El Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo (PNUD) desarrolló el Índice de Desigualdad de Género (IDG) como metodología para medir la desigualdad. Esta medición estima la pérdida de logros en cuanto a tres principales aspectos: salud reproductiva, empoderamiento y acceso al mercado laboral, producto de la desigualdad de género.

Según el INEI (2016a: 14-15) el IDG para el Perú en 2015 fue de 0,420, en 2006 de 0,438 y en el 2000 de 0,526. Respecto a los países de Latinoamérica, Perú tiene un IDG inferior al de Ecuador (0,407), México (0,373) y Chile (0,338); y superior al de Colombia (0,429), Brasil (0,457) y Guatemala (0,533).

Por otro lado, el INEI señala que para el 2015 el empoderamiento y, en concreto, el acceso a escaños en el parlamento peruano para las mujeres es de un 26,9% frente a un 73,1% de los hombres. Por otro lado, la tasa de participación en la fuerza de trabajo es de 63,4% para las mujeres frente a un 82,5% de los hombres (INEI, 2016a: 13).

Al parecer, Perú ha iniciado un proceso de reducción de desigualdades en materia de género visibles en los aspectos de salud, empoderamiento y trabajo, como especifica el referido IDG. Probablemente esto se vea potenciado por la promoción de normas y políticas para enfrentar la violencia contra las mujeres por parte, así como por la asignación de recursos para promover la igualdad de género desde el Estado.

Los avances conseguidos en cuanto al empoderamiento de las mujeres aún mantienen grandes brechas cuando se trata de mujeres y niñas indígenas, rurales o en situación de pobreza. Asimismo, se requiere mayor capacidad por parte de las instituciones para hacer cumplir las normas creadas contra la violencia de género. En definitiva, a los países latinoamericanos les queda un largo recorrido para que estos avances representen cambios profundos en el ejercicio de derechos y la participación igualitaria sin ningún tipo de discriminación por género.

Otro asunto es la pobreza, si bien Perú sale favorecido en las estadísticas de los últimos años, que indican que esta ha disminuido, esto no significa que se le haya erradicado, menos que haya dejado de afectar a los sectores de siempre, rurales, campesinos, pueblos indígenas, entre otros colectivos poblacionales en situación de vulnerabilidad.

En el Perú la pobreza monetaria se mide por el nivel de gasto en la canasta básica familiar. En el año 2015 la pobreza monetaria en el Perú era de 21,77%. A comparación del 2014 disminuyó en un 0,96. En el área urbana la pobreza llegó al 14,5% y en el área rural al se triplica con un 45,2%. En la Sierra la pobreza campea con

un 32,5% pero en sus zonas rurales se convierte en el 49%. En la Selva llega a 28,9% pero en sus zonas más rurales al 41,1%. En la Costa el índice de pobreza monetaria es de 13,8% pero en sus zonas rurales es de 30,6% (INEI, 2016b: 44-45).

Ciertamente, el poder adquisitivo de algunos sectores se ha elevado porque han adquirido mayores capacidades para insertarse al sistema financiero, a través de créditos u otras modalidades de endeudamiento y especulación financiera. Sin embargo, en relación a los aspectos no monetarios de la pobreza como la exclusión social, las capacidades, entre otros, no ha sido erradicada en los sectores más vulnerables.

La violencia sistemática ejercida durante el gobierno armado interno, como hemos relatado en el apartado anterior, aportó mucho y negativamente al círculo de la pobreza en el Perú, a las limitaciones y rupturas del tejido social. La violencia acompaña nuestros procesos de transición y de cambios históricos desde tiempos coloniales, la violencia estructural ha configurado sociedades escindidas en cuanto al reconocimiento e identificación cercana y común como país.

Además, nuestros sentidos de pertenencia han sido marcados por el nivel de satisfacción de necesidades y aspiraciones que, en el referido contexto, en el caso de colectivos como pueblos indígenas, afrodescendientes o campesinos, se encuentran permanentemente insatisfechas en el aspecto social, material y en el que implica mayor agencia y participación en los procesos de decisión que les involucran.

Un ejemplo claro y preciso para esta investigación es el de los pueblos indígenas. Se trata de un colectivo de personas que habitan este país y región desde tiempos ancestrales, con una cosmovisión diferente de la vida y del entorno, y aun con ello no han sido ajenos a los diversos procesos de cambio, territoriales y de transformación de sus identidades.

Sería ideal que estos pueblos originarios fuesen reconocidos por ello, por su historia y aporte en la conformación de la sociedad diversa que somos, pero no. Hablar de pueblos indígenas en Perú es hablar (aún) de pobreza, exclusión, ruralidad, asistencialismo, discriminación e incluso, de obstáculos para el desarrollo.

Para ilustrar esta posición con estadísticas, revisemos la medición de la pobreza que realiza el INEI (2016b: 58) a partir de la variable lingüística. En el año 2015 la pobreza afectó a un 36% de personas que indicaron hablar alguna lengua nativa, y a un 21% en personas que tienen como primera lengua el castellano.

Aunque se trate de zonas rurales en donde la brecha de pobreza es 5 veces más que en zonas urbanas, o en ciudades urbanas donde también tienen presencia los pueblos indígenas, la pobreza se ha convertido en una acompañante asidua para este sector de la población nacional.

No olvidemos que aproximadamente del total de víctimas del conflicto armado interno registradas por la CVR, el 79% pertenecían a zonas rurales del país y el 75% hablaba quechua (CVR, 2004), lo cual evidencia el carácter selectivo de la violencia en el Perú o «del peso de desigualdad étnica y racial de la violencia», como diría el antropólogo Ramón Pajuelo (2013: 22).

El mismo autor (2013) señala que las diferencias étnicas se cruzan con múltiples brechas como las de género, socioeconómicas, territoriales, entre otras, de manera que componen un panorama complejo de desigualdad ciudadana en el Perú. Conuerdo con esta disertación pues las situaciones de discriminación, abuso, asistencialismo, machismo se interrelacionan sobre una base común de violencia y desigualdad que reproducimos permanentemente.

Esto representa un continuum de violencia para las poblaciones indígenas y originarias. Desde su historia han tenido que enfrentarse o por lo menos defenderse de

la intromisión en sus territorios, de los españoles en su momento, de los terratenientes, los caucheros, las empresas y hoy, hasta del propio Estado y su afán por implementar políticas económicas que tienen como base el ingreso y la explotación de sus territorios, que se caracterizan por su biodiversidad, su riqueza natural y sociocultural.

3.4. Perú: desarrollo a toda costa

Antes del Consenso de Washington, los Estados Latinoamericanos vivían una crisis en aumento por el elevado y creciente endeudamiento público y de los intereses marcados por Estados Unidos, la altísima y variable inflación, con la consecuente alza de precios, la caída del PIB generada precisamente por la inyección de subsidios al sector público. Dicho Consenso se forja en este terreno y en base al manejo técnico y elitista del horizonte económico de los Estados.

Según el economista estadounidense Joseph Stiglitz (1998), el logro de buenos resultados económicos para un gobierno requería la liberalización comercial, la estabilidad macroeconómica y la adecuada fijación de precios. Una vez conseguido esto, el mercado se encargaría de gestionar los recursos y promover el crecimiento. Sin embargo, en el proceso de implementar estos criterios existen vacíos en cuanto a políticas de regulación fiscal y de promoción de la transparencia, por ejemplo.

Perú ha seguido estos lineamientos del Consenso de Washington, a costa de una desregulación progresiva en materia de participación y sostenibilidad del propio proyecto de desarrollo en relación a la población. Asimismo, la política de sinceramiento y transparencia ha sido adoptada, pero con limitaciones que responden a coyunturas políticas, tal es así que los índices de corrupción en la gestión de los recursos son altos.

En el año 2015 el índice de corrupción del Perú era de 36, ocupaba el puesto 88° de 167 países en el ranking de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional (2015), cuya metodología combina la selección de fuentes institucionales confiables y datos del sector público, ambas con precisión cuantitativa y comparables entre países.

En los años noventa el gobierno de Fujimori fue el principal implementador de las reformas macroeconómicas y estructurales en el país. Si bien los primeros años fueron de crecimiento económico y apertura comercial a la inversión extranjera, se acabó poniendo en crisis a la propia industria, haciéndole perder competitividad, aumentando costos de producción, exportando caro e importando barato. Ese afán privatizador y transnacionalizador cambió la distribución espacial de proyectos de inversión, como los del rubro minero.

Si el objetivo de las políticas en el marco del Consenso de Washington era fortalecer bases fiscales y recuperar las finanzas del Estado, por supuesto que fracasaron. Las condiciones previas institucionales, económicas y políticas agudizaron los resultados negativos de dicha aplicación de reformas que apuntaba hacia una sola dirección, hacia una estabilidad económica excluyente y desigual. Más todavía si consideramos el contexto de violencia en los 80's y 90's que impactaron en la producción y el empleo, por ejemplo.

Durante la dictadura de Alberto Fujimori también se ejercieron mecanismos de gobierno para controlar a las masas desde una doble vertiente. Primero, bajo el impulso de la modernización basada en el libre mercado y en la ejecución de programas asistencialistas que nos llevaron a los primeros lugares de pobreza y desigualdad en toda América Latina. Segundo, produciendo la ruptura en el tejido social a través de la violencia sistemática y política ejercida durante su gobierno (Pajuelo, 2004: 54).

A partir del 2001, Alejandro Toledo entró al gobierno y en términos económicos dio continuidad a la política de privatizaciones de empresas públicas iniciada durante el fujimorismo que contenía no sólo una altísima inyección de capitales extranjeros sino también altos niveles de corrupción y apropiación ilícita de fondos públicos, así como libre disponibilidad monetaria para obras de corto alcance, con los que era usual ganar el apoyo de la población en situación marginal (Remy, 2005: 156-157).

Durante ambos periodos de gobiernos se observó un crecimiento de los conflictos sociales, pues los efectos del modelo neoliberal impuesto en los noventa empezaban a hacer mella en el bienestar y la confianza de la gente.

En el 2006 fue elegido Alan García, por segunda vez, un presidente que ha sido un impulsor tenaz del crecimiento económico en la misma línea de abrir y empujar el país hacia la inversión de capital externo. Con apertura y horizontalidad para con las empresas e intolerancia e indiferencia para con las poblaciones que esperan que dicho crecimiento les chorree, pero no a costa de la explotación desmesurada de sus recursos ni la invasión de los territorios que habitan y cuidan desde tiempos ancestrales. En su gobierno se da el conflicto violento emblemático como fue el «Baguazo», a raíz de un conjunto de normas que facilitaban el acceso de empresas a territorios indígenas.

En 2011 asumió las funciones presidenciales Ollanta Humala, generando expectativa en el país y en la región latinoamericana por su discurso de izquierdas que prometía acabar con el modelo neoliberal, al que finalmente terminó rindiéndose. Durante el gobierno de Humala se impulsaron medidas económicas para simplificar la aprobación de proyectos de inversión a nivel nacional, afectando derechos fundamentales como más adelante explicaremos.

Durante su gestión sucedieron conflictos emblemáticos como el que rodeó al proyecto minero Conga, debido al rechazo masivo de la población de Cajamarca. Una

situación impensable unos años antes, pues precisamente su campaña electoral se enfocó hacia la población campesina a la que ofrecía, a través de una consigna, «¡agua sí, oro no!». Lo que no sorprende es que ahora esté investigado por corrupción.

En 2016, Pedro Pablo Kuczynski, a quien podría ubicarse ideológicamente a la derecha, ganó las elecciones presidenciales por muy poco margen y básicamente con el impulso de diversos sectores que rechazaban el retorno del fujimorismo. Fue Ministro de Energía y Minas durante el gobierno del Ex Presidente Fernando Belaunde en 1980 y Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía durante el gobierno del Ex Presidente Alejandro Toledo en 2005. Kuczynski es un tecnócrata que ha trabajado para el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), también ha sido miembro de directorio de varias empresas privadas del sector siderúrgico, minero y energético de Perú, Estados Unidos y África Occidental. Representa una opción claramente vinculada a las transnacionales, los lobbies y las grandes corporaciones, es decir, la continuidad de un modelo que prioriza la inversión económica, antes que los derechos las personas y los territorios a quienes afecta directamente.

El modelo de desarrollo implementado por estos gobiernos se basa en la mera valorización monetaria de los recursos naturales, su extracción y explotación irracional e inconsulta con quienes son habitantes originarios de dichos territorios y han sabido conservarlos y aprovecharlos con un respeto que ni el propio gobierno ni las empresas demuestran.

Los conflictos sociales que actualmente se suscitan tienen que ver con esta disputa, entre la defensa del progreso económico desde una visión unilateral y la lucha de grupos que son afectados en sus derechos de decisión y de bienestar. Este escenario nos plantea la imperiosa necesidad de un Estado y un aparato institucional con

capacidad de aprender lecciones y de manejar esta gran dicotomía fundada en la desigualdad, de mejorar su relación y comunicación con la sociedad.

Una coyuntura reiteradamente desfavorable para las poblaciones que ya viven en desventaja económica y social, es una gesta de indignación y protesta social, de manifestaciones diversas de descontento frente a la injusticia social y la desatención por parte del Estado, quien ha pasado a ser defensor de los intereses de los inversionistas y no de la población.

Virginia Vargas (2009: 93), socióloga y feminista peruana, señala a propósito de la coyuntura convulsionada a causa de las divergencias descritas y la violencia en que derivan muchos de los conflictos sociales, que las fisuras de desigualdad son tan profundas que hasta los tiempos y espacios sociales se reconfiguran para dar lugar a manifestaciones nuevas en la movilización de colectivos de población cuyas demandas son de larga data inclusive.

Los bajos niveles de participación ciudadana en los procesos sociales, económicos y políticos, así como los altos niveles de desigualdad e injusticia social a los que ya nos hemos referido, son efectos de este modelo y de cómo se ha reproducido una situación de inequidad social y distributiva, ante lo cual el politólogo argentino Oscar Oszlak (2007) sostiene que se requiere tanto de gobernabilidad democrática como de desarrollo económico, para alcanzar un modo de organización más democrática.

Pero precisamente esa ha sido la constante del modelo primario exportador y extractivista peruano, una ausencia total de participación ciudadana en el otorgamiento de licencias para inversiones mineras, por ejemplo. La minería en el Perú lleva más de 20 años de expansión, con la entrada de Minera Yanacocha en los años noventa, la más grande mina de oro de Sudamérica, se inició un nuevo periodo de apogeo en este rubro.

Actualmente, el 15% del territorio nacional está concesionado a la minería. Es verdad, como dice el economista peruano De Echave (2012), que esto no significa que todas las concesiones vayan a terminar siendo zonas de extracción, sin embargo, son un importante referente del avance de la actividad minera en el país. De hecho, antes se creía que solo había minería en zonas andinas, pero hoy podemos encontrar zonas de exploración y explotación minera en zonas costeñas y amazónicas.

La Ilustración 5 nos muestra un mapa basado en la información que registra el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). En él se puede visualizar la magnitud de la superposición de concesiones mineras en el territorio nacional. Son casi 19 millones de hectáreas de territorios costeños, amazónicos y andinos, en manos del sector empresarial minero.

El modelo extractivista minero en Perú tiene cuatro características importantes de analizar e identificar pues, a partir de ellas, sostiene el antropólogo peruano Gerardo Damonte (2014), se reproducen un conjunto de desigualdades sociales.

La primera de ellas es el discurso tan arraigado de que la minería es progreso y desarrollo. Eso ha calado tanto en la sociedad peruana que cualquier cuestionamiento frente a dicha actividad, con el correspondiente fundamento económico o ambiental, pareciera caer en saco roto y más bien generar suspicacia.

En segundo lugar, dicho discurso refuerza la necesidad de buscar capitales extranjeros que inviertan en esta actividad en el país, por lo tanto, los intereses nacionales se convierten en una proyección de los de las multinacionales foráneas y privadas que deciden invertir en Perú.

Ilustración 5: Perú: Mapa de concesiones mineras
Fuente: Cooperación (2016).

Entonces, enlazando lo anterior con una tercera cuestión, todo lo que supone regulación estatal de estas inversiones termina flexibilizándose y convirtiéndose en un simple procedimiento, para lo cual se ha generado una especie de burocracia minera que responde a intereses privados específicos, como ya se ha señalado.

El modelo extractivo minero peruano se caracteriza también por la alta conflictividad alrededor de los proyectos mineros. Este es un rasgo que tanto el gobierno como las empresas siguen sin poder manejar. La población más afectada se organiza en diversos colectivos, pero de manera desarticulada y con agendas locales concretas, por lo tanto, las luchas por el ambiente y el territorio son concretas y específicas en cada zona, aunque es verdad que, como veremos más adelante, hay conflictos emblemáticos que han tenido una inevitable repercusión a nivel nacional.

Desde esta lógica el desarrollo ha generado fragmentación política, centralismo, debilitamiento institucional y participación excluyente. Por lo tanto, la afirmación democrática se contradice con la continuidad del neoliberalismo en este sentido (Pajuelo, 2004) en tanto este sigue siendo fuente de desencuentros, conflictos y violencia. Las crisis no han sido sólo económicas sino también sociales, culturales y políticas, especialmente alrededor del rol del Estado como garante y protector de derechos.

3.5. ¿Dónde quedan los derechos?

Existe una especial prioridad por parte del Estado peruano en lograr la ejecución de proyectos mineros e hidrocarburíferos, aun sin contar con la correspondiente «licencia social», algo que en Perú es equivalente a contar con la aceptación de las poblaciones aledañas a los proyectos extractivos, un concepto que surgió como parte del

propio discurso empresarial minero, hacia fines del siglo XX en Canadá (De Echave, 2015).

Con esa finalidad, se viene expidiendo normas legales concretas en materia ambiental, conocidas en el contexto peruano como «paquetazos ambientales», con las que el gobierno so pretexto de incentivar la inversión privada, ha emprendido una flexibilización de la normativa ambiental en relación a procedimientos administrativos y acciones de supervisión y control del cumplimiento de estándares ambientales, lo que deriva en crecientes conflictos socioambientales.

Esto se traduce en la reducción de plazos que impiden una evaluación seria de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que son requisito para la aprobación de dichos proyectos, en la falta de exigencia para realizar estudios serios cuando los proyectos de inversión se amplían y pueden contener cambios sustantivos, en la restricción de las facultades de control y fiscalización de las actividades desarrolladas en dichos proyectos, etc.

Esta situación afecta derechos fundamentales de las poblaciones ubicadas alrededor de los lugares en los que se desarrollan dichas inversiones, relacionadas con la actividad extractiva minera y de hidrocarburos (gas y petróleo).

En ese sentido, tenemos la aprobación y promulgación de las siguientes leyes: Ley 30230 - Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos para la Promoción y Dinamización de la Inversión en el País; Ley 30237 - Ley de Promoción para la Inversión del Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible; y el Decreto Supremo N° 001-2015-EM expedido por el MINEM que «aprueba disposiciones para procedimientos mineros que impulsen proyectos de inversión», al amparo de los recordados D.S. N° 054 y 060-2013-PCM de mayo del 2013.

Se trata de leyes y normas que trasgreden la Constitución, que atentan contra la propiedad ancestral, la autonomía y el derecho a la consulta previa de las poblaciones originarias. De esta manera, los graves impactos a la seguridad territorial de las comunidades que residen en territorios considerados de «interés» para la economía nacional, quedarían en la impunidad.

Las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad Nacional¹ han emprendido acciones legales contra el Decreto 001-2015-EM y la Ley 30230 para pedir su derogación puesto que se contradice con la Ley N° 24656 - Ley General de Comunidades Campesinas, que considera a la Asamblea Comunal como espacio y ente decisor, no sólo a los dos tercios que considera el referido decreto.

En el capítulo anterior pudimos hacer un recuento de aquellos derechos que están protegidos constitucionalmente y por tratados internacionales y que hoy, se ven en riesgo por la actuación e impunidad de gobiernos y empresas, principalmente. Por citar un derecho, el Convenio 169 señala en su artículo 6 que el proceso de consulta previa, libre e informada es un derecho y debe efectuarse de buena fe, y los gobiernos deben hacer los esfuerzos necesarios para llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de los pueblos acerca de las medidas propuestas (OIT, 1989). Es decir, el énfasis debería estar en el proceso más no en los resultados. Pero si después de todo esto no logran ponerse de acuerdo, será el Estado quien tome la decisión final sin contravenir el marco de protección de derechos de los pueblos.

Para el caso peruano, si bien en 2011 se aprobó la Ley 29785 - Ley de Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios y en 2012 su Reglamento, estas

¹ El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú está conformado por la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC) y la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA).

normas tienen una serie de deficiencias en cuanto a la participación y a la oportuna asesoría técnica de los pueblos interesados.

Sumado a ello, existe una estrategia para imponer el ingreso de las empresas mineras a los territorios indígenas u originarios. Dice un dicho popular «divide y vencerás». Dividir a quienes desde tiempos ancestrales habitan zonas de reserva natural ricas en minerales e hidrocarburos, donde se concentra el interés de las inversiones extractivas, supone una ventaja en el camino de lograr acuerdos y negociaciones que acaban arrasando derechos comunitarios y facilitando el acceso a sus recursos, sin consulta, sin respeto y sin reparar daños económicos, sociales, culturales y medio ambientales.

Frente a esta situación de afectación directa e indirecta a los pueblos indígenas y originarios, el Estado mantiene un doble discurso. Por un lado, en las declaraciones públicas de sus altos funcionarios manifiesta voluntad de diálogo para lograr la licencia social de las poblaciones que se encuentran en las áreas de influencia directa de los proyectos extractivos, pero, por otro lado, en la práctica asume actitudes de imposición de los mismos lo cual evidencia una fuerte posición de represión y criminalización de la protesta social de quienes defienden sus derechos, territorios y comunidades.

3.6. Conflictividad social peruana

En un contexto regional de extractivismo agresivo que pone en riesgo la protección y defensa de derechos fundamentales, surgen situaciones críticas y conflictivas que pueden llegar a ser violentas, la realidad así lo demuestra. Como sabemos, las situaciones violentas impactan más que las situaciones pacíficas, no sin la ayuda de los medios de comunicación que limitan nuestra capacidad de ampliar la

mirada respecto de los conflictos y, más bien, la reducen a una serie interminable de imágenes violentas y agresivas.

En esa línea, el conflictólogo catalán Eduard Vinyamata (2001: 41) señala que «estamos acostumbrados a considerar los síntomas visibles como el problema en sí mismo; de manera parecida a como identificamos los conflictos con situaciones de violencia física que se producen entre varias personas o grupos de personas».

Como ya hemos explicado en el primer capítulo de esta tesis, el conflicto en su sentido más negativo resulta casi un sinónimo de violencia, al punto de confundirlo solo con manifestaciones en este sentido.

Los medios de comunicación construyen realidades a través de representaciones, no siempre con la investigación u objetividad necesarias. Se trata de un proceso que involucra conocimiento y simbología que influyen en las prácticas sociales respecto de los conflictos, como bien acota el sociólogo peruano José Vargas (2009: 125).

El actual alcance e inmediatez de la tecnología y de las comunicaciones es un arma de doble filo. Por un lado, representa un conjunto de herramientas para el registro y la denuncia inmediata y cercana a la población de a pie, por otro, puede más bien suponer la trivialización o distorsión de determinadas situaciones de violencia con la finalidad simple y morbosa de reproducirla, mas no con un fondo preciso de denuncia.

En el contexto peruano la exclusión social suele ser abordada por los gobiernos desde el temor, el asistencialismo y el clientelismo; o, desde la represión y el control social sobre quienes son considerados opuestos al régimen o a sus políticas y por ende peligrosos. Contamos con un principio de autoridad que puede llegar a ser arbitrario y cometer vulneración de derechos; generando una creciente desconfianza y la sensación de riesgo tanto a nivel de relaciones personales como con las instituciones.

Ahora bien, llevamos ya un tiempo de proceso de consolidación democrática y de crecimiento, en cuyos marcos es inevitable la existencia de conflictos que requieren una mirada o sentido de oportunidad, pero este muchas veces se trunca por la violencia que uno o más actores utiliza, además del irrespeto y la vulneración implícitos.

Es necesario entonces conocer bien los ejes causales de nuestros conflictos para empezar a generar mecanismos adecuados y efectivos a la realidad peruana. Una de las principales causas de conflictos es la falta de escucha y diálogo, la imposibilidad de acercarnos y encontrarnos desde nuestras diferencias. Otra causa es la mezcla perversa entre poder económico y político y el modelo económico extractivista que no prioriza el bienestar de las grandes mayorías y menos de la naturaleza.

La relación entre conflictos sociales y violencia se estrecha aún más cuando la voluntad política y las capacidades para dialogar son limitadas. Esto incide en la forma en que se tratan los conflictos y obliga a cuestionar aquellas políticas públicas que responden a una estructura social fragmentada y desacreditada.

Sin embargo, existen algunos esfuerzos por llevar un registro oficial de los conflictos sociales en el Perú desde algunas instituciones públicas e instancias de gobierno, cuyo mandato es incidir o aportar con sus buenos oficios a una gestión positiva de los mismos.

Tenemos en primer lugar a la Defensoría del Pueblo (DP), órgano autónomo creado por la Constitución de 1993 cuya misión es proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, y supervisar el cumplimiento de deberes por parte de la administración pública y de servicios públicos prestados a la ciudadanía.

La DP (2012) hace seguimiento a los conflictos sociales en el Perú desde el año 2004. En el 2009 crea la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, con funciones específicas para contribuir a la solución pacífica de los

conflictos a través de la investigación, monitoreo, análisis, gestión, seguimiento y diseño de mecanismos para atender la situación de conflictividad social en el país. Entre algunas herramientas, la más accesible es el reporte electrónico mensual de conflictos sociales a nivel nacional que a través de su web institucional.

En segundo lugar, está la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio responsable de coordinar y hacer seguimiento a las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo, con la misión de promover la participación y concertación de los diversos sectores y poderes del Estado para contribuir al desarrollo integral, sostenible y equitativo del país.

La PCM realiza, desde el 2007, labores de prevención y seguimiento de los conflictos. Los primeros años lo hizo a través de la Unidad de Prevención de Conflictos que dependía de la Secretaría General, en 2010 se creó la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales y en 2012 la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), quien es finalmente el órgano técnico especializado con la responsabilidad de conducir los procesos de diálogo con diversos actores sociales, representantes de instituciones y funcionarios del ámbito público y privado, con la misión de gestionar los conflictos sociales (PCM, 2011b). Esta instancia también genera reportes sobre la situación de los conflictos sin embargo su publicación no ha sido regular.

Pero resulta interesante hacer una mirada de ambas propuestas, la de la DP y la de la ONDS pues ambas definen el conflicto social de manera distinta, como también lo son sus modos de clasificación, sus objetivos y marcos de intervención.

La Defensoría del Pueblo (2012: 24) plantea la siguiente definición:

Los conflictos sociales son hechos en los que se amenazan o afectan derechos fundamentales; por un lado, los derechos vinculados a los problemas que originan el conflicto y que no estarían siendo reconocidos o protegidos por el Estado (ambientales, laborales, de propiedad, etc.); y, por otro, los derechos que son puestos en riesgo como resultado de un inadecuado manejo del conflicto social (derecho a la vida, a la integridad, a la libre circulación, etc.).

Esta definición abarca, por un lado, el tratamiento de factores económicos, políticos y sociales que ponen en riesgo los derechos de las personas, involucrando el rol de protección y garante de derechos por parte del Estado, es decir, un nivel de responsabilidad en el conflicto social. Además, introduce elementos de gestión de los conflictos pues según cómo esta se dé el riesgo de vulneración de derechos puede incrementarse notablemente, sobre todo en el plano directo y físico de la confrontación.

Ahora revisaremos la definición de la PCM (2011^a: 17) sobre conflicto social:

Proceso social dinámico en el que dos o más partes interdependientes perciben que sus intereses se contraponen (metas, incompatibles, escasez de recursos e interferencia de la otra parte para la consecución de sus metas y objetivos), adoptando acciones que pueden constituir una amenaza a la gobernabilidad y/o el orden público.

El enfoque desde el que se formula esta definición es distinto al anterior, pues no se menciona al Estado como ente regulador o garante de derechos, sino que, por el contrario, se habla de situaciones que puedan amenazar dicho aparato estatal, expresado en gobernabilidad y orden público. Tampoco se parte de una base de derechos sino básicamente de metas e intereses que se perciben contrapuestos.

De dos sistemas de monitoreo y gestión de conflictos de la esfera pública y de nivel nacional, Defensoría del Pueblo y Presidencia del Consejo de Ministros, solo el de la primera considera desde su definición del conflicto social, el rol protagónico del Estado en la situación de vulneración de derechos como base causal de muchos conflictos, además de considerarlo pieza fundamental en los procesos de regulación y tratamiento de los mismos.

Ambos sistemas hacen también una clasificación para el correspondiente registro y seguimiento. En la Ilustración 6 se puede visualizar los tipos de conflictos para ambas entidades estatales.

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)	Defensoría del Pueblo (DP)
Ambientales	Socioambiental
Minero – Energéticos e Industriales	Asuntos de gobierno nacional
Hídricos	Asuntos de gobierno regional
Infraestructura	Asuntos de gobierno local
Recursos Públicos	Comunal
Agropecuarios	Cultivo ilegal de coca
Laborales	Laboral
Territorial	Demarcación territorial
	Electoral
	Otros conflictos

Ilustración 6: Perú: Tipología de conflictos en PCM y DP

Fuente: Elaboración propia en base a DP (2012) y de la PCM (2011b)

Se puede observar que existen similitudes respecto al carácter socioambiental, laboral y de delimitación territorial de los conflictos. Pero analicemos ambas perspectivas.

La PCM pareciera basar su clasificación en una identificación del sector de gobierno implicado, esto nos lleva a pensar en competencias de decisión y control, algo que probablemente responde a su función de coordinar y articular desde este nivel de gobierno central a todos los actores para la gestión del conflicto.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo delimita categorías por niveles de gobierno implicados en las situaciones de oposición, incluyendo una dimensión de acceso al denominar *socio* ambiental o al incorporar *asuntos* de los gobiernos locales, lo que a mi parecer refiere a una cuestión de acceso, además de decisión y control de los asuntos que son materia de conflicto. Esta visión puede permitir visualizar diversas dimensiones del conflicto. Para los fines de esta investigación centraremos el análisis en

los conflictos de tipo socioambiental, que más adelante en este mismo apartado definiremos.

Si bien para esta investigación nos identificamos más con la perspectiva de vigilancia y protección de derechos de la ciudadanía desde donde la Defensoría del Pueblo crea su sistema de registro, seguimiento y gestión de los conflictos sociales, ambas instituciones incorporan enfoques orientados a una gestión pacífica y positiva de los mismos, la DP desde un enfoque transformativo y la PCM desde un enfoque de cultura de paz (DP, 2012; PCM, 2011b).

El registro y reporte de los conflictos sociales en el Perú se ha mantenido de manera regular sobre todo en la DP, así que será este el que utilizaremos para dar sustento al análisis de la conflictividad social en el Perú.

La tendencia de conflictividad durante el 2016 ha tenido subidas y bajadas. En enero se inició con 211 casos, entre febrero y abril la cifra bajó hasta 208, entre mayo y julio volvió a subir al mismo rango que en enero, y entre agosto y septiembre volvió a bajar a 207 conflictos. De todas formas, no hemos bajado de 200 conflictos mensuales desde el 2009 que ocurrió el «Baguazo», como se puede ver en la Ilustración 7.

Ilustración 7: Perú: Conflictos sociales 2015-2016

Fuente: Defensoría del Pueblo

PERÚ: CASOS REGISTRADOS POR REGIÓN, SEGÚN TIPO Y ESTADO, SEPTIEMBRE 2016
(Número de casos)

Fuente y Elaboración: Defensoría del Pueblo - SIMCO

Ilustración 8: Perú: Mapa de conflictos sociales 2016

Fuente: Defensoría del Pueblo

El Reporte de la Defensoría del Pueblo N° 151, para el mes de septiembre 2016 (DP, 2016: 15), registra 207 conflictos sociales a nivel nacional. Como se puede observar en la Ilustración 8, los departamentos de Ancash y Apurímac registran cada

uno más de 20 conflictos latentes y activos, el rango máximo que les otorga el color rojo de alerta.

Las 7 regiones en color naranja registran entre 10 y 19 conflictos sociales y el resto de regiones en color blanco registran entre 1 y 9 conflictos, lo cual nos da un país en donde ninguna región se salva de tener casos calificados como conflicto social. De los 207 conflictos sociales registrados, 145 (70%) han sido calificados como socioambientales. Este dato revela aristas importantes presentes en la conflictividad social peruana. Para una mejor visualización de esta distribución, presentamos la Ilustración 9 que indica los porcentajes de casos por tipo de conflicto, según la Defensoría del Pueblo (2016).

Ilustración 9: Perú: Conflictos sociales por tipo
Fuente: Defensoría del Pueblo

3.7. Alerta socioambiental

El reincidente carácter socioambiental de los conflictos en la sociedad peruana no es gratuito, sino que tiene que ver con aspectos del modelo económico neoliberal y extractivista que venimos sustentando desde el capítulo anterior a nivel de región latinoamericana, y de contexto nacional en este capítulo.

El desarrollo impulsado desde proyectos de inversión y aprovechamiento de recursos que de manera probada vienen poniendo en riesgo la salud e integridad de poblaciones y el uso y distribución de los territorios que forman parte del área de influencia de dichos proyectos.

Hablamos concretamente de proyectos mineros que se extienden en un 15% del territorio nacional. Esta expansión ha venido acompañada de conflictos sociales o, por lo menos, eso es lo que muestra la Ilustración 10 basada en el reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo (2016).

**PERÚ: CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR ACTIVIDAD,
SEPTIEMBRE 2016**
(Distribución porcentual)

Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO

Ilustración 10: Perú: Conflictos socioambientales por tipo de actividad
Fuente: Defensoría del Pueblo

De 145 conflictos socioambientales, 91 (62.8%) están relacionados con la minería, 25 (17.2%) con hidrocarburos (petróleo y gas), y 13 (9%) con energía.

José De Echave (2012: 74) nos explica los elementos que han facilitado la expansión extractiva acompañada de conflictos sociales. En primer lugar, está el marco normativo favorable a las empresas extractivas en cuanto a estabilidad jurídica y tributación. Como segunda cuestión se priorizó la actividad minera e hidrocarburífera a costa de modificar normas para restar derechos a las poblaciones rurales campesinas e indígenas sobre sus territorios.

En tercer lugar, tenemos el debilitamiento de la normativa e institucionalidad ambiental en cuanto a la supervisión y sanción de las infracciones ambientales, lo que va unido a los débiles mecanismos de participación ciudadana efectiva. Y, por último, dichos mecanismos de participación ciudadana restringen el acceso a la información justo en la fase previa a la autorización de concesiones mineras, contraviniendo la esencia de la consulta previa, libre e informada que establece el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y la Ley 29785 - Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios.

El extractivismo minero, curiosamente asociado a discursos y promesas de progreso, desarrollo y modernidad, en la realidad lo encontramos vinculado a diversos casos de empobrecimiento y contaminación, además de otros impactos.

Un ejemplo clave de esto es la región de Cajamarca, una de las que tiene mayor participación en la cartera de proyectos mineros a nivel nacional, con más de 20 años de minería, con la presencia del Grupo Yanacocha o la minera de oro a tajo abierto más grande de Sudamérica, y con toda una apariencia de «riqueza» que colisiona con un contundente 50% de índice de pobreza según el INEI (2016c: 1).

La actividad minera ha producido situaciones evidentemente dispares a nivel económico y también impactos en el ámbito social. Esto ha motivado diversas manifestaciones y resistencias, al principio más de índole laboral pero las últimas décadas también sobre la cuestión ambiental. Comuneros y comuneras ven sus territorios empobrecerse a nivel productivo y en cuanto a la disponibilidad de recursos vitales como el agua, ven perjudicada su salud por casos de contaminación directa o indirecta, y su bienestar amenazado por el crecimiento del alcoholismo, la prostitución y la corrupción (Gudynas, 2015).

Existirían suficientes razones, entonces, para que estas poblaciones teman a los impactos de la minería. Solo en la etapa de exploración, que no es de explotación, una de las acciones es construir caminos que serán las vías de acceso para todo el equipamiento y material que se utilice para dicha fase exploratoria en el territorio en cuestión. Solo para crear caminos se tala árboles, se desbroza o incluso se quema vegetación, especialmente en la minería a tajo abierto que remueve toneladas de suelos con un importante excedente que contiene en muchas ocasiones vegetación endémica o nativa de la zona.

La Guía para evaluar EIAs (Estudios de Impacto Ambiental) de Proyectos Mineros, de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW, 2010), describe los riesgos ambientales que un proyecto minero puede desencadenar.

En primer lugar podrían afectarse a largo plazo los recursos hídricos, el agua, tanto la que sirve para el consumo humano como la que aloja vida acuática en las cabeceras de cuenca o en los ríos afluentes, producto del drenaje de ácidos y otros contaminantes, también producto de las detonaciones. La erosión de suelos y la acumulación de sedimentos y de material particulado también puede afectar aguas superficiales lo cual sería tóxico para los peces y la vegetación existente. Los relaves y

desechos que suelen contener sustancias tóxicas como el arsénico, plomo, cianuro u otros, podrían filtrarse a través del suelo y contaminar aguas subterráneas.

En segundo lugar, se pone en riesgo la calidad del aire, a través de la liberación de partículas del material que se emplea en todas las fases del proyecto minero, resultado de las excavaciones, depósitos, o emisiones de gases. Asimismo, el ruido puede perjudicar a las poblaciones cercanas y la vibración puede desestabilizar edificaciones aledañas a la zona del proyecto minero.

En tercer lugar, están los impactos en la vida silvestre a raíz de la «perturbación, remoción y redistribución de la superficie del terreno» (ELAW, 2010: 15). Las especies se ven obligadas a migrar y esto anula parte de la biodiversidad de la zona y condiciona la alimentación de la población cercana.

Otro impacto es el que arriesga la calidad del suelo, a raíz de contaminantes movilizados a través del viento y filtrados a través del agua, suelos que pueden acabar siendo utilizados como parte de material de edificación o como espacio para la actividad humana.

El último y muy importante impacto es el que se da a nivel social, a raíz del desplazamiento de las poblaciones por los conflictos en torno a la explotación de sus territorios, por la migración de colonos que genera presión en el suelo por su crecimiento y por la construcción de edificaciones modernas, por la contaminación de suelos agrícolas o de aguas de pesca, por afectarse la salud de las poblaciones a nivel físico y emocional, y por modificarse o incluso eliminarse algunos espacios de connotación identitaria y cultural que podrían ser arrasados por la construcción minera.

A raíz de estos impactos, diversos colectivos de la sociedad civil se han unido para formular iniciativas de seguimiento e incidencia sobre los conflictos en este rubro. Es el caso del Observatorio de Conflictos Mineros en Perú (OCM), conformado por las

ong's CooperAcción, Grufides y FEDEPAZ, en ésta trabaja quien elabora esta tesis, quienes tienen un sistema de alerta sobre conflictos mineros, pero sobre todo un reporte semestral especializado sobre la situación de las concesiones mineras a nivel nacional, expresada en mapas como el que hemos incorporado en este mismo capítulo.

También tenemos al Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), que suma a las diversas plataformas nacionales y regionales de organizaciones de derechos humanos, derechos colectivos e indígenas, de medioambiente, para denunciar, incidir y proponer medidas de protección y garantía de los mismos.

Los conflictos socioambientales involucran a actores concretos como el Estado, las empresas extractivas y transnacionales, la población de las tres regiones naturales del país, de manera especial las comunidades rurales del ande y de la Amazonía, sus dirigentes u organizaciones representativas, organizaciones aliadas o asesoras de los procesos de negociación en los que derivan algunos de los casos.

En la mayoría de casos se evidencia una falta de reconocimiento de ciudadanía y de derechos fundamentales que desencadena un conjunto de manifestaciones de indignación, desconfianza y, por otro lado, de represión y violencia, especialmente contra quienes reclaman, como veremos a continuación.

3.8. Los conflictivos son ellos. Criminalizar a quienes protestan

El rol del Estado en los conflictos socioambientales ha sido cada vez menos el de regular o promover el diálogo, la justicia y la paz social entre los principales actores del conflicto. El rechazo colectivo hacia la intensificación de la actividad extractiva y el debilitamiento de los estándares ambientales, es abierto y contundente. Ante ello las respuestas del gobierno han evidenciado una alta carga de represión, violenta y

criminalizadora en la mayoría de casos, bajo la justificación de mantener el orden social, el principio de autoridad, el estado de derecho y la seguridad ¿De quién (es)? Se nos ocurre preguntar.

Es así que un rasgo manifiesto en la conflictividad social peruana es la protesta desde diversos sectores sociales, aun cuando existe un marco normativo que respalda el derecho a la participación de la población, estos mecanismos no resultan suficientes para atender y articular las demandas de dichos colectivos en protesta; un contexto en el que no se puede negar una tendencia a recurrir a la intransigencia o diversas formas de violencia para llamar la atención, para hacerse escuchar y, con suerte, lograr que algunas demandas sean atendidas.

La socióloga peruana María Remy (2005) explica que los conflictos sociales se han convertido en espacios para la participación social, claramente marcados por la protesta. Si bien existe un aparato normativo y estatal que asegura la existencia de organismos cuyo objetivo es la participación ciudadana, todas ellas con planes oficiales para actuar en la materia, lo cierto es que nada de esto ha sido suficiente para promoverla en la realidad social del contexto que describimos.

Remy dice sobre la protesta que «mientras más violenta, más eficaz» (2005: 150), una afirmación que puede resultar exagerada y hasta peligrosa, pero que no deja de ser interesante de analizar. Estamos de acuerdo en que este elemento puede estar asociado a una serie de debilidades en cuanto a la organización y representación de los movimientos sociales que protestan, generándose dispersión y vacíos propicios para comportamientos corruptos y hasta agresivos al interior de las propias organizaciones.

Sin embargo, a nuestro parecer, el manejo de la indignación y la organización del descontento no dependen solo de los movimientos sociales. Existe una estructura social que violenta permanentemente a la ciudadanía de a pie y vulnera sus derechos

con políticas que mantienen las situaciones de desigualdad, injusticia, exclusión, asistencialismo y empobrecimiento que afectan distintos aspectos de sus vidas.

En ese sentido, ya podría el gobierno ejercer su rol de garante para el ejercicio y protección de los derechos fundamentales de la población descontenta, pero no, además de parecer esforzarse en mantener la desigualdad social en el país, factor causal de la conflictividad social, la estructura de gobierno que dirige el Estado se ha convertido en un agente más de confrontación y violencia.

Volvemos a Remy (2005) para profundizar en aquella *participación conflictiva* de la que nos habla, que se da en el espacio público y es capaz de conseguir cambios y decisiones favorables sobre reformas o agendas políticas, relativas a sus demandas y reivindicaciones. Es verdad que un lugar en el espacio público nos corresponde a todas y todos, por lo tanto, no tendría que ser necesaria la agresividad o la violencia para ganarlo o recuperarlo, sino un Estado transparente, tolerante y justo, activo y conciliador ante las diferencias.

Pero los gobiernos peruanos del final del siglo pasado y de lo que va del siglo presente, empezando por García y Fujimori por partida doble, continuando con Toledo, Humala y hoy Kuczynski, se han caracterizado por impulsar programas económicos basados en el Consenso de Washington y a un neoliberalismo que no contempla la reparación de brechas tan grandes y estructurales que tiene la sociedad peruana como la injusticia, la corrupción y la discriminación étnica.

Ya en la investigación para la tesis de máster de la suscrita, se analizó un conflicto que entre sus múltiples aristas identificó la discriminación étnica y el racismo, ejercidas por el propio presidente del Perú en ese momento, Alan García, que se refería a la población indígena y todo aquel que defendiera el territorio y el medioambiente como *perros del hortelano* (no comen ni dejan comer), y ciudadanos de segunda y

tercera categoría, mientras en Bagua los manifestantes exigían la derogación de un paquete normativo que atentaba contra sus derechos de propiedad colectiva, ambiente sano y acceso equilibrado a los recursos naturales (DP, 2009).

¿Qué efectos pueden tener estas actitudes políticas, sino denigrar a la población y exacerbar el descontento social? La imposición de un modelo económico agresivo mantiene abiertas las heridas históricas de un país desigual. Pero la situación se agrava cuando estos regímenes impositivos se vuelven represivos y autoritarios con quienes incomodan y se oponen a esta carrera.

Pero recordemos que en esta investigación partimos de una visión transformativa de los conflictos sociales, por lo tanto, no estamos de acuerdo con que una situación de reclamo y protesta equivalga *per se* a violencia. Tampoco compartimos que la responsabilidad, aunque una parte le corresponda, recaiga solo en la sociedad civil como viene sucediendo, atribuyéndole estigmas y acusaciones que polarizan aún más cualquier tensión manifiesta.

En esta línea de reflexión, el sociólogo peruano Carlos Meléndez sostiene que «una extrema penalización de la protesta social incentivará mayores niveles de transgresión de las normas, pues la autoridad existente carece de legitimidad para ejecutar posibles sanciones» (Meléndez, 2005: 181).

Efectivamente, en Perú se criminaliza cada vez más la protesta social, y la violencia ha sido legitimada por nuestras autoridades como una forma de represión, algo que ciertamente forma parte de una tendencia global no solo en el tema ambiental sino también en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, derechos de las mujeres, derechos de libertad de expresión y tránsito, entre otros.

Para ello los gobiernos utilizan a las fuerzas armadas y policiales a quienes delega el supuesto restablecimiento del orden público, en cuyo marco llegan a cometer

detenciones arbitrarias, torturas, fabricación de pruebas y hasta asesinatos contra las y los manifestantes.

Esto ha sucedido en conflictos emblemáticos a propósito de las protestas contra la privatización de servicios públicos en Arequipa en 2002, el proyecto minero de la empresa Manhattan en Tambogrande (Piura) en 2003, la ampliación de operaciones de la empresa minera Yanacocha en Cajamarca en 2004, el proyecto minero Majaz en Piura en 2004, los paquetazos normativos en Bagua (Amazonas) en 2009, contra el proyecto minero Tía María en Islay (Arequipa) en 2015, entre otros.

Por lo tanto, se ha generado un patrón de respuesta violenta y criminalizadora a este tipo de conflictos, de la mano de un conjunto de estrategias para desmovilizar las luchas territoriales, como a continuación desarrollaremos.

En primer lugar, los últimos informes de organizaciones internacionales de derechos humanos (FIDH, 2016; CIDH, 2015) señalan el uso e instrumentalización del derecho penal para perseguir judicialmente y por falsos delitos a líderes y lideresas que luchan y defienden sus territorios, frente a la amenaza de proyectos mineros como los que hemos referido. Esto los embarca en una serie de gestiones y procesos judiciales injustos que les demanda tiempo, recursos y un desgaste permanente considerando que se defienden del propio Estado y de las grandes empresas.

En esa línea, Velazco y Quedena (2015), abogados de derechos humanos que implementaron la estrategia de defensa legal en el conocido caso Majaz² (Piura), sostienen que tanto la aprobación de normas que institucionalizan las respuestas violentas y el abuso de poder por parte de las fuerzas del Estado; como la persecución

² Conocido también como caso Río Blanco. Refiere a un periodo de conflictos y resistencias, entre el 2003 y 2008 aproximadamente, alrededor del proyecto minero que la empresa Río Blanco Copper S.A. pretendía ejecutar en la provincia de Huancabamba (Piura). El caso se caracterizó por hechos de violenta represión y criminalización contra las comunidades campesinas que se oponían.

judicial a dirigentes y opositores, son estrategias para neutralizar la protesta social y desmovilizar a las comunidades y organizaciones que se oponen a los proyectos extractivos (Velazco y Quedena, 2015: 32).

Algunas de las normas aprobadas en este sentido permiten el uso de armamento letal por parte de las fuerzas armadas; la suscripción de contratos extraordinarios de seguridad privada entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y las empresas mineras; o exime de responsabilidad penal a las fuerzas armadas y policiales que causen lesiones con sus armas en el «ejercicio de sus funciones».

Por lo tanto, tenemos un Estado que no solo ejerce la violencia directa, sino que persigue a dirigentes y organizaciones campesinos e indígenas con argucias legales, que pone a las fuerzas de seguridad policial y militar al servicio y bajo la dirección de empresas mineras, y que militariza los territorios para resguardar a las empresas mineras.

Una segunda estrategia, a partir de los procesos judiciales injustamente generados, es la estigmatización y la mella del honor de las y los defensores de derechos (FIDH, 2016; CIDH, 2015). Propiciándose campañas de difamación, señalamientos y hostigamientos en complicidad con los medios de comunicación, tildándolos de «perros del hortelano»³, «antidesarrollo», «antimineros», «terroristas», «vándalos», entre otros calificativos.

Esto genera un clima de intolerancia y agresividad que llega a comprometer la integridad personal de estos líderes y lideresas, considerando los ataques y hasta asesinatos a defensores reconocidos por su lucha, con el objetivo de quitarlos del camino.

³ En alusión a la comedia de Lope de Vega que trata, en resumen, de un perro que no come ni deja comer.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) lleva un registro de víctimas en contextos de conflictos socioambientales a nivel nacional. A día de hoy la cifra de muertes es de 152 personas y 1912 lesiones. Pero es evidente que las secuelas en las vidas de estas personas van más allá de la agresión física, aún cuando sobrevivan a cualquier ataque, se afecta considerablemente su ámbito personal y familiar, comunitario, económico, social y cultural.

Un caso visible y emblemático de criminalización en el Perú actual es el de Máxima Acuña de Chaupe, mujer campesina de Cajamarca que se ha visto violentada en sus derechos de posesión sobre su propia vivienda en una zona que la empresa minera Yanacocha dice ser de su propiedad. Las agresiones han ido desde amenazas y persecución judicial, hasta el ataque frontal en convenio con la policía nacional.

Ante esto queda pensar en estrategias, no solo de defensa legal ante tribunales nacionales e internacionales para alcanzar la justicia y protección que el Estado peruano no les otorga a pesar de tener la obligación de hacerlo, sino también de una política de protección de defensores y defensoras que integre todas aquellas dimensiones que afecta la criminalización, en sintonía con el enfoque transformativo de las situaciones de conflicto que precisamente abordan dimensiones personales, relacionales, estructurales y culturales (Lederach, 2010).

3.9. Recapitulación

En este capítulo he retomado el factor étnico como cuestión irresuelta en la sociedad peruana, algo que evidentemente nos dejó el conflicto armado interno cuya magnitud de violencia y costos humanos no tiene precedentes en la historia peruana. Definitivamente la violencia fue y sigue siendo selectiva.

Estas diferencias étnicas se cruzan con múltiples brechas que componen un panorama de desigualdad ciudadana y confluyen en una base común de violencia y desigualdad que reproducimos permanentemente.

Insistir en que la minería es progreso y desarrollo cuando existen muchos casos que demuestran lo contrario, es querer imponer por imponer. En todo caso y a la luz de los hechos, existen pocas actitudes o voluntades para integrar el elemento ambiental y social en estos proyectos. Por el contrario, otorgar autorizaciones y derechos sobre territorios de comunidades a las empresas mineras, acaba por convertirse en un simple procedimiento, lo cual responde a intereses claramente privados y específicos.

Existe un debilitamiento de estándares en materia ambiental, meticulosamente normado, para facilitar la inversión privada con escasa supervisión y control, generándose aún más conflictos socioambientales.

La asociación del extractivismo minero con discursos de progreso, desarrollo y modernidad, ha demostrado ser falsa en regiones claves como Cajamarca, que con más de 20 años de minería hoy tiene un contundente 50% de pobreza (2016c: 1).

El Estado peruano ejerce violencia directa, persiguiendo y criminalizando luchas, dirigentes y organizaciones campesinas e indígenas, poniendo a las fuerzas de seguridad policial y militar al servicio de empresas mineras, militarizando territorios sobre los cuales se quiere imponer la explotación minera.

Esto agudiza el clima de agresividad hacia líderes, comunidades y organizaciones que resultar ser un obstáculo para la carrera del desarrollo extractivo a toda costa en el Perú.

A partir de estos argumentos abordaremos en el siguiente capítulo un caso específico de conflicto socioambiental, que tiene como protagonista a las comunidades nativas indígenas de Cajamarca, en donde la lucha no solo se da con la empresa minera

sino entre los propios miembros de las comunidades que acabaron divididos ante la amenaza y afectación directa que produjo la fase de exploración ya ejecutada en sus territorios.

CAPÍTULO IV

La vivencia del conflicto en Supayaku

«Aquí tienen supermercado, nuestro mercado es el río».

Albercio Bazán Jempekit⁴

4.1. Introducción

Los conflictos socioambientales son resultado de un contexto sociopolítico que combina el impulso a las grandes inversiones económicas, especialmente las del rubro extractivo, con la aprobación de un conjunto de normas que simplifican los procedimientos para que dichas empresas obtengan derechos de propiedad o de autorización para operar sobre territorios habitados por poblaciones originarias.

Las comunidades campesinas o nativas de Costa, Sierra y Selva del Perú no son necesariamente informadas ni consultadas sobre dichas actividades y, no en vano, se perciben afectadas al igual que sus entornos naturales.

El conflicto entre las comunidades awajún de Supayaku y Naranjos es complejo, pues se genera a partir de la presencia de una empresa minera y sólo la segunda es incluida en la negociación directa, para autorizar su ingreso a dichos territorios.

Podremos observar cómo este conflicto se prolongó en el tiempo con acontecimientos que profundizaron la incomunicación, el miedo y un alto nivel de

⁴ Miembro de la comunidad de Supayaku, presidente de ORFAC.

tensión que ha marcado la vida de la población, a raíz de las disputas y la desatención de las autoridades competentes como bien explicaremos.

Debo reiterar que mientras escribo este capítulo formo parte de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), organización no gubernamental que viene realizando un trabajo de acompañamiento a dichas comunidades, a raíz de la emergencia social y ambiental que denunciaron.

En este sentido, esta organización resulta ser actor secundario en este proceso, por su labor de asesoría a la comunidad de Supayaku en la defensa de su derecho a la consulta previa, de un proyecto minero autorizado por el Estado y por su comunidad vecina, sin haber sido considerada como población de influencia directa, aun cuando dicho proyecto opera en la zona naciente del río Chirinos, fuente proveedora de agua, alimento y más de las referidas comunidades.

Mi experiencia como parte de este trabajo me ha permitido conocer la realidad de la cultura y del conflicto en el que está inmerso el pueblo indígena awajún de la parte amazónica de Cajamarca. Por tanto, este capítulo pretende ser un viaje guiado hacia el contexto, el caso concreto del conflicto y las condiciones que existen para un diálogo transformador.

4.2. La Amazonía Peruana

La Cuenca Amazónica de América del Sur, con una extensión de 6.100.000 km², es la más grande del mundo y posee la mayor diversidad biológica del planeta. Abarca nueve países y constituye un espacio humano rico en diversidad etnocultural. Por lo tanto, sus problemáticas traspasan el aspecto ecológico y son también de índole política y social.

La Amazonía peruana se ubica en las vertientes orientales de la Cordillera de los Andes, tiene una extensión de 736.445 Km² y constituye alrededor del 62% del territorio nacional, esto significa un 15% de la Cuenca Amazónica.

Según cifras oficiales la población indígena de la Amazonía peruana asciende a 332. 975 habitantes (INEI, 2009: 11). Los departamentos íntegramente amazónicos son Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Ucayali; y los que sólo una porción de su territorio corresponde a selva son Cajamarca, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Apurímac, Cusco y Puno. Esta población se distribuye en 60 grupos étnicos y 13 familias lingüísticas (INEI, 2009: 7). El Ministerio de Cultura cuenta con una base de datos en línea que proporciona información básica de 55 Pueblos Indígenas u Originarios identificados en el ámbito nacional.

Cabe señalar que el proceso oficial de identificación de estos grupos ha estado envuelto en controversias y cuestionamientos, porque estarían condicionados a intereses de concesión y operación minera, principalmente en zonas andinas. En pocas palabras, no convenía un reconocimiento explícito como pueblos indígenas pues habría que aplicar (o haber aplicado) la Ley N° 29785 – Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la aprobación de los proyectos de inversión en minería y otros rubros que interesen al gobierno nacional.

La diversidad contenida en la Amazonía Peruana es muy importante para el país y para el mundo. Sin embargo, el modelo de desarrollo centralista y homogeneizador ve en el carácter pluriétnico de la sociedad peruana un problema antes que una potencialidad, de manera que seguimos sin articular nuestras diferencias y sin arribar a un auténtico diálogo intercultural.

Esta situación se refleja, por ejemplo, en que aproximadamente el 70% de la Amazonía peruana esté concesionada a empresas petroleras nacionales e internacionales. La mayoría de las concesiones se superponen a territorios que ancestralmente pertenecen a los pueblos indígenas, algunos en zonas de reserva natural o de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial (PIACI) (Amnistía Internacional, 2009).

La promulgación de la Ley de Consulta Previa no fue, necesariamente, un aporte a la pacificación de los conflictos por la extracción de recursos naturales en territorios andinos y amazónicos. Los movimientos y organizaciones indígenas reclaman que esta norma no se cumple o se aplica como un trámite, sin respeto a los principios de buena fe y criterios de pertinencia cultural que indica el Convenio 169.

En ese sentido, los pueblos indígenas y originarios arrastran una imparable cronología de eventos desfavorables en su historia contemporánea, viene desde la época de las misiones religiosas, el *boom* cauchero, la violencia política (terrorismo y narcotráfico), las epidemias, la expansión del VIH, la tala indiscriminada y el encarecimiento y agotamiento de recursos naturales no renovables (oro, petróleo y gas).

Ante esto la población indígena amazónica ha vivido innumerables procesos de cambio y ha reconfigurado patrones culturales de identidad, ciudadanía y consumo. El reforzamiento de sus capacidades de representación y organización para la defensa de sus derechos les ha convertido en actores y protagonistas de escenarios cruciales de decisión sobre políticas nacionales.

4.3. El pueblo indígena awajún

La etnia awajún es el segundo pueblo más numeroso de la Amazonía peruana. Está compuesto por comunidades nativas que se ubican en las regiones de Cajamarca, Amazonas, Loreto y San Martín. Según el II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana (INEI, 2009: 12) su población bordea las 55.000 personas, que equivale al 12% de la población indígena peruana censada. La Ilustración 11 nos muestra un mapa en el que se visualiza la ubicación y distribución de este pueblo indígena en las regiones mencionadas.

Ilustración 11: Población awajún en Perú (MINCUL, 2015)

Durante mucho tiempo fueron conocidos como *aguarunas*, un término que utilizaron los primeros exploradores y misioneros que contactaron con ellos. La

comunidad científica también decidió darles una clasificación, junto a otros pueblos, para agruparlos dentro de una misma familia etnolingüística, los *jíbaros*, término que para muchos resulta despectivo.

Con el tiempo sus propios líderes y organizaciones, como parte de un proceso de auto determinación, decidieron reivindicar el vocablo con el que realmente se identifican: *awajún* (traducción de ‘aguaruna’), el mismo que da nombre a su pueblo y a su lengua.

Son una cultura de tradición oral, el 31,7% de sus miembros no leen ni escriben en su propia lengua, menos en castellano. Acceder a una educación formal es un reto a veces inalcanzable y aun cuando alcanzan la educación básica, pocos llegan más allá del nivel primario (Ministerio de Cultura, 2015: 14).

Según estadísticas oficiales (INEI, 2009: 17) el 52.2% cuenta con el Seguro Integral de Salud (SIS), el cual proporciona el Estado peruano para personas que se declaran en situación de pobreza. Sin embargo, esto no garantiza su acceso a la salud por distintas razones, entre otras, barreras culturales y desconfianza en médicos foráneos; o de género que indisponen a las mujeres awajún a dejarse examinar o auscultar si el personal de salud es masculino. También cuentan las barreras geográficas ya que viven en comunidades situadas en la profundidad del bosque, desde donde salir hacia el puesto de salud más cercano puede resultar un trayecto de horas o días, además de una gran inversión de dinero para trasladarse por río.

La historia recogida sobre el pueblo awajún lo vincula con el pueblo moche o mochica que poblaron la costa norte del Perú, aproximadamente entre los 200 y 700 años d.C. Así lo señala el antropólogo y sacerdote jesuita Jaime Regan: «Los Mochicas

(100 d.C. – 700 d.C.) habrían tenido necesidad de contacto con los Jíbaro de la región del Chinchipe para obtener el oro para su orfebrería» (Regan, 2001: 24), y refiere además que en la zona amazónica de Cajamarca se encontraron vestigios de cerámica moche, zona que habitan los awajún desde sus ancestros.

La referencia histórica acerca de la accesibilidad a esta región con el fin de obtener oro se vuelve una paradoja si se tiene en cuenta que, en la actualidad, las empresas extractivas siguen buscando el oro y otros bienes naturales en dicha zona, pero desde una lógica de apropiación. Por lo tanto, el «privilegio» de las comunidades locales de vivir en territorios provistos de estas riquezas se ha convertido en una suerte de «maldición», parafraseando a Stiglitz (2008; 14), una condena que pesa sobre ellas y su bienestar.

La historia refiere al pueblo awajún como un pueblo *guerrero*, por la enérgica defensa de su territorio ancestral y su autonomía frente a invasores incas o españoles colonizadores, quienes sin éxito pretendieron someterlos. Parece que esto impulsó un rasgo de distancia constante de ese *otro* que no era awajún y que se convertía en potencial enemigo, sea un pueblo, animal o espíritu con alguna intención de dominio sobre ellos (Ministerio de Cultura, 2015: 35).

La cosmovisión del pueblo awajún nos remite al uso de los mitos como parte de ese sistema de creencias que se transmite a través de historias vivas, ya lo decía el filósofo rumano Mircea Eliade cuando hablaba del mito vivo, como fuente de modelos de conducta y sentido de la existencia humana (Eliade, 1999: 10).

Efectivamente, para los awajún los mitos conducen a la construcción de valores y la preservación de costumbres dentro de su cultura. Los ancianos tienen un rol de

consejeros en sus comunidades, son llamados «sabios» y se encargan de contar estas historias para la vida de las generaciones que les siguen, su voz es siempre un llamado que inspira escucha y respeto.

La naturaleza que conforma su entorno (el bosque, los ríos, la fauna, el monte) son elementos con vida y espíritu que hacen parte de su cultura e identidad como pueblo awajún. Por lo tanto, la relación que establecen con ellos no es productivista ni pretende, necesariamente, control o dominio sino más bien la obtención de productos que satisfagan sus necesidades básicas de alimentación y salud, sin afán de acumular y utilizando los conocimientos y habilidades transmitidos de generación a generación.

Como bien señala el biólogo peruano Fidel Torres (2013: 13), basándose en sus estudios en la Amazonía, la chacra o parcela familiar es el espacio de cultivo y a la vez de convivencia con el bosque. La actividad agrícola la conducen generalmente las mujeres, aunque el resto de la familia también participa en la cosecha, son ellas quienes suministran el alimento diario a través de productos como yuca, plátano, papaya, caña de azúcar y otros según la temporada.

El uso de plantas psicoactivas como el tabaco, toé o ayahuasca, es importante en el desarrollo vital y social del pueblo awajún. Las experiencias visionarias en forma de episodios de trance, generados por la ingesta de brebajes preparados con las plantas mencionadas, o en forma de sueño; transmiten fuerza y conocimientos a los más jóvenes, y les guiarán y protegerán en su recorrido vital (MINCUL, 2015: 49-50).

Según su cosmovisión, el universo está poblado por seres de distintos mundos que a su vez están interconectados. Existen personas, plantas, animales y espíritus tutelares que forman parte del mismo entorno, que conviven y se comunican para habitar juntos el territorio (MINCUL, 2015: 49; Regan 1993: 156). De ahí que

los conocimientos transmitidos por sus antepasados, les permiten acercarse al *buen vivir* o *tajimat pujut*, en lengua awajún.

Cabe decir que muchos de esos usos y conocimientos sobre la naturaleza desde la unidad, convivencia y respeto, se están perdiendo en las generaciones más jóvenes. Sin embargo, algunos mitos esenciales y de origen permanecen y mantienen el llamado de conservación del bosque como espacio vivo para el pueblo awajún. Todo ello en un contexto de cambio en las dinámicas económicas y socioculturales de las comunidades awajún de San Ignacio.

4.4. Comunidades awajún de Cajamarca

4.4.1. La región Cajamarca: contexto y conflictividad socioambiental

Cajamarca es una región ubicada al norte de Perú que tiene una extensión territorial aproximada de 32.900 km². Administrativamente se organiza en 13 provincias y 127 distritos. Según el INEI (2007; 2016b) Cajamarca tiene 1.387.809 habitantes y el 67% de su población es rural. Actualmente, 7 de los 20 distritos más pobres del país pertenecen a esta región.

Casi el 35% de su población económicamente activa (913.100 personas) se dedica a la actividad agropecuaria y el 57% está subempleado. La principal fuente de trabajo es la economía campesina y el autoempleo, según las características socioeconómicas que señala el documento de *Estrategia Regional de Biodiversidad de Cajamarca al 2021* (Gobierno Regional de Cajamarca, 2009).

La agricultura es principalmente de autoconsumo y el excedente apenas se inserta en el mercado interno. La región tiene una importante producción de lácteos y derivados, pero la construcción de condiciones para impulsar su expansión como industria sigue pendiente.

En contraste con estas potencialidades nos encontramos que el 37% del territorio cajamarquino se encuentra concesionado a empresas mineras (MINEM, 2016), es decir, más de la tercera parte de la región conforma unidades como producto del ya referido impulso indiscriminado de esta actividad como sustento de la política económica de los gobiernos peruanos.

Tenemos, entonces, que Cajamarca es la región con mayor participación en la cartera de proyectos mineros a nivel nacional, pues cuenta con más de 20 años de actividad minera a cuestas. Una de las presencias de inversión más destacada en dicha cartera es la del Grupo Yanacocha. Se trata de la minera de oro a tajo abierto más grande de Sudamérica. Según el Mapa de Infracciones Ambientales del grupo de investigación independiente Convoca (2015), esta empresa cuenta con un mínimo de 12 infracciones ambientales de las 65 que tiene todo el grupo minero en Cajamarca. Solo las de Yanacocha equivalen a 523.326 dólares.

Como ya hemos señalado, existen normas que han debilitado las capacidades de sanción y fiscalización de instituciones principales como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), por lo que la acción de corrección y remediación de la contaminación producida y sus innumerables impactos, acaban a merced de la propia empresa infractora.

No debe extrañarnos, entonces, que con todo ese aparente potencial minero equivalente a progreso y desarrollo, Cajamarca registre un contundente 50% de índice de pobreza según el INEI (2016c: 1), que desmiente dicho discurso y mito.

Así lo señala la Defensoría del Pueblo en su *Informe sobre los Conflictos Socioambientales por Actividades Extractivas en el Perú*:

En las zonas donde se desarrollan las actividades extractivas, habitan poblaciones históricamente excluidas y discriminadas, que perciben como injusta una situación de enriquecimiento de terceros foráneos a costa de sus tierras ancestrales (DP, 2007: 5).

Cómo evitar que estas contradicciones de la modernización generen situaciones de descontento y conflicto si, además, tienen un fuerte componente socioambiental. Es decir, tienen que ver directamente con los espacios de vida, de producción y supervivencia de la población cajamarquina que es predominantemente rural.

De los 207 conflictos sociales registrados a nivel nacional en septiembre de 2016, Cajamarca ocupa la cuarta posición con 16 conflictos sociales registrados por la DP. De dicha cifra regional, 14 tienen que ver con asuntos de carácter socioambiental y territorial, como el caso que abordaremos en este capítulo de las comunidades awajún afectadas por la presencia minera en sus territorios.

4.4.2. Comunidades awajún en Cajamarca

El escenario geográfico del conflicto socioambiental que abordaremos está rodeado de zonas de bosque montano, bosques de neblina y de bosque húmedo premontano tropical y montano bajo tropical que albergan una diversidad de especies de flora y fauna, actualmente amenazadas por actividades agrícolas, ganaderas y mineras que intervienen en el territorio (Gobierno Regional de Cajamarca, 2009).

La provincia cajamarquina de San Ignacio cuenta con una zona de selva que limita con Ecuador, donde habitan las 2 únicas comunidades nativas de etnia awajún en Cajamarca: **Supayaku y Naranjos**.

CAJAMARCA: UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN POR ETNIA, SEGÚN CENTROS POBLADOS, 2007

Ilustración 12: Comunidades awajún de la provincia de San Ignacio

Según el INEI (2009: 14) la población total a nivel de región es de 988 habitantes (0,07%). La distribución es de 557 personas en la comunidad de Supayaku y 431 en la de Naranjos (INEI, 2010: 91). Como se puede observar en la Ilustración 12, su presencia en Cajamarca es de menor proporción que en Amazonas, Loreto y San Martín.

Para acceder a esta zona hay que hacerlo con furgonetas o camionetas de doble tracción que hacen movilidad particular, durante seis o siete horas de recorrido aproximado por una trocha carrozable, desde la provincia de Jaén. Cabe tomar en cuenta que si es época de lluvia, la ruta se hace más difícil por el lodo y las rocas que se desprenden de los cerros.

La población de Supayaku se distribuye en una comunidad central del mismo nombre y de 8 comunidades menores llamadas anexos que son: Yamakey, Valencia, Suwa, Datem, Najem, Nuevo Kunchín y Chingozales. Desde la comunidad central hasta los anexos pueden ser de 30 minutos a 5 horas de camino según la ubicación.

Supayaku se encuentra sobre los 800 m.s.n.m. Pertenece al distrito de Huarango de la provincia de San Ignacio. Cuenta con una organización indígena representativa llamada Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), la misma que fue conformada en 2010, producto de la división entre dirigentes que conformaban una organización más antigua llamada ORASI.

Supayaku se encuentra a la margen izquierda del río Chirinos. Aún con limitaciones y deficiencias cuenta con un puesto de salud e instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario en su comunidad central. Los últimos seis años se ha caracterizado por la defensa unánime de su territorio y de su derecho a ser consultada, a raíz de la aprobación de un proyecto minero en su comunidad vecina de Naranjos.

A raíz de esta situación solicitaron asesoría y acompañamiento por parte de organizaciones aliadas en el tema ambiental y de derechos de los pueblos indígenas, como Grufides y FEDEPAZ.

Naranjos también tiene una comunidad central que lleva el mismo nombre, y cinco anexos: Santa Águeda, Nuevo Kucha, Chimi Chimi, Chinim y Alto Naranjos. La distancia de la comunidad central en horas de camino suele ser de 20 minutos a 3 horas según sea el anexo.

Esta comunidad está ubicada a la margen derecha del río Chirinos y es vecina de Supayaku. Pertenece al distrito de San José de Lourdes de la misma provincia de San Ignacio. Su organización indígena se llama Organización Regional Aguaruna de San Ignacio (ORASI), fundada en 2008 por un grupo de líderes de ambas comunidades, Supayaku y Naranjos. No obstante, desde que las autoridades de Naranjos aprobaron la actividad minera, Supayaku decidió abandonar la organización y conformar la suya propia, ORFAC. Desde entonces ORASI sólo representa a la población awajún de Naranjos.

Naranjos también cuenta con un puesto de salud e instituciones educativas. Se han caracterizado por su aceptación a la actividad exploratoria minera en sus territorios, especialmente un grupo de dirigentes que tras firmar convenio y recibir una compensación económica, convencieron a la población de separarse de Supayaku y de elegir ese camino para un supuesto desarrollo. En 2015 y tras varias reelecciones, dicha directiva fue rechazada y la población eligió a quienes ofrecían rechazar la minería y restablecer los lazos con la comunidad de Supayaku.

A partir de esta breve descripción del contexto y de las comunidades awajún afectadas por la actividad minera en Cajamarca, analizaremos el conflicto socioambiental intentando detectar aspectos claves que luego nos permitan abordar y proponer en este caso, en sintonía con el enfoque de transformación de los conflictos.

4.5. Divide y vencerás. Dinámicas del conflicto

El conflicto se origina a raíz del ingreso de la empresa Exploraciones Águila Dorada S.A.C. tras la aprobación que en 2013 el Estado peruano diera a su proyecto minero «Yagku Entsa» (Quebrada⁵ amarilla, en lengua awajún), y tras un acuerdo previo entre los representantes mineros y los dirigentes de Naranjos. Si bien se trata de una zona situada dentro de los límites de Naranjos se comprometían fuentes de agua que esta comparte con Supayaku. Sin embargo, ni el Estado, ni la empresa, ni los dirigentes de Naranjos informaron o consultaron con Supayaku la aprobación de este proyecto.

¿Por qué tendrían que consultar con Supayaku? Porque los yacimientos de oro y cobre que a la referida empresa le interesa explorar (y probablemente explotar) son parte de una red de microcuencas y cuencas hidrográficas. Es decir, esta actividad compromete el río Chirinos, frontera natural entre ambas comunidades, el río Chinchipe cuyo drenaje fluye hasta el Atlántico pasando por el gran río Marañón que riega los valles de toda la región (Horizonte Consultores, 2012).

Esta importante cadena hidrográfica provee de sustento tanto a Naranjos como a Supayaku. Una de la otra se encuentran *al otro lado del río*, como dice la canción. De manera que, ambas comunidades están expuestas a los impactos de la actividad exploratoria, ambas debieron formar parte del área de influencia del proyecto y ser consultadas de manera previa, libre e informada, como indica la Ley de Consulta Previa promulgada en Perú en el año 2011.

Pero Supayaku no fue considerada como zona de influencia, ni siquiera indirecta, ni consultada sobre el referido proyecto minero. Sin embargo, los efectos de la

⁵ Conocida como una zona de intersección de montañas en un mismo río que genera un microclima, así como un ecosistema y caudal específico.

fase de exploración se hicieron sentir precisamente en Supayaku, con la repentina muerte de peces en el río Chirinos, lo cual representó un signo trágico y de alarma constante para su población durante casi dos años.

Desde entonces, se produjo una fractura entre ambas comunidades. Este conflicto llegó a comprometer institucional y políticamente a los gobiernos distritales de Huarango y San José de Lourdes, al provincial de San Ignacio, al regional de Cajamarca y en algún momento al gobierno central del Perú.

4.5.1. Análisis del conflicto y su evolución

Antes que nada debo decir que este conflicto es abordado desde mi trabajo como integrante del equipo técnico de FEDEPAZ, institución que asesora y acompaña a la comunidad nativa de Supayaku a través de procesos de defensa legal y de fortalecimiento de sus liderazgos y capacidades comunitarias.

Esta intervención nos convierte en actor *secundario*, al igual que otras organizaciones que vienen acompañando y brindando algún tipo de soporte a las comunidades awajún implicadas en este conflicto.

4.5.1.1. Factores críticos a considerar

En este conflicto identificamos, por un lado, factores de carácter coyuntural, es decir, elementos cuya coincidencia en el tiempo ha conducido al estallido del conflicto entre las partes implicadas:

- Aparición de peces muertos en el río Chirinos en el tramo que colinda con la comunidad central de Supayaku.

- Hallazgo del cuerpo sin vida de un comunero de Naranjos abiertamente opositor a la presencia minera, después de 3 días de desaparecido.
- Simplificación administrativa para autorizar operaciones extractivas sin la debida consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades.

Por otro lado, tenemos factores de fondo o de carácter estructural que constituyen las raíces del conflicto y, a largo plazo, son las cuestiones que a las partes les interesa solucionar:

- La ausencia de voz de Supayaku. La comunidad no fue consultada ni considerada como zona de influencia del proyecto de exploración minera.
- La aprobación automática del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para la fase de exploración, sin consulta previa a las comunidades.
- El pueblo indígena awajún de San Ignacio se encuentra en situación de pobreza y exclusión social.

4.5.1.2. Actores implicados

Diversos actores confluyen en este conflicto socioambiental. Tenemos a las organizaciones indígenas que representan a las comunidades, organizaciones no gubernamentales que asesoran y acompañan a la comunidad de Supayaku, autoridades e instituciones locales, regionales y nacionales, y algunos medios de comunicación local. Proponemos la siguiente clasificación (Huamaní, 2014) de actores:

- Primarios: Directamente involucrados/as y con capacidad de decisión.
- Secundarios: Apoyan o trabajan con los actores primarios.
- Terceros: Intervienen para aportar al conflicto.
- Reguladores: Tienen la función de intervenir a nivel nacional o local.

Primarios	Secundarios	Terceros	Reguladores
<ul style="list-style-type: none"> •ORFAC – Organización Regional Fronteriza Awajún de Cajamarca. Representa a la Comunidad Nativa de Supayaku. •ORASI – Organización Regional Aguaruna de San Ignacio. Representa a la Comunidad Nativa de Naranjos. •Empresa Minera Águila Dorada SAC. 	<ul style="list-style-type: none"> •FEDEPAZ - Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz. •GRUFIDES - Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible. •Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio – MEPSI. •MINEM – Ministerio de Energía y Minas. 	<ul style="list-style-type: none"> •Frente de Defensa Nororiental de las Comunidades Campesinas y Nativas de Cajamarca. •Sub Región de Salud Ambiental de Jaén. •Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca. •Radio Marañón de Jaén. 	<ul style="list-style-type: none"> •Defensoría del Pueblo. •Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia de Consejo de Ministros. ONDS-PCM.

Ilustración 13: Tipos de actores del conflicto
Elaboración propia en base a Prodiálogo (2015)

La Ilustración 13 muestra a todos los actores identificados, agrupados según el rol primario, secundario, tercero o regulador que tienen en el conflicto. Asimismo, tienen un color asignado que indica el sector al que pertenecen. Esto se puede visualizar más claro en la Ilustración 14 donde, además, cada uno tiene un número asignado.

Sector	Número	Actor	Tipo
SOCIAL	1	ORFAC – SUPAYAKU	Organización indígena
	2	ORASI – NARANJOS	Organización indígena
	3	FDNCCNC	Organización indígena
	4	FEDEPAZ	ONG
	5	GRUFIDES	ONG
	6	Radio Marañón - Jaén	Medio de comunicación
PRIVADO	7	Águila Dorada S.A.C.	Empresa minera
PÚBLICO	8	ONDS-PCM	Instancia nacional
	9	MEPSI	Instancia local
	10	Defensoría Del Pueblo	Instancia nacional
	11	Sub Región Salud Jaén	Instancia local
	12	Laboratorio regional del Agua	Instancia local
	13	MINEM	Instancia nacional

Ilustración 14: Tabla de actores identificados
Elaboración propia en base a Prodiálogo (2015)

A continuación, la Ilustración 15 muestra un mapa de actores inspirado en una propuesta (Prodiálogo, 2015) que permite visualizar mejor la posición, el tipo de organización y el rol de cada actor. Es preciso tomar como referencia los datos consignados en la Ilustración 14. Mientras más grande sea el número, más relevante será ese actor para el proceso.

Ilustración 15: Mapa de actores
Elaboración propia en base a Prodiálogo (2015)

Este mapeo de actores permite identificar como actores primarios de este conflicto a ORFAC, ORASI y la empresa Exploraciones Águila Dorada S.A.C. A continuación, describiremos y analizaremos a cada uno de estos, identificando sus posiciones, intereses y necesidades. De igual manera describiremos las percepciones y emociones expresadas, recursos de poder o ventajas, las estrategias desplegadas para la

solución o intensificación del conflicto y, finalmente, se identifica a los actores secundarios que les apoyan.

Actor primario	Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC) – Comunidad de Supayaku
Posición	Que se declare nula la autorización de exploración otorgada a la empresa minera Águila Dorada S.A.C.
Intereses	Ser considerados como zona de influencia y ser consultados sobre el proyecto minero «Yagku Entsa» de la minera Águila Dorada S.A.C.
Necesidades	Proteger los recursos con los que cuentan y mejorar su actividad productiva para la mejora de sus ingresos económicos.
Percepciones y emociones	<p>Pobladores y autoridades comunales se han sentido marginados y poco reconocidos pues fueron consultados.</p> <p>Perciben a los pobladores y las autoridades de Naranjos como indiferentes a la contaminación del río Chirinos, interesados en beneficios económicos, con doble discurso pues por un lado dicen defender el ambiente y por otro negocian con la empresa minera.</p> <p>Sienten desconfianza, miedo por el riesgo de contaminación, tristeza por la muerte de peces en el río y la falta de alimento.</p> <p>Sienten indignación pues después de 3 años la Autoridad Nacional del Agua (ANA) comunicó que recogería muestras del río afectado.</p> <p>Perciben que el Estado no escucha, que el MINEM defiende intereses de la empresa porque le dio autorización sin consulta.</p> <p>Consideran que a Águila Dorada sólo le interesa ganar dinero y no cuidar el bosque que a ellos les provee de agua y sustento.</p>
Recursos de poder	<p>FEDEPAZ les asesora en la demanda de amparo interpuesta contra el MINEM y les capacita sobre normas y derechos.</p> <p>ORFAC tiene legitimidad en su comunidad, frente a autoridades locales como el FDNCCCNC que les respalda en sus demandas.</p>
Estrategias desplegadas	ORFAC retuvo a un trabajador de la empresa minera, logrando llamar la atención de los medios y las autoridades. Permitió que un médico evaluara al trabajador y aceptó su liberación tras la conformación de una comisión de diálogo.
Actores secundarios	<p>FEDEPAZ: Asesoró la demanda de amparo contra el MINEM para que se declare nula la resolución que autorizaba a la empresa Águila Dorada S.A.C., realizar actividades de exploración minera. Apoyó con jornadas de capacitación en 2014 y 2015.</p> <p>GRUFIDES: Apoyó con el monitoreo independiente del agua del Río Chirinos y con la difusión en medios de comunicación de la provincia de San Ignacio y en el ámbito regional y nacional.</p>

	MEPSI: Integró la comisión de constatación del estado de los trabajadores retenidos por Supayaku, y respaldó la atención de sus demandas por parte de las autoridades del gobierno central.
--	---

Actor primario	Organización Aguaruna de San Ignacio (ORASI) – Comunidad de Naranjos
Posición	Que se respete acuerdo con la empresa minera Águila Dorada S.A.C.
Intereses	Incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida.
Necesidades	Naranjos realiza actividades productivas de subsistencia como pesca, caza, recolección de recursos maderables, sus ingresos no cubren necesidades básicas. Requieren incrementar sus ingresos y contar con apoyo para ampliar su capacidad productiva.
Percepciones y emociones	Perciben que los pobladores y dirigentes de Supayaku están enojados con ellos porque han permitido el ingreso de la mina. Se sienten preocupados por la contaminación del río Chirinos porque también les afecta ya que no pueden desarrollar sus actividades de pesca con normalidad.
Recursos de poder	La negociación del contrato y de la compensación económica la condujo solo un sector de la directiva de Naranjos.
Estrategias desplegadas	Negociación directa entre los representantes de la empresa Águila Dorada S.A.C. y los dirigentes de Naranjos. Adelantarse ante las autoridades judiciales y los medios de comunicación, frente a los sucesos de crisis (muerte de un poblador), para dar una versión conveniente de los hechos.
Actores secundarios	Ninguno.

Actor primario	Empresa Minera Águila Dorada S.A.C.
Posición	Que se respete la autorización que le otorgó el MINEM para las operaciones de exploración en territorios de Naranjos.
Intereses	Incrementar sus ganancias a través del desarrollo del proyecto minero «Yagku Entsa». Generar una imagen de empresa con responsabilidad social a través de la implementación de programas económicos y sociales para la población de Naranjos. No le interesa ampliar su área de influencia hacia la comunidad de Supayaku porque implicaría mayor responsabilidad social y por tanto mayores gastos.

Necesidades	La Empresa necesita consentimiento de la población de Naranjos para la exploración del proyecto minero «Yagku Entsa». Necesita del respaldo del MINEM para la realización de su proyecto. Necesita el agua del río Chirinos para su proyecto minero.
Percepciones y emociones	Percibe que Supayaku no está protegiendo el medio ambiente sino que quiere beneficiarse de la empresa minera. Percibe que con Naranjos es más fácil negociar.
Recursos de poder	Contacto con el MINEM para que garantice su derecho de concesión y haga cumplir resolución que le da derecho a exploración minera. Recursos económicos suficientes para pagar publicidad, compensar a dirigentes, etc.
Estrategias desplegadas	Trato directo con dirigentes de la ORASI. Seguir con procesos administrativos ante el MINEM para autorización de exploración minera.
Actores secundarios	Ministerio de Energía y Minas (MINEM)

Una vez identificados los actores primarios y secundarios, analizaremos a los actores que intervienen para aportar información o propuestas relevantes al tratamiento del conflicto. Se trata de los actores terceros. A continuación, por cada actor tercero se detalla quién lo convocó, si tiene legitimidad ante las partes, el rol que desempeña y las acciones que ha desplegado en este proceso de atender el conflicto.

Actores terceros				
Tercero	¿Quién los convoca?	Legitimidad ante las partes	Rol	Acciones desplegadas
Sub Región de Salud Ambiental de Jaén.	Autoridades Comunales de Supayaku y Naranjos.	No cuenta con legitimidad ante la población por la demora en la entrega de resultados.	Determinar la existencia de materiales tóxicos para el consumo humanos y de animales en el río Chirinos.	Tomaron la muestra en el río Chirinos y emitieron un informe señalando que los niveles de elementos tóxicos encontrados estaban dentro de lo permitido.

Actores terceros				
Tercero	¿Quién los convoca?	Legitimidad ante las partes	Rol	Acciones desplegadas
Laboratorio Regional de Agua del Gobierno Regional de Cajamarca.	Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio.	Cuenta con legitimidad ante pobladores de ambas comunidades.	Hacer de puente para el acercamiento de las autoridades nacionales y la población de Supayaku.	Toma una nueva muestra del agua del río Chirinos un año después de que aparecieron los peces muertos y su informe señala que el agua del río es apta para el consumo humano y de los peces.
Frente de Defensa Nororiental de las Comunidades Campesinas y Nativas de Cajamarca.	ORFAC	Cuenta con legitimidad y representatividad en ambas comunidades. Cumple y hace cumplir acuerdos y sanciones establecidos en los estatutos, principios y valores de la asamblea y las organizaciones.	Trata de aclarar la posición de los dirigentes de ORASI y de tender puentes para el diálogo entre los dirigentes de ORFAC y ORASI.	Convocan a una III Asamblea del Frente donde participaron dirigentes de ORFAC y ORASI.
Radio Marañón de Jaén.	GRUFIDES FEDEPAZ	Cuentan con legitimidad ante las poblaciones de Supayaku y Naranjos ya que se dedican a la defensa de derechos humanos.	Difundir los acontecimientos del conflicto en las comunidades de Supayaku y Naranjos debido a la presencia de la empresa Exploraciones Águila Dorada S.A.C.	Realizó entrevistas a las dirigencias de ORFAC y ORASI para que expresen sus puntos de vista, en relación a la detención de un trabajador de la mina y el presunto asesinato de un poblador de la comunidad de Naranjos.

4.5.1.3. Cronología del conflicto

Desde una concepción del conflicto como progresión o sucesión de eventos (Lederach, 1998) se presenta la siguiente cronología, elaborada con el fin de proporcionar una perspectiva más amplia de la trayectoria y dinámica del conflicto socioambiental que en este capítulo se analiza.

En abril del **2010** los dirigentes de Naranjos decidieron suscribir un contrato de usufructo con la empresa Águila Dorada S.A.C., a cambio recibieron la suma de 100.000 soles. Se trataba de una autorización comunitaria al Proyecto «Yagku Entsa» cuya área total declarada es de 75 hectáreas. Esto no se comunica en ningún momento a la comunidad de Supayaku, a pesar de ser comunidades colindantes y del mismo pueblo indígena awajún.

En marzo de **2012** la empresa Exploraciones Águila Dorada S.A.C. solicita a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM, con copia a la Dirección de Energía y Minas del Gobierno Regional de Cajamarca y a la MEPSI; la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero «Yagku Entsa».

En septiembre de 2012, miembros de la ORFAC de Supayaku, retuvieron a tres trabajadores del INGEMMET cuando se encontraban recogiendo muestras del agua en una zona del río Chirinos que corresponde a Supayaku, sin haberse identificado ni avisado previamente. Este hecho tuvo gran repercusión en los medios de comunicación, los cuales señalaron que se trataba de un secuestro y que los nativos estaban pidiendo dinero por la liberación.

Esta situación fue esclarecida por el presidente de ORFAC, quien señaló que no se trataba de un secuestro si no de una retención de alguien que había faltado a las normas de su comunidad. Y respecto al supuesto pedido de dinero, indicó que sus estatutos comunales señalan que ante faltas de este tipo las personas deben de indemnizar o reparar económicamente.

Se formó una comisión presidida por Jesús Juárez, representante de INGEMMET, autoridades del gobierno regional y de la provincia de San Ignacio, que tras superar dificultades geográficas llegaron a Supayaku para la liberación de los tres funcionarios retenidos. Esto se consiguió tras la firma de un acuerdo en el que la comunidad de Supayaku solicitó que las autoridades del gobierno central atiendan sus demandas, el personal de INGEMMET reconoció su falta y se comprometió a indemnizar económicamente tal y como establecen los estatutos de la comunidad, compromiso que hasta el día de hoy no ha sido cumplido. Cabe señalar la importancia de la presencia de la Defensoría del Pueblo, invocando al diálogo y al respeto de la vida en la solución de este incidente.

En febrero del **2013** se incrementan las tensiones a raíz de las amenazas que reciben los líderes que se oponen a la actividad minera, como es el caso de Tomás Bazán, por entonces presidente de ORFAC. Ante esta situación los dirigentes recurren a las organizaciones de derechos humanos presentes en la zona como FEDEPAZ y Grufides.

En septiembre de 2013 el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) emite la Resolución Directoral N° 229-2013 MEM/DGM, que aprueba el proyecto de exploración «Yagku Entsa» y autoriza el inicio de las actividades mineras de

exploración a favor de Águila Dorada S.A.C. en territorios de la Comunidad de Naranjos, distrito San José de Lourdes, provincia de San Ignacio en Cajamarca.

En noviembre de 2013, con la asesoría legal de FEDEPAZ la comunidad de Supayaku interpuso una demanda de amparo contra el MINEM, solicitando que se declarara nula la resolución que autorizaba el inicio de actividades de la empresa Exploraciones Águila Dorada S.A.C. (FEDEPAZ, 2015).

Los pobladores de la comunidad de Supayaku creen que la presencia de la minera pone en riesgo de contaminación el río Chirinos, que les provee de agua, alimento y espacios de esparcimiento. Por este nivel de riesgo, Supayaku considera que debe ser incorporada en la zona de influencia del proyecto «Yagku Entsa», que solo considera a Naranjos como comunidad de influencia directa y beneficiaria de la empresa.

En febrero del **2014**, los pobladores de la comunidad de Supayaku retienen a un trabajador de un proyecto cafetalero que Águila Dorada venía implementando. Lo liberaron tras cinco días de retención y luego de reunirse con una comisión conformada por el alcalde de la provincia de San Ignacio, el presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP), el Vicariato San Javier del Marañón y la Fiscalía Provincial quien constató el buen trato y estado de salud de la persona retenida.

Además de liberar al retenido, Supayaku insistió ante la comisión que el MINEM declarara nula la autorización de exploración otorgada a Águila Dorada S.A.C., motivo por el cual ya habían interpuesto una demanda de amparo. Una vez más la Defensoría del Pueblo se hizo presente para invocar al diálogo y exigir el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Ilustración 16: Aparición de peces muertos en el río Chirinos

Fuente: Cooperación (2014)

Un suceso que agudizó el clima de tensión por esas fechas, fue la aparición de peces muertos en un tramo del río Chirinos que colinda con Supayaku. El hecho fue denunciado por las autoridades comunales de Supayaku y de Naranjos, quienes exigieron que se realizara un estudio toxicológico de los peces y del agua.

Ante esta situación, en abril de 2014, la Dirección de Salud de Jaén realizó un monitoreo del río y envió las muestras a la Dirección Regional de Salud, sus resultados arrojaron la presencia de metales como aluminio y hierro por encima de los límites permisibles para la categoría de agua de consumo poblacional.

En agosto de 2014, la PCM conformó una Mesa de Diálogo para el Desarrollo de las comunidades awajún de los distritos San José de Lourdes (PCM, 2014) y Huarango, al que pertenecen Naranjos y Supayaku respectivamente. Sin embargo, las comunidades no recibieron ninguna señal de su implementación ni cumplimiento de su

mandato. Los pobladores de ambas comunidades seguían asustados así que sus autoridades comunales decidieron prohibir el consumo de pescado, así como bañarse y lavar en el río.

En octubre de 2014 se realizó una reunión entre las autoridades de Supayaku y Naranjos, con la presencia de las autoridades distritales y provinciales, en la que se establecieron compromisos para un monitoreo participativo del agua del río Chirinos, cuyo liderazgo lo asumiría la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Sin embargo, justo antes de dar inicio al procedimiento la ANA suspendió la inspección.

En noviembre de 2014, la organización Grufides ofreció un monitoreo independiente. Las muestras fueron analizadas en un laboratorio acreditado en Lima y los resultados fueron analizados por el Laboratorio Regional de Agua del Gobierno Regional de Cajamarca.

En febrero del 2015, llegó el informe con los resultados del monitoreo, señalando la presencia de fenoles, aceites y grasas en el agua analizada, por encima de los límites permisibles. Su presencia estaba ligada a efluentes industriales procedentes de explotaciones mineras, refinerías petroleras, entre otras, tóxicos para peces y otros organismos acuáticos (Grufides, 2015).

En febrero de **2015** se realizó la tercera asamblea del Frente de Defensa Nororiental de las Comunidades Campesinas y Nativas de Cajamarca y Amazonas, ocasión en que las rondas campesinas ratificaron su apoyo a las comunidades awajún frente a la presencia minera en sus territorios. Estuvieron presentes los dirigentes de ORFAC y ORASI, además de Grufides y FEDEPAZ. En dicha reunión se comunicó que Águila Dorada S.A.C mantiene 12 concesiones mineras en Naranjos.

Los asistentes expresaron abiertamente su apoyo a la comunidad de Supayaku y a su organización ORFAC. Sin embargo, interpellaron a los dirigentes de ORASI sobre su posición frente a la renovación del convenio de exploración con Águila Dorada S.A.C. y el aumento de concesiones mineras de esta empresa. La autoridad comunal no respondió y por el contrario, se retiró de la reunión. A los dos meses el *apu*⁶ de Naranjos declaró públicamente su rechazo a la minería en los territorios de su comunidad (Asociación SER, 2015).

La desconfianza crecía ante el doble discurso de la directiva de Naranjos y ORASI, incluso en su propia población. Algunos prefirieron desplazarse hacia otras zonas para protegerse de posibles represalias de la directiva. Por esos días sorprendió la muerte de un poblador de Naranjos cuyo cuerpo fue hallado sin vida y con contusiones, en las inmediaciones de la comunidad de Supayaku. Se trataba de un comunero que se rebeló contra los dirigentes en cuestión y rechazó sus tratos con la minera. Los familiares especulaban que por eso le habrían dado muerte, pero no quisieron denunciar por temor.

Se reportó un supuesto ataque a la población de Naranjos por parte de un grupo de desconocidos que, según los cuestionados dirigentes de Naranjos, provendría de Supayaku. Así que esta directiva se aprestó a denunciar dicho ataque y la muerte del comunero ante el Ministerio Público en San Ignacio. Esta instancia respondió inmediatamente con una visita de constatación a dicha comunidad, Naranjos. Mas no recogieron testimonio de los familiares del comunero fallecido, ni de los pobladores de Supayaku, generándose aun más tensión y desconfianza entre ellos.

⁶ A partir de la Ley de Comunidades Nativas de 1974 se impuso la elección de un «jefe» de comunidad bajo el modelo quechua andino, de donde proviene la palabra *apu* (MINCUL, 2015: 68).

En julio de 2015, visitaron Supayaku para el recojo de nuevas muestras en el río Chirinos, los representantes provinciales de la Fiscalía, MCLCP, ANA, Sub Región de Salud Ambiental Jaén y autoridades del distrito y la provincia. El Laboratorio Regional del Agua envió los resultados en septiembre de 2015, señalando que las muestras de agua tomadas se encontraban aptas el consumo humano. Esto dio mucha tranquilidad a la comunidad cuya población, durante casi dos años, tuvo que restringir su consumo de pescado y el aprovechamiento del río en diversas actividades, empezando por la pesca.

En agosto de 2015, los habitantes de la comunidad de Naranjos, cansados de sentirse confundidos, manipulados y enfrentados por sus dirigentes, decidieron elegir a una nueva junta directiva para su organización ORASI, la misma que ha manifestado su interés de restablecer el diálogo con la comunidad de Supayaku y rechazar conjuntamente la presencia de la empresa Exploraciones Águila Dorada S.A.C. en sus territorios.

En octubre de **2016**, ambas comunidades, a través de sus autoridades y representantes de organizaciones ORFAC (Supayaku) y ORASI (Naranjos), decidieron convocar una asamblea comunitaria en el Anexo Yamakey, ubicado en la comunidad de Supayaku y estratégicamente en un punto medio entre las comunidades centrales de ambas comunidades. El objetivo fue expresar públicamente la intención de restablecer el diálogo y los vínculos de confianza, dejando atrás los años de alejamiento y enfrentamiento a raíz de que los dirigentes anteriores de ORASI consintieran la entrada de Águila Dorada S.A.C.

Ilustración 17: Asamblea en Yamakey promovida por ORFAC y ORASI
Fotografía: Jeremías Unkuch

En marzo del 2016 la ANA se pronunció solicitando al Gobierno Regional de Cajamarca que coordine con el *apu* de la comunidad de Supayaku para la toma de muestra solicitada en 2014. Ante este comunicado los líderes respondieron indignados que no, pues les parece una burla que se pronuncien cuando su río ya había sido afectado por la presencia de aceites y fenoles.

Como se puede observar prácticamente en toda la cronología, ningún representante de la empresa Águila Dorada S.A.C. se hizo presente en los sucesos ni en las comunidades, luego de que negociaran su ingreso con Naranjos en abril de 2010.

En agosto de 2016, FEDEPAZ recibió fue notificada de que la demanda de amparo había sido declarada fundada en primera instancia. Se ordenaba a la empresa

detener cualquier labor de exploración y no ejecutar nada mientras no se consulte a la comunidad de Supayaku. Esta noticia que alegró al pueblo de Supayaku. Cabe señalar que la parte demandada, el MINEM, ha apelado esta sentencia.

No obstante, la amenaza de una posible continuidad en la exploración y consecuente explotación minera sigue latente, ya que como se puede observar en la Ilustración 18, la empresa Exploraciones Águila Dorada S.A.C. mantiene la titularidad vigente de 12 concesiones (color morado).

Ilustración 18: Mapa de concesiones mineras en San Ignacio
Fuente: Cooperación (Mayo 2016)

La cronología elaborada permite visualizar los hechos que conciernen al conflicto que esta tesis analiza. En ella se puede identificar momentos críticos para las comunidades indígenas, como la muerte de peces en el río o la del comunero de Naranjos; otros de alta tensión y riesgo de confrontación debido a la desconfianza creciente entre ambas comunidades.

Finalmente, el miedo y la confusión se han mantenido entre la población de ambas comunidades, tanto por los impactos de la minería en sus territorios como por el manejo poco transparente de sus autoridades comunales y de la empresa. A partir de aquí analizaremos si existen condiciones para el diálogo.

4.5.2. Acciones y condiciones para un diálogo transformativo

Aun con todas las situaciones de crisis desencadenada durante este conflicto, narradas en la cronología del epígrafe anterior, surgieron iniciativas para propiciar espacios de diálogo en este proceso. Estas se describen a continuación:

ACTOR	ACCIÓN DESPLEGADA
FRENTE DE DEFENSA NORORIENTAL	Convocó a las comunidades nativas de Supayaku y Naranjos, a la III Asamblea de rondas campesinas y nativas de Cajamarca. En esta reunión se propició el encuentro entre ambas comunidades a través de sus organizaciones ORFAC y ORASI, y se invocó al diálogo y al posicionamiento claro frente a la actividad minera.
OFICINA NACIONAL DE DIALOGO Y SOSTENIBILIDAD DE LA PCM	Se conformó el Grupo de Trabajo denominado «Mesa de diálogo para el desarrollo de las comunidades nativas de los distritos de San José de Lourdes y Huarango, de la provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca». Dicho espacio no está activo. Cabe preguntar si podría ser aprovechado.
FEDEPAZ	Desarrollo del taller «Transformación de conflictos», con 40 pobladores de la comunidad de Supayaku y 3 de un anexo de la Comunidad de Naranjos. Se generó un espacio de confianza y respeto para que expresaran su sentir sobre el conflicto.
ORASI	Cambio de directiva en ORASI facilita el acercamiento con la dirigencia de ORFAC, para la coordinación de acciones conjuntas en defensa de las comunidades awajún de San Ignacio.

Si se quiere actuar desde un enfoque transformativo, es necesario evaluar las condiciones para propiciar un diálogo en este sentido. Para ello es necesario visibilizar los dos niveles en que este conflicto socioambiental se despliega.

El primero sucede al interior del pueblo awajún, conformado por las comunidades de Supayaku y Naranjos. Ambas comunidades decidieron distanciarse ante la omisión de consulta con Supayaku para aprobar la presencia minera en los territorios que comparten. Las condiciones para un diálogo transformador en este nivel empezaron a darse recién en el año 2015, con la elección de una nueva junta directiva de la organización ORASI. Esta dirigencia expresó voluntad de acercamiento con ORFAC y la comunidad de Supayaku. Hasta inicios de 2015 la entrada de nuevos dirigentes en la directiva de ORASI parecía imposible, pero la población de Naranjos los respaldó y eso se interpretó como un acto de voluntad para poner fin a las situaciones hostiles entre ambas comunidades.

En un segundo nivel se encuentra la relación de ambas comunidades awajún con la empresa minera Águila Dorada S.A.C. y el MINEM. Ciertamente, no existen condiciones inmediatas para un diálogo transformador porque no hay ningún gesto de presencia ni acercamiento auténtico de la empresa minera hacia las comunidades, desde que negoció su ingreso en la zona. En ningún momento visitaron a las autoridades de Supayaku para conversar si quiera sobre el proyecto minero en cuestión, ni siquiera cuando ambas comunidades se dividieron producto de sus acuerdos poco transparentes.

Sin embargo, a nivel multiactor podrían generarse algunas condiciones mínimas en la medida en que ambas comunidades nativas, Supayaku y Naranjos, van reforzando su capacidad de actuar en conjunto. Si bien muchas de estas acciones pasan por buscar la atención de necesidades básicas e inmediatas de las comunidades, como la salud,

infraestructura, saneamiento, entre otras, podría aprovecharse dicho acercamiento para iniciar un proceso de transformación de las rupturas generadas por el conflicto.

Hay que señalar que se cuenta también con la presencia de actores como FEDEPAZ, Grufides, la Defensoría del Pueblo, que a la vez que siguen proporcionando una serie de herramientas a las comunidades, de una u otra manera vienen aportando y acompañando en este proceso aún en construcción.

Si nos preguntamos por el factor intercultural en este análisis de condiciones para un diálogo transformador, creemos que el actuar de las instituciones reguladoras y de la propia empresa minera se ha dado desde la falta de reconocimiento y la invisibilización del pueblo awajún de Cajamarca y de sus derechos, especialmente en los procesos de decisión que les afectan directamente. Ello también deriva de una actitud generalizada en las instituciones del Estado frente a las poblaciones involucradas en situaciones de conflicto a raíz de la promoción y autorización de «grandes inversiones» en sus territorios.

Por otro lado, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM incorpora en su protocolo de actuación el enfoque intercultural. Ciertamente, después de hechos realmente críticos en este conflicto, dio el primer paso conformando la Mesa de Diálogo y Desarrollo. Lamentablemente, este espacio no llegó a constituirse y con ello se sumó, como quien dice, *una raya más al tigre* en cuanto a la sensación real de abandono y desprotección que tienen las comunidades respecto al Estado peruano.

Por todo lo expuesto, las condiciones para un diálogo transformador y sostenido entre los actores no están o no se ven del todo claras por ahora, principalmente por la falta de reconocimiento y empatía entre ellos, porque los niveles de confianza están muy

deteriorados y porque la continua e histórica desatención del Estado hace que las necesidades más inmediatas de la población ocupen, con toda legitimidad, una prioridad en sus agendas, antes que un trabajo centrado en resarcir los efectos del conflicto.

Actualmente está vigente el proceso de demanda de amparo porque el Estado peruano no realizó un proceso de consulta previa con las comunidades para la aprobación del proyecto minero «Yakgu Entsa». La defensa legal está a cargo de FEDEPAZ a solicitud de la comunidad de Supayaku, pero esto es algo que explicaré en el siguiente capítulo junto a la estrategia de intervención y acompañamiento hacia un proceso de transformación pacífica del conflicto.

4.6. Recapitulación

Este capítulo ha proporcionado referencias del contexto amazónico y de las poblaciones originarias de la región en la que se circunscribe esta investigación. La población indígena awajún de Cajamarca habita esos territorios desde tiempos ancestrales.

Se trata de una población con muchas potencialidades y a la vez con problemáticas sociales que afectan el acceso a servicios y derechos básicos, debido a factores estructurales que mantienen los niveles de desigualdad social y económica para estas poblaciones.

El pueblo indígena awajún es uno de los pueblos originarios más numeroso de Perú. Este colectivo ha sabido posicionar con voluntad y compromiso en defensa de sus derechos y sus territorios. Cuentan con una amplia trayectoria de organización y liderazgo social y político.

El conflicto socioambiental descrito y analizado en este capítulo, ha generado rupturas en distintos niveles de la vida del pueblo awajún de Cajamarca. Por lo tanto, más allá de la certera diferenciación de actores a nivel social, económico, político y cultural, se requiere la identificación de aquellas dimensiones en que el conflicto, efectivamente, ha impactado.

La cronología de acontecimientos expresa un vaivén de situaciones y emociones en relación al contexto de amenaza, a la frustración y a la riesgosa búsqueda de soluciones a los problemas iniciados. Más todavía, ante la incompetencia del Estado para articular a estos pueblos en los procesos decisorios que este promueve y les involucran.

Asimismo, ha sido posible identificar a los actores de este entramado, sus niveles de importancia y actuación en este contexto de conflicto. A través del mapeo de actores y la descripción de los principales aspectos (percepciones, recursos de poder, actores secundarios, etc.) que rodean a cada uno, cabe pensar en las condiciones para el diálogo.

El proceso de análisis e identificación de las principales características del conflicto generado en este capítulo, servirá de base para comenzar a esbozar propuestas para cada una de las dimensiones afectadas por este conflicto.

Precisamente, el siguiente capítulo contará lo que ha supuesto la experiencia de intentar incorporar una mirada transformadora en el tratamiento de este conflicto, y las posibilidades de diálogo entre Naranjos y Supayaku.

CAPÍTULO V

La paz de los guerreros

5.1. Introducción

En el quinto y último capítulo describiremos el encuentro de FEDEPAZ con la comunidad nativa awajún de Supayaku, y la alianza conformada para llevar a cabo un proyecto de intervención social que fortalece competencias y capacidades comunitarias y organizativas de dicha población.

Asimismo, explicaremos cuales son las estrategias de intervención y acompañamiento de FEDEPAZ, así como desde qué perspectivas y líneas de acción la organización asesora y acompaña los procesos de decisión y de transformación constructiva del conflicto en las comunidades de Supayaku y Naranjos.

Veremos que existen mecanismos legales que se presentan como una vía de exigencia de derechos, como la demanda de amparo que la comunidad, a través de ORFAC (su organización), interpuso contra las instancias estatales que regulan la entrada de actividades extractivas a sus territorios, con el objetivo de exigir el respeto a su derecho a la consulta previa.

Además se explicará la problemática en relación al saneamiento legal y la formalización de las juntas directivas comunales, lo cual propició el acompañamiento y

la asesoría, para un mayor conocimiento y contextualización de la importancia de los procesos administrativos en cuanto a la representación legal de las autoridades comunales, en el caso de Supayaku.

Se dará a conocer el proceso de empoderamiento de las autoridades comunales de Supayaku, de los nuevos líderes y lideresas que se implicaron en la escuela de liderazgos indígenas, aportando conocimientos y capacidades propias de la población en dicho proceso.

El inicio del camino de transformación de los conflictos de las comunidades indígenas de San Ignacio, pasará por la identificación de los impactos que en todas y cada una de las dimensiones posibles de afectarse, ha ocasionado el conflicto socioambiental y sus conflictos derivados. A partir de ello, se dará a conocer las acciones y herramientas empleadas en los espacios de formación, abordando las dimensiones personal, relacional, estructural y cultural que propone el enfoque de transformación pacífica de los conflictos.

Finalmente, se compartirá apuntes sobre las condiciones existentes para continuar con el proceso de diálogo y acciones para el cambio social, objetivo de la visión transformadora del conflicto, de manera que este incipiente, largo y dinámico proceso responda al ritmo, contexto y cosmovisión propios de la población awajún de San Ignacio, Cajamarca.

El ánimo es, por supuesto, incentivar la continuidad de un trabajo que revierta en el bienestar emocional y espiritual de este pueblo originario, algo que les es de suma importancia para actuar frente a un contexto socio económico y político que sigue siendo excluyente y hostil para con sus necesidades, intereses y decisiones.

5.2. La crisis como punto de partida

A partir del conflicto que hemos podido describir, detallar y analizar en el capítulo anterior, podemos hacer el ejercicio de imaginar aquellos momentos más críticos y desesperantes para las comunidades que viven en este contexto.

Fue la comunidad nativa de Supayaku la que no estaba de acuerdo con el ingreso de la empresa minera en los territorios que comparte con su comunidad vecina de Naranjos, la cual no fue informada ni consultada por el Estado para la autorización del proyecto minero «Yagku Entsa» (quebrada amarilla, en lengua awajún).

La población de Supayaku representada por ORFAC decide solicitar apoyo al Alcalde Provincial de San Ignacio, autoridad que durante su mandato hasta el año 2010 se mantuvo cercana a las comunidades nativas. Así también, a la Defensoría del Pueblo cuyos representantes se desplazaron en determinado momento a constatar la retención del trabajador por parte de esta población, la muerte de peces en el río Chirinos.

En este lapso también decidieron pedir apoyo a algunas organizaciones no gubernamentales que venían trabajando e interviniendo en la zona. Una de ellas era FEDEPAZ.

Pero en paralelo se vivía mucha tensión al interior de las comunidades, tanto así que la propia población se reunió en asamblea comunal y valoró la opción de enfrentarse cuerpo a cuerpo y con lanzas con sus vecinos de Naranjos, una manera en la que el pueblo awajún ha resuelto algunos de sus conflictos en tiempos ancestrales.

Sin embargo, quienes eran autoridades de Supayaku durante el 2013, insistían en buscar otras vías para evitar más confrontación, violencia y/o muertes. Es cuando piden asesoría legal a FEDEPAZ, para la defensa de su posición de no dejar entrar a la

empresa minera Águila Dorada S.A.C. en la zona, pues estaba claro que al operar en el río Chirinos que rodea tanto a Naranjos como a Supayaku, esta también podía encontrarse en riesgo de contaminación producto de dicha actividad. Y así fue.

Por ello, la necesidad de Supayaku de articular esfuerzos para llamar la atención, de generar alianzas que ayuden a bloquear operaciones mineras autorizadas por el gobierno pero no por ellos, así como a prevenir cualquier estallido de violencia a raíz de las hostilidades y fuertes discrepancias al interior de las comunidades.

Por esa época y antes de que Supayaku se entere de la autorización de operaciones mineras en sus territorios, la comunidad empezaba a trabajar con el acompañamiento y apoyo financiero de organizaciones como Grufides y FEDEPAZ. El objetivo de dicha colaboración fue la elaboración de un diagnóstico participativo cuyo proceso involucró a la población, sus autoridades y organizaciones que cumplían algún rol en esta zona.

Dicho proceso duro un par de años y a partir de el mismo se elaboró el Plan de Vida de la Comunidad Awajún de Supayaku de 2014 - 2024, con un alcance de diez años, donde se recogen propuestas y proyectos que la comunidad requiere poner en marcha para la realización de sus aspiraciones como pueblo y la consecución de un proceso de desarrollo acorde con su visión del *Tajimat Pujut* (awajún) o del Buen Vivir.

A pesar de los vaivenes y situaciones más críticas vividas durante este conflicto socioambiental, las autoridades de la comunidad de Supayaku han seguido trabajando para dar lugar a proyectos que atiendan las necesidades de las comunidades, que el conflicto no hizo más que profundizar en cuanto a niveles de desigualdad y pobreza que históricamente pesa sobre estas poblaciones originarias.

5.3. Aliarse en tiempos de crisis

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), es una asociación civil sin fines de lucro que fue fundada en 1993, en medio del contexto de violencia política y social en el Perú. Plantea el acceso universal a la justicia, la lucha contra la impunidad en caso de violaciones a los derechos humanos y el restablecimiento de los derechos cuando son vulnerados. Asimismo, asesora y patrocina legalmente a grupos humanos e individuos ante instancias nacionales e internacionales, víctimas de violaciones de sus derechos.

Además, busca que los organismos del Estado internalicen la importancia que tiene el respeto a la persona humana, dando lugar a nuevas prácticas y procedimientos, así como a una nueva visión del desarrollo. Por ello promueve la elaboración de nuevas normas y políticas públicas, así como una activa participación ciudadana.

FEDEPAZ cuenta con dos áreas de trabajo. El área de **Derechos Civiles y Políticos** desde donde ha realizado una activa defensa de la vida y de la integridad personal, ha proporcionado asesoría y patrocinio legal a víctimas de detenciones, desapariciones, torturas, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales y/o a sus familiares, al igual que ha formulado propuestas, acciones legales y de incidencia encaminadas a erradicar prácticas crueles, inhumanas y degradantes.

Desde esta perspectiva ha intervenido en casos emblemáticos como la ejecución extrajudicial de más de 110 personas detenidas en el Penal el Frontón en 1986, conocido como Caso El Frontón; en la ejecución extrajudicial de 15 personas en 1991, entre ellas un niño de 7 años, conocido como Caso Barrios Altos.

El hecho de que las víctimas y/o familiares de casos graves como los mencionados cuenten con una adecuada defensa legal, permitió que Alberto Fujimori sea procesado, juzgado y finalmente condenado a 25 años de pena privativa de la libertad, ante los claros indicios de responsabilidad.

Desde el año 2004 brinda asesoría y defensa legal a dirigentes y activistas de derechos humanos, injustamente denunciados y/o detenidos en un contexto de criminalización de la protesta. En casos de conflicto a raíz de actividades extractivas, como la represión y tortura sufrida por 28 campesinos que protestaban contra el proyecto minero «Río Blanco» en la región Piura, los autores de la tortura fueron policías.

Al mismo tiempo, se considera un componente de incidencia política para la aprobación, modificación o derogación de normas que violentan derechos humanos.

De la misma forma, FEDEPAZ cuenta con el **área de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – DESCAs**, desde donde atiende y acompaña a las comunidades y poblaciones afectadas por actividades o industrias extractivas, a fin de promocionar el respeto de sus derechos, la protección de sus entornos y recursos. Asesora y acompaña a gobiernos locales para que busquen incorporar objetivos de desarrollo humano en sus políticas y se comprometan a generar oportunidades de cambio y transformación para un desarrollo más sostenible e inclusivo, a partir de la ampliación o el ejercicio efectivo de derechos.

En casos emblemáticos como el de Tambogrande, Cerro Quilish, Majaz o río Blanco, FEDEPAZ ha acompañado sus procesos de consulta popular en los que la mayoría rechazó la actividad minera en sus tierras, a la generación de espacios de

diálogo y el uso de mecanismos administrativos y legales para detener dichas operaciones en contra de la voluntad de dichas comunidades.

Se busca la defensa de los derechos de los pueblos indígenas u originarios, la consolidación de su participación política, el asesoramiento en temas de consulta previa, libre e informada, la formalización de sus organizaciones y territorios, y el fortalecimiento de liderazgos y capacidades para la defensa del medio ambiente.

Asimismo, FEDEPAZ integra la Coordinadora de Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), de la Red Muqui y el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), desde donde realiza acciones de incidencia política y comunicacional.

Hay que señalar que, actualmente, está compuesto por un equipo técnico bastante reducido y no cuenta con sedes en las zonas de intervención. Como muchas ONG viene sintiendo los efectos del recorte generalizado de fondos para la ayuda y cooperación en estos temas, en países como Perú que hoy es considerado como de «país renta media» según el PNUD y la APCI.

También es importante indicar que la investigadora de esta tesis se incorporó en diciembre de 2014 a la institución. Desde entonces ha aportado y propuesto el desarrollo de la experiencia que a continuación se expondrá.

5.4. Estrategia de intervención y acompañamiento

A partir del trabajo participativo que ya se venía realizando con la comunidad de Supayaku, surgió la solicitud de un apoyo específico a la situación de conflicto que venía aconteciendo en las comunidades awajún de Cajamarca.

Fue entonces que en 2013 se planteó una estrategia de intervención que iniciaba con una acción legal de defensa de la Comunidad de Supayaku ante la autorización sin consulta del proyecto minero y la aparente contaminación de las aguas del río Chirinos expresada en la muerte de peces, contaminación que luego sería confirmada, tal y como se incluye en la cronología del conflicto abordada en el cuarto capítulo.

Dicha estrategia estaba enfocada en la defensa legal inmediata y en el fortalecimiento de liderazgos y de la institucionalidad indígena en zonas de conflicto socio ambiental, como ésta.

Se trata de una intervención financiada por la cooperación francesa que contempla, por un lado, la asesoría a dirigentes y sus organizaciones para la formalización de su representación, y por otro la formación y reforzamiento de sus capacidades para organizarse y defender sus derechos.

5.4.1. Defensa legal

La empresa minera Águila Dorada S.A.C. no consultó en ningún momento su proyecto de exploración con la población indígena de Supayaku, un derecho que está establecido en el Convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas, firmado por Perú en 1994, y en la Ley 29785 – Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y originarios. Da la impresión que el Estado premiara este tipo de omisiones por parte de las empresas, en este caso respondió ante semejante falta otorgando autorización legal al inicio de las operaciones de exploración minera de dicha empresa.

Luego de una serie de visitas y reuniones en la comunidad de Supayaku, FEDEPAZ asumió la defensa legal de sus representantes, quienes conscientes de que

iniciarían un proceso largo e incierto, decidieron tomar esta vía como una forma de canalizar la tensión y la denuncia ante la afectación que estaban sufriendo.

El 6 de noviembre de 2013, la comunidad y su organización ORFAC decidieron iniciar una demanda de amparo contra el MINEM para que se declarara nula la Resolución Directoral N° 229-2013 MEM/DGM de septiembre de 2013, que aprobaba el proyecto «Yagku Entsa» y autorizaba el inicio de las actividades de exploración minera de Exploraciones Águila Dorada S.A.C.

En octubre de 2014 es admitida la demanda de amparo y se notifica al MINEM como parte demandada. En marzo de 2015, esta contesta la demanda. En abril de 2015 FEDEPAZ presentó al Quinto Juzgado Constitucional de Lima, instancia judicial que lleva el proceso, el Informe que contiene la Interpretación del Resultado del Análisis de muestras de agua tomadas en el río Chirinos en 2014, que señala textualmente:

b. Sustancias consideradas indeseables su presencia en aguas:

Fenoles; reportados sobrepasan los límites establecidos DS002-2008 para la Categoría N° 03 [Riego de Vegetales y Bebida de Animales].

Aceites y grasas; se encuentran cercanos a los límites establecidos ECAs [Estándares de Calidad Ambiental].

Esto quiere indicar la presencia de alguna fuente de contaminación aguas arriba que está originando la presencia de los parámetros indicados, ya que su presencia en el agua deriva generalmente de productos sintéticos.

*Se debe prestar atención a estos parámetros Fenoles y Aceites y grasas ya que pueden haber sufrido descomposición natural y biológica y en algún momento los valores pudieron ser mayores a los encontrados. *Se considera a los aceites y grasas debido a que otras normas internacionales establecen valores límites de 0.1 – 0.3 mg/L y el valor encontrado supera este límite. (Informe N° 002-2015-GR.CAJ/GR.RENAMA/LRA/JVDS, en Anexos)

Como se puede deducir del resultado citado, se encontraron indicios de contaminación en el río Chirinos, lo cual ha supuesto un serio perjuicio para la flora, fauna y la salud de las y los pobladores de la Comunidad de Supayaku.

Pero si retrocedemos un poco y revisamos la DIA presentada por la empresa minera Águila Dorada S.A.C. para solicitar autorización al MINEM, es posible deducir que los potenciales riesgos ya se anunciaban. Por ejemplo, la DIA señala que en el área

que abarca el Proyecto Exploratorio «Yagku Entsa», existen cuerpos de agua superficial:

Hábitats Acuáticos

En el área del proyecto se encuentran cuerpos de agua superficial en el río Chinchipe. (Proyecto HC 2012-017. Resumen Ejecutivo, pág. 19, en Anexos)

Sobre esa base consultamos un documento de la Intendencia de Recursos Hídricos (IRH) del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), que señala en su introducción la función de los cuerpos o fuentes de agua superficial:

Las fuentes de agua superficial representan el elemento vital para un sistema de abastecimiento de uso poblacional, agrícola, pecuario, minero, energético y otros. Asimismo, también sirven para mantener a las especies silvestres de flora y fauna existentes (uso ecológico), por lo tanto es necesario definir, su ubicación, cantidad, calidad, y distribución dentro de las cuencas hidrográficas (...) (INRENA, 2005: 1)

Así también, el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos – Ley N° 29338, en su Título XII De Infracciones y Sanciones y Capítulo I de Disposiciones Generales, tipifica como infracción la contaminación de fuentes naturales de agua, sean estas superficiales o subterráneas. Así lo señala textualmente:

Artículo 277°.- Tipificación de infracciones. Son infracciones en materia de recursos hídricos las siguientes: (...) c. Contaminar las fuentes naturales de agua, superficiales o subterráneas, cualquiera fuese la situación o circunstancia que lo genere. (ANA, 2010: 73)

Adicionalmente a la contaminación directa de cuerpos de agua, la DIA de la empresa contempla los riesgos por el arrastre de partículas tóxicas que puede generar la perforación del suelo o el solo traslado de equipos durante las operaciones:

1.4 Descripción de las actividades de Exploración

1.4.2 Método de construcción

Plataformas de perforación

(...) El agua para los trabajos de perforación será provista de la Quebrada Yagku Entsa aprobado por la Administración Local de Agua Chinchipe-Chamaya. El área aproximada por cada plataforma será de 64 m².

En las 20 plataformas de perforación si el talud es inestable, se deberán constituir cunetas de coronación en la parte superior del talud de corte (los canales de coronación siempre deberán construirse para minimizar el arrastre de sedimentos) y al pie del talud de corte para desviar toda el agua hacia el punto de descarga. Dicho punto de descarga, en la medida de lo posible, deberá estar ubicado en zonas rocosas para evitar la erosión del talud. (Proyecto HC 2012-017. Resumen Ejecutivo, pág. 23, en Anexos)

Entonces, los potenciales riesgos de contaminación directa del agua pero también el agua y el suelo por arrastre de sedimentos y erosión son evidenciados en esta cita. Sobre este riesgo específico volvemos a la *Guía para Evaluar EIAs de Proyectos Mineros* (ELAW, 2010), organización internacional conformada por científicos, defensores y abogados que colaboran con comunidades para la vigilancia de la limpieza del aire, agua y la salud del planeta.

Sobre los impactos ambientales y sociales de la minería relacionados con la alteración de aguas y la erosión de suelos, este documento indica:

Históricamente, los procesos de erosión y sedimentación han causado la acumulación de gruesas capas de partículas finas de mineral y sedimentos en las regiones inundables y la alteración del hábitat acuático, así como la pérdida de la capacidad de almacenamiento en las aguas superficiales. Los principales factores que influyen en la erosión incluyen el volumen y velocidad de la escorrentía de mina, las lluvias, el nivel de infiltración de la lluvia en el suelo, la cantidad de cubierta vegetal, la longitud de la pendiente o la distancia desde el punto de origen del flujo en tierra hacia el punto donde empieza la deposición, así como las estructuras operativas para el control de la erosión. (ELAW, 2010: 10)

Es decir, estos impactos no solo son numerosos y diversos sino que los plazos en los que se materializan sus efectos, también varían entre el corto y el mediano plazo. Y qué decir sobre la afectación en la vida acuática, la misma guía indica que «las concentraciones elevadas de material particulado en la columna de agua superficial pueden producir efectos tóxicos agudos y crónicos en peces» (ELAW, 2010: 11).

Después de un detallado análisis de los riesgos contemplados para la ejecución de este proyecto de exploración minera, volvemos al curso de la demanda de amparo presentada por la comunidad de Supayaku y su organización ORFAC, denunciando no haber sido considerada en el área de influencia del proyecto que solo consideró a Naranjos, y tampoco consultada respecto a su parecer sobre la ejecución un proyecto de este alcance y magnitud.

Al respecto, en mayo de 2016 la instancia judicial encargada notificó a las partes implicadas (la demandante que es la Comunidad de Supayaku y la demandada que es el MINEM), para que sustentaran sus posiciones ante el juez. Supayaku estuvo acompañada por el equipo de FEDEPAZ y representada por sus autoridades, el *apu* Rodolfo Akintui y el presidente de ORFAC Albercio Bazán, quien de manera clara expresó al juez:

Nadie sabe lo que hemos pasado durante dos años, sin comer pescado, sin poder bañarnos, lavar, ni pescar en el río... lo que sienten nuestras madres y niños. Aquí tienen supermercado, nuestro mercado es el río. [Declaración de Albercio Bazán, presidente de ORFAC. Audiencia judicial 17/05/2016] (FEDEPAZ, 2016).

Por su parte, el procurador del MINEM indicó que la comunidad podía haber refutado la DIA en su momento. Ante esto el juez preguntó de qué manera habían comunicado dicho estudio y solicitud de autorización para sus operaciones. El representante de la parte demandada respondió que se publicó en el Diario Oficial El Peruano, y que si la comunidad se había enterado del ingreso de la empresa minera podrían haberse acercado a pedirles información (FEDEPAZ, 2016).

Cabe aclarar que donde habita la población de Supayaku, a día de hoy, no hay periódico ni señal telefónica que llegue. Al respecto, las normas vigentes relativas al derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, establecen que es preciso generar los mecanismos apropiados para que cualquier acción en el marco de la información y consulta a los pueblos indígenas interesados, sea adaptada a sus circunstancias y particularidades (OIT, 1989; Congreso de la República, 2011; MINCUL, 2012).

En agosto de 2016, FEDEPAZ recibió la noticia de que la demanda de amparo fue declarada fundada en primera instancia. Por lo tanto, se ordenaba que las labores de exploración de la empresa Águila Dorada S.A.C. se detengan hasta que se consulte la

continuación del proyecto a la población de Supayaku y cualquier otra que pudiese ser afectada. La sentencia señala textualmente:

DECISION: Por las razones expuestas, el Juez del Quinto Juzgado Constitucional, impartiendo Justicia en nombre de la Nación y del Pueblo: DECIDE: 1. DECLARAR FUNDADA la demanda de amparo interpuesta por Comunidad Nativa de Supayaku y Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca-sede central Supayaku-, por afectación al derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas. 2. SE SUSPENDE los efectos de la Resolución Directoral N° 229-2013-MEM/DGM, de fecha 06 de setiembre de 2013, emitido por el Director General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. La suspensión de la fase de exploración del proyecto "Yagku Entsa" se dará en la etapa que se encuentre, hasta que la demandada tome las medidas necesarias para determinar la viabilidad de la continuación del proyecto previa consulta de la actora y otros pueblos indígenas que podrían ser afectadas. (CSJL, 2016: 7) (En Anexos)

Además, la sentencia judicial señala que Supayaku es una comunidad que colinda con Naranjos, por lo tanto, se le considera parte de la zona de influencia e interesada respecto del proyecto minero en sus territorios, y sujeta de consulta previa, libre e informada como lo establece el Convenio 169 de la OIT y la Ley 29785.

Después de casi tres años de proceso judicial, esta noticia ha sido recibida con alivio y entusiasmo por la población de Supayaku y las organizaciones comprometidas con la causa. La comunidad ha celebrado este triunfo colectivo, a pesar de las esperas, la incertidumbre e incluso hasta la desesperanza que en algún momento invadió en la búsqueda de justicia. Con este resultado en primera instancia, sienten que de alguna manera han sido escuchados y considerados, una suerte de cuota de reconocimiento que llega a través de un proceso legal.

La parte demandada, el Ministerio de Energía y Minas, apeló la sentencia en el mes de septiembre de 2016. A mediados del 2017, la comunidad de Supayaku y el MINEM se encuentran en espera de la resolución definitiva.

5.4.2. Acompañamiento y asesoría

Durante el acompañamiento legal a la comunidad de Supayaku se encontró que la inscripción de sus juntas directivas, tanto de la comunidad como de su organización representativa, no está actualizada en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Esta institución estatal rige el Sistema Nacional de Registros Públicos que norma, dirige y supervisa la inscripción y publicidad de cualquier acto y contrato, incluyendo por supuesto a las comunidades nativas y campesinas.

Es decir, las autoridades elegidas en los últimos tres periodos (cada dos años aproximadamente) no están registradas, por lo tanto, en el ámbito jurídico existen trámites o documentos oficiales que no pueden ser refrendados por el actual *apu* sino por el último que figura registrado en la SUNARP.

Ilustración 19: Sesión de asesoría a juntas directivas
Fotografía: Ingrid Sanca Vega

En un contexto de conflicto socioambiental esta situación representa una debilidad y una desventaja, más aún cuando las disputas están relacionadas a la propiedad, el uso y la distribución del territorio comunal. Si bien estas autoridades cuentan con el respaldo y la legitimidad de sus pueblos en la práctica, su representación debe ser acreditada de manera formal en una serie de gestiones para la defensa, denuncia o negociación relacionadas con los asuntos que les afecten.

Por lo tanto, un componente de acción en la intervención de FEDEPAZ, es la asesoría y acompañamiento a integrantes de las Juntas Directivas, tanto de la comunidad de Supayaku como de su organización ORFAC, en el proceso de actualización y formalización de su representatividad como autoridades. Este trabajo, entre otras tareas, supone la recopilación y revisión conjunta de documentos o de actas de asambleas que no siempre están en completas condiciones físicas o de legibilidad, con el fin de sustentar actos administrativos o jurídicos.

No obstante, hay que señalar que uno de los principales motivos por los cuales muchas autoridades descuidan el proceso de actualización de su inscripción, es la distancia que existe entre sus comunidades y las oficinas donde pueden realizar dicho trámite, que en la mayoría de casos se encuentra en las capitales de provincia.

En el caso de la comunidad de Supayaku, les toma aproximadamente siete horas de viaje llegar hasta la provincia de San Ignacio, donde se encuentra la sede de SUNARP más cercana. Por lo tanto, realizar un viaje de estos significa dejar de atender responsabilidades u ocupaciones propias, en relación a su familia o a la propia comunidad.

Ahora bien, al factor tiempo se suma el factor dinero para pagar gastos de movilidad, tasas administrativas, reproducción de documentos, alimentación y hasta hospedaje si la respuesta fuese, por ejemplo, «regrese mañana».

Adicionalmente, el rol de autoridad exige determinadas habilidades para realizar trámites y manejarse en los sinuosos caminos de la burocracia, habilidades que la mayoría de ellas han desarrollado pero que, en el caso de comunidades que hablan una lengua nativa, están condicionadas al manejo del español, idioma en que se realizan los trámites y se da la atención en las referidas oficinas. Es decir, si el *apu* no se comunica lo suficiente en español, dependerá de alguien o lo hará con suma dificultad o, simplemente, no lo hará.

Entonces, como podemos observar y analizar, tantos factores en contra suman a la cadena de obstáculos burocráticos que la representación comunitaria debe superar en su carrera hacia la formalización.

Es por ello que FEDEPAZ incorporó en 2015 un componente de acompañamiento y asesoría en esta problemática específica que los pobladores de Supayaku manifestaron y que incluso se dejaron notar en el propio proceso judicial, cuando solicitaban el apersonamiento de las autoridades comunales debidamente registradas. En ese marco, se programaron sesiones de explicación de procedimientos, reuniones o visitas específicas para acompañar el trámite, y apoyo económico para costear varias de las gestiones.

En esa misma línea, la comunidad de Supayaku ha decidido revisar sus Estatutos Comunales, una constitución interna en donde están establecidas sus normas de organización y convivencia. En muchas comunidades nativas estos estatutos fueron

elaborados en los años ochenta y noventa, con la ayuda de organizaciones externas y tomando un modelo más bien occidental, no necesariamente adaptado a su lenguaje, idioma y otras de sus características, pero que en su momento sirvieron para sustentar su inscripción como organizaciones comunitarias.

Revisar y/o modificar estatutos internos pasa por el interés de revisar normas propias y ajustarlas a la realidad de cambios, potencialidades y nuevos enfoques, en el caso de las comunidades hay que considerar el elemento de identidad cultural como base para visionar cualquier proyecto de presente y futuro. En el caso de Supayaku, el proceso de reflexión es aún incipiente pero sus autoridades ya han solicitado a FEDEPAZ un rol facilitador en ese camino.

5.4.3. Fortalecimiento de liderazgos y capacidades

La población de Supayaku manifestó, en una actividad de diagnóstico de necesidades formativas, que requerían capacitaciones sobre sus derechos como pueblos indígenas, sobre cómo defenderlos, y también sobre formas de manejar el conflicto respecto a la amenaza de la minería y al enfrentamiento con sus hermanos awajún de la comunidad de Naranjos.

Surge entonces la iniciativa de proponer un componente de fortalecimiento, enfocado en potenciar sus liderazgos y capacidades, articulado a su Plan de Vida, de manera que revierta en su propia organización comunitaria, para la vigilancia y demanda de respeto de sus derechos.

Este marco se llamó inicialmente Escuela de Líderes y Lideresas, pero con el objetivo de adecuar la propuesta lo máximo posible a la cultura awajún se propició un debate comunitario sobre el término y concepto de líder, si era el más apropiado y había

Ilustración 20: Escuela de líderes «Waismag Aidaun Ayamtaiji»
Fotografía: Ingrid Sanca Vega.

uno equivalente en lengua awajún, en la idea también de encontrar un nombre para la escuela.

Se recogieron muchas ideas. Las primeras intervenciones equiparaban el término líder con *apu*, pero entonces surgió la interrogante sobre si ser líder implicaba algo más que la asunción de un cargo de autoridad en la comunidad. Fue entonces que propusieron y consensuaron el término awajún *waismag*, que significa «guerrero» y refiere a cualidades de responsabilidad, honestidad y con visión (*ajútap*) superior para conducir y actuar en favor del pueblo.

Fue así que la Escuela de Líderes y Lideresas pasó a llamarse, como su propia traducción en awajún lo indica, «*Waismag Aidaun Ayamtaiji*». Esta actividad implicó un proceso de cuatro módulos de capacitación. Se trata de sesiones de talleres que,

apoyados en el material complementario elaborado, se reforzaba conceptos básicos relacionados a la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Fue oportuno incluir un módulo, el tercero, que abordara las características del conflicto que en ese momento vivían las comunidades de Supayaku y Naranjos, a raíz de la aprobación de la exploración minera en sus territorios. Sobre esto profundizaremos en el siguiente apartado.

Los enfoques presentes en la formulación y desarrollo de estas actividades han sido principalmente los enfoques de derechos, participación, género, interculturalidad y transformación pacífica de conflictos. Estos han hecho parte de la metodología práctica durante las sesiones que, si bien tomaba como referencia los alcances teóricos contenidos en los materiales de cada módulo, priorizaban la reflexión y discusión colectiva para la construcción de ideas claves en cada caso.

Los encuentros buscaron reforzar aspectos de confianza para la libre expresión de opiniones y escucha activa, procurando no perder de vista la referencia de identidad cultural como base de saberes y conocimientos para su fortalecimiento. Entre otros recursos, se cuenta con un traductor en todas las sesiones.

A las mujeres awajún les cuesta más participar y expresarse públicamente, por vergüenza, por una acentuada dependencia de la voz masculina, por los marcados roles de cuidado familiar que pueden acabar condicionando su presencia y participación en los talleres. Al respecto, creemos y fomentamos el empoderamiento pero a su ritmo y decisión, de ninguna manera forzado. Por ello acogimos el lento y paulatino aumento del número de mujeres, y por supuesto cada una de sus intervenciones.

Los materiales físicos contaron con dibujos y una versión traducida al awajún, elaborados por personas de la propia comunidad, lo cual, además de cercanía, permitió un reconocimiento colectivo de habilidades dentro de la propia comunidad. Aunque la mayoría entiende el español, no es la lengua en que comprenden y se comunican, así que durante los talleres contamos con la colaboración de algún dirigente que va

traduciendo y recogiendo aportes. A continuación, mostramos las portadas de cada módulo, en versión español y awajún, los módulos se incluirán en los anexos de esta tesis a manera de referencia de los contenidos de capacitación.

5.5. Supayaku apuesta por la transformación del conflicto

El nombre Supayaku proviene de los vocablos quechuas: *supay* que significa «diablo»; y *yaku* que es «agua». Su traducción más cercana y extendida sería «agua del diablo», y según cuentan sus pobladores la misma hace honor a la bravura del río Chirinos en algunos tramos que colindan con esta comunidad. Esta referencia suele ir acompañada de historias sobre el río crecido y «molesto», o sobre la muerte de personas que intentaron cruzarlo y de repente se encontraron con fuertes corrientes que se los llevaron sin dejar rastro.

La organización tradicional del pueblo awajún giraba alrededor de un líder guerrero y visionario, un *waismag*. Practicaban la guerra intra e interétnica para mantener esta estructura basada en las relaciones de parentesco. Más que la captura de mujeres o las disputas familiares, era la obtención de cabezas trofeo o *tsantsa* lo que motivaba las guerras interétnicas. Con los procesos de alfabetización y formación de los años cincuenta, el perfil de los líderes guerreros cambia y transita hacia los nuevos liderazgos del *apu* y de las organizaciones indígenas (MINCUL, 2015: 68).

De manera que, el pueblo awajún de Supayaku lleva la marca de sus ancestros guerreros. Se trata de una huella que hasta el día de hoy guía su manera de ser awajún, ya no desde la guerra que practicaban sus abuelos, sino desde la visión de organizarse y actuar a favor de su pueblo.

Después de todo lo vivido en el conflicto que durante varios años mantuvo en vilo a su población, la comunidad de Supayaku ha iniciado un camino pacífico para encararlo. Se trata de un camino que recoge saberes y capacidades de negociación y diálogo propias de la comunidad, aún cuando en determinados momentos un sector de la población valoraba reaccionar desde la confrontación.

Además de dichos saberes y capacidades, las organizaciones aliadas como FEDEPAZ han aportado una serie de herramientas de cara al conocimiento de sus derechos y el fortalecimiento de sus liderazgos, en el marco de su intervención institucional.

Pero para hablar de las decisiones que se tomaron, de las actitudes que favorecieron o de los cambios generados, es necesario identificar los impactos del conflicto, respondiendo a nuestro enfoque y a las herramientas para la transformación que se propusieron y consensuaron en este camino, específicas para cada una de las dimensiones de las que Lederach (2000; 2010) nos propone para abordar los conflictos de una manera diferente.

Las y los *waismag* de la comunidad nativa awajún de Supayaku emprendieron un viaje hacia las profundidades de sus propias fortalezas, para resistir los embates de este prolongado y crucial conflicto. Probablemente, atendiendo no solo a la desescalada del conflicto, es decir, lo urgente; sino también a la necesidad de un cambio más profundo y constructivo (Lederach, 2010).

5.5.1. Impactos del conflicto

Concienciar sobre el enfoque de transformación de los conflictos supone concienciar sobre los ámbitos en los que los conflictos nos afectan, como personas, como colectivo, como sociedad.

El conflicto fue generado por el ingreso inconsulto de la empresa minera en territorios que aunque figuren dentro de los límites de Naranjos, esta comparte con Supayaku a través de la infinidad de recursos que ambas aprovechan de ese bosque que es considerado un todo, desde la visión integral del pueblo awajún.

Analizaremos, entonces, los impactos de dicha situación en este caso, siguiendo la estrategia de intervención que Lederach (2010) propone.

Dimensión personal

El primer impacto que resaltaría sería el **miedo** al interior de la propia población awajún. Esto se ha dejado notar aún más en Supayaku cuya población, a raíz de la tensión y la agresividad expresada por parte de los dirigentes de Naranjos, se ha visto amenazada, agredida y realmente angustiada por lo que podía pasar, considerando una muerte no esclarecida de alguien abiertamente contrario a las negociaciones con la minera que por parte de Naranjos.

En el caso de Naranjos, en principio, existe **arrepentimiento** expresado por la nueva dirigencia de su organización ORASI y representa el sentir de un sector de la población que apoyó el proyecto minero de Águila Dorada S.A.C., a cambio de una compensación económica y sin consultar con Supayaku, según su propia versión, al verse convencida y hasta presionada por un pequeño e interesado grupo de autoridades de la comunidad. En primer lugar, porque se dieron cuenta de que estos dirigentes aprovecharon para sí el beneficio económico que recibieron y finalmente se acabó. En segundo lugar, porque vieron en riesgo su salud y alimentación ante la muerte de peces en el río Chirinos en 2013.

Este sentir es tomado con pinzas por la comunidad de Supayaku, ya que algunos de los que negociaron con la empresa minera, siguen siendo miembros de la directiva de Naranjos o son familiares directos, como es el caso del actual *apu* de la comunidad que fue uno de los que autorizó dicho acuerdo.

Esta población sintió **frustración**, por no haber cambiado sus condiciones para mejor. Las limitaciones y carencias se acentuaron en cuanto a pobreza monetaria, al cambio agresivo de patrones de consumo y de intercambio comercial, algunos transan incluso con la delincuencia y el desesperado manejo de la cuestión territorial y ambiental, producto de la amenaza extractiva y climática.

La producción agrícola ya no es suficiente para subsistir, la dependencia del elemento monetario es cada vez mayor y los vínculos retomados son débiles en confianza, lo cual nos revela un gran impacto en esta dimensión, a nivel físico, emocional y espiritual, que inevitablemente mella la energía y capacidad de ver horizontes más constructivos.

Dimensión relacional

Los líos por las decisiones arbitrarias y de **corrupción** de sus dirigentes han generado decepción entre las familias de Naranjos. Al igual que **desconfianza** y sensación de **traición** por parte de quienes no estuvieron de acuerdo al interior de la propia comunidad y la de Supayaku, lo cual acabó afectando la cohesión comunitaria.

La **manipulación** por parte de quienes aprovecharon su cargo de dirigentes para pactar negocios económicos, presionando a la población hasta amedrentarla, viciaron las relaciones de confianza y de representación al interior de Naranjos.

La **búsqueda de chivos expiatorios** fue un recurso de defensa para los dirigentes de Naranjos. Estos, en vez de asumir responsabilidades, culparon a Supayaku de iniciar el conflicto y no respetar su decisión de permitir la minería, también al alcalde provincial y a las organizaciones aliadas, entre ellas FEDEPAZ, de fomentar la división entre comunidades.

La **comunicación** entre Supayaku y Naranjos dejó de ser transparente, se llenó de mensajes innecesarios de agresión y amenaza, que distorsionaban la realidad y acrecentaban aún más la confusión, así como la sensación de angustia y de permanecer a la defensiva.

En términos concretos, se produjo una fuerte ruptura en este ámbito, que llevó al distanciamiento entre autoridades, lo cual repercute en el trabajo conjunto como pueblo originario, y entre la propia población que aunque distribuida en dos comunidades, está unida por vínculos familiares.

Dimensión estructural

En esta dimensión identificamos aquellas condiciones sociales que favorecieron el conflicto en Supayaku. Las **brechas estructurales** se traducen en este contexto en necesidades no satisfechas, abandono por parte del Estado, empobrecimiento y limitado acceso a servicios básicos. Pero fundamentalmente, tratándose de población indígena y originaria, esas brechas hablan de racismo, discriminación y escaso reconocimiento de su ciudadanía y sus derechos.

El contexto nacional, regional y global nos habla de una interconexión de luchas en las que los pueblos indígenas vienen jugando un rol trascendental. Este colectivo exige la defensa del territorio como sistema de vida, el reconocimiento de sus saberes y derechos ancestrales, y la conservación del medioambiente. Ante la falta de espacios de diálogo directo con el Estado, lo hace a través de acciones de protesta a manera de resistencia contra la estructura económica que les genera múltiples perjuicios.

Como se ha podido sustentar en el tercer capítulo de esta tesis, el Estado peruano responde a estas movilizaciones con represión y criminalización, antes que con la

protección de los derechos humanos. En el caso concreto de Supayaku, las brechas estructurales se materializan en la falta de voluntad para proteger y hacer cumplir el derecho a la consulta previa de esta comunidad, en el interés de un proyecto minero que pone en riesgo su bienestar y sobre el cual el Estado decide de manera unilateral.

Dimensión cultural

El bosque, el territorio, los ríos no sólo proveen de recursos a la población awajún sino que juegan un rol importante en los ciclos vitales su ecosistema amazónico. Ver que estos se encuentran en situación de amenaza supone un fuerte impacto nivel **simbólico**, donde se generan las respuestas e interpretaciones al conflicto, desde patrones culturales que trascienden lo físico y lo económico.

Cuando se relega la cultura se la convierte en un obstáculo (Avruch & Black, 1993). Es lo que viene ocurriendo en el tratamiento de los conflictos, donde las diferencias culturales no son adecuadamente incorporadas y resultan siendo un aspecto problemático en la generación de conceptos y metodologías que recojan el sentir de las partes implicadas.

Los pueblos originarios como el awajún conservan una forma de organización tradicional colectiva y comunitaria; esto se ha visto afectado por la incorporación de patrones de negociación y consumo derivados de un modelo economicista que prioriza el valor monetario frente a otros tipos de valor y riqueza.

Al parecer, dichos patrones primaron sobre principios de convivencia y cohesión comunitaria que plantean un beneficio mejor compartido y distribuido, antes que aquel que se genera fácil y a costa del bienestar colectivo, como sucedió en el conflicto entre Supayaku y Naranjos.

5.5.2. Acciones y recursos para la transformación

Una vez identificados los impactos lo haremos también con las capacidades individuales y colectivas que la comunidad ha aportado a este inicio de un camino de transformación del conflicto. Asimismo, explicaremos los recursos que se han utilizado en el marco de la intervención de FEDEPAZ, como organización aliada de la población en dicho proceso.

Pero antes recordaremos hitos concretos de la cronología de este conflicto. En 2012 y en 2014 las autoridades comunales de Supayaku eligieron una vía de fuerza, la retención de personas ajenas a la comunidad que ingresaron a ella sin aviso ni autorización. Este hecho para la visión occidental es un secuestro, mientras que para las comunidades nativas es parte de un protocolo de seguridad interna, como los tiene cualquier sociedad, en prevención de lo que dicha persona «extraña» pudiese hacer.

En este caso, sucedió con tres funcionarios del INGEMMET (Instituto Geológico Minero y Metalúrgico) cuando los encontraron tomando muestras del agua del río en inmediaciones de la comunidad, y la segunda vez con un trabajador de la empresa minera que había ido a hablar con la población sobre un proyecto productivo.

Más allá del ingreso sin autorización, hay que considerar que estas personas ajenas representaban a la posición contraria en este conflicto, lo cual generó aún mayor zozobra en la población de Supayaku. En ambos casos, la comunidad pidió la presencia de las autoridades nacionales para que su posición en este conflicto sea escuchada. Las personas fueron liberadas luego de algunos días en custodia, previa constancia de su buen estado físico por parte de la Fiscalía.

Se eligieron estos hechos como punto de partida para hablar de transformación, porque considero que pueden dar luces sobre uno de los problemas cruciales en este tipo de conflictos, como es el escaso nivel de reconocimiento al pueblo indígena awajún como interlocutor válido y legítimo en este proceso.

FEDEPAZ reconoce a la comunidad de Supayaku como interlocutora válida, y viene invirtiendo todos los esfuerzos y recursos a su alcance para el empoderamiento de la población en este sentido. A partir de aquí pasamos a detallar las capacidades y acciones emprendidas desde un enfoque de transformación del conflicto.

Dimensión personal

Dados los impactos negativos en la confianza, dignidad y el ejercicio de derechos del pueblo awajún de Supayaku, el componente de fortalecimiento de la intervención de FEDEPAZ, aspira a la recuperación de saberes y el reforzamiento de sus liderazgos indígenas.

Las herramientas de capacitación sobre derecho a la participación, a la consulta previa, a la identidad étnica, al territorio y a la autodeterminación de los pueblos, a través de los módulos referidos, han permitido acercar ideas, conceptos y mecanismos que la comunidad hoy puede considerar para evaluar y tomar las decisiones más convenientes.

Entre las capacidades puestas a disposición por parte de la comunidad encontramos:

- Predisposición para expresar abiertamente lo que sienten y piensan sobre el conflicto, al equipo de FEDEPAZ conformado por una abogada y una antropóloga (autora de esta tesis).

Ilustración 21: Espacios de grupo. Exteriores de la casa comunal de Supayaku

Fotografía: Ingrid Sanca Vega

- Apertura para replantear sus ideas del conflicto desde una visión más negativa y de enfrentamiento, vinculado a formas ancestrales de resolverlos; también para solicitar opinión y asesoría a organizaciones aliadas como FEDEPAZ, en su búsqueda de posibles vías o alternativas de solución.
- Propuesta de acciones de encuentro y conversación con su parte oponente en el conflicto, aun cuando un sector importante de la población exigía más bien una vía de fuerza como el enfrentamiento directo.

Entre las acciones llevadas a cabo por FEDEPAZ para trabajar en esta dimensión, destacamos:

- Segmentos de expresión y escucha abierta dentro de los talleres de capacitación; de sentires, de opiniones, posiciones e intereses respecto a temas cruciales para la comunidad, relacionados con los derechos como temas centrales y con el conflicto con la empresa minera y con Naranjos.
- Atención al lenguaje corporal y no explícito de quienes argumentaron opiniones e interpretaciones del conflicto. De manera especial, atención al lenguaje de las mujeres, cuyas intervenciones muchas veces quedan se solapadas entre las de los hombres, pues son mínimos los casos en que se atreven a pedir turno para hacerlo a voz propia y en público.
- Reconocimiento de capacidades y liderazgos que, con mucho esfuerzo e insistencia priorizaron el diálogo y desestimaron cualquier vía de enfrentamiento con los hermanos awajún de la comunidad de Naranjos.

Dimensión relacional

Los impactos relacionados con la agresividad y la manipulación de discursos y posiciones opuestas, dejaron entre ver que no iba a ser fácil restablecer los vínculos de confianza y comunicación transparente entre Supayaku y Naranjos, específicamente entre sus dirigentes y autoridades.

Pero a fines de 2015, con el cambio de dirigentes en Naranjos, comenzaron a escucharse cada vez más voces a favor del diálogo, de la unión de fuerzas entre Supayaku y Naranjos, como fue en algún tiempo, para emprender una sola lucha por la protección del pueblo awajún.

Entre las capacidades de la comunidad que han aportado a trabajar en esta dimensión, mencionamos principalmente:

- Predisposición al diálogo, a pesar de casi dos años de tensión y agresividad en la comunicación y en el trato entre ambas comunidades, a través de sus dirigentes.
- Iniciativa de reunión con el fin de retomar oficialmente el diálogo entre ORFAC (Supayaku) y ORASI (Naranjos), espacio en el que los participantes llamaron a la unión, a dejar atrás el conflicto y a posicionarse juntos a favor de la protección del medioambiente y de sus territorios. Entre otras cosas, esto se traduce en un rechazo abierto a la minería (a renovar el contrato de exploración). Hay que señalar que a esta reunión no asistió el *apu* de Naranjos (principal vínculo con la dirigencia anterior que negoció con la minera) y que en plena reunión uno de los dirigentes de Naranjos que asistieron para retomar el diálogo con Supayaku, recibió amenazas telefónicas.
- Compromiso de ambas organizaciones ORFAC y ORASI por sostener el diálogo y restablecer los vínculos de confianza y hermandad entre comunidades.

Entre las acciones realizadas por FEDEPAZ en la dimensión relacional, se aportó:

- Acompañamiento del reencuentro y reunión entre las organizaciones representativas ORFAC (Supayaku) y ORASI (Naranjos), a fines del 2015, a pedido de ORFAC como institución aliada, asesora y observadora de un hecho que se consideraba histórico e importante, luego de un largo periodo de división y confrontación entre comunidades (Ilustración 17).

- Reconocimiento de las actitudes a favor de una comunicación transparente y directa entre los dirigentes, durante las sesiones de capacitación y las reuniones de asesoría con la dirigencia de Supayaku.
- Identificación de espacios de coordinación, incidencia y gestión conjunta a favor de las comunidades awajún de Cajamarca, ante autoridades e instituciones, en temas que les afectan directamente como la aprobación de proyectos de inversión en sus territorios, la dotación del presupuesto participativo, la sostenibilidad de espacios de representación indígena en diversos niveles, entre otros.

Dimensión estructural

Para iniciar una transformación profunda a nivel estructural, se precisan cambios profundos en la propia estructura de la sociedad peruana, en la institucionalidad que no acaba de superar el «uso» de la interculturalidad, más allá del discurso y de la «marca Perú», para pasar a una visión de país realmente inclusiva y equitativa con todas sus diversidades.

Sin embargo, el pueblo awajún de Supayaku se permitió aportar capacidades concretas para encaminarse a una transformación en lo estructural:

- Aun cuando estaban inmersos en un conflicto socioambiental, se propusieron delinear un proyecto comunitario y participativo, convocando autoridades y aliados como FEDEPAZ, para elaborar su Plan de Vida 2014-2024. Este recoge importantes referencias de identidad cultural y propuestas concretas en cuatro ejes: socio-cultural, económico productivo, ambiental-territorial, institucional-organizacional,

marcando así la guía de trabajo de un camino hacia el *Tajimat Pujut* o Buen Vivir.

- Vigilancia y defensa de sus derechos ante las instituciones y autoridades competentes en el acceso fundamental y la mejora en cuanto a salud, de educación, transporte, empleo y territorio.
- Exigir la creación y vigilar el mantenimiento de un espacio de representación y enlace, entre comunidades y alcalde, como parte de la estructura de la Municipalidad de la Provincia de San Ignacio.

A nivel estructural, FEDEPAZ consiguió aportar:

- Capacitación para la concienciación de derechos como pueblo originario, y mecanismos de demanda y vigilancia para la exigencia de dichos derechos.
- Asesoría para la elaboración de documentos dirigidos a la autoridad distrital, provincial y regional, respecto a demandas fundamentales de la población y/o pronunciamientos específicos de la comunidad de Supayaku. Durante el 2015 se incluyó en parte a Naranjos, por el pedido de la nueva dirigencia de ORASI.
- Acompañamiento para la formalización de la representación de las autoridades de la comunidad de Supayaku.
- Defensa legal en las denuncias de Supayaku sobre los efectos derivados del inicio de las actividades del proyecto minero «Yagku Entsa», en los territorios compartidos con Naranjos.
- Incidencia a través de redes y plataformas interinstitucionales para el conocimiento de la afectación del pueblo awajún de Cajamarca a raíz del

conflicto socioambiental en la zona, para una mayor llegada mediática y para incidir políticamente a favor de los pueblos indígenas u originarios del Perú.

Dimensión cultural

Esta dimensión es importante pues se trata de identificar aquellos patrones culturales que fomentan las manifestaciones de violencias en los conflictos, y aquellos que nos permiten buscar caminos más pacíficos.

Cuando se abordó el tema de conflictos durante la Escuela de Líderes y Lideresas de Supayaku, conocimos que la idea de conflicto para la cultura awajún equivalía a guerra o enfrentamiento directo.

La comunidad de Supayaku aportó al camino de transformación en el ámbito cultural:

- Apertura y disposición para revisar su idea del conflicto, reconocer en sus propios saberes alternativas más pacíficas para solucionarlos. La resistencia pacífica a la agresión permanente que envolvió el conflicto con Naranjos, está apoyada en esa lógica colectiva y comunitaria del pueblo awajún de Supayaku.
- El rol de las autoridades de Supayaku, jóvenes de entre 25 y 35 años, ha sido crucial para conducir los estados de ánimo durante el periodo más álgido del conflicto, incluso responder a las propuestas más radicales por parte de generaciones mayores y de los sabios y sabias, consejeros de la comunidad, de emprender la confrontación directa y frontal, con lanza incluida.

Ilustración 22: Jóvenes preparando presentación en lengua awajún

Fotografía: Ingrid Sanca Vega

A nivel cultural, FEDEPAZ aportó con herramientas como:

- Módulo de capacitación «Transformación de Conflictos», en el marco de la Escuela de Líderes y Lideresas, desde donde empezamos a trabajar en las características de los conflictos en distintos niveles, en la consciencia de que la sola interacción humana los produce. Asimismo, se acotó sobre tipos, dinámicas y dimensiones, enfocadas en pueblos indígenas, territorio, identidad cultural y medioambiente, de manera que las definiciones se construyan en base al contexto y la experiencia.
- Análisis participativo y comunitario del conflicto socioambiental. A través de la conformación de grupos, procurando equidad de género y

cierto equilibrio en edades, se hizo el ejercicio de identificar causas, problemas, actores, consecuencias, y alternativas.

- Uso de un lenguaje con perspectiva de género, respetuoso con la diferencia, adecuado al contexto, en definitiva, un lenguaje que aporte a la transformación.
- Uso de la plástica colectiva para generar participación y diálogo entre las y los líderes que participaban de la escuela como espacio de fortalecimiento.
 - En una primera ocasión, sobre la base de un río dibujado de aproximadamente un metro y medio de largo, plasmaron sueños y esperanzas con crayones y colores, a manera de proyectar los cambios deseados para su comunidad.
 - En una segunda, se propuso un dibujo colectivo de lo que consideraban su territorio, un sistema de vida que concentra personas, animales, plantas, espíritus y más elementos que forman parte del bosque al que ellos y ellas mismas pertenecen.

En ese sentido, a partir del trabajo que venimos realizando con la comunidad de Supayaku se van visualizando algunos frutos. Por un lado, nos encontramos con una mayor valoración del diálogo como mecanismo de gestión pacífica del conflicto, así como con mejores capacidades para generar las condiciones idóneas en este proceso.

Asimismo, cada vez es más explícita la voluntad de coordinar de manera conjunta con Naranjos para la recuperación de la unidad del pueblo awajún de San Ignacio; se evidencia un mayor conocimiento de las normas y derechos que les permiten posicionarse claramente en la defensa y vigilancia de sus intereses; se perfila una actitud propositiva respecto de los problemas de la comunidad; y se observa especial interés por la revisión de sus normas internas y dinámicas culturales.

En cuanto a la recuperación de vínculos de confianza entre ambas comunidades, aún es difícil visualizar grandes cambios. Sin embargo, para ser una cultura marcada por la guerra como práctica ancestral, la población de Supayaku ha expresado en espacios de asamblea comunitaria que descarta el enfrentamiento y la confrontación como solución al conflicto.

Ilustración 23: Dibujo comunitario. Casa comunal de Supayaku.
Fotografía: Ingrid Sanca Vega

5.6. Seguimos haciendo camino

El nuevo presidente de ORASI, organización representativa de Naranjos, solicitó a FEDEPAZ iniciar un proceso de acompañamiento, similar al que mantenemos con Supayaku. Hay que considerar que su población se mantuvo aislada de programas o proyectos sociales, debido al manejo de los dirigentes que transaron con la empresa minera en condiciones de confusión y poca transparencia.

La ONG ya ha iniciado un ciclo de reuniones con los dirigentes de ORASI aunque no en la misma comunidad, porque consideramos que aún no existen condiciones y garantías para un ingreso seguro de nuestro equipo. Principalmente, porque aquellos que negociaron con la mina y difamaron a FEDEPAZ, están actualmente involucrados en delitos no esclarecidos que son producto de la hostilidad con Supayaku; y siguen vinculados a la autoridad comunal, el *apu*, de Naranjos.

Consideramos que es necesario fomentar un proceso de diálogo multiactor, es decir, involucrar a la Municipalidad Provincial de San Ignacio y Municipalidades distritales de Huarango y de San José de Lourdes, también en acciones de incidencia ante ministerios, empresas, medios de comunicación, para generar mayor conciencia y sensibilidad a partir de un caso concreto, sobre la situación de los pueblos frente al extractivismo.

Un diálogo intercultural que a través de espacios informales en las comunidades y otros promovidos por los municipios, apunten al encuentro de actores, cosmovisiones, propuesta y valoración de patrones y habilidades para un diálogo transformativo.

Un diálogo sostenido también resulta fundamental a partir de asegurar la presencia de todos los actores, en un marco de respeto, reconocimiento y predisposición

al diálogo y al cumplimiento de acuerdos y compromisos. En este caso, sería necesario convocar a la propia empresa minera Águila Dorada S.A.C. y al MINEM que son los actores que menos han aparecido, físicamente hablando, en el escenario descrito. No podemos olvidar a instituciones que podrían ser reguladoras como la Defensoría del Pueblo, el Vicariato de Jaén y las radios locales.

Finalmente, apuntamos hacia un proceso de transformación articulador de experiencias concretas, soñando incluso con que un día no solo se generen registros de conflictos sociales sino que se creen mapas de experiencias transformadoras en zonas de conflicto social, desde una perspectiva constructiva, dinámica y de respeto a las diversidades. Considero que esta tesis puede suponer un aporte inicial en este sentido.

5.7. Recapitulación

La comunidad de Supayaku se encontró con FEDEPAZ en un periodo de crisis dentro del proceso de conflicto que venía aconteciendo. Desde una visión positiva y transformadora, aun en un escenario de polarización, dicho encuentro fue oportuno y decisivo para iniciar un trabajo conjunto y en equipo.

El proceso de intervención tuvo que tener en cuenta los dos niveles del conflicto, uno generado entre dos comunidades que pertenecen al mismo pueblo indígena, a raíz de que una de ellas autorizó la presencia minera en sus territorios; y otro entre pueblos indígenas y la empresa minera Águila Dorada S.A.C. y la instancia estatal que autoriza la actividad minera, el MINEM.

El trabajo realizado con la comunidad de Supayaku ha supuesto un importante inicio de camino para la transformación pacífica del conflicto, especialmente por el trabajo en las cuatro dimensiones de las cuales se identificaron los impactos. Para ello

existen capacidades invertidas por la propia población awajún y herramientas aportadas por FEDEPAZ, una combinación que se vuelve clave en dicho proceso.

La resolución de los asuntos en disputa sigue su ritmo y ciclo, tanto a nivel judicial con la demanda de amparo por la violación del derecho a la consulta previa de Supayaku, como con el restablecimiento de los vínculos entre comunidades. Por lo tanto, insistimos en generar condiciones positivas para el diálogo a nivel de comunidades.

Existen potenciales condiciones para que los vínculos entre Supayaku y Naranjos se restablezcan, se transparenten los intereses y necesidades de ambas; el reto será mantener la transparencia en la comunicación y la aptitud para el diálogo y la negociación para la transformación.

Facilitar espacios donde dichas potencialidades sean legitimadas por la propia población, será importante para que se generen precedentes positivos y consistentes de transformación, aunque cada experiencia requiera su propia creatividad y dedicación.

La cosmovisión del pueblo awajún considera como un atributo ancestral el ser guerrero y defender sus territorios; sin embargo, es importante resaltar que a pesar del clima hostil, durante el periodo analizado, no se produjo ningún enfrentamiento violento entre las comunidades. Esta situación favorece la recomposición del vínculo entre ellas.

CONCLUSIONES

Llegando al final de este viaje, resulta necesario volver la mirada a aquella gran motivación inicial de aportar a los esfuerzos reales de la población awajún de Cajamarca para transformar sus conflictos y los patrones violentos que puedan haberse asociado a su carácter de cultura originaria o de población guerrera.

Asimismo, nos marcamos el objetivo de analizar las condiciones para el diálogo y las capacidades de transformación pacífica del conflicto socioambiental del pueblo awajún de Cajamarca, a partir de su experiencia de fortalecimiento comunitario con FEDEPAZ desde el año 2013.

A partir de esto comparto mis conclusiones generales, sin olvidar que se trata de un proceso social y humano y, como tal, la flexibilidad y el dinamismo son características presentes. Por ello, antes de concluir para cerrar, lo hago más bien para abrir e inspirar caminos más transformadores para nuestros conflictos.

Los Estudios para la Paz y el abordaje pacífico y transformativo de los conflictos.

La Investigación para la Paz proporcionó al mundo una noción de conflicto como parte del proceso de búsqueda y construcción de la Paz a nivel mundial. Todos los aportes teóricos revisados en esta investigación doctoral, nos han proporcionado elementos para entender el conflicto de manera cada vez más amplia y flexible; para

considerar elementos de contexto, de perfil, de intereses; pero también para identificar aquellas capacidades colectivas que pueden servir para mitigar las diferentes formas de violencia que siguen siendo parte de la interacción humana.

La Filosofía para hacer las Paces, a través del marco de transformación pacífica de los conflictos, nos presenta la posibilidad de visibilizar la creatividad presente en nuestras formas de abordar los conflictos. Una perspectiva que fue pensada para concebir la paz más allá de la ausencia de violencia e identificar formas distintas y más integrales e inclusivas para resolver nuestras confrontaciones.

Esto supone, además, un análisis profundo de las variables culturales asociadas a formas violentas en que se manifiestan los conflictos en distintas dimensiones, el mismo que precisamente facilita el enfoque de transformación de conflictos y que aportamos desde el caso concreto presentado en el capítulo final de la presente tesis.

Latinoamérica: resistencias y brechas por transformar.

Latinoamérica es un territorio de conflictos y de resistencias, lo cual puede suponer debilidad y a la vez capacidad, de indignación, de movilización e incidencia por parte de la ciudadanía, con la aspiración de influir en las decisiones gubernamentales que les afectan directamente. Sin embargo, no parece ser suficiente en la incidencia en conflictos por el medioambiente y el territorio, vista la persecución y criminalización de quienes ejercen la defensa de estas causas y derechos.

Existe un tejido de situaciones de descontento ciudadano con hilos comunes a nivel regional, lo cual tiene en vilo a gobiernos que, autoproclamados democráticos, vienen generando una serie de vulneraciones a los derechos de las y los ciudadanos, decidiendo por ellas y ellos sobre su desarrollo y futuro, sin consulta ni inclusión

alguna, obteniendo como respuesta el tajante rechazo y desconfianza de las comunidades más afectadas.

Por otro lado, la desregulación ambiental, la promoción de inversiones extractivas y la falta de reconocimiento de los derechos de las poblaciones originarias, no han sido esquivas a los gobiernos que, curiosamente, cuentan con políticas o legislación para incluir en cierta medida la diversidad biológica, étnica y cultural. Por el contrario, la equidad, la justicia y el respeto acaban brillando por su ausencia en la política económica implementada en Latinoamérica, con la mirada inicial en el Consenso de Washington.

Perú: conflictividad social en torno al extractivismo y los derechos humanos.

Este panorama de desencuentros que se agudiza en el ámbito socio ambiental, representa, hoy más que nunca, una oportunidad para revisar nuestras limitaciones como autoridades, instituciones, colectivos, como ciudadanos y ciudadanas que hacemos parte de este país. Conseguir que nuestras autoridades gobiernen a base de escuchar las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas, requiere aprender también a escucharnos entre nosotros y nosotras, a dialogar con el objetivo de transformarnos desde lo personal, lo relacional, lo estructural y cultural (Lederach, 2003).

Resulta imprescindible, entonces, seguir trabajando en fortalecer nuestra capacidad de gobernanza en los territorios, más todavía en los que existe disputa por el acceso o escasez de recursos a raíz de los proyectos extractivos, de participación civil equitativa, gestión efectiva de recursos y corresponsabilidad en la construcción de un desarrollo que beneficie y sintonice con las poblaciones directamente involucradas.

Si la idea de democracia alude, principalmente, a la distribución del poder en el conjunto de la sociedad, nuestra realidad evidencia falencias en cuanto al respeto de este principio. Cuando un gobierno no sólo no representa los intereses de distintos sectores de la población, sino que los relega ante intereses de grupos que concentran poder político y económico, se está afectando seriamente la democracia. Y esto nos tiene que interpelar muy seriamente.

La vivencia del conflicto del pueblo indígena awajún de Supayaku, Cajamarca, Perú.

El caso de Supayaku, como muchos otros conflictos, refleja la escasa voluntad política para el diálogo por parte de las autoridades y las instituciones y una limitada capacidad de analizar nuestra historia de conflictos y la manera en que se vinculan con la crisis de hoy respecto de una visión compartida del desarrollo.

Los pueblos indígenas siguen condenados a una múltiple y acumulada marginación, al ser habitantes de áreas de reconocida biodiversidad y potencialidad, pero sumidos en la paradoja de la pobreza, la discriminación étnica, el racismo y la exclusión de los procesos sociales y económicos del país.

Se trata de un conflicto en el que las personas afectadas no se sienten escuchadas sino retadas, por un gobierno que no reconoce su ciudadanía y por instituciones que no les otorgan el soporte democrático práctico que corresponde en situaciones de conflicto.

Las barreras emocionales y los sentimientos de frustración de las comunidades, por mantenerse en una situación progresiva de empobrecimiento y por no haber sido consultadas, están invisibilizadas. Esto produce un constante desgaste y mella que acaban viciando las percepciones y dispersando las reacciones de cara al conflicto.

Lo mismo ha sucedido con las barreras culturales pues para el pueblo indígena awajún, el territorio no sólo provee de recursos sino también de elemento sociales y espirituales que juegan un rol importante en sus ciclos vitales. De manera que, el gobierno peruano no repara en la amenaza que para ellos representa su política económica extractivista.

Existe una profunda falta de identificación y empatía étnica y cultural, a la que se suma la apatía para generar condiciones de diálogo en su más amplia y genuina dimensión. Ambas ausencias han llegado a institucionalizarse en el ámbito del gobierno nacional y los gobiernos locales, tanto que se proyecta a las empresas que con un sorprendente espíritu de cuerpo, se enfrentan a la población local que rechaza sus proyectos, debilitando seriamente el frágil sistema democrático y de gobernanza en el país.

En este caso concreto, la relación de la empresa minera Águila Dorada S.A.C. se ha limitado a la negociación y al pago a los dirigentes de Naranjos cuando estos aceptaron su ingreso al territorio awajún; y a la presencia de sus representantes en las audiencias judiciales a raíz de la demanda de amparo interpuesta por la comunidad de Supayaku. Después de eso *ni sus pintas*, como coloquialmente nos referimos en Perú a quien no vuelve a aparecer. Por lo que es imprescindible revisar y trabajar en la relación entre actores, empezando por el propio Estado y las empresas, considerando códigos, niveles de disposición y aspectos implícitos al proceso, que en muchas ocasiones acaban entorpeciendo cualquier esfuerzo en pro del diálogo.

Los guerreros awajún y sus intentos de transformación pacífica.

El carácter guerrero que, por cultura ancestral, caracteriza al pueblo indígena awajún, se hace presente esta vez para protagonizar el inicio de un camino hacia la

pacificación, un recorrido que apuesta por el encuentro y el diálogo, a pesar de todas las dificultades que evidentemente conlleva superar periodos largos de tensión, miedo y desencuentro.

El enfoque transformativo de Lederach (2003) aporta dosis de esperanza en la recomposición de vínculos y la construcción de cambios. Esto resulta importante para propiciar espacios de diálogo que fortalezcan la democracia y la gobernanza desde una perspectiva pluridimensional, intercultural, de género y con reconocimiento de derechos, y que aporten a la capacidad de los actores a participar en procesos de negociación más sostenibles.

Arce (2014) señala que «un proceso de diálogo está orientado por los contenidos, por el proceso y por las relaciones». Bajo esta premisa y las que nos proporciona Lederach, la experiencia de transformación de conflictos en la comunidad de Supayaku apunta hacia un equilibrio de contenidos, relaciones y el proceso mismo de transformación, para llegar a entendimientos más allá de la urgencia, con dedicación, emoción y cuidado de las relaciones que subyacen al conflicto.

Por otro lado, aun sabiendo el difícil panorama para las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la cooperación o ayuda humanitaria en contextos de conflicto social, resulta imprescindible que sistematicemos estos procesos con la población, de manera que seamos capaces de ofrecer alternativas distintas y reales que nos permitan encontrarnos alrededor del conflicto.

Quisiera cerrar este apartado de conclusiones, haciendo referencia a una cita de Lederach, donde el sociólogo americano destaca la capacidad de los seres humanos para « (...) imaginar algo anclado en los retos del mundo real pero a la vez de dar luz a aquello que aún no existe» (2007: 63). Estas palabras me recuerdan el río de esperanzas que la comunidad de Supayaku plasmó en un dibujo comunitario sobre las situaciones

pacíficas imaginadas y deseadas en su comunidad. La manifestación de sus anhelos, expectativas y visiones del futuro resulta un gran punto de partida para reducir las espirales de violencia y destrucción que les amenazan constantemente. Las cuales ya no necesariamente se sostienen con lanzas y declaraciones de guerra, como les sucedía a sus ancestros, sino con creatividad, color, esperanza y, sobre todo, con responsabilidad, disposición y compromiso.

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Si bien todo proceso de investigación requiere ser delimitado, estos no están exentos de nuevas interrogantes para abordar desde otras herramientas o perspectivas los mismos temas que se investigan. Durante la elaboración de esta tesis me surgieron aspectos e ideas que bien podrían ser parte de una siguiente investigación en relación a la transformación de conflictos.

Es por ello, que tomando como referencia las líneas de investigación que el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP) establece para el Programa de doctorado en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo; paso a señalar las líneas de investigación que podrían guiar mi interés por la investigación postdoctoral:

- *Filosofía para la paz y resolución de conflictos.* Me parece imprescindible llevar la investigación para la paz hacia el terreno de las dimensiones humanas, del contexto y la cultura. En mi opinión, así obtendremos experiencias, metodologías y recursos específicos para cada caso. Desde esta perspectiva se generan mayores y mejores condiciones para proponer el enfoque de transformación de conflictos, como sucedió con el caso abordado en esta tesis.

Sin embargo, sería útil interconectar estas experiencias para fomentar un tejido de conocimientos y contrastes en relación a las causas, dinámicas y vías

de resolución de los conflictos socioambientales en Perú y América Latina. En una eventual investigación postdoctoral, consideraría como uno de los objetivos la creación de un mapa de experiencias territoriales transformadoras de los conflictos.

- *Desarrollo social, sostenibilidad y calidad de vida.* Perú mantiene brechas de desigualdad que condicionan el bienestar de algunos sectores de la población, y limitan su capacidad de participación y autonomía. Nos referimos a la vulneración a la que están sujetos los pueblos indígenas, pero también a cualquier grupo en ese contexto, por ejemplo, las mujeres indígenas.

Apuntar a transformar pacíficamente los conflictos socioambientales supone adentrarse en las causas estructurales que mantienen estas desigualdades y contribuyen a la intensificación de los conflictos sociales.

Una fase postdoctoral sería el marco propicio para identificar las limitaciones de la propuesta de intervención inicial, para la transformación pacífica de los conflictos en Supayaku, en relación a todas las voces, en especial la de las mujeres.

BIBLIOGRAFÍA

- ABBOTT, CHRIS y otros (2006): *Respuestas globales a amenazas globales. Seguridad sostenible para el s. XXI* (Documento de trabajo), Madrid, Oxford Research Group, Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE).
- ACOSTA MESAS, ALBERTO (2003): «Resolución de conflictos y regulación de sentimientos», en MUÑOZ A., FRANCISCO y otros (eds.): *Actas del I congreso Hispanoamericano de Educación y Cultura de Paz*, Granada, Universidad de Granada, 293-304.
- ALIANZA MUNDIAL DE DERECHO AMBIENTAL (ELAW) (2010): *Guía para evaluar EIAs (Estudios de Impacto Ambiental) de Proyectos Mineros*, U.S.A.
- AMNISTÍA INTERNACIONAL (2009): *Perú: Bagua, seis meses después*, EDAI, Madrid.

— (2016): *Defendemos la tierra con nuestra sangre. Personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras y Guatemala*, Amnesty International Ltd, Londres. Disponible en <https://www.amnesty.org/es/documents/amr01/4562/2016/es/> [Consulta: 14/10/16]

- ANSIÓN, JUAN (2003): «El diálogo intercultural, clave del desarrollo planetario», en VIGIL, NILA Y ROBERTO ZARIQUEY (eds.): *Ciudadanías inconclusas. El ejercicio de los derechos en sociedades asimétricas*, Lima, PUCP-GTZ.
- ARCE, RODRIGO (2014): *Herramientas para la facilitación de procesos de diálogo*. Diálogo Sur. Perú.
- ASOCIACIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS RURALES (SER) (2015): Nota de prensa: *Cajamarca: comunidad nativa de Naranjos rechaza convenio con minera Águila Dorada SAC*, publicada el 08/04/2015. Disponible en: <http://www.noticiasser.pe/08/04/2015/cajamarca/cajamarca-comunidad-nativa-de-naranjos-rechaza-convenio-con-minera-aguila-dorada> [Consulta: 10/01/2016]
- AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA) (2010): *Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos – Ley N° 29338*, Ministerio de Agricultura. Disponible en: <http://www.ana.gob.pe/media/1097010/reglamento%20lrh%20-%20n%C2%BA%2029338.pdf> [Consulta: 28/05/2016]
- AVRUCH, KEVIN AND BLACK, PETER (1993): «Conflict Resolution in Intercultural Settings: Problems and Prospects», in SANDOLE, D. AND VAN DER MERWE, H. (eds.): *Conflict Resolution Theory and Practice Integration and Application*. Manchester, UK: Manchester University Press.
- BARTH, FREDRIK (1976): *Los grupos étnicos y sus fronteras*. México: Fondo de Cultura Económica.
- BAUMAN, ZYGMUNT (2005): «La Unión Desmantelada», en su: *Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, pág. 155-201.

- BEDOYA, CÉSAR Y LIZ PUMA (ed.) (2015): *Transformación de conflictos. Aportes al análisis y abordaje de conflictos para el desarrollo sostenible*, Prodiálogo, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima, Perú.
- BORÓN, ATILIO (2006): «Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico» en su (Comp.): *Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina*, CLACSO, Buenos Aires, Pág. 147-178.
- BORÓN, ATILIO Y GLADYS LECHINI (2006): «Introducción», en BORÓN, A. Y LECHINI, G. (comp.): *Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina*, CLACSO, Buenos Aires, Pág. 11 – 34.
- CALDERÓN CONCHA, PERCY (2009): *Teoría de conflictos de Johan Galtung*, en: Revista Paz y Conflictos N° 2, año 2009, Instituto de la Paz y de los Conflictos de la Universidad de Granada.
- CEPAL (2010): *Estudio económico de América Latina y el Caribe. Impacto distributivo de las políticas públicas*, División de Desarrollo Económico de la CEPAL, Naciones Unidas, Chile. Disponible en www.cepal.org/de [Consulta: 14/06/2011]
- (2014): *Panorama social de América Latina, 2014*, Santiago de Chile. Disponible en http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37626/S1420729_es.pdf?sequence=6&isAllowed=y [Consulta: 20/10/16]
- (2015): *Estudio Económico de América Latina y El Caribe 2015: desafíos para impulsar el ciclo de inversión con miras a reactivar el crecimiento*, División de Desarrollo Económico de la CEPAL, Santiago. Disponible en

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38713/S1500733_es.pdf?sequence=106&isAllowed=y [Consulta: 13/09/2016]

— (2016): *La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2016*, Naciones Unidas, Santiago. Disponible en http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40213/7/S1600664_es.pdf [Consulta: 09/10/2016]

- CIDH (2011): *Informe Anual de la Comisión Interamericana de derechos humanos 2010. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión*, CIDH. Disponible en https://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/RELATORIA_2010_ESP.pdf [Consulta: 13/10/2016]

— (2015): *Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos*. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf> [Consulta: 14/10/2016]

- CLADEM (2015): *Patrones de violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe. Informe presentado a la Relatora de la ONU sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias*. Disponible en: <http://www.cladem.org/pdf/Informe-Relatoria-de-Violencia.pdf> [Consulta: 14/10/16]

- COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN (CVR) (2003a): *Informe Final*, Lima, Presidencia del Consejo de Ministros, Tomo I.
— (2003b): *Informe Final*, Lima, Presidencia del Consejo de Ministros, Tomo XVIII.

- (2004): *Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*, Comisión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Lima, Perú.
- CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2011): *Ley N° 29785.- Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la organización internacional del trabajo (OIT)*, Perú. Disponible en: <http://sinia.minam.gob.pe/normas/ley-derecho-consulta-previa-pueblos-indigenas-originarios-reconocido> [Consulta: 14/05/2017]
 - CONVOCA (2015): Mapa de infracciones ambientales. Disponible en: <http://mapambiental.convoca.pe/contaminacion/?region=&anno=&empresa> [Consulta: 20/11/2016]
 - COOPERACIÓN (2014): Nota de prensa: *San Ignacio quiere conocer la causa de contaminación del Río Chirinos*, publicada en mayo 2014. Disponible en <http://www.cooperacion.org.pe/actualidad-minera-del-peru-180/118-actualidad-minera-del-peru-180-/2087-san-ignacio-quiere-conocer-la-causa-de-la-contaminacion-del-rio-chirinos> [Consulta: 17/08/2016]
 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA (CSJL) (2016): *Resolución 14 del 2 de agosto de 2016, SENTENCIA del Proceso de Proceso de amparo iniciado por la Comunidad Nativa de Supayaku y Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca- sede central de Supayaku- contra el Ministerio de Energía y Minas*. Disponible en: http://www.fedepaz.org/images/resolucion_sentencia_Supayaku.pdf [Consulta: 28/11/2016]
 - CURLE, ADAM (1977): *Conflictividad y pacificación*, Barcelona, Herder.

- CHIRIF, ALBERTO (2015): *Territorios indígenas en la coyuntura actual*, en la web de Servicios en Comunicación intercultural - SERVINDI, Perú, disponible en: <https://www.servindi.org/actualidad/134946> [Consulta: 08/10/2016]
- DAMONTE, GERARDO (2014): «El modelo extractivo peruano: discursos, políticas y la reproducción de desigualdades sociales», en ULLOA ASTRID Y GÖBEL BARBARA (edit.): *Extractivismo minero en Colombia y América Latina*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2007): *Informe Extraordinario. Los Conflictos Socioambientales por Actividades Extractivas en el Perú*, Lima. Disponible en: <https://elecochasqui.files.wordpress.com/2009/05/defensoria-del-pueblo-informe-extraordinario-los-conflictos-socioambientales-por-actividades-extractivas-en-el-peru.pdf> [Consulta: 05/03/2011]
- (2009): *Informe sobre actuación de la Defensoría del Pueblo en los sucesos acontecidos en Bagua y Utcubamba*, Lima, Perú. Disponible en <http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/documentos/INFORME-ACTUACIONES-BAGUA.pdf> [Consulta: 5/03/2011]
- (2012): *Violencia en los conflictos sociales*. Informe Defensorial N° 156, Primera edición, Lima, Perú.
- (2016): *Reporte de Conflictos Sociales N° 151, Septiembre 2016*, Lima, Perú. Disponible en <http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/objetos/paginas/6/48reporte-mensual-de-conflictos-sociales-n-151---sep.pdf> [Consulta: 08/11/2016]
- DE ECHAVE, JOSÉ (2012): «La minería peruana y los escenarios de transición», en GUDYNAS, EDUARDO y ALAYZA, ALEJANDRA (edit.) *Transiciones. Postextractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú*. Segunda edición

corregida y aumentada. Red peruana por una Globalización con Equidad (RedGE). Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES).

— (2015): «El concepto de licencia social», artículo de opinión publicado en la web de CooperAcción. Disponible en: <http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/231-el-concepto-de-la-licencia-social> consulta 26/10/2016 [Consulta: 10/01/2016]

- DE SOUSA SANTOS, BOAVENTURA (2010): *Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur*, Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Programa Democracia y Transformación Global (PTDG), Perú.
- DEL ÁLAMO, OSCAR (2005): *América Latina una región de conflicto*, Documento de trabajo Número 5 del Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya. Disponible en <http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Am%C3%A9rica%20Latina%20una%20regi%C3%B3n%20en%20conflicto.pdf> [Consulta: 24/07/2011]
- DELFINO, SILVIA (1999): «Género y regulaciones culturales. El valor crítico de las diferencias», en FORASTELLI, FABRICIO Y XIMENA TRIQUELL: *Las marcas del género. Configuraciones de la diferencia en la cultura*, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina – The British Council.
- ELIADE, MIRCIÁ (1999): *Mito y realidad*. Editorial Kairós. España.
- ESCOBAR, ARTURO (2007): *La invención del Tercer Mundo. Construcción y Deconstrucción del Desarrollo*, Gobierno Bolivariano de Venezuela, Venezuela. (47-100)
- FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (FIDH) (2016): *Criminalización de defensores de derechos humanos en el Contexto de proyectos*

industriales: un fenómeno regional en América Latina, en conjunto con el Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos.

Disponible en:

<https://www.fidh.org/IMG/pdf/criminalisationobsangocto2015bassdef.pdf>

[Consulta: 14/10/16]

- FISAS, VICENÇ (1987): *Introducción a los estudios de la paz y de los conflictos*, Editorial Lerna, Barcelona.

— (1998): *Cultura de paz y gestión de conflictos*, Barcelona, Icaria.

— (2004): *Procesos de paz y negociación en conflictos armados*, Barcelona, Paidós.

- FUNDACIÓN ECUMÉNICA PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ (FEDEPAZ) (2015):

Un río de esperanzas. Situación de las comunidades awajún de San Ignacio – Cajamarca. Informe 2015. Lima, Perú. Disponible en

<http://cooperaccion.org.pe/main/images/Descargas->

[Otros_copy/Informe%20un%20rio%20de%20esperanzas%20-%20fedepaz.pdf](http://cooperaccion.org.pe/main/images/Descargas-Otros_copy/Informe%20un%20rio%20de%20esperanzas%20-%20fedepaz.pdf)

[Consulta: 10/01/2016]

— (2016): Nota de prensa: *Autoridades de Supayaku asisten a Audiencia Judicial por Demanda de Amparo contra proyecto minero*, publicada en mayo 2016. Disponible en:

http://www.fedepaz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=277:supayaku-aguiladorada-minem-amparo&catid=29&Itemid=146 [Consulta:

10/09/2016]

- FEDEPAZ, GRUFIDES, ISF Y SOLUCIONES PRÁCTICAS (2015): *Plan de Vida de la Comunidad Nativa Awajún de Supayaku al 2024*, Primera Edición, Cajamarca, Perú. Disponible en

<http://www.grufides.org/sites/default/files//documentos/publicaciones/Plan%20de%20Vida%20de%20la%20Comunidad%20Nativa%20Awajun%20de%20Supayaku.pdf> [Consulta: 10/01/2016]

- GALTUNG, JOHAN (1993): «Los fundamentos de los estudios para la paz», en: RUBIO, ANA (Ed.): *Presupuestos teóricos y éticos sobre la Paz*, Granada, Universidad de Granada.

— (1998): *Tras la violencia 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia*, Bilbao, Bakeaz / Gernika Gogoratuz.

— (2003): *Paz por medios pacíficos. Paz, conflicto, desarrollo y civilización*, Bakeaz, Gernika Gogoratuz.
- GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA (2009): *Estrategia Regional de Biodiversidad de Cajamarca al 2021*. Gobierno Regional de Cajamarca. Perú.

Disponible en http://www.regioncajamarca.gob.pe/sites/default/files/planes/documentos/estrategia_biodiversidad_cajamarca_al_2021.pdf [Consulta: 21/06/2016]
- GLOBAL WITNESS (2014): *¿Cuántos más? El medio ambiente mortal de 2014: intimidación y asesinato de activistas ambientales y de la tierra, con Honduras en primer plano*. Disponible en <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/cuantos-mas/> [Consulta: 13/10/2016]

— (2015): *En terreno peligroso. El medio ambiente mortal de 2015: asesinato y criminalización de defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo*, London. Disponible en

<https://www.globalwitness.org/en/reports/terreno-peligroso/>

[Consulta:

13/10/2016]

- GRUFIDES (2015): Nota de prensa: *Estudio confirma sustancias tóxicas en el río Chirinos – Cajamarca*, publicada el 02/03/2015. Disponible en <https://grufides.lamula.pe/2015/03/02/estudio-confirma-sustancias-toxicas-en-el-rio-chirinos-cajamarca/grufides/> [Consulta: 10/01/2016]
- GUDYNAS, EDUARDO (2009): «El día después del desarrollo», en la REVISTA AMÉRICA LATINA EN MOVIMIENTO (ALAI) N° 445: *La agonía de un mito ¿Cómo reformular el “desarrollo”?* Disponible en <http://alainet.org/publica/445.phtml> [Consulta: 22/11/2010]
- (2015): *Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza*, RedGE, CLAES, PTDG, Cooperación, Lima.
- HORIZONTE CONSULTORES S.R.L. (2012): Declaración de Impacto Ambiental: Proyecto de Exploración Yagku Entsa. Preparado para Exploraciones Águila Dorada S.A.C. Lima – Perú. Marzo 2012.
- HOWARD, MARC (1995): *La cultura del conflicto. las diferencias interculturales en la práctica de la violencia*, Barcelona, Paidós.
- HUAMANÍ, GISELLE (2014): *Curso Herramientas de Análisis de conflictos sociambientales*, material bibliográfico del Diplomado de Transformación de Conflictos Sociambientales para el Desarrollo Sostenible, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Curso 2015-2016, Lima-Perú.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2007): Base de datos del Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda, para

consulta en línea. Disponible en: www.inei.gob.pe Consulta [Consulta: 17/07/2016]

— (2009): *Resumen ejecutivo - Resultados definitivos de los censos en comunidades indígenas de la Amazonía Peruana*. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0789/Libro.pdf [Consulta: 17/07/2016]

— (2010): *Perú: Análisis Etnosociodemográfico de las Comunidades Nativas de la Amazonía, 1993 y 2007*. Disponible en: <http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0902/Libro.pdf> [Consulta: 11/05/2017]

— (2016a): *PERÚ: Brechas de Género 2016. Avances hacia la igualdad entre mujeres y hombres*. Disponible en: http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1388/Libro.pdf [Consulta: 21/10/2016]

— (2016b): *Evolución de la pobreza monetaria 2009-2015. Informe técnico*. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1347/libro.pdf [Consulta: 20/10/2016]

— (2016c): *En el Perú 221 mil peruanas y peruanos dejaron de ser pobres entre los años 2014 y 2015*, Nota de Prensa N° 074 – 22 Abril 2016. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/nota-de-prensa-n074_2016-inei.pdf [Consulta: 14/03/2017]

- INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES (INRENA) (2004): *Valoración cultural de los pueblos Awajún y Wampís*, Proyecto Paz y Conservación

Binacional en la Cordillera del Cóndor. Ecuador – Perú (Componente Peruano), Lima.

— (2005): *Mapa hidrográfico e inventario de fuentes de aguas superficiales en el ámbito del ATDR Sicuani*, Memoria Final. Disponible en: <http://docplayer.es/9941449-Mapa-hidrografico-e-inventario-de-fuentes-de-aguas-superficiales-en-el-ambito-del-atdr-sicuani.html> [Consulta: 28/05/2016]

- LEDERACH, JOHN PAUL (1998): *Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en sociedades divididas*, Bilbao – Gernika Lumo, Bakeaz - Gernika Gogoratuz.
- (2000): *El abecé de la paz y los conflictos. Educación para la paz*, Madrid, Los Libros de la Catarata.
- (2007): *La imaginación moral. El arte y el alma de la construcción de la paz*, Bilbao, Gernika Gogoratuz.
- (2010): *Transformació de Conflictes. Petit Manual D'Ús*, ICIP, Icaria editorial, Barcelona.
- MARTÍNEZ GUZMÁN, VICENT y SONIA PARÍS ALBERT (2004): «Hacer las paces, transformar los conflictos», en REVERTER BAÑÓN, SONIA (coord.) (2004): *Valores básicos de la identidad europea*, Castellón de la Plana, Publicaciones de la Universidad Jaume I, pp. 153-169.
- MARTÍNEZ GUZMÁN, VICENT (2001): «Reconstrucción Filosófica de los Estudios para la Paz», en su: *Filosofía para hacer las paces*, Barcelona, Icaria, pp. 61-74.
- (2004): «Teoría de la guerra en el contexto político de comienzos del siglo XXI», en MURILLO, IDELFONSO (ed.): *Filosofía práctica y persona humana*, Salamanca, Servicio de Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, pp. 471-491.

- (2005): *Podemos hacer las paces. Reflexiones éticas tras el 11-S y el 11-M*, Bilbao, Desclée de Brouwer.
- MELÉNDEZ, CARLOS (2005): «Mediaciones y conflictos: las transformaciones de la intermediación política y los estallidos de violencia en el Perú actual», en VICH, VÍCTOR (ed.): *El Estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia*, Lima, IEP Ediciones, pp. 159-183.
 - MIGNOLO, WALTER D. (2003): «La razón pos occidental: crisis del occidentalismo y emergencia del pensamiento fronterizo», en su: *Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*, Madrid, Akal, 157-168.
 - MINISTERIO DE CULTURA (MINCUL) (2012): *Decreto Legislativo N° 001-2012-MC.- Reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios*. Disponible en: <http://sinia.minam.gob.pe/normas/reglamento-ley-derecho-consulta-previa-pueblos-indigenas-originarios> [Consulta: 14/05/2017]
 - (2015): *Los pueblos achuar, awajún, kandozi y wampis*. Serie Nuestros pueblos indígenas N° 2. Lima, Perú. Disponible en: <http://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Los-pueblos-achuar-awajun-kandozi-y-wampis.pdf> [Consulta: 20/06/2016]
 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MINEM) (2016): *Mapa de Unidades Mineras en Producción*. Disponible en: [http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/MAPAS/2016/2016%20OPERACIONES%20\(BR\).pdf](http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/MAPAS/2016/2016%20OPERACIONES%20(BR).pdf) [Consulta: 21/11/2016]
 - MUÑOZ, FRANCISCO (2001): «La paz imperfecta en un mundo en conflicto», en *La paz imperfecta*, Granada, pág. 38-66.

- MUÑOZ, FRANCISCO y BEATRIZ MOLINA (2001): «La Paz imperfecta ante un universo en conflicto», en su (ed.) (2001): *La paz imperfecta*, Granada, Universidad de Granada.
- (2003): «Estudio e Investigación de la Paz», en *Actas del I Congreso Hispanoamericano de Educación y Cultura de Paz*, Granada, Universidad de Granada, pág. 35 - 54.
- (2004): «Una paz compleja, conflictiva e imperfecta», en prensa, Granada.
- MUÑOZ, FRANCISCO, JOAQUÍN HERRERA, BEATRIZ MOLINA Y SEBASTIÁN SÁNCHEZ (2005): «Investigación de la Paz y los Derechos Humanos desde Andalucía», Granada, Universidad de Granada, pág. 79-95.
- NACIONES UNIDAS (n.d.): *Las Naciones Unidas trabajan para conseguir la paz y la seguridad internacionales*. Disponible en: <http://www.un.org/es/aboutun/booklet/peace.shtml> [Consulta: 07/05/2017]
- OLIVER, LUCIO Y SAVOIA, FRANCESCA (2011): «El 2010 en América Latina. La compleja y difícil lucha por una nueva hegemonía», en: OSAL (Buenos Aires, CLACSO), Año XII, N° 29. Disponible en: http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_por_programa_detalle.php?id_libro=591&campo=programa&texto=6 [Consulta: 12/06/2011]
- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) (1989): *Convenio N° 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes*.
- OSZLAK, OSCAR (2007): «El Estado democrático en América Latina. Hacia el desarrollo de líneas de investigación», en *Revista Nueva Sociedad N° 210*. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2383623> [Consulta: 21/10/2016]

- PAJUELO, RAMÓN (2004): «Perú: crisis política permanente y nuevas protestas sociales», en: OSAL (Buenos Aires, CLACSO), Año V N° 14. Disponible en <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal14/AC14Pajuelo.pdf> [Consulta: 06/03/2011]

- (2013): «Memorias, diferencias étnicas y desigualdad ciudadana», en APRODEH: *Memoria, Posconflicto y Nuevos conflictos socioambientales. Aportes y reflexiones del II Congreso Peruano y I Congreso Latinoamericano de Derechos Humanos*, Lima, Perú.

- PARÍS ALBERT, SONIA (2009): *Filosofía de los conflictos. Elementos para una teoría de su transformación pacífica*, Barcelona, Icaria.

- PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (PCM) (2011a): *Transformación Democrática. Una propuesta para el abordaje de los conflictos sociales*, Lima, Programa de Apoyo para una Cultura de Paz y el Fortalecimiento de capacidades nacionales para la prevención y el manejo constructivo de conflictos de la PCM, Comisión Europea y PNUD, Publicada en [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/6D712C3269CFB4AB05257A560003742D/\\$FILE/1-Marcoconceptual.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/6D712C3269CFB4AB05257A560003742D/$FILE/1-Marcoconceptual.pdf) [Consulta: 16/08/2011]

- (2011b): Resolución Ministerial N° 161-2011-PCM. Aprueba los lineamientos y estrategias para la gestión de conflictos sociales, disponible en: http://www2.pcm.gob.pe/Transparencia/Resol_ministeriales/2011/RM-161-2011-PCM.pdf [Consulta: 07/11/2016]

- (2014) Resolución Ministerial 169-2014-PCM. Conforman Mesa de diálogo para el desarrollo de las comunidades nativas de San Ignacio, Cajamarca. Disponible en <http://www.actualidadambiental.pe/wp->

12/01/2017]

- PRODIÁLOGO (2014): *Protocolo de Observatorio sobre pautas de intervención para la transformación de conflictos y la promoción del diálogo*.
— (2015): *Observatorio de Conflictos. Protocolo. Marco Teórico y Metodología de Análisis*, material bibliográfico del Diplomado de Transformación de Conflictos Socioambientales para el Desarrollo Sostenible, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Curso 2015-2016, Lima-Perú.
- PUMA ALMANZA, LIZ (2015): «Los avances en la construcción de la institucionalidad para el abordaje de los conflictos sociales», en BEDOYA, CÉSAR Y LIZ PUMA (ed.) (2015): *Transformación de conflictos. Aportes al análisis y abordaje de conflictos para el desarrollo sostenible*, Prodiálogo, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima, Perú.
- QUIJANO, ANÍBAL (2004): «El laberinto político de América Latina: ¿hay otras salidas?», en: OSAL (Buenos Aires, CLACSO), Año V, N° 13. Disponible en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal13/> [Consulta: 06/03/2011]
— (2006): «Estado-nación y “movimientos indígenas” en la región Andina: cuestiones abiertas», en: OSAL (Buenos Aires, CLACSO), Año VII, N° 19. Disponible en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal19/osal19.html> [Consulta: 06/03/2011]
- REGAN, JAIME, S.J. (1993): *Hacia la tierra sin mal. La religión del pueblo en la Amazonía*, Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía (CETA). Iquitos, Perú.

- (2001): *A la sombra de los cerros. Las raíces religiosas de los pueblos de Jaén, San Ignacio y Bagua*, Vicariato Apostólico de Jaén. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP). Perú.
- REMY S., MARÍA ISABEL (2005): *Los múltiples campos de la participación ciudadana en el Perú*, Lima, IEP Ediciones.
 - ROZENTAL, MANUEL (2010): *Lectura del momento y su repercusión en comunicación*, publicado en mayo de 2010 en http://movimientos.org/foro_comunicacion/show_text.php3?key=17377 [Consulta: 17/12/2016]
 - RUIZ JIMÉNEZ, JOSÉ ÁNGEL (2004): «Conflicto», en LÓPEZ MARTÍNEZ, MARIO (ed.): *Enciclopedia de Paz y Conflictos*, Granada, Instituto de la Paz y los Conflictos, 149-169.
 - SADER, EMIR (2006): «América Latina en el siglo XXI», en BORÓN ATILIO Y GLADYS LECHINI (comp.): *Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina*, CLACSO, Buenos Aires, Pág. 51 – 80.
 - SHIVA, VANDANA (2001): «Hacer las Paces con la Diversidad. No violencia y el Cultivo de la Diversidad», en: *Biopiratería. El saqueo de la naturaleza y del conocimiento*, Barcelona, Icaria, 125-151.
 - SNL METALS & MINING (2015): *World Exploration Trends 2015. A Special Report from SNL Metals & Mining for the PDAC International Convention*. Disponible en <http://go.snl.com/rs/snlfinanciallc/images/World-Exploration-Trends-WET-Report-2015-English-USletter.pdf> [Consulta: 9/10/2016]
 - STIGLITZ, JOSEPH (1998): *Más instrumentos y metas más amplias para el desarrollo. Hacia el Consenso Post-Washington*, Conferencia Anual del

Instituto Mundial para la Investigación en Economía del Desarrollo (WIDER),
Universidad Naciones Unidas, Helsinki.

— (2008): «Recursos naturales, desarrollo y democracia». En Stiglitz, J. y otros
(2008) *XI Diálogo Democrático: Recursos Naturales, desarrollo y democracia*.

- STOKES, SUSAN (2009): «Globalization and the Rise of the Left in Latin America». Yale University. Disponible en: http://politics.as.nyu.edu/docs/IO/5793/Stokes_paper.pdf [Consulta: 17/12/2016]
- TORRES, FIDEL (2013): *Nugkui; inspiración de las mujeres awajún en el manejo de la biodiversidad para su seguridad alimentaria en el Alto Marañón*. SAIPE. Perú. Disponible en: http://www.observatoriocambioclimatico.org/system/files/publicaciones/archivos/Torres_Fidel_2013_Nugkui_mujeres_ajun_biodiversidad_y_seguridad_alimentaria.pdf [Consulta: 04/06/2016]
- TRANSPARENCIA INTERNACIONAL (2015): *Índice de Percepción de la Corrupción 2015: La corrupción sigue siendo generalizada, pero en 2015 hubo atisbos de esperanza*, disponible en: <http://transparencia.org.es/ipc-2015/> [Consulta: 22/10/16]
- TUVILLA RAYO, JOSÉ (2004): «Cultura de Paz y Educación», en: MOLINA RUEDA, BEATRIZ y FRANCISCO A. MUÑOZ (eds.): *Manual de Paz y Conflictos*, Granada, Universidad de Granada.
- UNCETA SATRÚSTEGUI, KOLDO (2009): «Desarrollo, subdesarrollo, maldesarrollo, y postdesarrollo. Una mirada transdisciplinar sobre el debate y sus implicaciones», en Carta Latinoamericana N° 7, pp. 1-34, D3/CLAES, Montevideo.

- VARGAS, JOSÉ LUIS (2009): «Entre la mediación y la provocación. Movimientos sociales y privilegio de los conflictos en los medios de comunicación del sur peruano», en TEJADA, ERICK (ed.): *Movimientos sociales y democracia en el Perú de hoy. Reflexiones a propósito de la gesta de Arequipa*, Lima, Universidad Nacional de San Agustín, Programa de Democracia y Transformación Global.
- VARGAS, VIRGINIA (2009): «Las disputas que trae la globalización», en TEJADA, ERICK (ed.): *Movimientos sociales y democracia en el Perú de hoy. Reflexiones a propósito de la gesta de Arequipa*, Lima, Universidad Nacional de San Agustín, Programa de Democracia y Transformación Global.
- VELAZCO, DAVID Y QUEDENA, ROSA (2015): *La Criminalización de la protesta social y el caso Majaz*, Oxfam América, Lima – Perú.
- VINYAMATA, EDUARD (2001): *Conflictología. Teoría y práctica en Resolución de Conflictos*, Barcelona, Editorial Ariel.
- (2003): «El oficio del conflictólogo», en su (coord.) (2003): *Tratamiento y transformación de conflictos. Métodos y recursos en conflictología*, Barcelona, Editorial Ariel.

ANEXOS

1. Declaración de Impacto Ambiental de Exploraciones Águila Dorada S.A.C.
2. Interpretación de resultados del Laboratorio Regional Cajamarca
3. Sentencia de la Demanda de Amparo de Supayaku contra MINEM
4. Escuela de líderes/as. Módulo 1: Conociendo nuestros derechos
5. Escuela de líderes/as. Módulo 2: Derecho a la participación
6. Escuela de líderes/as. Módulo 3: Transformación de conflictos
7. Escuela de líderes/as. Módulo 4: Derecho a la libre determinación

ESTUDIO TÉCNICO

EXPLORACIONES
AGUILA DORADA S.A.C.

Preparado para
Exploraciones Águila Dorada S.A.C.
Lima – Perú

Marzo, 2012

Horizonte Consultores S.R.L.

Ingeniería y Medio Ambiente

Proyecto HC 2012-017

ÍNDICE

1	RESUMEN EJECUTIVO	3
1.1	<i>Antecedentes.....</i>	4
1.1.1	Marco Legal.....	4
1.1.2	Descripción de las actividades de exploración minera realizadas anteriormente.....	5
1.1.3	Permisos, licencias y autorizaciones adquiridas	6
1.2	<i>Participación Ciudadana</i>	6
1.2.1	Actividades de Consulta y Participación Ciudadana	6
1.2.2	Relación de Autoridades Locales	6
1.2.3	Titulares de Propiedad Superficial	7
1.2.4	Documentación de Participación Ciudadana	7
1.2.5	Protocolo de Relacionamento	8
1.2.6	Cargos de Presentación de DIA.....	8
1.3	<i>Descripción del Área del Proyecto</i>	8
1.3.1	Aspectos Generales	8
1.3.2	Aspectos Físicos	14
1.3.3	Aspectos Biológicos	19
1.3.4	Aspecto Socioeconómico	19
1.3.5	Componente Cultural e Histórico	20
1.4	<i>Descripción de las Actividades de Exploración</i>	21
1.4.1	Área a explorar, labores proyectadas y perímetro del área a explorar	21
1.4.2	Método de Construcción	23
1.4.3	Estimación del área total efectiva a disturbarse y volúmenes totales de material a remover, detallando para cada componente del proyecto	25
1.4.4	Recursos hídricos	25
1.4.5	Personal	26
1.4.6	Abastecimiento de energía	26
1.4.7	Cronograma de Actividades	26
1.5	<i>Impactos Potenciales de la Actividad</i>	27
1.5.1	Actividades del proyecto de exploración	27
1.5.2	Impactos Ambientales	28
1.6	<i>Plan de Manejo Ambiental.....</i>	30
1.6.1	Medidas de Prevención y Control de Impactos Ambientales	30
1.6.2	Programa de Relaciones Comunitarias	35
1.6.3	Programa de Monitoreo Ambiental de Seguimiento y Control	36
1.7	<i>Medidas de Rehabilitación, Cierre y Post cierre</i>	38
1.7.1	Cierre	38
1.7.2	Post Cierre.....	43
1.7.3	Notificación de Culminación o Suspensión del Proyecto.....	44

1

RESUMEN EJECUTIVO

En un inicio el proyecto iba a ser denominado como Proyecto de Exploración Pucayacu pero a solicitud de la Comunidad Nativa Los Naranjos se ha cambiado con el nombre de **Proyecto de Exploración Yagku Entsa** a partir del 19 de febrero del 2012.

El resumen ejecutivo de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Yagku Entsa, considera los aspectos relevantes de esta actividad y que se describen a continuación.

1.1 Antecedentes

El proyecto de Exploración Yagku Entsa no cuenta con ningún documento ambiental, dado que por el presente documento se está solicitando el inicio de exploraciones mineras en esta zona.

1.1.1 Marco Legal

Para la elaboración de la presente Declaración de Impacto Ambiental, se han considerado las normas y disposiciones ambientales vigentes, habiendo sido clasificada como normatividad general a nivel nacional, y específica del sector Energía y Minas.

Normatividad General a Nivel Nacional

Se han definido las siguientes normas generales a nivel nacional:

- ⊗ Constitución Política del Perú - Título III, Capítulo II: Del Ambiente y los Recursos Naturales
- ⊗ Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)
- ⊗ Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley N° 27446
- ⊗ Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, D.S. N° 019-2009-MINAM
- ⊗ Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, Decreto Legislativo N° 757
- ⊗ Título XIII del Código Penal - Delitos Contra la Ecología
- ⊗ Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N° 26834
- ⊗ Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338
- ⊗ Disposiciones referidas al otorgamiento de autorizaciones de vertimientos y de reúsos de aguas residuales tratadas, R.J. N° 0291-2009-ANA
- ⊗ Modificación de la R.J. N° 0291-2009-ANA referente al otorgamiento de autorizaciones de vertimientos y reúsos de aguas residuales tratadas, R.J. N° 351-2009-ANA
- ⊗ Calificación de los Recursos Hídricos, R.D. N° 1152/2005/DIGESA/SA
- ⊗ Ley General de Salud, Ley N° 26842

- ⊙ Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Ley N° 26821
- ⊙ Ley Sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, Ley N° 26839
- ⊙ Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314 y Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (D.S. N° 057-2004-PCM)
- ⊙ Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, D.S. N° 004-2008-MINAM
- ⊙ Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire, D.S. N° 005-2008-MINAM

Normatividad del Sector Energía y Minas

Las siguientes normas están relacionadas con el proyecto de exploración Yagku Entsa

- ⊙ Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, D.S. N° 014-94-EM
- ⊙ Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, D.S. N° 046-2001-EM
- ⊙ Reglamento del Título Décimo Quinto del TUO de la Ley General de Minería, sobre el Medio Ambiente, D.S. N° 014-95-EM
- ⊙ Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, D.S. N° 020-2008-EM
- ⊙ Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero, D.S. N° 028-2008-EM
- ⊙ Normas que regulan el proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero, R.M. N° 304-2008-MEM/DM

Otras normas relacionadas

Las siguientes normas serán tomadas en cuenta por el proyecto de exploración Yagku Entsa:

- ⊙ Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. N° 009-2005-TR
- ⊙ Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley N° 28296 y su reglamento, D.S. N° 011-2004-ED
- ⊙ Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, R.S. 004-2000-ED

1.1.2 Descripción de las actividades de exploración minera realizadas anteriormente

El proyecto de exploración Yagku Entsa constituye las actividades que inician la minería en la zona; dado que no hay evidencia de que se hayan realizado actividades de exploración o explotación minera, anteriores a las que se propone con el proyecto Yagku Entsa.

1.1.3 Permisos, licencias y autorizaciones adquiridas

El proyecto Yagku Entsa, cuenta con la siguiente documentación:

- ⊗ Resolución Administrativa la cual es otorgada por la Administración Local de Chinchipe para la Autorización de Uso de Agua con fines de exploración minera para el proyecto Yagku Entsa, se encuentra en trámite.
- ⊗ Autorización de la Comunidad Nativa de Naranjos para realizar actividades de exploración por el proyecto Yagku Entsa.

1.2 Participación Ciudadana

Dentro de las actividades de participación ciudadana, se han desarrollado coordinaciones con las poblaciones locales, así como se ha cumplido con presentar copia del presente documento a la Dirección Regional de Cajamarca, Municipalidad Provincial de San Ignacio, Municipalidad Distrital de San José de Lourdes, Comunidad Nativa de Los Naranjos, tal como es requerido por el Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera y la R.M. N° 167-2008-MEM/DM.

1.2.1 Actividades de Consulta y Participación Ciudadana

En un inicio el proyecto iba a ser denominado como Proyecto de Exploración Pucayacu pero a solicitud de la Comunidad Nativa Los Naranjos se ha cambiado con el nombre de **Proyecto de Exploración Yagku Entsa** a partir del 19 de febrero del 2012.

Se llevo acabo la reunión con el objetivo del fortalecimiento social entre la Comunidad Nativa Los Naranjos y la Empresa.

En la reunión se ha reafirmado el apoyo y respaldo a la empresa y los trabajos para llevar adelante el proyecto y trabajar unidos como la empresa en las actividades de Exploración programados.

El Taller se ha desarrollado dentro del marco de “La Declaración de Impacto Ambiental - DIA” para el Proyecto Yagku Entsa que tiene como ubicación geográfica referencial: 733 771-E; 9 464 222-N; y comprende la jurisdicción del Distrito San José de Lourdes en la Provincia de San Ignacio, de la Región Cajamarca, ha sido organizado por Compañía Minera Exploraciones Águila Dorada S.A.C. Titular del Proyecto Yagku Entsa y fue realizado por Horizonte Consultores S.R.L., en cumplimiento de los dispositivos legales vigentes y aplicables al Proyecto. Éste se realizó el día 06 de octubre del año 2011.

1.2.2 Relación de Autoridades Locales

En la tabla RE-1 se presenta la relación de autoridades locales.

TABLA RE-1 RELACIÓN DE AUTORIDADES LOCALES; SEGÚN ENTIDAD, PROYECTO DE EXPLORACIÓN YAGKU EN TSA, 2012

Entidad	Nombre	Cargo
Distrito de San José de Lourdes	Hildebrando Cruz Saavedra	Alcalde
Distrito de San José de Lourdes	Mauro Brito Aguirre	Gobernador
Distrito de San José de Lourdes	Juan De la Cruz Quispe	Juez de Paz
Comunidad Nativa de Naranjos	Víctor Chihuanta Santa	APU Jefe
Comunidad Nativa de Naranjos	Ismael Jempekit Chiwan	Vice Apu
Comunidad Nativa de Naranjos	Oswaldo KuyuJempekit	Secretario
Organización Regional Awajun de San Ignacio	Abel Puerta Peña	Presidente ORASI
Organización Regional Awajun de San Ignacio	Raúl Chiwan Unkush	Vicepresidente ORASI
Organización Regional Awajun de San Ignacio	Adriano Jempekit Chiwan	Secretario ORASI
Organización Regional Awajun de San Ignacio	Rogelio Jempekit Chiwan	Tesorero ORASI
Comunidad Nativa de Naranjos	Enrique Chiwan Unkush	APU del Anexo Alto Naranjos.
Comunidad Nativa de Naranjos	Leví Jempekit Petsa	APU del Anexo Santa Águeda.
Comunidad Nativa de Naranjos	Denis Taijin Shimpukat	APU del Anexo Nuevo Kucha.
Comunidad Nativa de Naranjos	Evaristo Jempekit Stakim	APU del Anexo Chinim.
Comunidad Nativa de Naranjos	Leonidas Chamik Tfmkuam	APU del Anexo Chimi Chimi.
Comunidad Nativa de Naranjos	Sabino Jempekit Sakash	APU del Anexo Tuna.
Comunidad Nativa de Naranjos	Jacqueline Alvarado Aredo	Jefe Puesto Salud de Naranjos.
Comunidad Nativa de Naranjos	Alberto Ramos Puerta	Director IE.16524 de Naranjos.
Comunidad Nativa de Naranjos	Román Jempekit Petsa	Presidente APAFA de Naranjos.

Fuente: Entrevista a líderes locales de C.N. Los Naranjos
Elaboración: Horizonte Consultores S.R.L.

1.2.3 Titulares de Propiedad Superficial

Para la determinación de la titularidad de la propiedad superficial, se ha recurrido a la entrevista directa de las autoridades locales, tanto de la Comunidad Nativa de Los Naranjos, así como a pobladores locales para corroborar los datos de posesión y/o titularidad, quienes han manifestado que el área donde se desarrollará el Proyecto de Exploración Yagku Entsa es de propiedad de la Comunidad Nativa de Los Naranjos, la cual se encuentra ubicada en el distrito de San José de Lourdes, jurisdicción de la provincia de San Ignacio, dentro de la Región Cajamarca.

1.2.4 Documentación de Participación Ciudadana

Los documentos de participación ciudadana se presentan en el anexo 1-3 de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Yagku Entsa.

1.2.5 Protocolo de Relacionamiento

Exploraciones Águila Dorada S.A.C., cuenta con un protocolo de relacionamiento para las comunidades locales (Anexo 1-8), el cual establece pautas comunes y generales sobre términos de referencia consensuados entre la comunidad y Exploraciones Águila Dorada S.A.C. La elaboración del Protocolo será consensuada de manera proactiva entre los representantes de la comunidad y los funcionarios a cargo de Relaciones Comunitarias de Exploraciones Águila Dorada S.A.C. Los temas centrales del Protocolo se adecúan a la realidad socioeconómica de las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto de Exploración Yagku Entsa.

1.2.6 Cargos de Presentación de DIA

Los cargos de presentación de la DIA se adjuntan en el anexo 1-09 del presente documento.

1.3 Descripción del Área del Proyecto

1.3.1 Aspectos Generales

Ubicación Política y Geográfica del Proyecto

La ubicación del Proyecto Yagku Entsa es el siguiente:

- ⊙ Comunidad : Comunidad Nativa de Los Naranjos
- ⊙ Distrito : San José de Lourdes
- ⊙ Provincia : San Ignacio
- ⊙ Departamento: Cajamarca

El proyecto está emplazado en la cuenca del Chinchipe.

Accesos

Las rutas de acceso se presentan en las tablas RE-2.

TABLA RE-2 ACCESO AL ÁREA DE ESTUDIO, PROYECTO DE EXPLORACIÓN YAGKU EN TSA, 2012

Tramo	Distancia (Kms)	Via
Lima - Chiclayo	760	Aérea
Chiclayo - Jaén	325	Terrestre
Jaén - Proyecto	95	Aérea
Total	1 180	Aérea / Terrestre

Fuente: MTC
Elaboración: Horizonte Consultores S.R.L.

Distancia a los poblados cercanos

No existen poblados habitados aledaños al Proyecto de Exploración Yagku Entsa.

El centro poblado de la Comunidad Nativa de Los Naranjos se ubica vía aérea aprox. a 22 kms, del Proyecto de Exploración Yagku Entsa.

Concesiones mineras

En el área donde se llevará a cabo los trabajos de exploración, está cubierta por las propiedades mineras incluidas en la tabla RE-3.

TABLA RE-3 PROPIEDADES MINERAS INVOLUCRADAS AL PROYECTO, SEGÚN CONCESIONES, PROYECTO DE EXPLORACIÓN YAGKU ENTSA, 2012

Concesión Minera	Código	Titular	Área (has)	Partida Registral	Distrito	Provincia	Dpto.
Linette 7	01-00609-03	Exploraciones Águila Dorada S.A.C.	990,49	11026178	San José de Lourdes	San Ignacio	Cajamarca
Yesi 28	01-01643-03	Exploraciones Águila Dorada S.A.C.	726,24	11027071	San José de Lourdes	San Ignacio	Cajamarca
Betty 63	01-01642-03	Exploraciones Águila Dorada S.A.C.	1000,0	11026163	San José de Lourdes	San Ignacio	Cajamarca

Fuente: Exploraciones Águila Dorada S.A.C.
Elaboración: Horizonte Consultores S.R.L.

Área de Influencia Ambiental

El área de influencia ambiental está circunscrita en el entorno inmediato a la ubicación de los sondajes del Proyecto de Exploración Yagku Entsa, cuyas características son las siguientes:

- ⊗ Área de influencia directa: está constituida por el entorno inmediato a la ubicación de las plataformas de perforación. Abarca un área de 30,44 hectáreas y los vértices de sus coordenadas se presentan en la tabla RE-4.
- ⊗ Área de influencia indirecta: está constituida por el emplazamiento del proyecto dentro de la micro cuenca del río Yagku Entsa y que ocupa un área aproximada de 111,51 hectáreas, cuyos vértices se presentan en la tabla RE-5.

TABLA RE-4 COORDENADAS UTM DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA, PROYECTO DE EXPLORACIÓN YAGKU ENTSA, 2012

Vértice	Coordenada UTM WGS-84		Coordenada UTM PSAD-56		Zona
	Este	Norte	Este	Norte	
01	732 991,00	9 462 961,00	733 250,00	9 463 333,00	17
02	733 399,00	9 463 106,00	733 658,00	9 463 478,00	17
03	734 035,00	9 463 129,00	734 294,00	9 463 501,00	17
04	734 062,00	9 463 612,00	734 321,00	9 463 984,00	17
05	734 123,00	9 463 750,00	734 382,00	9 464 122,00	17
06	734 592,00	9 463 737,00	734 851,00	9 464 109,00	17
07	734 472,00	9 464 336,00	734 731,00	9 464 708,00	17
08	734 443,00	9 464 709,00	734 702,00	9 465 081,00	17
09	734 816,00	9 465 324,00	735 075,00	9 465 696,00	17
10	733 905,00	9 464 988,00	734 164,00	9 465 360,00	17
11	733 362,00	9 464 790,00	733 621,00	9 465 162,00	17
12	733 241,00	9 464 551,00	733 500,00	9 464 923,00	17
13	732 772,00	9 464 610,00	733 031,00	9 464 982,00	17
14	732 113,00	9 463 649,00	732 372,00	9 464 021,00	17
15	732 817,00	9 463 688,00	733 076,00	9 464 060,00	17
16	732 968,00	9 463 444,00	733 227,00	9 463 816,00	17

Fuente: Exploraciones Águila Dorada S.A.C.
Elaboración: Horizonte Consultores S.R.L

TABLA RE-5 COORDENADAS UTM DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA, PROYECTO DE EXPLORACIÓN YAGKU EN TSA, 2012

Vértice	Coordenada UTM WGS-84		Coordenada UTM PSAD-56		Zona
	Este	Norte	Este	Norte	
01	733 788,00	9 467 519,00	734 047,00	9 467 891,00	17
02	733 971,00	9 466 982,00	734 230,00	9 467 354,00	17
03	734 094,00	9 466 875,00	734 353,00	9 467 247,00	17
04	734 148,00	9 466 597,00	734 407,00	9 466 969,00	17
05	734 304,00	9 466 223,00	734 563,00	9 466 595,00	17
06	734 455,00	9 466 142,00	734 714,00	9 466 514,00	17
07	734 668,00	9 465 846,00	734 927,00	9 466 218,00	17
08	735 104,00	9 465 470,00	735 363,00	9 465 842,00	17
09	735 386,00	9 465 494,00	735 645,00	9 465 866,00	17
10	735 493,00	9 465 301,00	735 752,00	9 465 673,00	17
11	735 748,00	9 465 134,00	736 007,00	9 465 506,00	17
12	735 741,00	9 464 528,00	736 000,00	9 464 900,00	17
13	735 696,00	9 464 205,00	735 955,00	9 464 577,00	17
14	735 489,00	9 463 959,00	735 748,00	9 464 331,00	17
15	735 759,00	9 463 521,00	736 018,00	9 463 893,00	17
16	736 016,00	9 463 524,00	736 275,00	9 463 896,00	17
17	736 445,00	9 463 479,00	736 704,00	9 463 851,00	17
18	736 849,00	9 463 357,00	737 108,00	9 463 729,00	17
19	737 036,00	9 463 094,00	737 295,00	9 463 466,00	17
20	737 672,00	9 462 920,00	737 931,00	9 463 292,00	17
21	737 577,00	9 462 884,00	737 836,00	9 463 256,00	17
22	737 145,00	9 462 907,00	737 404,00	9 463 279,00	17
23	737 034,00	9 462 958,00	737 293,00	9 463 330,00	17
24	736 334,00	9 462 793,00	736 593,00	9 463 165,00	17
25	736 146,00	9 462 809,00	736 405,00	9 463 181,00	17
26	735 526,00	9 462 602,00	735 785,00	9 462 974,00	17
27	734 743,00	9 462 535,00	735 002,00	9 462 907,00	17
28	734 263,00	9 462 705,00	734 522,00	9 463 077,00	17
29	733 765,00	9 462 568,00	734 024,00	9 462 940,00	17
30	733 501,00	9 462 729,00	733 760,00	9 463 101,00	17
31	733 248,00	9 462 784,00	733 507,00	9 463 156,00	17
32	732 966,00	9 462 783,00	733 225,00	9 463 155,00	17
33	732 681,00	9 462 966,00	732 940,00	9 463 338,00	17
34	732 204,00	9 463 082,00	732 463,00	9 463 454,00	17
35	731 942,00	9 463 210,00	732 201,00	9 463 582,00	17
36	731 791,00	9 463 339,00	732 050,00	9 463 711,00	17
37	731 788,00	9 463 927,00	732 047,00	9 464 299,00	17
38	731 918,00	9 464 293,00	732 177,00	9 464 665,00	17

Datum WGS-84; Zona 17

Fuente: Exploraciones Águila Dorada S.A.C.

Elaboración: Horizonte Consultores S.R.L.

TABLA RE-5 COORDENADAS UTM DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA, PROYECTO DE EXPLORACIÓN YAGKU EN TSA, 2012

Vértice	Coordenada UTM WGS-84		Coordenada UTM PSAD-56		Zona
	Este	Norte	Este	Norte	
39	732 211,00	9 464 417,00	732 470,00	9 464 789,00	17
40	732 496,00	9 464 435,00	732 755,00	9 464 807,00	17
41	732 813,00	9 464 655,00	733 072,00	9 465 027,00	17
42	732 956,00	9 465 089,00	733 215,00	9 465 461,00	17
43	733 410,00	9 465 334,00	733 669,00	9 465 706,00	17
44	733 432,00	9 465 609,00	733 691,00	9 465 981,00	17
45	733 788,00	9 465 609,00	734 047,00	9 465 981,00	17

Fuente: Exploraciones Águila Dorada S.A.C.
Elaboración: Horizonte Consultores S.R.L.

Área de Influencia Socioeconómica

El área de influencia socioeconómica del Proyecto de Exploración Yagku Entsa, está considerado por la Comunidad Nativa Los Naranjos en terreno superficial del distrito de San José de Lourdes, jurisdicción de la provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca.

TABLA RE-6 COORDENADAS UTM DEL, ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL DIRECTA; SEGÚN VÉRTICES, PROYECTO DE EXPLORACIÓN YAGKU EN TSA, 2012

Vértice	Coordenada UTM WGS-84		Coordenada UTM PSAD-56		Zona
	Este	Norte	Este	Norte	
01	730 448,00	9 468 091,00	730 707,00	9 468 463,00	17
02	738 476,00	9 468 091,00	738 735,00	9 468 463,00	17
03	738 476,00	9 461 790,00	738 735,00	9 462 162,00	17
04	730 448,00	9 461 790,00	730 707,00	9 462 162,00	17

Fuente: Exploraciones Águila Dorada S.A.C.
Elaboración: Horizonte Consultores S.R.L.

TABLA RE-7 COORDENADAS UTM DEL, ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL INDIRECTA; SEGÚN VÉRTICES, PROYECTO DE EXPLORACIÓN YAGKU EN TSA, 2012

Vértice	Coordenada UTM WGS-84		Coordenada UTM PSAD-56		Zona
	Este	Norte	Este	Norte	
01	729 024,00	9 469 410,00	729 283,00	9 469 782,00	17
02	739 945,00	9 469 410,00	740 204,00	9 469 782,00	17
03	739 945,00	9 460 409,00	740 204,00	9 460 781,00	17
04	729 024,00	9 460 409,00	729 283,00	9 460 781,00	17

Fuente: Exploraciones Águila Dorada S.A.C.
Elaboración: Horizonte Consultores S.R.L.

Punto de Referencia

El punto de referencia del área donde se desarrollarán las actividades de exploración del Proyecto Yagku Entsa, es 733 771-E; 9 464 222-N, zona 17 según datum WGS-84.

Pasivos Ambientales

No existen pasivos ambientales en el área de influencia del Proyecto de Exploración Yagku Entsa. Existen caminos peatonales en la frontera ejecutados anteriormente por la Comunidad Nativa de Naranjos que sirven de vigilancia de su territorio, en aprox. 08 Kms de longitud.

Informe de reconocimiento arqueológico preliminar a nivel superficial

Se ha realizado la prospección de las áreas de impacto directo, no habiéndose ubicado áreas con posibles restos arqueológicos.

1.3.2 Aspectos Físicos

Topografía

Los rasgos fisiográficos del entorno del Proyecto de Exploración Yagku Entsa permiten concluir que corresponde a una topografía muy ondulada y escarpada, con presencia de unidades fisiográficas de zona de sierra y selva: montañas de la zona meso andina de la sierra y montaña de ceja de selva y selva alta, con laderas de pendientes muy pronunciadas forman valles estrechos y profundos, generalmente con la presencia de afloramientos líticos. Su ubicación respecto al mapa fisiográfico del Perú, corresponde a zona meso andina, ceja de selva y selva alta.

Geología

En el área de estudio la litología se caracteriza por material cuaternario fluvial, arrastrado por las aguas de escorrentía en las épocas pluviales y que se depositan en las partes bajas de las quebradas y dominando las laderas y cumbres de los cerros, la unidad plutónica "Plutón Picorana".

Se ha inferido la existencia de dos fallas geológicas al Este y al Sur del área que ocupará el Proyecto de Exploración Yagku Entsa, a lo largo de la Quebrada Pucayacu, aguas abajo del área evaluada.

No representan riesgo sobre los componentes del proyecto de exploración, debido a que se encuentran fuera del área que ocuparán las diferentes plataformas de perforación, así como el campamento del proyecto.

Climatología

Según el mapa climático elaborado por el INRENA, la zona de estudio le corresponde un clima templado a cálido (valle meso andino, ceja de selva y selva alta). Este clima corresponde a la región de Ceja de Selva, se caracteriza por sus precipitaciones anuales de 1-500 mm y temperatura media anual de 15 a 18°C. Presenta veranos lluviosos e inviernos moderadamente secos.

☑ Temperatura

Se ha registrado una temperatura media de 25,1°C, con una variación entre 16,°C a 37°C; sin embargo es preciso señalar que, las variaciones estacionales no son significativas, tanto en sus niveles máximos como en sus niveles mínimos (gráficas 4-1, 4-2 y 4-3).

Gráfica 4-1
Variación de la temperatura media mensual, Estación Namballe (2007-2011)

Gráfica 4-2

Variación de la temperatura máxima mensual, Estación Namballe (2007-2011)

Gráfica 4-3

Variación de la temperatura mínima mensual, Estación Namballe (2007-2011)

☒ **Precipitación**

Se ha registrado una precipitación media mensual que varía entre 13,5 a 30,6 mm mensuales, y una precipitación anual de 151,8 a 366,9 mm/año, siendo los meses de mayor precipitación desde octubre a junio, periodo en el que no se aprecian variaciones significativas (gráfica 4-4).

Gráfica 4-4
Variación de la precipitación total mensual, Estación Namballe (2007-2011)

☒ **Vientos**

Se ha registrado una velocidad de viento media mensual de 2,8 m/s, variando entre 2,2 a 3,9 m/s, lo cual no es significativo. No existe una relación directa entre periodo estacional y velocidad de viento.

En relación a la dirección predominante de viento, no se muestra una tendencia definida, sin embargo es preciso señalar que las mayores frecuencias tienen dirección NE, E, SE y W.

Gráfica 4-5
Rosa de Vientos para la Estación Namballe (2007-2011)

Suelos

La descripción de los suelos del área del Proyecto de Exploración Yagku Entsa se realizó en base a información secundaria disponible en el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA); quien ha desarrollado un Mapa de Suelos del Perú, basándose en la información de “World Reference Base for Soil Resources 2006”, FAO. A partir del mapa de suelos publicado por INRENA, se ha obtenido información general sobre los tipos de suelos que están presentes en la zona, los cuales están representados de manera general por el siguiente tipo:

- ⊙ Cambisol
- ⊙ Cambisol Dístico
- ⊙ Acrisol
- ⊙ Acrisol Háplico
- ⊙ Lixisol

Hidrología

En el ámbito regional interviene una sola cuenca que es el río Chinchipe.

En el ámbito local el proyecto está localizado en la quebrada Yagku Entsa, el cual forma parte de la sub cuenca del río Chirinos, cuenca del río Chinchipe, cuyo drenaje fluye hacia el Atlántico.

1.3.3 Aspectos Biológicos

Flora

Los suelos derivados de la roca arenisca son conocidos generalmente por ser altamente ácidos y muy pobres en nitrógeno, fósforo y otros nutrientes; la vegetación de la roca arenisca y de la arena blanca está típicamente enana y esclerofilada, y una capa gruesa de la turba se forma con frecuencia encima del substrato oligotrófico (Anderson, 1981; Duienvorden y Lips, 1995).

Algunas de las especies restringidas al área de estudio son también especies comunes de la zona andina y su transición con la zona amazónica.

La cobertura vegetal del área de estudio depende de las características edáficas locales y generalmente se puede apreciar abundante vegetación en las partes altas de los cerros y su proyección hacia el fondo de las quebradas; sin embargo, la superficialidad de los suelos, hace que sea un ecosistema frágil debido a que fácilmente puede ser lavado por las intensas precipitaciones pluviales cuando se pierde la cobertura que fija los suelos.

En consecuencia, en el área de estudio la cobertura vegetal se da alrededor de 80 a 90% del área, constituyendo un manto verde de vegetación con especies de flora comunes a esta región y que serán descritas posteriormente.

Fauna

Los anexos y pueblos incluidos en el área de estudio desarrollan una actividad agropecuaria muy reducida, basada la ganadería principalmente en la crianza de animales menores (gallinas, pavos) y ganado caprino.

De las especies de fauna encontradas el área de estudio, no se ha identificado ninguna especie de fauna silvestre categorizada según el listado de especies de fauna detalladas en el D.S. N° 034-2004-AG.

Hábitats Acuáticos

En el área del proyecto se encuentran cuerpos de agua superficial en el río de Chinchipe.

1.3.4 Aspecto Socioeconómico

Cajamarca es un departamento del Perú situado en la parte norte del país. Limita al oeste con los departamentos de Piura y Lambayeque, al sur con La Libertad, al este con Amazonas y al norte con territorio ecuatoriano. Está conformado por territorios de sierra y de selva de diversas cuencas afluentes del río Marañón y

las partes altas de algunas de la vertiente del Pacífico. Cubre una superficie de 33 318 Km², que representa el 2,6 por ciento del territorio nacional. Políticamente está dividido en 13 provincias y 126 distritos, siendo su capital la ciudad de Cajamarca ubicada en el valle interandino del mismo nombre, la ciudad se puede divisar desde la colina Santa Apolonia. Cajamarca actualmente representa el núcleo económico, turístico, industrial, comercial, cultural y minero de la sierra norte del Perú.

El territorio comprende dos regiones naturales, sierra y selva, siendo predominante la primera. La altura del departamento de Cajamarca oscila entre los 400 msnm, (Distrito de Choros - Provincia de Cutervo) y los 3 550 msnm, (Distrito Chaván - Provincia de Chota). El relieve cajamarquino es muy accidentado debido a que su territorio es atravesado de sur a norte por la Cordillera Occidental de los Andes.

La Provincia peruana de San Ignacio es una de las trece provincias que conforman el Departamento de Cajamarca, perteneciente a la Región Cajamarca. Limita al norte con el Ecuador, al este con la Región Amazonas, al sur con la provincia de Jaén y al oeste con la Región Piura.

La provincia de San Ignacio está localizada en el extremo norte del departamento de Cajamarca, que corresponde así mismo al extremo septentrional de Perú, en la frontera con el Ecuador. La capital de esta provincia es la ciudad de San Ignacio.

El Distrito San José de Lourdes es uno de los 7 distritos de la Provincia de San Ignacio, ubicada en el Departamento de Cajamarca, perteneciente a la Región Cajamarca, Perú. El distrito fue creado mediante Ley N°9868 del 28 de diciembre de 1943. Su capital es el poblado de San José de Lourdes.

San José de Lourdes tiene una población de 18 171 habitantes, representando el 54,30% el sexo masculino y el 45,70% el femenino, predominan las edades que oscilan entre 15 a 64 años, constituyendo el 53,30% y 43,10% entre 0 a 14 años. El 94,40% reside en el área rural.

La Comunidad Nativa Los Naranjos que forma parte de la Comunidad de San José de Lourdes forma parte de la Comunidad Nativa Awajun, que forma parte del Grupo Étnico Awajun, que pertenece a la Familia Lingüística Jíbaro.

Los grupos Awajun están constituidos por 45.137 personas, representando el 18,83% de la población indígena nacional del Perú, por lo que es el segundo grupo étnico más numeroso, luego del grupo étnico Asháninka.

1.3.5 Componente Cultural e Histórico

El Reconocimiento arqueológico preliminar realizado en la zona del proyecto Yagku Entsa, sobre el área señalada como de “trabajos de

plataformas” indica que no hay áreas donde se ha desarrollado actividad humana en el pasado.

1.4 Descripción de las Actividades de Exploración

1.4.1 Área a explorar, labores proyectadas y perímetro del área a explorar

El proyecto de exploración abarca un área de influencia directa de 340 ha, sin embargo, sólo ocupará un área efectiva de 0,4098 ha, la cual será disturbada por los diferentes componentes del proyecto, como son plataformas de perforación, vías de acceso y algunas instalaciones complementarias (talleres, letrinas, etc.).

El área efectiva donde se desarrollarán las actividades de exploración que se declaran en el presente DIA del Proyecto de Exploración Yagku Entsa, en la Comunidad Nativa de Los Naranjos, donde se ubican los sondeos propuestos. La poligonal cerrada que ocupará el proyecto se presenta en la tabla RE-8.

Los componentes del proyecto de Exploración Yagku Entsa, serán los siguientes:

- ⊗ Caminos de acceso peatonal;
- ⊗ Plataformas de perforación (tabla RE-9);
- ⊗ Pozas de lodos;
- ⊗ Campamento;
- ⊗ Instalaciones complementarias.

Actividades Principales

El proyecto considera la perforación de 20 sondeos en 20 plataformas de perforación, de las cuales, se consideran 11 como de prioridad 1 para tomar la decisión de continuar con el programa, el cual se presenta en la tabla RE-8.

TABLA RE-8 POLIGONAL CERRADA EN COORDENADAS UTM, PROYECTO DE EXPLORACIÓN YAGKU EN TSA, 2012

Vértice	Coordenada UTM WGS 84		Coordenada UTM PSAD-56	
	Este	Norte	Este	Norte
01	732 631,3446	9 462 608,6506	732 890,3446	9 462 980,6506
02	732 723,8774	9 462 543,1791	732 982,8774	9 462 915,1791
03	732 988,0493	9 462 830,2527	733 247,0493	9 463 202,2527
04	733 035,8407	9 462 846,7065	733 294,8407	9 463 218,7065
05	733 558,6574	9 462 834,3317	733 817,6574	9 463 206,3317
06	733 627,4599	9 462 895,9414	733 886,4599	9 463 267,9414
07	733 617,5595	9 463 214,3011	733 876,5595	9 463 586,3011
08	733 648,8745	9 463 295,2565	733 907,8745	9 463 667,2565
09	733 702,8546	9 463 480,2048	733 961,8546	9 463 852,2048
10	733 755,8020	9 463 510,2893	734 014,8020	9 463 882,2893
11	734 075,6404	9 463 462,0643	734 334,6404	9 463 834,0643
12	734 143,6199	9 463 516,1745	734 402,6199	9 463 888,1745
13	734 009,7650	9 463 944,1456	734 268,7650	9 464 316,1456
14	733 975,8780	9 464 309,2525	734 234,8780	9 464 681,2525
15	734 010,9530	9 464 366,6853	734 269,9530	9 464 738,6853
16	734 193,0103	9 464 636,4098	734 452,0103	9 465 008,4098
17	734 121,6486	9 464 707,2357	734 380,6486	9 465 079,2357
18	733 629,6623	9 464 483,1627	733 888,6623	9 464 855,1627
19	733 163,1984	9 464 368,2924	733 422,1984	9 464 740,2924
20	733 070,7479	9 464 284,6914	733 329,7479	9 464 656,6914
21	733 009,0524	9 464 064,6817	733 268,0524	9 464 436,6817
22	732 957,8560	9 464 041,8541	733 216,8560	9 464 413,8541
23	732 530,0653	9 464 125,1403	732 789,0653	9 464 497,1403
24	732 489,8021	9 464 111,3106	732 748,8021	9 464 483,3106
25	732 041,5490	9 463 472,4266	732 300,5490	9 463 844,4266
26	732 077,4551	9 463 391,6884	732 336,4551	9 463 763,6884
27	732 530,0734	9 463 441,7413	732 789,0734	9 463 813,7413
28	732 574,7906	9 463 409,3657	732 833,7906	9 463 781,3657
29	732 761,8007	9 463 089,1600	733 020,8007	9 463 461,1600
30	732 777,2444	9 463 031,0540	733 036,2444	9 463 403,0540

Fuente: Plano de Poligonal Cerrada del Proyecto
Elaboración: Horizonte Consultores S.R.L.

TABLA RE-9 PROGRAMA DE PERFORACIÓN, PROYECTO DE EXPLORACIÓN YAGKU ENTSA, 2012

Prioridad	Sondaje	Coordenada UTM WGS-84		Coordenada UTM PSAD-56		PROF (m)	PLATAF m ²	Accesos m	Accesos m ²	Pozas m ²
		Este	Norte	Este	Norte					
2	CDOPY-001	732 710	9 462 630	732 969	9 463 002	500	100	513	2 052	24
2	CDOPY-002	733 550	9 462 920	733 809	9 463 292	500	100	252	1 008	24
2	CDOPY-003	732 985	9 462 900	733 244	9 463 272	500	100	218	872	24
2	CDOPY-004	732 835	9 463 085	733 094	9 463 457	500	100	224	896	24
2	CDOPY-005	733 105	9 463 285	733 364	9 463 657	500	100	183	732	24
1	CDOPY-006	733 570	9 463 280	733 829	9 463 652	500	100	129	516	24
1	CDOPY-007	734 060	9 463 540	734 319	9 463 912	500	100	124	496	24
1	CDOPY-008	733 690	9 463 550	733 949	9 463 922	500	100	407	1 628	24
1	CDOPY-009	733 180	9 463 655	733 439	9 464 027	500	100	197	788	24
1	CDOPY-010	732 585	9 463 490	732 844	9 463 862	500	100	131	524	24
1	CDOPY-011	732 125	9 463 465	732 384	9 463 837	500	100	290	1 160	24
1	CDOPY-012	732 535	9 464 050	732 794	9 464 422	500	100	50	220	24
1	CDOPY-013	733 015	9 463 995	733 274	9 464 367	500	100	0	0	24
2	CDOPY-014	733 450	9 463 860	733 709	9 464 232	500	100	446	1 784	24
1	CDOPY-015	733 980	9 463 940	734 239	9 464 312	500	100	0	0	24
1	CDOPY-016	733 525	9 464 070	733 784	9 464 442	500	100	419	1 676	24
2	CDOPY-017	733 160	9 464 280	733 419	9 464 652	500	100	203	812	24
1	CDOPY-018	733 640	9 464 455	733 899	9 464 827	500	100	0	0	24
2	CDOPY-019	733 945	9 464 380	734 204	9 464 752	500	100	201	804	24
2	CDOPY-020	734 100	9 464 625	734 359	9 464 997	500	100	283	1 132	24
						10 000	2 000	4.275	17 100	480

Fuente: Exploraciones Águila Dorada S.A.C.
Elaboración Horizonte Consultores S.R.L.

1.4.2 Método de Construcción

Camino de Acceso Peatonal

El Proyecto considera la construcción de caminos de acceso peatonal hacia las plataformas de perforación, buscando causar la mínima disturbancia en la zona. Estos caminos peatonales serán construidos utilizando la mano de obra, de un máximo de 1,00 m. de ancho, sobre todo realizando el desbroce de los vegetales.

Plataformas de perforación

Las plataformas de perforación serán de tamaño reducido debido al tipo de equipo a emplear, las cuales serán preparadas empleando mano de obra de personal obrero. El agua para los trabajos de perforación será provista de la Quebrada Yagku Entsa aprobado por la Administración Local de Agua Chinchipe-Chamaya. El área aproximada por cada plataforma será de 64 m².

En las 20 plataformas de perforación si el talud es inestable, se deberán construir cunetas de coronación en la parte superior del talud de corte (los canales de coronación siempre deberán construirse para minimizar el arrastre de sedimentos) y al pie del talud de corte para desviar toda el agua hacia el punto de descarga. Dicho punto de descarga, en la medida de lo posible, deberá estar ubicado en zonas rocosas para evitar la erosión del talud.

Pozas de captación de lodos

Las pozas para la captación y contención de lodos provenientes de las actividades de perforación serán construidas empleando la mano de obra local. Dependiendo de las facilidades que brinde el terreno; las pozas tienen que estar ubicadas adyacentes a la plataforma (20 pozas) o en el talud adyacente a la plataforma. Se retirará el suelo superficial antes de proceder a construir la poza. Las pozas de captación de lodos tendrán una dimensión promedio de 4,0 m de largo x 3,0 m de ancho x 2,0 m de profundidad (dependiendo de las condiciones del terreno) y estarán ubicadas dentro del área designada para cada plataforma.

Bajo ninguna circunstancia las pozas deberán de diseñarse siguiendo los cursos de aguas o estar próximos a ellas, al menos se deberán ubicar a una distancia mayor de 100 m. Todas las pozas de lodos contarán con una geo membrana HDPE o de PVC de 0,5 ó 1,0 mm de espesor, con la finalidad de prevenir la afectación de suelos y/o cuerpos superficiales de agua.

Los lodos de perforación generalmente son mezcla de agua con polímeros de granulometría arcillosa (Bentonitas), las cuales por su propia naturaleza son impermeabilizantes, sin embargo ante la proximidad de un cuerpo de agua se procederán a tornar las siguientes medidas:

- ⊗ Buscar una buena posición para la reubicación de la poza alejado de los cuerpos de agua.
- ⊗ Si no es posible la reubicación se procede a la impermeabilización de la poza de lodos.

Pozo de perforación

La perforación de los sondajes las efectuará una empresa especializada con la supervisión de Exploraciones Águila Dorada S.A.C. Los sondajes serán de perforación Diamantina con líneas HQ y NQ con testigos de 2" de diámetro.

Campamento

Se considera un campamento temporal para perforistas en la zona de perforación constituido por 4 iglúes de 3,5 m de ancho por 7,0 m de largo.

El campamento se ubica en las siguientes coordenadas; 733 710E, 9 463 600N.

1.4.3 Estimación del área total efectiva a disturbarse y volúmenes totales de material a remover, detallando para cada componente del proyecto

En la tabla RE-10 se presenta el área total efectiva a disturbarse, según el tipo de componente del proyecto.

TABLA RE-10 ÁREA EFECTIVA A DISTURBAR SEGÚN TIPO DE COMPONENTE, PROYECTO DE EXPLORACIÓN YAGKU EN TSA, 2012

Componente	Cantidad	Unidad	Área Parcial (m ²)	Área Total (m ²)	Volumen (m ³)
Plataforma de perforación	20	Und.	64	1 280	640
Poza de lodos	20	Und.	12	240	480
Caminos de acceso peatonal	00	Mts.	2 000	2 000	400
Campamento	01	Und.	98	98	49
Instalaciones complementarias	01	Und.	480	480	240
TOTAL				4 098	1 809

Fuente: Exploraciones Águila Dorada S.A.C.
Elaboración: Horizonte Consultores S.R.L.

1.4.4 Recursos hídricos

Se captará agua de la quebrada Pucayacu, en la Toma de Agua 1, se habilitará una Caja de Captación Rústica en la misma quebrada a fin de abastecer con un Equipo de Bombeo Portátil a un Reservorio de Lona Portátil de 10,000 litros de capacidad, ubicado cerca de la plataforma.

Esta quebrada cruza el proyecto de Oeste a Este, cuyo caudal se incrementa más en los meses de inviernos entre Diciembre a Marzo, este recurso hídrico se ubica en la jurisdicción del Comité de Usuarios de Agua.

El consumo de agua para uso doméstico está estimado en 3,15m³ al mes. Asimismo, se utilizarán letrinas o baños químicos, reduciendo el nivel de consumo de agua fresca.

El consumo promedio de agua para la perforación diamantina es de 454,50 m³/m de perforación, Este promedio es siempre y cuando se use agua desde el inicio de la perforación, El agua para consumo humano será provista del punto de agua aprobado por la Autoridad Local del Agua de Chinchipe.

En la tabla RE-11 se presenta la ubicación de los puntos de captación de agua.

TABLA RE-11 PUNTOS DE CAPTACIÓN DE AGUA, PROYECTO DE EXPLORACIÓN YAGKU EN TSA, 2012

Nombre	UTM Este	UTM Norte	Ubicación
Toma de Agua 1	732 800	9 462 900	Quebrada Pucayacu

Datum WGS-84, Zona 17L

Fuente: Resolución Administrativa en Trámite

Elaboración: Horizonte Consultores S.R.L.

1.4.5 Personal

En forma inicial, se empleará 25 personas por la campaña de los primeros 04 meses de perforación. Si los resultados de la exploración son positivos se incrementará gradualmente hasta un máximo de 30 personas.

Adicionalmente, se tiene pensado contar con un coordinador logístico permanente en Yagku Entsa durante todo el programa, cuyo rol será mantener contacto con la comunidad local según se requiera, así como coordinar el abastecimiento de materiales y alimentos al campamento base del proyecto.

1.4.6 Abastecimiento de energía

La perforadora funciona con petróleo diesel D-2, con una capacidad de consumo promedio de 50 galones por día. Este combustible será proveído desde Jaén, que cuenta con grifos comerciales de abastecimiento, donde se abastecerá las perforadoras y un Grupo Electrónico de 5 KW marca Perkins, el cual será portátil y se establecerá en la zona de trabajo.

1.4.7 Cronograma de Actividades

El tiempo total para la ejecución del proyecto será de 24 meses. Aproximadamente 04 meses serán para el acondicionamiento de campamento, ejecución de caminos de acceso peatonal y movilización de máquinas y equipos y el tiempo restante será utilizado en el trabajo de exploración, es decir, en el emplazamiento de las plataformas como la perforación de taladros.

TABLA RE-12 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, PROYECTO DE EXPLORACIÓN YAGKU ENTSA, 2012

Ítem	Actividad	Duración (meses)	Mes																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	Acondicionamiento de campamento, caminos peatonales y movilización	04	■	■	■	■																				
02	Construcción de plataformas	04			■	■	■	■																		
03	Construcción de pozas de sedimentación	02					■	■																		
04	Movilización de equipo de perforación	02		■	■																					
05	Perforación de sondajes (1 000 m/mes)	10						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
06	Cierre Progresivo	15							■	■	■	■	■	■	■	■	■									
07	Cierre Final	03																■	■	■						
08	Post-cierre	06																			■	■	■	■	■	■
09	Desmovilización de equipo y personal	05																				■	■	■	■	■

Fuente: Exploraciones Águila Dorada S.A.C.
Elaboración: Horizonte Consultores S.R.L.

1.5 Impactos Potenciales de la Actividad

1.5.1 Actividades del proyecto de exploración

Caminos de acceso peatonal

Los impactos más importantes se mencionan a continuación:

- ⊗ Actividades de desbroce de vegetales
- ⊗ Generación de material particulado (polvo) en el aire, como resultado del movimiento del material y las actividades de corte y relleno.
- ⊗ Compactación de suelos;

Construcción de plataformas

Los efectos más importantes se mencionan a continuación:

- ⊗ Afectación del suelo;
- ⊗ Modificación del relieve natural e inestabilidad de suelos;
- ⊗ Incremento del nivel de ruido;
- ⊗ Desplazamiento de flora y fauna;
- ⊗ Generación de residuos sólidos;
- ⊗ Riesgo de alteración de calidad de aguas superficiales.

Ejecución de Sondajes

Los impactos son los siguientes:

- ⊗ Desplazamiento de flora (pastos naturales);

- ⊙ Posible alteración de los suelos y vegetación debido al derrame de lodos de perforación;
- ⊙ Consumo de agua fresca que disminuye la disponibilidad ambiental de este recurso;
- ⊙ Generación de lodos de perforación;
- ⊙ Incremento del nivel de ruido en la zona;
- ⊙ Comportamiento del personal obrero que afecta negativamente la zona por la generación de residuos sólidos;
- ⊙ Existe el riesgo de afectación de los cuerpos de agua superficial.

Actividades del personal para el proyecto

El personal tendrá movilización diaria al área de trabajo. Los impactos más importantes son:

- ⊙ Requerimiento de alimentos, se ha programado contar con un cocinero permanente que se encargue de preparar alimentos para todo el personal del proyecto durante todo el periodo de los trabajos. Ello generará residuos sólidos;
- ⊙ Requerimientos de agua, para consumo humano, provenientes de la Quebrada Yagku Entsa y con cloración respectiva para su consumo;
- ⊙ Requerimientos de servicio de luz y servicios higiénicos;

El personal obrero (no calificado) será contratado de las zonas cercanas al proyecto.

1.5.2 Impactos Ambientales

Factor Físico

☒ **Relieve**

El impacto está relacionado a la modificación del paisaje, erosión, desestabilización de taludes.

☒ **Suelo**

El impacto está relacionado con las pérdidas de suelo, compactación del suelo, afectación local de perfil estratigráfico.

☒ **Calidad de Aire**

El impacto está relacionado con el incremento de gases de combustión, material particulado y el nivel de ruido ambiental.

☒ **Acuíferos**

No se estima que los acuíferos sean afectados por las labores de exploración minera.

☒ **Aguas superficiales**

El impacto potencial está relacionado con las fluctuaciones de niveles de agua, alteración de la calidad de aguas (sólidos en suspensión), y drenaje ácido de rocas por los desmontes que puedan generarse, aunque éste sería un riesgo potencial.

Factor Biológico

☒ **Vegetación terrestre**

El impacto está relacionado con el desplazamiento de la escasa flora existente, debido a la eliminación de especies herbáceas.

☒ **Vegetación acuática**

No se estima impactos sobre la vegetación acuática del área de influencia directa e indirecta del proyecto.

☒ **Fauna terrestre**

El impacto está relacionado con el desplazamiento temporal de especies de la escasa fauna terrestre (aves y pequeños mamíferos).

☒ **Fauna acuática**

No se estima impactos sobre la fauna acuática del área de influencia directa e indirecta del proyecto.

Factor Socioeconómico

Los probables impactos se relacionan con:

- ⊙ Limitada contratación de mano de obra no calificada, que evitará el abandono de prácticas y labores tradicionales de la población de la zona, así como la generación de expectativas que no sean correspondidas en el futuro, en el caso de que los resultados de la exploración no sean positivos.
- ⊙ Capacitación de la mano de obra local funcional a las actividades que se le encarguen dentro del proyecto de exploración, mejorando su desempeño y evitando riesgos de accidentes laborales o enfermedades ocupacionales por desconocimiento.
- ⊙ La contratación de personal en forma rotativa, según se acuerde con la comunidad.

Factor Cultural

No se estiman impactos sobre el factor cultural del área de emplazamiento del Proyecto Yagku Entsa.

1.6 Plan de Manejo Ambiental

1.6.1 Medidas de Prevención y Control de Impactos Ambientales

A continuación se describirán las principales medidas de prevención y control de impactos ambientales por el Proyecto de Exploración Yagku Entsa sobre los componentes ambientales. Tales medidas serán aplicadas durante la etapa de exploración del proyecto, así como en su correspondiente rehabilitación.

Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Plataformas y Pozas

Todas las plataformas de perforación y pozos para lodos que fueron contruidos serán restaurados. En todos los casos, el objetivo de la restauración es brindar una superficie que sea estable y capaz de mantener tanto la comunidad vegetal deseada como el uso que se le espera dar a la tierra después de los trabajos de exploración.

Las actividades de re nivelación de plataformas y pozos, tienen la finalidad de restablecer en las áreas disturbadas un relieve topográfico estable y acorde al relieve natural de la zona. Las actividades de renivelación se llevarán a cabo utilizando equipos apropiados y disponibles, con el fin de reducir la exposición del talud cortado y restablecer el drenaje positivo.

Los pozos de perforación serán abandonados inmediatamente después de haber terminado de perforar, de acuerdo a los procedimientos establecidos por Exploraciones Águila Dorada S.A.C.

☒ **Caminos de Acceso Peatonal**

El Proyecto considera la construcción de caminos de acceso peatonal hacia las plataformas de perforación, buscando causar la mínima disturbancia en la zona. Estos caminos peatonales serán contruidos utilizando la mano de obra, de un máximo de 1,00 m. de ancho, sobre todo realizando el desbroce de los vegetales.

☒ **Plataformas de Perforación**

Las Plataformas de perforación serán contruidas utilizando la mano de obra local, las plataformas estarán ubicadas en áreas que posean escasa o nula vegetación y requieran de un nivelado mínimo. El material desplazado será empleado en la construcción de bermas alrededor de la plataforma de perforación. Las bermas constituirán un medio para prevenir la esorrentía desde la plataforma de perforación.

Las pozas de captación de lodos serán construidas en el talud o dentro del área de cada plataforma con la finalidad de aislar los fluidos de perforación de aguas superficiales naturales.

☑ Canteras o Áreas de préstamo

En caso se requiera del uso de una cantera, ésta deberá ser renivelada y restaurada y posteriormente se procederá a los trabajos de reconformación del terreno en toda el área de la misma forma que para la restauración de plataformas. Estas infraestructuras deberán de contar con dispositivos de control de sedimentos que evitarán la traslación de partículas.

Control de Erosión Hídrica

El área del proyecto se caracteriza por ser una zona con altas precipitaciones, por lo cual, es necesario tomar algunas medidas que se consideran necesarias para evitar la emisión de sedimentos hacia las quebradas secas de flujo efímero.

En el transcurso de las actividades de exploración, se deberá otorgar prioridad al control de la erosión durante la construcción de las plataformas de perforación y de las pozas de captación de lodos. Durante todas las actividades de construcción y operación, se construirán estructuras hidráulicas (canales de coronación y drenes), con el objeto de controlar la emisión de sedimentos hacia cualquier curso de agua que pueda existir a nivel local o regional. Tales prácticas abarcarán la construcción de barreras temporales de control de sedimentos, pozas de sedimentación, desviación temporal del drenaje lejos de las áreas amenazadas por la erosión, así como la estabilización de las superficies disturbadas.

Para un mejor control erosivo se debe propiciar causar la menor alteración a la superficie del terreno.

En las zonas donde sea necesario disturbar el terreno superficial se realizará la siguiente clasificación: el suelo orgánico será removido y almacenado a un costado dando las facilidades a construir, a manera de berma de contención, este material por su contenido de humedad y adherencia (debido a la presencia de elementos orgánicos en su composición) por lo general permanecen semi compactos y resistentes a la erosión, eólica. El material proveniente de la roca base será almacenado cerca al material orgánico (sin ser mezclado) separados por una zona de Buffer, este material si presenta exposición a la erosión eólica por lo que nuestra recomendación se centrará en crear una superficie lisa y compacta en la parte externa de la acumulación.

Control de Aguas de Escorrentía

El control de aguas de escorrentía se hará con la construcción y/o acondicionamiento de canales de coronación aguas arriba de la plataforma de perforación.

Manejo de Suelo orgánico removido

El suelo orgánico removido será colocado en depósitos de suelo orgánico, debidamente señalizado y cubierto con mantas de plástico.

Control de Erosión Eólica y Generación de Material Particulado

Para el control de erosión eólica y generación de material particulado, se recurrirá al riego de las plataformas de perforación y la construcción de canales de coronación aguas arriba de estas instalaciones.

Manejo y Protección de Cuerpos de agua superficial y subterránea

Los impactos sobre la calidad, tanto del agua superficial como subterránea, se controlarán a través de las medidas implementadas durante la fase de construcción y la restauración (control de erosión, minimización del área de disturbio, etc.). El principal impacto potencial sobre el agua superficial es aquel relacionado con una mayor carga temporal de sedimentos en las quebradas de flujo temporal del área del proyecto, sin embargo se colocarán como medidas preventivas, elementos de control de sedimentos como barreras y pozas de sedimentación, disipadores de energía en las zonas necesarias.

Si durante los trabajos de exploración se detectara transporte de sedimentos hacia las quebradas, como resultado de las actividades de exploración, deberán tomarse medidas correctivas, como la instalación de medidas adicionales de control de sedimentos.

Manejo y Disposición Final de lodos de perforación

Los fluidos residuales de la perforación se canalizarán hacia dos pozas, según sea el caso, de almacenamiento de fluidos debidamente autorizada.

Las pozas para los fluidos de perforación se ubicarán en un lugar cercano a la plataforma de perforación, pero lejos de sitios donde se pudiera generar impactos no deseados en el ambiente. Las pozas tendrán dimensiones suficientes para la contención de los fluidos que se generen. Al recubrir las pozas de fluidos con plástico impermeable (geomembrana) se evitará filtraciones que pudieran afectar los suelos y las aguas subterráneas.

Manejo y disposición de desmontes

El proyecto no contempla la generación de material de desmontes, sin embargo, si éstos se generaran, la empresa identificará las localizaciones más apropiadas para su almacenamiento y disposición final, de preferencia en las laderas altas.

Manejo y disposición final de aguas residuales domésticas e industriales

Se estima que en el proyecto de exploración, laborarán hasta un máximo de 30 personas, las cuales generarán aproximadamente 3,00 kg de residuos sólidos y 5,00 litros de efluentes, los cuales permanecerán en el baño portátil químico, debido a que cuenta con un tanque de almacenamiento cuya capacidad es de 100 L.

Su manejo ambiental tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

- ⊗ Reactivos químicos: cal, hipoclorito de calcio, odorizante
- ⊗ Frecuencia de limpieza: semanal
- ⊗ Procedimiento de limpieza diaria: verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos y depósitos para el almacenamiento de residuos líquidos y sólidos; distribuir en forma uniforme en el depósito del baño, 200 g de cal; limpiar la tasa y los otros dispositivos del baño
- ⊗ Procedimiento de extracción de residuos: consistirá en la recuperación de los residuos tanto sólidos como líquidos, dado que el depósito del baño no permite su almacenamiento separado. La extracción se hará por personal especializado debidamente equipado con su equipo de protección personal, resaltando el uso de máscara para gases y guantes. De ser posible el uso de una bomba, ésta permitirá la extracción segura de los residuos directamente hasta la cisterna para su traslado respectivo. De no ser posible el uso de una bomba, se procederá a sacar la tapa del depósito y extraer con baldes, los residuos existentes, hasta el depósito para el traslado seguro de los residuos hasta el lugar de disposición final. Una vez extraído los residuos, se procederá a un lavado con hipoclorito y cal

Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos domésticos, industriales y peligrosos

Todo el personal deberá disponer los residuos sólidos en depósitos adecuados para evitar que éstos se extiendan por toda el área. Para tal fin, tanto los equipos de perforación como otros deberán contar con recipientes adecuados para el almacenamiento de residuos (rotulado y con tapa).

No se ha previsto la construcción de rellenos de seguridad, dado que los residuos serán depositados temporalmente en cilindros (metálicos o de plástico) de 200 litros en una zona especialmente acondicionada para ello, de donde serán manejados por una EPS-RS.

Los residuos domésticos e industriales derivados de la actividad de exploración serán dispuestos temporalmente en cilindros, siguiendo las especificaciones y estándares que a continuación se detallan:

- ⊗ Cilindro Verde: Residuos Domésticos como cartones, papeles, bolsas plásticas, etc.

- ⊙ Cilindro Rojo: Residuos Inflamables como filtros y/o aceites usados y similares (hidrolina, solventes, etc.), suelos o material de cobertura natural de la superficie impregnada con hidrocarburos.
- ⊙ Cilindro Amarillo: Residuos Metálicos como chatarras (clavos, retazos de alambres, piezas metálicas etc.).

Manejo y características de las áreas de almacenamiento (combustibles, insumos, otros)

Las sustancias desechables de hidrocarburos, será predominantemente de aceite usado, proveniente del mantenimiento de los equipos que trabajan en la zona, especialmente de la máquina de perforación y del generador de energía (las unidades vehiculares realizarán su mantenimiento en talleres de la ciudad más cercana al proyecto).

Estas sustancias serán almacenadas en cilindros de color negro y posteriormente serán evacuadas a la ciudad de Jaén por medio de una EPS-RS.

Los hidrocarburos serán adquiridos en la ciudad de Jaén desde donde serán transportados hacia el proyecto contemplando los diferentes controles ambientales.

Manejo en caso de derrames de Hidrocarburos y otros insumos empleados en las actividades de exploración

La cantidad de suelos o material aluvial que pudiera ser afectado ante la eventualidad de derrame de hidrocarburos son mínimas (se estima que se pudiera afectar un máximo de 0,5 m³ de suelo), según el plan y el programa preventivo el cual estipula una serie de mecanismos de control como son:

- ⊙ Inspecciones de máquina, por turnos, diarias, semanales, mensuales, etc. (todo equipo rotacional).
- ⊙ Colocación de bandejas o recipientes de contención (todo equipo rotacional fijo) Todos los equipos rotacionales contarán con un Kit de respuestas de emergencias ambientales.
- ⊙ Paralización de la maquinaria que presente o presentara evidencia de fugas o derrames.

Protección y conservación de especies de flora o fauna

Se recurrirá a la capacitación de los trabajadores en el respeto de la flora y fauna silvestres, así como la colocación de letreros alusivos a la protección de plantas y la prohibición de caza de animales silvestres.

Protección y/o conservación de restos o áreas arqueológicas

Se deberá implementar las siguientes medidas:

- ⊗ Si se detectara sitios arqueológicos dentro de la zona del proyecto, éstos deberán señalizarse claramente mediante estacas o hitos, así como la colocación de carteles para su mejor reconocimiento por los operadores de maquinaria y demás trabajadores.
- ⊗ Se capacitará al personal en reconocer y respetar las señales colocadas como protección de los sitios.
- ⊗ Si durante la etapa de construcción y operación del proyecto se detectaran evidencias arqueológicas bajo la superficie o algunas otras nuevas evidencias, que no fueran identificadas por el estudio de arqueología, se suspenderá de inmediato los trabajos en dicha zona y se dará aviso a las autoridades del Instituto Nacional de Cultura (INC).
- ⊗ Los contratistas deberán reportar inmediatamente de las posibles evidencias arqueológicas.
- ⊗ En caso de encontrar vestigios adicionales, de preferencia, un especialista realizará las acciones específicas correspondientes.

Equipos de Protección Personal

Tanto la mano de obra, como el personal técnico y el encargado de supervisión que labore en las obras de construcción; así como el personal de mantenimiento en la etapa de operación contarán con equipos de protección personal (EPP), proporcionados por parte de la empresa.

Estos implementos deberán reunir las condiciones mínimas de calidad, es decir, resistencia, durabilidad, comodidad y otras; de tal forma, que contribuyan a mantener la buena salud del personal contratado para la ejecución de las obras de construcción y/o mantenimiento del Proyecto. Entre los equipos de protección personal con los que deberán contar tenemos:

- ⊗ Anteojos de seguridad
- ⊗ Protector de cabeza (casco)
- ⊗ Guantes (construcción)
- ⊗ Protector de oídos
- ⊗ Mamelucos
- ⊗ Botas de seguridad (punta de acero)

1.6.2 Programa de Relaciones Comunitarias

Exploraciones Águila Dorada S.A.C. contará con un plan de comunicaciones con la Comunidad de Los Naranjos (en cuyos terrenos superficiales se ubica el proyecto), centros poblados vecinos, autoridades y población en general, Este plan tiene como objetivo informar a la población de las actividades del proyecto de exploración, aclarando dudas e interrogantes; y evitando la generación de malos entendidos.

Dentro de este plan se consideran talleres informativos y reuniones con la población de forma periódica o cuando ella lo solicite, para comunicar del avance de las actividades de exploración, las implicancias de su ejecución, así como los compromisos que asumirá Exploraciones Águila Dorada S.A.C. siendo los siguientes:

- ⊗ Acciones de Información y Difusión
- ⊗ Capacitación de Mano de Obra Local
- ⊗ Contratación de Mano de Obra Local

1.6.3 Programa de Monitoreo Ambiental de Seguimiento y Control

La ubicación de los puntos de control y/o de monitoreo de Calidad de Agua de cuerpos receptores, se presentan en la tabla RE-13.

TABLA RE-13 ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA – CUERPO RECEPTOR

Ítem	Código	Ubicación	Coordenada UTM WGS-84		Coordenada UTM PSAD 56		Altitud msnm	Zona
			Este	Norte	Este	Norte		
01	PEP-CR-01	Afluente de la Quebrada Pucayacu	732914,43	9462813,95	733.173,43	9.463.185,95	2 221	17

Fuente: Exploraciones Águila Dorada S.A.C.

Frecuencia de Muestreo

Se ha establecido que la frecuencia de monitoreo para los efluentes y cuerpos receptores de la Red de Monitoreo Ambiental de Calidad de Agua del Proyecto Yagku Entsa, sea SEMESTRAL.

Frecuencia de Reporte

Se ha establecido que la frecuencia de reporte de los resultados de monitoreo para los efluentes y cuerpos receptores de la Red de Monitoreo Ambiental de Calidad de Agua del Proyecto Yacku Entsa, sea SEMESTRAL.

Valor Numérico del Límite Máximo Permissible

Los límites máximos permisibles para los efluentes minero-metalúrgicos y los estándares de calidad ambiental para agua en efluentes y cuerpos receptores, se presentan en la tabla RE-14 respectivamente.

Fichas de Control de Estaciones de Monitoreo

En el anexo de fichas, se presentan las Fichas de Control de Estaciones de Monitoreo del Proyecto Yagku Entsa.

TABLA RE-14 ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA

Parámetros	Unidad	Valor
Fisicoquímicos		
Bicarbonatos	mg/L	370
Calcio	mg/L	200
Carbonatos	mg/L	5
Cloruros	mg/L	100-700
Conductividad	µS/cm	<2000
Demanda Bioquímica de Oxígeno	mg/L	15
Demanda Química de Oxígeno	mg/L	40
Fluoruros	mg/L	1
Fosfatos - P	mg/L	1
Nitratos (NO ₃ -N)	mg/L	10
Nitritos (NO ₂ -N)	mg/L	0,06
Oxígeno Disuelto	mg/L	≥4
pH	Unidad de pH	6,5-8,5
Sodio	mg/L	200
Sulfatos	mg/L	300
Sulfuros	mg/L	0,05
Inorgánicos		
Aluminio	mg/L	5
Arsénico	mg/L	0,05
Bario total	mg/L	0,7
Boro	mg/L	0,5-6
Cadmio	mg/L	0,005
Cianuro Wad	mg/L	0,1
Cobalto	mg/L	0,05
Cobre	mg/L	0,2
Cromo(6+)	mg/L	0,1
Hierro	mg/L	1
Litio	mg/L	2,5
Magnesio	mg/L	150
Manganeso	mg/L	0,2
Mercurio	mg/L	0,001
Niquel	mg/L	0,2
Plata	mg/L	0,05
Plomo	mg/L	0,05
Selenio	mg/L	0,05
Zinc	mg/L	2
Orgánicos		
Aceites y Grasas	mg/L	1
Fenoles	mg/L	0,001
S.A.A.M. (detergentes)	mg/L	1
Plaguicidas		
Aldicarb	µg/L	1
Aldrin (CAS 309-00-2)	µg/L	0,004
Clordano (CAS 57-74-9)	µg/L	0,3
DDT	µg/L	0,001
Dieldrin (Nº CAS 71-20-8)	µg/L	0,7
Endrin	µg/L	0,004
Endosulfán	µg/L	0,02
Heptacloro (Nº CAS 76-44-8) y heptacloripoxido	µg/L	0,1
Lindano	µg/L	4
Paratión	µg/L	7,5

Fuente: D.S. Nº 002-2008-MINAM

1.7 Medidas de Rehabilitación, Cierre y Post cierre

1.7.1 Cierre

Medidas para el cierre de todas las labores de exploración

El cierre tendrá por objeto definir acciones adecuadas a fin de que en el futuro no constituyan un peligro potencial para la vida de los ecosistemas de la zona, las acciones generales estarán enmarcadas dentro de estos objetivos:

- ⊗ Recuperar áreas que hayan sido afectadas.
- ⊗ Tomar medidas que deben garantizar la estabilidad física y química del suelo superficial.
- ⊗ Revegetar hasta donde sea posible los terrenos disturbados y alterados por las disposiciones.
- ⊗ Tomar medidas para prevenir la contaminación de fuentes de agua.

En este sentido, de darse el caso, el plan de Cierre cubrirá las siguientes acciones concretas:

- ⊗ Remoción de edificaciones y demás estructuras.
- ⊗ Demoliciones.
- ⊗ Rehabilitación del suelo eliminando material contaminado tratando en lo posible de volver a la superficie condiciones de uso favorables.

Obturación de Sondajes

Los sondajes se obturarán de acuerdo al tipo de acuífero interceptado, de forma que se garantice la seguridad de las personas, el ganado, la fauna silvestre y la maquinaria del área. Si se encuentra agua a una profundidad razonable en un sondaje sin mineralización, se consultará a la comunidad local sobre la posibilidad de convertir el sondaje en un suministro de agua de bajo rendimiento.

A continuación, se especifican los procedimientos a seguir en los distintos casos, dependiendo de la presencia de agua en el sondaje.

☒ ***Sí no se encuentra agua***

No se requiere obturación y sellado. Sin embargo, el sondaje deberá cubrirse de manera segura para prevenir el daño de personas, animales o equipos. Se procederá de la siguiente forma:

- ❖ Se rellenará el pozo con cores o bentonita hasta 1 m por debajo del nivel del terreno.

- ❖ Se instalará una obturación no metálica, con la identificación de la compañía y de la empresa perforista.
- ❖ Se rellenará o apisonará el metro superior o se utilizará una obturación de cemento.
- ❖ Se colocará una cobertura de suelo.

☑ ***Si se encuentra agua estática***

Si el sondaje intercepta un acuífero no confinado se rellenará el orificio completo de 1,5 a 3 metros de la superficie con bentonita o un componente similar y, luego, con cemento desde la parte superior de la bentonita hasta la superficie. Si el equipo de perforación ya no está en el lugar al momento de la obturación, es aconsejable el uso de grava y cores de perforación siguiendo las siguientes pautas:

- ❖ Colocar el material de la obturación desde la parte inferior del pozo hasta la parte superior del nivel de agua estática.
- ❖ Rellenar el pozo con los restos de muestras (core) a 1 metro por debajo del nivel de la tierra.
- ❖ Instalar una obturación no metálica, con la identificación del operador.
- ❖ Rellenar y apisonar el metro final con tierra del pozo o utilizar un mínimo de 1m de cemento para la superficie.
- ❖ Extender los excesos de "core" aproximadamente a 2,5 cm por debajo del nivel de la tierra natural.

☑ ***Si se encuentra agua artesiana***

Si el sondaje intercepta un acuífero confinado artesiano, se obturará el pozo antes de retirar el equipo de perforación. Para la obturación se usará un cemento apropiado o alternativamente bentonita si este material es capaz de contener el flujo de agua. Se procederá de la siguiente forma:

- ❖ Se vaciará el material de la obturación (cemento o bentonita) lentamente desde el fondo del sondaje hasta 1 m por debajo de la superficie de la tierra.
- ❖ Se permitirá la estabilización del pozo durante 24 horas. Si se contiene el flujo, se retirará la tubería de perforación y se podrá colocar una obturación no metálica a 1m. Luego, se rellenará y apisonará el metro final del pozo. Se extenderá el corte sobrante aproximadamente a 2,5 cm sobre el nivel de tierra original.
- ❖ Si el flujo no puede contenerse se volverá a perforar el pozo de descarga y obturar desde el fondo con cemento hasta 1 m de la superficie. Rellenar y apisonar el metro final con "core" del pozo y extender los excesos de "core" a 2,5 cm aproximadamente por debajo del nivel de la tierra natural.

Medidas para el Cierre de Pozas de Lodo y Sedimentación

☒ **Definiciones**

OBTURADO DE POZOS. Tapar un pozo ya perforado, el método depende de las condiciones del mismo.

POZO PERFORADO. Agujero perforado por sistema core o Aire Reversa.

POZA DE FLUIDOS. Lugar que se utiliza para almacenar y decantar provisionalmente los fluidos que retornan del pozo.

BOMBA AUXILIAR. Equipo hidráulico que se utiliza para bombear el fluido que se utiliza desde la poza al tanque mezclador.

BENTONITA. Montmorillonita de Sodio (arcilla natural) viscosa que controla la filtración.

BENTONITA 3/8. Montmorillonita de Sodio (arcilla natural) en pedazos de 3/8 de pulgada. Material avanzado de fácil hinchamiento, logra un mejor sello a comparación de los demás materiales disponibles en el mercado.

BASE DE CEMENTO. Bloque de 40 cm x 40 cm x 15 cm de cemento. Sirve para identificar los taladros después de terminados.

CAPA ACUÍFERA. Lugar donde se encuentra presencia de agua subterránea.

GRAVA. Piedra pequeña de forma de canto de 2" a menos.

OBTURACIÓN DE JEBE. Tapón de jebe natural, utilizado para mantener una columna de bentonita 3/8.

☒ **Elección del método a utilizar**

El contratista comunicará al supervisor de perforación para evaluar y determinar el tipo de pozo para aplicar el método adecuado.

En caso de pozos artesianos deben ser obturados de inmediato.

El método a utilizar depende principalmente de las características del pozo perforado, existen tres diferentes métodos como se explica a continuación.

- ❖ Obturación del pozo cuando se encuentra agua estática.
- ❖ Obturación del pozo cuando no se encuentra agua.
- ❖ Obturación del pozo cuando se encuentra agua artesiana.

Medidas para la Rehabilitación y Cierre de los Accesos Peatonales

- ⊙ Estabilización de Taludes

⊙ Revegetación

Medidas para el cierre de almacenes de insumos y combustibles

La geomembrana de protección de los almacenes de insumos y combustibles serán retiradas y llevada a la ciudad de Lima para la utilización en otro proyecto, se procederá a su recubrimiento con los mismos materiales que se extrajeron durante su construcción y se procederá a revegetar con especies vegetales existentes en la zona donde se realiza el proyecto.

Medidas para el cierre de depósitos de suelo orgánico

Para el cierre de almacenes de suelo orgánico se tomarán las siguientes medidas:

- ⊙ Desmontaje de las instalaciones y retiro de las mismas.
- ⊙ Demolición de edificaciones auxiliares y retiro de escombros.
- ⊙ Restauración de la configuración del relieve natural rellenado con el material extraído en los cortes del terreno o perfilando la superficie.
- ⊙ Recubrimiento de la superficie con suelo del lugar, y de ser el caso, revegetación con especies de flora nativa.

Medidas para el cierre de depósitos de almacenamiento de muestras de mineral

Para el cierre de depósitos de almacenamiento de muestras de mineral se tomarán las siguientes medidas:

- ⊙ Recuperación de testigos, los cuales serán enterrados en la trinchera.
- ⊙ Desmontaje de las instalaciones y retiro de las mismas.
- ⊙ Demolición de edificaciones auxiliares y retiro de escombros.
- ⊙ Restauración de la configuración del relieve natural rellenado con el material extraído en los cortes del terreno o perfilando la superficie.
- ⊙ Recubrimiento de la superficie con suelo del lugar, y de ser el caso, revegetación con especies de flora nativa.

Medidas para el cierre de depósitos de desmontes

No se prevé la generación de desmontes en el proyecto de exploración.

Medidas para el cierre de infraestructuras de disposición de residuos sólidos

No se contará con infraestructura para la disposición de residuos sólidos, ya que éstos serán enviados directamente a la ciudad de Lima.

Medidas para el cierre de área de mantenimiento de equipos y maquinarias

No se prevé la construcción de áreas de mantenimiento de equipos y maquinarias, por lo que no se contemplarán medidas de cierre.

Medidas para el cierre de instalaciones auxiliares

☒ Retiro de Instalaciones

El retiro de las instalaciones empleadas en la exploración será total, tanto de las labores de reconocimiento como de superficie si el caso lo amerita, lo que permitirá corregir cualquier condición ambiental adversa y desarrollar trabajos de reacondicionamiento de las áreas disturbadas, de tal forma que se deje estable guardando en lo posible su condición original.

☒ Plataformas

Se nivelarán todos los terrenos utilizados como plataformas, se realizará la inspección de contaminación de suelo y se remediarán en caso sea necesario.

Otros

☒ Rehabilitación de Áreas de Instalaciones de Servicio

En las áreas donde se han implementado las instalaciones de servicios (letrinas), se procederá a retiro de éstas, cubriendo el área afectada con una capa de 30 centímetros de cal y posteriormente rellenándola con tierra del entorno, seguidamente será revegetada con especies del lugar.

Descripción de componentes que podrían ser transferidos a terceros y sus medidas de manejo ambiental

Al finalizar el proyecto de exploración, el Titular Minero, por medio de su Área de Relaciones Comunitarias establecerá las coordinaciones necesarias para identificar aquellos componentes que podrían ser transferidos a terceros. Por las características de las instalaciones, sólo podría preverse la transferencia de lo siguiente:

- ⊗ Vías de acceso; y
- ⊗ Instalaciones de oficinas, comedores u otro edificio construido.

Programa de revegetación y recuperación de suelos

Los programas de revegetación y recuperación de suelos comprenden los siguientes:

- ⊗ Se tratará en lo posible devolver al terreno su topografía original, antes de colocar la capa de suelo.

- ⊗ La capa superficial de suelo, previamente rehabilitada, los materiales del suelo u otros medios de crecimiento adecuados se extenderán en el área de alteración. Para lo cual la nueva superficie se escarificará ligeramente antes de volver a sembrar o revegetar con semillas apropiadas o con plantas vivas, nativas o adaptables al lugar para acelerar el proceso de rehabilitación del suelo.

Medidas de Cierre temporal

Un cierre temporal del proyecto de exploración Yagku Entsa podría ocurrir por decisión de la empresa de suspender temporalmente la exploración por razones operacionales o económicas.

Para el caso del cierre temporal se contempla las siguientes actividades:

- ⊗ Restringir los accesos a las áreas de trabajo
- ⊗ Proteger con mallas las pozas de sedimentación.
- ⊗ Proteger con rejas el ingreso a las bocaminas.
- ⊗ Mantener inspecciones de las instalaciones mensualmente.

Para el caso de los componentes que ya no serían utilizados proceder a ejecutar su cierre progresivo y final según sea el caso.

Cierre de Pasivos Ambientales

No existen pasivos ambientales para cierre en el área de influencia del Proyecto de Exploración Yagku Entsa.

1.7.2 Post Cierre

Actividades de Seguimiento y monitoreo post cierre

Para el Mantenimiento se propone dos veces al año durante dos años de duración el periodo mantenimiento y monitoreo.

- ⊗ Mantenimiento de las obras civiles si éstas fueran necesarias;
- ⊗ Mantenimiento de las coberturas instaladas, de manera que éstas aseguren su durabilidad en el largo plazo;
- ⊗ Mantenimiento y limpieza de los canales de coronación y derivación.

También se verificarán las hojas check list de las obras civiles de cierre, dos veces al año.

Frecuencia de las actividades y periodos de ejecución

Se implementará un programa post cierre de las áreas rehabilitadas, por un lapso de 2 meses. El objetivo será de evaluar el comportamiento de los componentes ambientales, así como vigilar y observar el crecimiento de las especies revegetadas.

La frecuencia de los monitoreos será mensual.

Frecuencia de Monitoreo Post cierre

La frecuencia para el monitoreo post cierre será bimensual, para calidad de agua y vegetación; sin embargo, se tendrá un monitoreo fotográfico quincenal para determinar las condiciones de los diferentes componentes del proyecto de exploración, mientras se desarrolla las actividades de post-cierre.

1.7.3 Notificación de Culminación o Suspensión del Proyecto

De darse el caso, Exploraciones Águila Dorada S.A.C. comunicará oportunamente a la Dirección Regional de Energía y Minas correspondiente, que se ha culminado el proyecto, indicando la fecha en la que iniciará las actividades de rehabilitación de las zonas disturbadas.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

Cajamarca, 25 FEB 2015

OFICIO N° 227 -2015-GR-CAJ/GR.RENAMA

Señora(Srta.)
Mirtha VÁSQUEZ CHUQUILÍN
SECRETARIA EJECUTIVA
GRUFIDES.

PRESENTE

ASUNTO: Interpretación de Resultados de Análisis.

REF.: Carta N° 009-2015-GRUFIDES
Oficio N° 035-2015-GR.CAJ/GR.RENAMA/LRA. (1692496)

Por el presente me dirijo a usted, para saludarla cordialmente y en atención a su Carta de la Referencia, remitirle la interpretación de los resultados de análisis de muestras de agua, consignados en el Oficio de la Referencia; para su conocimiento y fines que estimen convenientes.

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

.....
Lic. Sergio SÁNCHEZ IBÁÑEZ
GERENTE REGIONAL

SSI/ys.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
LABORATORIO REGIONAL DEL AGUA

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

23 FEB 2015

OFICIO N° 035 2015-GR.CAJ/GR.RENAMA/LRA.

Señor
Lic. Sergio SÁNCHEZ IBÁÑEZ
GERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PRESENTE

ASUNTO: Interpretación de Resultados de Análisis de Muestras de Agua.
REFERENCIA: a) INFORME N° 002-2015-GR.CAJ/GR.RENAMA/LRA/JVDS. (exp. 1691977)

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, asimismo, alcanzarle el informe de interpretación de resultados de análisis de muestras de agua de la Comunidad San José y Río Chirinos, solicitado mediante Carta N° 009-2015-GRUFIDES.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LABORATORIO REGIONAL DEL AGUA

Victor M. Castro Malabrigo
GERENTE

-Archivo
VMCM/vs

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PARA:
TRÁMITE:
FECHA: 14/2/15 FIRMA:

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
LABORATORIO REGIONAL DEL AGUA

LABORATORIO REGIONAL
DEL AGUA

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

INFORME N° 002 2015-GR.CAJ/GR.RENAMA/LRA/JVDS.

PARA : ING. VÍCTOR MANUEL CASTRO MALABRIGO
GERENTE DEL LABORATORIO REGIONAL DEL AGUA
DEL : MBLGO. JUAN VALENTÍN DÍAZ SÁENZ
RESPONSABLE TÉCNICO
ASUNTO : INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE ANÁLISIS.
REFERENCIA: CARTA N° 009-2015-GRUFIDES
FECHA : CAJAMARCA, 23 DE FEBRERO DE 2015

Mediante el presente informo sobre la interpretación de resultados solicitada en el documento de la referencia.

I. DATOS DEL SOLICITANTE

Solicitante	Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental	Referencia	MAD N° 1687058
	GRUFIDES: Mirtha Vásquez Chuquilin		Carta N° 009-2015
Fecha de Solicitud a Laboratorio			Viernes 20/02/2015

2. DATOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA

Documento N°01	Informe de Ensayo C-489-K214	Laboratorio	NKAP S.R.L
Fecha Muestreo	No específica	Fecha de Análisis	29/11/2014
Documento N°02	Informe de Ensayo SE-01318-14	Laboratorio	ECOLAB S.R.L
Fecha Muestreo	28.11.2014	Fecha de Análisis	29/11/2014

3. INTERPRETACIÓN

DOCUMENTO N° 01: INFORME C-489-K214 NKAP S.R.L

3.1. Matriz de agua según Norma Técnica Peruana NTP 214.042 Clasificación de la matriz agua para ensayos de laboratorio.

Las aguas evaluadas son Agua superficiales por tanto según la NTP es una Agua Natural –Superficial; pero no se puede definir si es de río, lago/laguna o de lluvia.

3.2. Clasificación de la Matriz de agua según los Estándares de Calidad ambiental para agua ECAs DS002-2008 MINAM.

La muestra evaluada es una agua superficial por tanto será considerado como agua que se encuentra dentro de la Categoría N°03 Riego de Vegetales y Bebidas de Animales.

3.3. Interpretación de Resultados según el DS002-2008 MINAM.

a. Sustancias consideradas tóxicas su presencia en aguas:

Metales en agua: Los metales considerados tóxicos Arsénico, Mercurio, Plata, Berilio, Cromo, Cadmio, Niquel, Plomo, Antimonio, Estaño, Selenio y Vanadio reportados en el informe C-489-K214 para las muestras en análisis, se encuentra por debajo del Límite detección del Laboratorio y por lo tanto Cumplen con los Límites que establece el DS002-2008 para la Categoría N°03.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
LABORATORIO REGIONAL DEL AGUA

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

DOCUMENTO N° 02: INFORME SE-01318-14 ECOLAB S.R.L

3.1. Matriz de agua según Norma Técnica Peruana NTP 214.042 Clasificación de la matriz agua para ensayos de laboratorio.

Las aguas evaluadas son Agua superficiales por tanto según la NTP es una Agua Natural –Superficial; pero no se puede definir si es de río, lago/laguna o de lluvia.

3.2. Clasificación de la Matriz de agua según los Estándares de Calidad ambiental para agua ECAs DS002-2008 MINAM.

La muestra evaluada es una agua superficial por tanto será considerado como agua que se encuentra dentro de la Categoría N°03 Riego de Vegetales y Bebidas de Animales.

3.3. Interpretación de Resultados según el DS002-2008 MINAM.

a. Sustancias consideradas tóxicas su presencia en aguas:

Metales en agua: Los metales considerados tóxicos Arsénico, Mercurio, Plata, Berilio, Cromo, Cadmio, Niquel, Plomo, Antimonio, Estaño, Selenio y Vanadio reportados en el informe SE-01318-14 para las muestras en análisis, Cumplen con los Límites que establece el DS002-2008 para la Categoría N°03.

Cianuro en agua: También es considerado un compuesto tóxico su presencia en aguas. Los Cianuro Libre y Wad reportados en el informe SE-01318-14 para las muestras en análisis, Cumplen con los Límites que establece el DS002-2008 para la Categoría N°03.

b. Sustancias consideradas indeseables su presencia en aguas:

Fenoles; reportados sobrepasan los Límites establecido DS002-2008 para la Categoría N°03.

Aceites y grasas; se encuentran cercanos a los Límites establecido ECAs.

Esto quiere indicar la presencia de alguna fuente de contaminación aguas arriba que está originando la presencia de los parámetros indicados, ya que su presencia en el agua deriva generalmente de productos sintéticos.

*Se debe prestar atención a estos parámetros Fenoles y Aceites y grasas ya que pueden haber sufrido descomposición natural y biológica y en algún momento los valores pudieron ser mayores a los encontrados. *Se considera a los aceites y grasas debido a que otras normas internacionales establecen valores límites de 0.1 – 0.3mg/L y el valor encontrado supera este límite.

4. CONCLUSIÓN

4.1. Las muestras evaluadas, son consideradas Matriz de Agua Natural – Superficial; deben de cumplir con la Categoría N°03 Riego de Vegetales y Bebidas de Animales del DS002-2008 MINAM.

4.2. En el Informe C-489-K214, los parámetros analizados cumplen con el DS002-2008 para la Categoría N°03.

4.3. En el Informe SE-01318-14, parámetros de ensayo Fenoles reportados (0.021, 0.020 y 0.015 mg/L) sobrepasan el valor del DS002-2008 para la Categoría N°03 (Fenol, límite 0.001 mg/L); su procedencia es de origen sintético (fuente externa) y de manera natural está ausente en aguas (ver anexos).

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
LABORATORIO REGIONAL DEL AGUA

LABORATORIO REGIONAL
DEL AGUA

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

- 4.4. En el Informe SE-01318-14, parámetros de ensayo Aceites y grasas reportados (0.7, 0.8 y 0.8 mg/L) a pesar de no sobrepasar el valor del DS002-2008 para la Categoría N°03 (AyG, límite 1 mg/L); es un valor alto en aguas superficiales (ver anexos).
- 4.5. La interpretación dada está sólo referida a los resultados de los documentos de referencia.

Juan Valentín Díaz Saenz
Responsable Técnico

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
LABORATORIO REGIONAL DEL AGUA

PARA: Secretaría
TRÁMITE: Pasan con
oficio a la Gerencia
de Renama
FECHA: _____ FIRMA: [Signature]

23 FEB 2015

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
LABORATORIO REGIONAL DEL AGUA

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

ANEXOS

BASE TEÓRICAS DE LA PROBLEMÁTICA Y TOXICIDAD DE LOS PARÁMETRO DE ANÁLISIS

Tóxico: Se considera tóxica a una sustancia o materia cuando debido a su cantidad, concentración o características físico, químicas o infecciosas presenta el potencial de:

- a) Causar o contribuir de modo significativo al aumento de la mortalidad, al aumento de enfermedades graves de carácter irreversible o a las incapacitaciones reversibles.
- b) Que presente un riesgo para la salud humana o para el ambiente al ser tratados, almacenados, transportados o eliminados de forma inadecuada.
- c) Que presente un riesgo cuando un organismo vivo se expone o está en contacto con la sustancia tóxica.

Toxicidad en agua: Es la propiedad de una sustancia, elemento o compuesto, de causar efecto letal u otro efecto nocivo en 4 días a los organismos utilizados para el bioensayo acuático.

Toxicidad crónica: Es la habilidad de una sustancia o mezcla de sustancias de causar efectos dañinos en un período extenso, usualmente después de exposiciones continuas o repetidas.

FENOLES: En general los fenoles no son sustancias comúnmente presentes en agua natural, su procedencia está ligada a efluentes industriales procedentes de fábrica de papel, explotaciones mineras, refinerías de petróleo, industrias químicas (pesticidas) y farmacéuticas. Toxicológicamente, resultan tóxicos para los peces, y otros organismos acuáticos.

AMONIACO: Se deriva de la reducción de sustancias orgánicas e inorgánicas ricas en nitrógeno. Las aguas superficiales generalmente contienen poco amoníaco ($<0.1\text{mg/L}$).

Por último, díjase que si bien el amonio no es tóxico para los organismos superiores, si lo puede ser para los peces cuando se encuentra en forma de amoníaco.

ACEITES Y GRASAS: Se les concede especial atención por su escasa solubilidad en el agua y su tendencia a separarse de la fase acuosa. El aceite usado altera el sabor del agua potable, y por ello debe evitarse la presencia del mismo en las aguas de superficie y en las subterráneas. Además, los aceites usados vertidos en el agua originan una fina película que produce separación entre las fases aire-agua, ocasionando una capa superficial que impide la oxigenación de las aguas y produce la muerte de los organismos que las pueblan (organismos acuáticos).

Su procedencia está ligada a efluentes industriales procedentes de fábrica de lubricantes, explotaciones mineras, refinerías de petróleo, derrames de petróleo. Los aceites residuales generados representan más del 60% de los aceites lubricantes consumidos. Esto hace que los aceites usados sean uno de los residuos contaminantes más abundantes que se generan actualmente. Los Aceites Usados, de Desecho o Residuales deben ser recogidos y reciclados para evitar la contaminación del medio ambiente y para preservar los recursos naturales. Un aceite usado, por su naturaleza y composición, se presta a ser utilizado como medio portador de cualquier producto orgánico tóxico o peligroso que de forma fraudulenta haya sido mezclado con el aceite para eliminarlo a un bajo coste. Dichas sustancias tóxicas provienen de los aditivos añadidos al aceite y engloban diversos grupos de compuestos tales como: fenoles, aminas aromáticas, terpenos fosfatados y sulfonados di-álquil-ditiofosfato de zinc, detergentes, poli-isobutilenos, poliésteres, que durante el uso del aceite a temperaturas elevadas forman peróxidos intermedios que son muy tóxicos.

Otras normativas internacionales establecen como control mínimo valores de $0.1 - 0.3\text{mg/L}$ de aceites y grasas.

**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONSTITUCIONAL**

EXPEDIENTE : 32645-2013-0-1801-JR-CI-05
ESPECIALISTA : JULIO CESAR CARBAJAL CAYLLAHUA.
DEMANDANTE : COMUNIDAD NATIVA DE SUPAYACU
DEMANDADO : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
MATERIA : PROCESO DE AMPARO

SENTENCIA

RESOLUCION: 14
Lima, 02 de agosto de 2016.

VISTOS:

ASUNTO:

Proceso de amparo iniciado por la Comunidad Nativa de Supayacu y Organización Fronteriza Awuajun de Cajamarca- sede central de Supayacu- contra el Ministerio de Energía y Minas.

ANTECEDENTES.

De la demanda: Fluye del texto de la demanda que la parte actora pretende que: i) se declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 229-2013-MEM/DGM, de fecha 06 de setiembre de 2013, que aprueba el proyecto de exploración “Yagku Entsa” ubicada en el distrito de San José de Lourdes, Provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca y que autoriza el inicio de actividades mineras de exploración a favor de Exploraciones Águila Dorada SAC en el proyecto minero antes referido; ii) se declare la nulidad de la constancia de aprobación automática N° 042-2012-MEM -AAM, de fecha 13 de abril de 2012; iii) se suspenda de manera inmediata la ejecución de las actividades de exploración del proyecto “Yagku Entsa”; iv) se declare que la comunidad de Supayacu se encuentra dentro del área de influencia del proyecto “Yagku Entsa”, y por tanto, que se realice el proceso de consulta previa a su comunidad.

Alega una amenaza actual cierta e inminente a su derecho constitucional a la consulta previa, ya que se trata de una comunidad nativa y es obligación del Estado efectuar consulta previa antes de otorgar concesiones mineras dentro de su territorio o zonas de influencia.

Fundamentos de hechos de la demanda:

La actora sustenta su demanda- en síntesis- en los siguientes hechos:

- 1) Alega que la Comunidad Nativa de Supayacu se encuentra ubicada en el Rio Chirinos, distrito de Huarango, provincia de San Ignacio, Región de Cajamarca, y pertenece a la etnia Awuajun, reconocida como comunidad

nativa mediante Resolución Sinamos N° 034-OAE-DEAMS 11-77, de fecha 24 de marzo de 1977.

- 2) Agrega, que de acuerdo a lo señalado en el convenio 169 de la OIT y a la ley 29785 (Ley del Derecho a la Consulta Previa) cualquier decisión estatal que afecte sus derechos como comunidad (por ejemplo el otorgamiento de autorizaciones para inicio de actividades mineras o de aprobación de estudios de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental según sea el caso), debe serles consultadas en forma previa.
- 3) La demandada ha aprobado el inicio de exploraciones mineras sin ser consultada; si bien la comunidad nativa Los Naranjos ha otorgado permiso para el uso de sus tierras, también es cierto que el Estado Peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, incumplió con su obligación nacional e internacional de proteger debidamente los derechos colectivos de dicha comunidad, omitiendo consultarles sobre los posibles impactos de la actividad de exploración minera.
- 4) Precisa que los impactos de las actividades mineras trascienden el área de operaciones donde se ubica el proyecto minero, por lo que se usa el concepto de zona de influencia que importa un área mucho más grande que en la zona en donde quedará huella del proyecto mismo. En ese sentido, aún cuando el proyecto minero no se desarrolle en las tierras de la Comunidad Nativa de Supayacu, como éste se encuentra en la zona de influencia, existe necesidad de que sea consultada sobre los impactos que generará dicha actividad, máxime si las concesiones de la empresa Exploraciones Águila Dorada SAC comprende territorios de la Comunidad Nativa Supayacu.
- 5) Señala también que la aprobación del proyecto “Yagku Entsa” y la autorización del inicio de exploración minera relativa a dicho proyecto afectan, directamente sus derechos colectivos tales como el territorio (que habitan por cientos de años), el derecho al desarrollo del pueblo indígena o nativo dentro de un medio adecuado y sostenible, el derecho a que se respete su desarrollo cultural (manteniendo sus usos, costumbres y creencias religiosas), a ser consultados en forma previa, libre e informada; etc.

Trámite del proceso

Mediante resolución 01, de fecha 03 de enero de 2014-folio 212 a 2142-, se declaró inadmisibile la demanda y se solicitó a la parte actora que subsane las observaciones efectuadas.

Por escrito de fecha de presentación, 19 de marzo de 2014- folio 130 a 146-, la parte actora subsanó la demanda, por lo que mediante resolución 02, de fecha 20 de octubre de 2014, se admitió a trámite la demanda, corriéndose traslado a la parte demandada para que absuelva a lo que su derecho corresponde.

El Procurador Público del Ministerio de Energía y Minas mediante escrito de fecha de presentación 17 de marzo de 2015- folio 179 a 183, contestó la demanda, argumentando principalmente lo siguiente:

1. Señala que en la declaración de impacto ambiental (en adelante DIA) Aprobado mediante constancia de aprobación automática N° 042-2012-MEM-AAM, se evidencia la participación de la Comunidad Nativa Los Naranjos y los Apus anexos, conforme se tiene el informe N° 119-2013-MEM-DGM-DTM/IEX aprobado por la Dirección Técnica Minera a través de la Resolución de fecha 05 de setiembre de 2013, donde en el punto 4.6 y 4.7 del referido informe da cuenta que el Vice ministerio de Interculturalidad, proporcionó a la Dirección General de Minería, una relación de carácter referencial, sobre los proyectos mineros y los pueblos indígenas u originarios para definir la realización del proceso de consulta, ubicándose entre ellos, La Comunidad Nativa Los Naranjos, perteneciente al distrito de San José de Lourdes (zona del proyecto minero), reconocida mediante Resolución 085-OAN-ORAMS-II.77. En ese sentido, la Comunidad Nativa de Supayacu no puede desconocer la existencia del proyecto.
2. Precisa que la Comunidad Nativa Los Naranjos si estuvo de acuerdo con el proyecto.
3. Finalmente, señalan que han sido cuidadosos al entregar el proyecto el DIA con el fin de proteger el medio ambiente y la salud de la población.

Por resolución 04, de fecha 24 de abril de 2015, se tuvo por contestada la demanda. También formuló excepciones y se corrió traslado.

Por resolución 08, de fecha 17 de noviembre de 2015-folio 230-, se declaró infundada la excepción de incompetencia por territorio y se dispuso que los autos se pongan a despacho para sentenciar.

Por resolución 10, de fecha 15 de abril de 2016, se oficio al Ministerio del Ambiente para que emita opinión sobre el proyecto Yagku Entsa, asimismo, se citó a informe oral para el día 17 de mayo último.

Se llevo a cabo la audiencia, sin participación de la parte demandada. Asimismo el Ministerio del Ambiente respondió a lo solicitado por el juzgado.

El estado del proceso es de emitir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Del proceso constitucional de amparo: De acuerdo al artículo 200° inciso 2 de la Constitución, el amparo procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza derechos constitucionales distintos a los tutelados por el hábeas corpus y al hábeas data, siendo su finalidad la de proteger tales derechos, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación, como establece el artículo 1° del Código Procesal Constitucional, Ley 28237.

SEGUNDO: Del petitorio: La actora solicita, vía proceso de amparo, que:

- 1) Se declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 229-2013-MEM/DGM, de fecha 06 de setiembre de 2013, que aprueba el proyecto

de exploración "Yagku Entsa" ubicada en el distrito de San José de Lourdes, Provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca y que autoriza el inicio de actividades mineras de exploración a favor de Exploraciones Águila Dorada SAC en el proyecto minero antes referido;

- 2) Se declare la nulidad de la constancia de aprobación automática N°042-2012-MEM-AAM, de fecha 13 de abril de 2012;
- 3) Se suspenda de manera inmediata la ejecución de las actividades de exploración del proyecto "Yagku Entsa".
- 4) Se declare que la comunidad de Supayacu se encuentra dentro del área de influencia del proyecto "Yagku Entsa", y por tanto, que se realice el proceso de consulta previa en su comunidad.

TERCERO: La factibilidad de tramitar la pretensión de la actora vía amparo: La parte actora ha alegado amenaza de violación a su derecho a la consulta previa, derecho reconocido en el convenio 169 de la OIT, el cual es de obligatorio cumplimiento en nuestro país, por lo que puede ser protegido por el amparo de conformidad con el artículo 37.23 del Código Procesal Constitucional, correspondiendo entrar al fondo del asunto.

CUARTO: Materia controvertida: La parte actora, en lo sustancial, señala que si bien el proyecto minero denominado " Yagku Entsa" llevado a cabo por la empresa Exploraciones Águila (fase de exploración) en tierras de la Comunidad Nativa de Los Naranjos cuenta con autorización de dicha comunidad, sin embargo, tal proyecto debió serle consultada debido a que el mismo podría afectar sus tierras y su hábitat, debido a que habitan en dicha zona, realizan las actividades para su subsistencia y se nutren de las fuentes de agua que nacen en la zona donde se pretende realizar la actividad minera cuestionada. Por su parte, la demandada, señala que ha cumplido con el procedimiento de consulta previa y la exploración minera cuenta con el aval de la comunidad nativa donde se ubica el proyecto.

Entonces, luego de analizar los fundamentos que sustentan la demanda y lo expuesto en la contestación de la misma, se puede establecer con meridiana claridad que la controversia gira en torno a los siguientes puntos:

1. Establecer si efectivamente correspondía efectuar consulta previa a la parte actora antes del dictado de la Resolución Directoral N° 229-2013-MEM/DGM.
2. Establecer, de ser el caso, si la omisión de la consulta previa genera la nulidad del acto administrativo cuestionado.

Consulta previa

QUINTO: La parte actora ha invocado como norma jurídica para sustentar su pretensión el convenio 169 de la OIT, respecto a los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Según lo expone el Tribunal Constitucional en la STC: 22-2009-AI/TC -fundamento 14-, "la protección otorgada por el convenio se centra en elementos necesarios e indispensables para la conservación y garantía de la existencia de dichos pueblos indígenas, sin perjuicio de su desarrollo y voluntaria participación en la economía global".

En el fundamento 15 de la misma sentencia, el TC señala que "el derecho de consulta previa e informada establecido en el artículo 6 del Convenio N° 169 de la OIT, es una de las herramientas más importantes que tienen los pueblos indígenas. Es una verdadera garantía jurídica que permite en muchos sentidos tutelar a los intereses de los pueblos indígenas. En dicha disposición se indica lo siguiente:

"1.- Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de **sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente** (...);

En el fundamento 16 de la sentencia citada se precisa: " De otro lado, el artículo 15 también hace referencia al derecho de consulta, sin embargo, este artículo establece la consulta para el específico caso de exploración y explotación de recursos naturales ubicados en los territorios indígenas. De esta manera, en el punto 2 de dicho artículo se establece que:

"En caso de que pertenezcan al Estado la propiedad de los minerales o los recursos del sub suelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, **los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.** (...)"

En el fundamento 19 el TC precisa que el artículo 6 del convenio obliga a que se proceda a la consulta de los pueblos indígenas cuando, al aplicar las disposiciones del convenio, se prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarles directamente.

SEXTO: **En el caso de autos,** no es materia de discusión si el inicio de actividades mineras de exploración del proyecto "Yagku Entsa" de la empresa Exploraciones Águila Dorada SAC se desarrolla o desarrollará dentro de territorios de la Comunidad Nativa Los Naranjos- comunidad indígena-; aun más, dicha comunidad ha brindado su autorización, según consta en la Resolución Directoral N° 229-2013-MEM/DGM; lo realmente importante es establecer si la parte actora se encuentra dentro de la zona de influencia del citado proyecto y por tanto interesada en cómo se desarrollara el mismo, a fin de establecer si debía ser consultada o no.

SETIMO: El TC ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el tema precisando en el fundamento 17 de la STC 22-2009-AI/TC que cuando el Convenio se refiere a los "**pueblos interesados**", tal categoría comprende no sólo a las comunidades directamente afectadas o establecidas en los territorios objeto de explotación y/o exploración, sino que también involucra a las comunidades colindantes, a sus organizaciones, y desde luego, a sus autoridades más representativas.

OCTAVO: Desde dicha perspectiva, debemos señalar en principio que la Comunidad Nativa de Supayacu - comunidad indígena- es colidante a las tierras de la Comunidad Los Naranjos, según el mapa obrante a folio 12. Ese simple hecho, obligaba a la demandada a que antes de otorgar autorización de exploración minera consulte a la actora.

Aun más, en el caso particular conforme se advierte de la parte expositiva de la Resolución Directoral N° 229-2013-MEM/DGM, no hubo consulta previa debido a que la Comunidad Campesina Los Naranjos, titular del predio donde se realizará el proyecto, estaba de acuerdo con la realización del inicio del proyecto minero-fase de exploración-, por lo que se obvió la consulta previa.

En ese sentido, lo que se advierte es un apresuramiento o negligencia de la demandada de no verificar que la consulta previa- su exoneración - no sólo debía llevarse a cabo con la titular de los terrenos donde se realizará la exploración y/o explotación del proyecto sino también con las comunidades que podían ser afectadas directamente (comunidades aledañas). No se advierte que la demandada haya realizado un procedimiento de verificación de la existencia de otras comunidades indígenas, distintas al titular del predio donde se desarrollará el proyecto, que puedan tener interés en la realización del proyecto. Y la verificación de la existencia de comunidades indígenas alrededor del proyecto resulta de suma importancia, en tanto las actividades mineras generan la extracción de recursos no renovables, afectando las tierras donde se realiza dicha actividad y también del entorno; por tanto, al tratarse de una actividad que puede modificar el entorno donde habitan comunidades indígenas que están asentadas en dichas zonas por muchos siglos es obligatorio que el Estado tome todas las medidas necesarias para que ellas expresen su voluntad y decidan sobre su destino de manera informada.

NOVENO: La actuación de la administración lesiona al contenido del derecho a la consulta previa de la actora, como es el acceso a la misma, ya que pese a tener interés no ha sido convocada para expresar su opinión sobre el proyecto. Entonces, es claro que se afectó el derecho de ser consultado de la comunidad demandante.

DECIMO: De otro lado, si bien se pide la nulidad de la resolución administrativa, sin embargo, lo que corresponde es la suspensión de sus efectos en la etapa que se encuentre, debido a que ella se emitió sólo bajo aprobación de la comunidad donde se realizará el proyecto cuando debieron expresar su opinión otras comunidades que podrían ser afectadas; por tanto, corresponderá que la demandada tome las medidas necesarias para determinar la viabilidad de la continuación del proyecto previa consulta de la actora y otros pueblos indígenas que podrían ser afectados.

DECIMO PRIMERO: En consecuencia, habiéndose acreditado la afectación al derecho de la consulta previa de la parte actora, la demanda debe ser estimada, debiendo la demandada subsanar la anomalía detectada en el presente proceso.

DECIMO SEGUNDO: La parte demandada pese a ser entidad estatal debe pagar costos del proceso en atención a que ha obligado a la parte actora a recurrir al Poder Judicial en busca que se respete su derecho.

DECISION:

Por las razones expuestas, el Juez del Quinto Juzgado Constitucional, impartiendo Justicia en nombre de la Nación y del Pueblo: **DECIDE:**

1. **DECLARAR FUNDADA** la demanda de amparo interpuesta por Comunidad Nativad de Supayacu y Organización Fronteriza Awuajun de Cajamarca-sede central Supayacu- , por afectación al derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas.
2. **SE SUSPENDE** los efectos de la Resolución Directoral N° 229-2013-MEM/DGM, de fecha 06 de setiembre de 2013, emitido por el Director General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. La suspensión de la fase de exploración del proyecto "Yagku Entsa" se dará en la etapa que se encuentre, hasta que la demandada tome las medidas necesarias para determinar la viabilidad de la continuación del proyecto previa consulta de la actora y otros pueblos indígenas que podrían ser afectadas.
3. Con costos.
4. Notifíquese a las partes

Escuela de Líderes
“Waismag Aidaun Ayamtaiji”

MÓDULO I

Conociendo nuestros derechos

Índice

Introducción	2
I. TENEMOS DERECHOS	4
¿Qué son los derechos humanos?	4
¿Cuáles son las condiciones necesarias para ejercerlos?	4
¿Qué normas protegen nuestros derechos?	6
¿Cómo defender nuestros derechos?	6
¿Qué instituciones velan por nuestros derechos?	6
II. CONOCIENDO NUESTROS DERECHOS	8
Convenio 169	8
¿Qué derechos tienen los Pueblos Indígenas?	9
Derecho a la Identidad Étnica	9
Derecho a la Participación	9
Derecho a la Consulta	10
Derecho a la Tierra o a un Territorio	10

Introducción

Los derechos humanos constituyen un instrumento básico para alcanzar una convivencia humana más justa y respetuosa del valor que representa cada persona. Su real ejercicio compromete a toda la sociedad, al Estado y a cada uno de los seres humanos.

Responden a una realidad en permanente cambio por lo que, defender la dignidad de las personas en nuevas situaciones, exige necesariamente el reconocimiento de nuevos derechos.

En los últimos años, ante el deterioro acelerado de nuestro entorno, muchas personas y agrupaciones sociales han impulsado el reconocimiento del derecho a un medio ambiente adecuado y equilibrado para el desenvolvimiento de la vida. Si bien hay avances en esta tarea, queda todavía un largo camino por recorrer para que se garantice el ejercicio de este derecho.

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ es una asociación sin fines de lucro que promueve la vigencia de valores fundamentales para la sociedad peruana. En particular, los relativos a la vida, la libertad, la justicia, la equidad, el desarrollo humano y sostenible.

De modo que, en el marco de nuestra acción institucional y del Proyecto “Reforzamiento de capacidades públicas y organizativo comunitarias en la región de Cajamarca”, financiado por Tierra de Hombres, proponemos la Escuela de Líderes: Waismag Aidaun Ayamtaiji, una iniciativa participativa en la comunidad nativa awajún de Supayacu, provincia San Ignacio, departamento Cajamarca.

El objetivo es fortalecer tanto a los apus como a los potenciales líderes y lideresas de la comunidad, conociendo y reforzando sus valores de transparencia, democracia y participación. El primer módulo pretende aportar herramientas para el conocimiento de nuestros derechos y su ejercicio pleno y adecuada defensa.

I. TENEMOS DERECHOS

¿Qué son los derechos humanos?

Son el conjunto de cualidades y condiciones que toda persona necesita que le reconozcan para que pueda vivir con dignidad. El **reconocimiento** de nuestros derechos es fruto de la lucha de personas por conseguir condiciones más humanas y dignas para todas y todos. Por tanto, el Estado está obligado a reconocerlos, respetarlos, defenderlos y promoverlos.

¿Cuáles son las condiciones necesarias para ejercerlos?

Hacen falta un entorno propicio y determinadas circunstancias para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. Por lo tanto, determinadas condiciones son necesarias.

No olvidar que...

Principalmente el derecho a:

- ✓ La vida
- ✓ La integridad física
- ✓ La igualdad
- ✓ La participación ciudadana
- ✓ La libertad de expresión
- ✓ La libertad de tránsito y residencia
- ✓ La libertad de reunión y asociación
- ✓ El trabajo
- ✓ La salud
- ✓ La educación

¿Qué normas protegen nuestros derechos?

Tenemos un marco legal que existe para proteger nuestros derechos a nivel nacional e internacional. A nivel nacional tenemos la **Constitución Política** y las **Leyes y Códigos**.

A nivel internacional tenemos los Tratados Internacionales como la **Declaración Universal de los DDHH**, el **Pacto Internacional de derechos civiles y políticos**, el **Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales**, el **Convenio 169 de la OIT** y la **Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre**.

¿Cómo defender nuestros derechos?

Podemos hacerlo utilizando **mecanismos informales** como son las movilizaciones, adhesiones, denuncias, pronunciamientos, reuniones, etc. O también haciendo uso de **mecanismos formales** que establece la ley, como los procesos de:

- Hábeas Corpus: por lesiones a la libertad individual
- Amparo: por lesiones a los derechos que expresa la Constitución.
- Cumplimiento: por incumplimiento de la norma por parte de autoridades.
- Hábeas Data: por lesiones a la protección de la intimidad como derecho.
- Acción Popular: por reglamentos contrarios a la Constitución.
- Inconstitucionalidad: por normas con rango de Ley que contradicen la Constitución.

¿Qué instituciones velan por nuestros derechos?

Existen un conjunto de instituciones en nuestra sociedad cuya principal función es velar por la protección de nuestros derechos.

En la **Sociedad Civil** existen las Instituciones y Organismos de Derechos Humanos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, las Instituciones de Iglesias

A **nivel Nacional** tenemos el Poder Judicial, los Juzgados de Paz, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional del Perú, las DEMUNA, etc.

A **nivel Interamericano** contamos con Normas como la Carta de la Organización de los Estados Americanos-OEA, la Declaración Americana de los derechos y deberes del Hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos, los Órganos como la Comisión Interamericana de DH, Corte Interamericana de DH.

En un **nivel Universal** contamos con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En el **marco de las Naciones Unidas** tenemos a la Comisión de Derechos Humanos y sus diferentes comités de trabajo e incidencia.

II. CONOCIENDO NUESTROS DERECHOS

Convenio 169

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado de las Naciones Unidas y su Convenio 169 es la ley internacional más importante sobre pueblos indígenas y tribales que ampara la protección completa de sus derechos en el Perú.

Este convenio es una ley sobre Derechos Humanos Colectivos de carácter social, económico, político y cultural, y es la que nos ayuda a interpretar y orientar las normas que existen y las que se hagan en relación a los pueblos indígenas.

El Estado Peruano ratificó el Convenio 169 en el año 1994, por lo tanto está obligado a desarrollar con la participación de los pueblos indígenas, medidas que favorezcan el goce de sus derechos y libertades, su autonomía y desarrollo desde el respeto a su identidad cultural, que es también un derecho (art. 1, Convenio; art. 2 inc. 19, Const.).

El Convenio 169 plantea un reconocimiento colectivo, no individual, es por eso que nos habla de los derechos del pueblo, de tu pueblo.

Sus principios básicos son el respeto, la participación, que deberán cumplirse a través del desarrollo de programas, planes y legislación, de la mano de los propios pueblos indígenas.

¿Qué derechos tienen los Pueblos Indígenas?

Derecho a la Identidad Étnica

Es un derecho fundamental de la persona y su comunidad vivir según sus propios valores y costumbres, sus normas sociales y culturales. *Etnia* es un grupo de personas que comparten elementos culturales comunes como el territorio, lengua, valores, origen histórico, etc. Estos elementos son importantes pero no son lo único que nos hace indígenas, sino también la identificación con el grupo y su historia.

Derecho a la Participación

Toda persona tiene derecho a participar de los asuntos de su pueblo y de su país, para que se tome en cuenta su opinión, eligiendo a los representantes de su comunidad y ocupar cargos según sus

costumbres. Los mismos derechos les asisten fuera de la comunidad. El Estado debe asegurar la representación política de sus ciudadanos indígenas en las esferas de poder. Es necesario conocer los mecanismos de participación.

Derecho a la Consulta

Este derecho representa una forma muy importante de participar y se ampara en la Ley 29785. El gobierno está obligado a consultar y permitir a los pueblos indígenas participar en la formulación de normas o programas que puedan afectarles. Asimismo, debe desarrollar medidas y acciones con la participación de los pueblos indígenas, para proteger sus derechos y asegurar su integridad (art. 2 Convenio 169-OIT). Consultar no significa que sólo avisen o escuchen sino que participen activamente, se consideren y se respeten las opiniones e ideas de los pueblos indígenas.

Derecho a la Tierra o a un Territorio

La Constitución asegura el derecho de las comunidades a la propiedad colectiva de sus tierras pero es importante que lo reconozcas desde el concepto del territorio como lo propicia el Convenio 169, pues refleja mejor lo que los pueblos necesitan y su relación con el medioambiente. Esto les permite autonomía y autodeterminación respecto de lo que quieren hacer con sus recursos, sobre cómo administrarlos y usarlos. Ligados a este derecho están los de posesión y propiedad que el Estado les debe reconocer como colectividad.

Waismag:

Guerrero. Persona awajún que tiene visión para organizar y actuar a favor del pueblo awajún.

(Taller Comunitario, Supayaku)

Un líder o una lideresa:

**“Es una persona que participa en forma voluntaria a favor del pueblo,
Que propone ideas constructivas,
es un consultor del pueblo,
es transparente y democrático,
es respetable y responsable.”**

(Taller Comunitario, Supayaku)

Mayo 2015

Ajutjamui ayamjumka agkan pujut
“Waismag aidaun ayamtaiji”

MÓDULO II:

Sobre el derecho a la participación de los pueblos indígenas y originarios

Índice

INTRODUCCIÓN	2
I. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN	3
II. DERECHO A LA CONSULTA PREVIA.....	5
III. DERECHO A LA EXPRESIÓN, REUNIÓN Y ASOCIACIÓN	6
3.1. Criminalización de la Protesta	8
3.2. Organización Indígena para la defensa de sus derechos	9

Introducción

Los derechos humanos son un instrumento básico para alcanzar una convivencia humana más justa y respetuosa del valor que representa cada persona. Su real ejercicio compromete a toda la sociedad, al Estado y a cada uno de los seres humanos.

En los últimos años, ante el deterioro de nuestro entorno, muchas personas y agrupaciones sociales han impulsado el reconocimiento del derecho a un medio ambiente adecuado y equilibrado para el desenvolvimiento de la vida. Si bien hay avances en esta tarea, queda todavía un largo camino por recorrer para que se garantice el ejercicio de este derecho.

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ es una asociación sin fines de lucro, que promueve la vigencia de valores fundamentales para la sociedad peruana, relacionados con la vida, la libertad, la justicia, la equidad, el desarrollo humano y sostenible.

En el marco de nuestra acción institucional y del Proyecto “Reforzamiento de capacidades públicas y organizativo comunitarias en la región de Cajamarca”, financiado por Tierra de Hombres, proponemos la Escuela de Líderes: Waismag Aidaun Ayamtaiji, una iniciativa participativa en la comunidad nativa awajún de Supayacu, provincia San Ignacio, departamento Cajamarca.

El objetivo es fortalecer tanto a los apus como a los potenciales líderes y lideresas de la comunidad, conociendo y reforzando sus valores de transparencia, democracia y participación.

El presente módulo pretende profundizar en el derecho a la participación, consulta previa y asociación, reflexionando sobre la situación de criminalización de estos derechos y resaltando la capacidad de respuesta y propuesta de los pueblos indígenas.

I. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

El derecho a la participación de los Pueblos Indígenas está reconocido a nivel internacional e implica mucho más que votar o participar en los procesos electorales.

A través de este derecho los pueblos pueden tomar decisiones internas relacionadas con su gobierno comunal, con el mantenimiento de sus sistemas de organización y de justicia, decisiones relacionadas con su propia autonomía.

Asimismo, los pueblos tienen derecho a participar en la toma de decisiones externas, es decir, por parte de autoridades públicas u otros actores, sobre temas que les afectan.

Estas decisiones pueden ser tomadas, en primer lugar, en el ámbito internacional por los Estados a través de foros, tratados u organizaciones que colaboran o financian proyectos relacionados. En segundo lugar, en la vida pública estatal a través de la expedición de normas (leyes, decretos, resoluciones, etc.).

En ese sentido, el Estado debería tomar medidas especiales en cuanto a la representación indígena a fin de que, a través de su participación en los procesos electorales y en el ejercicio de otros derechos políticos, se asegure su representación y participación en la toma de decisiones de los asuntos que les competen.

En tercer lugar, tenemos la participación en procesos donde actores externos toman decisiones que les afectan directa e indirectamente. Esto implica el derecho a la consulta, cuya aplicación supone una garantía del ejercicio del derecho a la participación. Implica también la institucionalización de la participación de los pueblos, cuyo objetivo es hacer efectiva la participación de manera continua y en todas las fases del proceso de elaboración de políticas que les afecten.

Sin bien la ciudadanía en general tiene el derecho de participación política y de ciudadanía directa, no debemos olvidar que los pueblos tienen un derecho específico para participar en los asuntos que le conciernen. El derecho a la consulta y el derecho a la participación están relacionados, pero no son lo mismo.

La Constitución del Perú señala en su Artículo 2, inciso 17, que toda persona tiene derecho a:

Asimismo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, que Perú ratificó en 1994, dice en su artículo 6:

"Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente."

Es así que estos documentos nacionales e internacionales reconocen y amparan el principio de participación, como elemento básico en la vida plena de todos los pueblos y sus integrantes.

Si se respetara el derecho a la participación de los pueblos originarios, si se fomentara su implicación en las decisiones que les conciernen, que directa o indirectamente les afectan, se evitarían muchos de los conflictos que hoy aquejan a nuestro país.

II. DERECHO A LA CONSULTA PREVIA

Tanto el Convenio 169 como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas reconocen el derecho a la consulta, por principio del derecho internacional. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene rango constitucional en el Perú, por lo que todas las autoridades públicas tienen el deber de cumplir con su contenido y respetar los derechos que reconoce.

En el Perú, tenemos la **Ley N° 29785 Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios** (emitida el 07 de septiembre de 2011). Y su **Reglamento emitido por Decreto Supremo 001-2012-MC** (emitida el 3 de abril 2012). Sin embargo, es la

entidad pública encargada en cada rubro la que tiene la facultad de establecer la forma y mecanismos del proceso de consulta.

De modo que, los mecanismos de participación que benefician a la población en general, no son suficientes para garantizar el derecho específico de los pueblos indígenas, a la participación en los asuntos que les conviene. Se requieren mecanismos informativos,

de diálogo, de construcción de consenso, de acuerdo o consentimiento específicos en esta materia.

El derecho a la consulta **se aplica antes** de adoptar cualquier medida legislativa o administrativa, así como proyectos, planes o programas de inversión o desarrollo nacional o regional que afecten de los pueblos indígenas. Con el **objetivo** de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. Para lo cual se deben **implementar** acciones de información, evaluación, diálogo, acuerdo vinculante.

En el Convenio 169, artículo 6, se establece que:

“La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas.”

Según la Defensoría del Pueblo, a mayo de este año son 211 los conflictos registrados, de los cuales 143 (67.8%) son calificados como socioambientales, es decir, que gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos.¹

Es decir, situaciones de desacuerdo por parte de la población por el control y uso que hacen los gobiernos, de sus territorios, sin buscar su participación, sin consultar su parecer, considerando que son zonas que habitan desde tiempos ancestrales.

III. DERECHO A LA EXPRESIÓN, REUNIÓN Y ASOCIACIÓN

Estas libertades constituyen elementos fundamentales para la democracia, permiten que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la participación ciudadana de manera efectiva.

A nivel interno, la Constitución del Perú señala en su Artículo 2, que toda persona tiene derecho:

¹ <http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/glosario.php?pag=2>

En el inciso 4, sobre la libertad de expresión:

“A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación.”

En el inciso 12, sobre la libertad de reunión:

“A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas.”

En el inciso 13, sobre la libertad de asociación:

“A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa.”

En el caso de la libertad de reunión, solo puede ser restringida de manera temporal por razones de seguridad, a través del establecimiento del estado de emergencia.

A nivel internacional estos derechos se encuentran recogidos en LA Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos (o Pacto de San José) contempla, dentro de los derechos protegidos, a las libertades de

pensamiento y expresión (artículo 13), de **asociación** (artículo 16) y de **reunión** (artículo 15). Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, Estas libertades conforman un pilar básico para la democracia, pues permiten hacer efectiva la participación política plural de todos los grupos sociales en defensa de sus intereses.

3.1. Criminalización de la Protesta

Cuando los principios de libertad de expresión, reunión y asociación que todo ciudadano y ciudadana peruana tienen, no se respetan, se genera descontento, indignación y desconfianza. Esto suele derivar en acciones de rechazo y protesta por parte de los grupos que se sienten afectados en sus libertades y en sus derechos.

En Perú existen demandas sociales que agudizan la situación de exclusión de diversos sectores de la población, entre ellos, los pueblos indígenas. El manejo de los recursos naturales, que depende del mercado internacional, privilegia la extracción de minerales, sin respeto a las poblaciones y al ambiente.

Ello origina situaciones de grave conflictividad social en las zonas en que se implementan proyectos mineros e hidrocarburíferos, que afectan la calidad de vida de estos pueblos. Muchas veces se reprime a personas y comunidades indígenas por rechazar los proyectos extractivos, principalmente por no realizarse una consulta previa o hacerla de manera inadecuada e incumpliendo los compromisos asumidos por parte del gobierno.

La movilización y la protesta son formas de ejercer el derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente. En el caso de la protesta por parte de los pueblos indígenas, ésta no sólo reivindica sus derechos sino, sobre todo, su reconocimiento por parte del Estado como parte de la sociedad peruana, como parte de la ciudadanía que conformamos todos los habitantes de este país.

Sin embargo, el Estado castiga y reprime la protesta indígena, usando la fuerza de manera abusiva y formas legales para criminalizar a las personas y, por el contrario, flexibiliza las normas para que las fuerzas armadas estatales lleguen incluso a la violencia directa, violando derechos humanos, en cumplimiento de sus funciones de restablecer el orden, utilizando de esta manera el derecho penal como un instrumento para criminalizar a quienes a través de la protesta expresan sus diferencias con determinada decisión del Estado, y por otro lado, para cubrir con un manto de impunidad a los miembros de las fuerzas policiales o armadas que excediendo su funciones violentan los derechos de los protestantes.

3.2. Organización Indígena para la defensa de sus derechos

Ante la falta de reconocimiento y poco respeto a sus derechos, los pueblos originarios o indígenas han sabido organizarse a través del tiempo para ejercer su propia defensa y exigir su lugar como parte de la ciudadanía peruana.

Esta organización empieza por la propia forma de elegir sus representantes y normas internas de las comunidades, pero también para conformar asociaciones que se conviertan en interlocutoras de su problemática, sus demandas y propuestas.

Para aportar a una relación igualitaria entre las organizaciones indígenas y las entidades estatales, son necesarios algunos requisitos formales como:

- Mantener actualizado el Libro de Actas de Asambleas.
- Mantener actualizado el Padrón de asociados.
- Mantener actualizado el Libro de Actas de la Junta Directiva.
- Estatutos de organización (frecuencia de reunión, elección de cargos, sanciones, etc.).
- Libros certificados por Notario o en su defecto, Juez de Paz.
- Registrar la Asociación o Comunidad en Registros Públicos.
- Registrar la Junta Directiva en Registros Públicos.

Los pueblos indígenas y originarios requieren fortalecer su institucionalidad indígena y creemos que la información sobre su situación y sus derechos debe conocerse, extenderse y comprenderse en la línea de su visión de vida y desarrollo.

Julio 2015.

Escuela de Líderes y Lideresas
“Waismag Aidaun Ayamtaiji”

MÓDULO III:

Transformar los conflictos

Índice

INTRODUCCIÓN	2
I. ¿QUÉ ES UN CONFLICTO?	3
1.1. ¿QUÉ ELEMENTOS INFLUYEN EN UN CONFLICTO?	4
1.2. ¿LA VIOLENCIA ES PARTE DEL CONFLICTO?.....	4
1.3. ESCALAS DEL CONFLICTO SOCIAL.....	5
1.4. REPORTANDO LOS CONFLICTOS.....	6
II. PUEBLOS INDÍGENAS Y CONFLICTO	7
2.1. ¿QUÉ CONFLICTOS TIENEN LOS PUEBLOS INDÍGENAS?	7
2.2. ¿QUÉ CONFLICTOS EXISTEN EN SUPAYAKU?	7
III. TRANSFORMAR EL CONFLICTO	8
3.1. LA OPORTUNIDAD DEL CONFLICTO.....	10

Introducción

El trabajo por los derechos humanos nos obliga a recordar que en la historia del mundo se han dado acontecimientos en los que esos derechos han sido violados, principalmente en las guerras.

La lucha por el respeto y defensa de los derechos fundamentales fomentó el estudio de esos grandes conflictos para que no se repitan esos hechos de violencia. Ese estudio es una primera fase para buscar caminos de paz, de democracia y reconstruir sociedades heridas por la guerra y que ésta no vuelva a suceder.

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ es una asociación sin fines de lucro, que promueve la vigencia de valores fundamentales para la sociedad peruana, relacionados con la vida, la libertad, la justicia, la equidad, el desarrollo humano y sostenible.

En el marco del Proyecto “Reforzamiento de capacidades públicas y organizativo comunitarias en la región de Cajamarca”, financiado por Tierra de Hombres, proponemos la Escuela de Líderes “Waismag Aidaun Ayamtaiji”, como una iniciativa participativa en la comunidad nativa awajún de Supayaku, provincia San Ignacio, departamento Cajamarca.

El objetivo es fortalecer a sus autoridades y potenciales líderes y lideresas, reforzando sus valores de transparencia, democracia y participación, así como su capacidad de abordar y transformar de manera positiva las situaciones de conflicto.

La comunidad de Supayaku no es ajena a los conflictos sociales que hoy son parte de la coyuntura regional y nacional, por lo que este módulo pretende aportar a la reflexión y a la acción, compartiendo algunos conceptos y herramientas para reforzar nuestra capacidad de transformar los conflictos y encaminarnos hacia una convivencia pacífica.

I. ¿QUÉ ES UN CONFLICTO?

El **conflicto es inevitable en la vida de las personas**, es decir, es parte de nuestra capacidad de relacionarnos en sociedad. El conflicto suele ser sinónimo de desacuerdo, diferencia u oposición pero no por ello nuestro ánimo para abordarlo debe ser negativo, por el contrario, es tiempo de ver que **el conflicto es una oportunidad** para el diálogo y el intercambio de opiniones, aunque éstas sean contrarias a primera vista.

Una persona puede entrar en conflicto consigo misma por algún motivo que le genere inseguridad o alguna emoción básica inesperada. Dos o más personas pueden tener un conflicto por algo que les afecta en común, ya sea porque todos o algunos pueden perder algo (en lo material, en estatus, en derechos, etc.). Si la inseguridad de una persona puede ser difícil de manejar, imaginemos lo que sucede si son varias personas.

El conflicto no es algo estático sino mas bien es expresivo, dinámico y está basado en las relaciones¹. Es por ello que es importante ir más allá de lo que se ve para llegar al fondo, a las verdaderas causas y así emprender un camino de diálogo, participación y consenso.

El conflicto es un proceso, por lo tanto no hay que evitarlos sino guiarlos, como cuando construimos un canal de regadío, es posible darle forma y conducir el agua a un destino más conveniente para todos.

El conflicto social, según la Defensoría del Pueblo², es un **hecho en el que se afectan derechos fundamentales**, los que no son reconocidos o protegidos por el Estado y los que comprende el propio manejo del conflicto (muchas veces inadecuado). Es una **realidad que tiene elementos económicos, políticos, culturales** y una diversidad de percepciones, intereses, necesidades, contextos, identidades étnicas, etc.

¹ Lederach, John Paul.- Construyendo la paz. Colombia, 1998.

² Defensoría del Pueblo: Informe N° 156: Violencia en los conflictos sociales. Lima, 2012.

1.1. ¿Qué elementos influyen en un conflicto?

Para facilitar la tarea de tratar los conflictos, es necesario identificar y diferenciar algunos elementos que están presentes en su dinámica.

Los conflictos surgen de las relaciones y de la interacción entre las personas, las instituciones, que vendrían a ser partes involucradas. En este proceso influyen las **intenciones** y las **percepciones**, es decir, con qué intención u objetivo hago algo y cómo ese algo va ser interpretado o visto por los demás.

Conflicto y cooperación son caras de la misma moneda, porque en ambos hay reciprocidad y reconocimiento mutuo³. Se puede cooperar para que algunos ganen aunque sea un poco haciendo que otros pierdan, o se puede cooperar para calmar, distender y hacer que el diálogo nos guíe.

El **poder es la capacidad de conseguir lo que se quiere** como persona o como grupo, para esto es necesario tomar en cuenta las opiniones y decisiones de todas las partes.

En el contexto peruano y a nivel mundial, la historia nos dice que las cuotas de poder han sido desiguales y se han usado para beneficios personales o de determinados sectores económicos y culturales.

El poder nace de la capacidad de transformar la realidad que todas y todos tenemos, pero que no ejercemos en igualdad de condiciones.

1.2. ¿La violencia es parte del conflicto?

La violencia NO es inherente al conflicto. La historia de guerras y graves violaciones a los derechos humanos han ayudado a que creamos que es así. Si bien el conflicto surge de

³ Martínez, Vicent: Podemos hacer las paces. España, 2005.

una oposición de intereses, necesidades u opiniones, y se convierte en un escenario de riesgo, esto no significa que dichas posiciones contrarias deban enfrentarse de manera violenta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como el **uso** de la fuerza física o el poder en **grado** de amenaza o efectivo **contra** uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, que cause o tenga posibilidades de causar lesiones, muerte, **daños** o trastornos, privaciones, que atente contra el derecho a la salud y la vida de la población.

Existen formas de violencia que se dan en el ámbito privado y otras que se dan en el espacio público, cualquiera de ellas tiene un **impacto sobre la calidad de vida de las personas** que las padecen.

Las prácticas violentas suelen ser resultado de acciones preparadas, de la negligencia o de causas ajenas al conflicto pero que alimentan el contexto de violencia, permitiendo que ésta se ejerza de manera **física, psicológica y simbólica**.

La violencia suele ser instrumentalizada, tanto por sectores que quieren ejercer algún tipo de presión para desestabilizar a la autoridad, o por quienes en nombre del restablecimiento del orden reprimen o bloquean a quienes reclaman o presionan.

1.3. Escalas del conflicto social

1.4. Reportando los conflictos

La Defensoría del Pueblo, dentro de su mandato constitucional de defensa de los derechos fundamentales, ha ido incorporando conceptos, tipologías y un sistema de registro de conflictos que nos permite conocer y analizar las dinámicas conflictivas en cada región del país.

Estos son los tipos de conflictos según la Defensoría del Pueblo:

- Asuntos de Gobierno Nacional – Regional – Local.
- Socioambientales.
- Comunales.
- Laborales.
- Electorales.
- Demarcación territorial.
- Cultivo ilegal de coca.

Los reportes de conflictos de los últimos años revelan que los conflictos de mayor incidencia son los de tipo socioambiental, es decir, los que implican el control y acceso al ambiente y sus recursos.

II. PUEBLOS INDÍGENAS Y CONFLICTO

2.1. ¿Qué conflictos tienen los pueblos indígenas?

Es momento de reflexionar sobre aquellas situaciones de conflicto y tensión de nuestra vida en comunidad. Para ello es necesario identificar los **temas** y también los **actores**.

Al interior de la comunidad puede haber tensión o conflicto por **tierras**, por determinados **comportamientos**, por la presencia de **organizaciones** o **empresas** externas, con nuestras **autoridades** u **dirigentes**, con **otras comunidades** o **colonos**, etc.

Los actores serían en primer lugar los propios pueblos indígenas, luego los agentes extractivos, los agentes estatales, la iglesia, las organizaciones, las rondas campesinas, entre otros que se identifiquen según la problemática.

2.2. ¿Qué conflictos existen en Supayaku?

Como sabemos, nuestra comunidad de Supayaku ha vivido altos niveles de tensión, miedo y preocupación debido a la posible renovación del convenio con la empresa Águila Dorada SAC que ha sido motivo de nuevas negociaciones con algunos dirigentes de la comunidad hermana awajún de Naranjos.

Las actividades exploratorias de esta empresa fueron autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas y han generado contaminación en las aguas del Río Chirinos que abastece a ambas comunidades, hecho que ha sido denunciado y probado⁴.

⁴<https://grufides.lamula.pe/2015/03/02/estudio-confirma-sustancias-toxicas-en-el-rio-chirinos-cajamarca/grufides/>

La tensión aumentó a raíz de algunas señales intimidatorias que un sector de la Comunidad de Naranjos está emitiendo contra quienes no estaban de acuerdo con la renovación del convenio minero.

Señales como amenazas y seguimiento a pobladores, líderes y sabios de la propia

comunidad de Naranjos y también de Supayaku, por estar en contra de la minería y a favor de ser consultadas, por defender sus territorios.

Además, hay indicios de tenencia de armas de guerra por parte de algunos dirigentes de Naranjos y se ha dado la presencia de personas armadas en tierras de Supayaku. Algunas familias se han visto obligadas a desplazarse para proteger sus **vidas**.

El pueblo awajún de Supayaku ha acudido a las vías legales establecidas pero el conflicto sigue latente y sin ser atendido. Razón por la que es necesario analizar y reflexionar a ver qué podemos hacer.

III. TRANSFORMAR EL CONFLICTO

Pensar que **podemos transformar el conflicto** significa que creemos que **podemos transformar nuestras relaciones**, y estas tienen mucho que ver con nuestra forma de actuar, de ver la vida, de comportarnos, de aquello en lo que creemos o lo que percibimos de nuestra realidad.

El objetivo principal es reconstruir nuestras relaciones para recuperar un elemento importante que se pierde en el conflicto: la **confianza**. Por lo tanto, este cambio va más allá de lo superficial y de las reacciones.

Tienen que ser cambios más profundos para generar nuevos hábitos positivos que favorezcan el diálogo, el intercambio, el **encuentro de diferencias sin optar por la violencia**.

Es verdad que los pueblos indígenas cargan con una historia larga de exclusión y de falta de reconocimiento, y esto puede haber generado sentimientos de frustración y descontento que se han proyectado en sus vidas. Pero también poseen el poder del conocimiento, de la visión, del sentido de la comunidad que les permite hallar mejores caminos para sus pueblos.

Por eso, para aplicar este enfoque de transformación es necesario tomar

como referencia aquellos **valores esenciales de nuestros pueblos**, como por ejemplo, el vínculo con la tierra y con el territorio, que es a día de hoy el espacio en el que la mayoría de conflictos sociales se dan y por los que existen tantos actores enfrentados.

Este enfoque, unido al **enfoque de derechos** que nos ayuda a identificar las situaciones de desigualdad e injusticia en nuestro contexto, nos permitirán construir un camino donde practiquemos el diálogo, la negociación, de manera que haya más tranquilidad y veamos que el conflicto va disminuyendo.

Esta transformación tiene que generar cambios que alcancen varias dimensiones⁵:

- Personal: recuperar la autoestima, la estabilidad emocional y la integridad espiritual.
- Relacional: cambiar nuestras relaciones con los demás.
- Estructural: ir a las causas del conflicto y entrar a los elementos sociales, políticos y económicos.
- Cultural: llegar a los patrones más amplios de la vida del grupo, como la identidad, las formas de respuesta y de abordar los conflictos.

⁵ CAAAP, CEAS y USAID.- Conflictos y Amazonía, 2012.

3.1. La oportunidad del conflicto

El Perú es un país con una alta conflictividad social, pero esto no nos debe definir. Sino más bien nuestros valores como personas, como pueblos. La reciprocidad, la solidaridad, el honor, el respeto por la naturaleza, el orgullo por nuestra identidad, la representación legítima de nuestros pueblos.

Tener una visión positiva del conflicto no significa conformarse con la situación de enfrentamiento o de injusticia. Significa empezar a creer y a crear nuevas opciones para el encuentro de necesidades y anhelos comunes, más allá de cualquier desacuerdo u oposición.

Escuela de Líderes y Lideresas
“Waismag Aidaun Ayamtaiji”

MÓDULO IV

**Libre determinación
de los pueblos**

Índice

INTRODUCCIÓN	2
I. DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN	3
II. ¿CÓMO EJERCEMOS LA LIBRE DETERMINACIÓN?.....	4
III. PLAN DE VIDA.....	5

Introducción

Los pueblos indígenas y originarios tienen derecho a elegir y construir su destino, a decidir sobre su bienestar y desarrollo de acuerdo a su visión y concepción. Reconocer y garantizar la autonomía y la libre determinación de estos pueblos es vital y responde a un Estado democrático como es el Perú.

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ es una asociación sin fines de lucro, que promueve la vigencia de valores fundamentales para la sociedad peruana, relacionados con la vida, la libertad, la justicia, la equidad, el desarrollo humano y sostenible.

En el marco del Proyecto “Reforzamiento de capacidades públicas y organizativo comunitarias en la región de Cajamarca”, financiado por Tierra de Hombres, proponemos la Escuela de Líderes “Waismag Aidaun Ayamtaiji”, como una iniciativa participativa en la comunidad nativa awajún de Supayaku, provincia San Ignacio, departamento Cajamarca.

El objetivo es fortalecer a sus autoridades y potenciales líderes y lideresas, reforzando sus valores de transparencia, democracia y participación, así como su capacidad de abordar y transformar de manera positiva las situaciones de conflicto.

La comunidad de Supayaku como parte del pueblo indígena awajún de Cajamarca, reivindica su derecho a decidir sobre los aspectos sociales, políticos, culturales, económicos que les conciernen. Así lo respalda el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la propia Constitución del Perú que lo sustenta.

Este cuarto y último módulo de la Escuela pretende reforzar las capacidades y condiciones para el ejercicio pleno y proactivo de este derecho.

I. DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas indica en el artículo 3:

“Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.”

Esta Declaración consagra por primera vez la **libre determinación** como derecho de los pueblos indígenas, a pesar que es un principio fundamental del derecho internacional reconocido en el Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

El derecho a la libre determinación es el derecho a decidir en los aspectos importantes para el pueblo indígena. A partir de este derecho se sustentan sus demás derechos.

El Convenio N° 169 de la OIT, Sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, hace referencia a la autonomía y autogobierno más no al derecho a la libre determinación, aún así es compatible con la Declaración y otros instrumentos internacionales que lo señalan.

Por cuarta disposición final y transitoria la vigente Constitución Política del Perú establece:

“Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.

Por lo tanto, si Perú ha ratificado el Convenio 169 quiere decir que además de tener rango constitucional, este convenio interpreta a la Constitución.

De igual manera con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Perú la ha promovido, firmado y participado en los más de 20 años de discusiones en torno a su establecimiento. Por lo tanto, a pesar de las opiniones contrarias, es un documento de cumplimiento obligatorio y el Convenio 169 debe interpretarse respecto de esta Declaración.

Todos los derechos de las personas son indivisibles, es decir, integran una unidad total basada en la dignidad. Esta dignidad se verá afectada si alguno de los derechos es vulnerado, ya sea si es una limitación a su vida, salud, educación, libertad personal, libertad de expresión, etc., la persona sufrirá en su dignidad.

En conclusión, el derecho a la libre determinación está sustentado en la Constitución Política del Perú vigente y es absolutamente necesario que se reconozca y se establezca para el respeto de la dignidad humana de los pueblos indígenas u originarios. Si se vulnera el derecho a la vida o a su territorio se vulnera su derecho a la libre determinación.

II. ¿CÓMO EJERCEMOS LA LIBRE DETERMINACIÓN?

Son los pueblos indígenas quienes dan forma a este derecho y a partir de él definen sus necesidades, prioridades y demandas. La esencia de libertad que contiene este derecho significa hacer, manifestar, sentir, decidir con libertad aquello que es importante para el grupo, pero si es importante para el grupo tiene que serlo para sus miembros.

Ese sentir compartido de libertad y libre determinación requiere de condiciones y pautas al interior del grupo. Pautas que los pueblos indígenas y originarios establecen a través de sus estatutos y reglamentos internos comunitarios.

Por lo tanto, junto a las libertades, la libre determinación implica responsabilidad, disciplina, respeto, tolerancia, entre otras habilidades para relacionarse en sociedad y bajo un marco de normas compartidas.

Entonces, ¿cómo ejercemos nuestro derecho a la libre determinación de nuestro pueblo awajún?...

Hacernos esta pregunta es un buen ejercicio de reflexión colectiva sobre lo que queremos, de priorizar necesidades y propuestas que tenemos para aportar a nuestra propia mejora, desarrollo, buen vivir, de acuerdo a nuestra propia visión del pasado, presente y futuro de nuestros pueblos.

Por ello, es importante que los pueblos sigan fomentando el diálogo y trabajando por armonizar las normas con el verdadero interés colectivo de las comunidades indígenas y originarias.

Por otro lado, el Estado debe reconocer y garantizar este derecho, creando condiciones de respeto a los derechos fundamentales que no sólo apunten a la satisfacción de necesidades de subsistencia.

Los pueblos indígenas son parte del Perú y como tal sus formas particulares de organización social, así como sus planes de vida, deben ser incluidas en los procesos de desarrollo de este país por el respaldo y la legitimidad que le otorgan sus miembros.

III. PLAN DE VIDA

Un Plan de Vida es un instrumento de planeación que se construye a partir de un proceso de autodiagnóstico participativo y la información precisa sobre la comunidad, sus recursos, necesidades y los cambios que desean.

El proceso debe responder a tres preguntas claves:

- **¿Quiénes somos?** Implica revisar la identidad de la comunidad en relación con el entorno y otros actores. Se responde en una fase inicial de diagnóstico.
- **¿Qué buscamos?** Exige analizar la realidad de la comunidad y su visión. Se responde en la fase de planificación
- **¿Cómo lo haremos?** Requiere priorizar acciones, plantear alternativas de solución a los problemas identificados, así como

elaborar la propia estrategia para implementar el plan y hacerle seguimiento.

La principal condición para llevar a cabo este proceso es la participación de la comunidad (pobladores, pobladoras, líderes, sabios, apus, profesores, enfermeros, jóvenes, escolares, organizaciones, etc.)

La comunidad de Supayaku tiene un Plan de Vida que se elaboró de manera participativa identificando 4 ejes de desarrollo sobre los cuales actuar:

- Eje social y cultural
- Eje económico y productivo
- Eje ambiental y territorial
- Eje institucional organizacional

Los planes de vida de las comunidades indígenas representan un instrumento para el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos. A partir de este documento deberían articularse los proyectos de cambio y alianzas para mejora de las condiciones de vida de sus habitantes.

El reconocimiento y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas como el derecho a la participación, a la consulta previa, a la libre asociación y reunión, a la protesta social, a un territorio y ambiente sano y equilibrado, entre otros que hemos abordado en esta Escuela de Líderes y Líderesas de Supayaku, aporta garantías para la libre determinación que los pueblos indígenas y originarios exigen.

Octubre 2015. Gracias.